El marxismo-leninismo y nuestra época

AMERICA LATINA: LOS PUEBLOS CONTRA EL IMPERIALISMO

El marxismo-leninismo
y nuestra época

AMERICA LATINA: LOS PUEBLOS CONTRA EL IMPERIALISMO

Editorial Internacional
PAZ Y SOCIALISMO
Praga 1986

Bajo la supervisión de Yu. SKLIAROV
Redactores-compiladores V. KOROTKOV y S. MAMANTOV
6406 - 5

Sumario

De la Editorial 7

EL ANTIIMPERIALISMO, BANDERA DE LUCHA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS

Giocondo DIAS
Dialéctica de lo internacional y lo nacional en la lucha de los comunistas 10

Rubén DARIO SOUZA
El socialismo real y los destinos de América Latina 26

Jesús MONTANE OROPESA
América Latina: en la hora de la unidad y la lucha antimperialistas 42

Athos FAVA
Romper las cadenas de la deuda 58

AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE: TERRORISMO NORTEAMERICANO DE ESTADO EN ACCION

Cheddi JAGAN
El Caribe, contra la política de conflictos locales 74

Schafik Jorge HANDAL
Cuatro años de ofensiva revolucionaria en El Salvador 93

Rigoberto PADILLA RUSH
Intervencionismo armada bajo pretextos anticomunistas 111

Luis Orlando CORRALES
Un caso de «neutralidad» en América Central 124

Narciso ISA CONDE
El nuevo abril dominicano:
experiencias de una rebelión social 137

Francisco MAURA
Nicaragua bajo la bandera sandinista 153

AMERICA DEL SUR:
QUIEBRA DE LAS DICTADURAS MILITARES

Luis CORVALAN
La unidad contra la dictadura, vía y formas de lucha 170

Eduardo VIERA
Victoria de la lucha y de la unidad 185

José María LANAO
La fuerza de la solidaridad de clase 199

Hugo CAMPOS, Rogelio GONZALES
Paraguay: crece la lucha contra la dictadura fascista 214

EN EL FRENTE DE LA
LUCHA IDEOLOGICA

Jorge del PRADO
Unidad de pensamiento y acción 230

Héctor MUJICA
Ambiciones globales del «imperialismo informativo» 248

Orlando MILLAS
Los católicos chilenos y la lucha antifascista 260

Carlos Francisco CHANGMARIN
El proceso panameño y los militares 276

Givaldo PEREIRA DE SIQUEIRA
La Internacional Socialista y el Brasil 290

De La Editorial

En América Latina continúa el incontenible ascenso del movimiento revolucionario.

El empuje de las masas culminó con el derrocamiento de las dictaduras en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. Está al rojo vivo la situación en Chile, donde se amplían las decididas movilizaciones del pueblo contra la sanguinaria dictadura de Pinochet. Cobra vigor la protesta contra la tiranía de Stroessner en Paraguay. En los países del Cono Sur se han despejado las vías de una democratización. En cada Estado del continente, al frente de las luchas por la soberanía, la independencia y el progreso marchan los comunistas, con su política de alianza de todas las fuerzas patrióticas, adecuada a las singularidades nacionales.

Se ha caldeado el ambiente en la América Central y el Caribe. Con el terrorismo de Estado como política oficial, EE.UU. se inmiscuye en la guerra civil en El Salvador, está tramando una intervención en gran escala contra Nicaragua, torpedea todo intento de arreglo pacífico en esta área explosiva.

Se han profundizado las contradicciones entre los países latinoamericanos y EE.UU. En más de siglo y medio de independencia política, los Estados del continente jamás se han visto en una situación económica tan mala y desesperada como la actual. La América Latina es ahora una verdadera esclava de la deuda externa, cuyo monto supera los 360.000 millones de dólares.

La presente recopilación comprende artículos de dirigentes y destacadas personalidades de 16 partidos comunistas de América Latina publicados en *Revista Internacional* en

1984, 1985 y 1986 y que brindan al lector abundante material para un profundo análisis de los múltiples aspectos del contexto político y económico del continente y permiten conocer los objetivos y los métodos de lucha de los partidos hermanos.

La recopilación se destina a los estudiosos de la problemática latinoamericana y a los lectores que se interesan por los problemas particulares y generales del continente.

Todos los datos corresponden a la fecha en que los respectivos materiales aparecieron en la revista. En algunos casos se han hecho correcciones o reducciones insignificantes.

La Editorial ruega a los lectores que expresen su opinión sobre el libro, escribiendo a la siguiente dirección:

Editorial Internacional
Paz y Socialismo,

Thákurova 3,

Praga 6,
Checoslovaquia

EL ANTIIMPERIALISMO, BANDERA DE LUCHA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS

Dialéctica de lo internacional y lo nacional en la lucha de los comunistas

Giocondo DIAS,
Secretario General del CC del Partido Comunista Brasileño (PCB)

La presente situación en nuestro país, en América Latina y en el mundo entero plantea ante los comunistas brasileños, en términos de gran agudeza, el problema de la relación entre lo internacional y lo nacional en el movimiento revolucionario. ¿A qué se debe esto, concretamente? A que, por una parte, en la actualidad se está acelerando el proceso de internacionalización de las condiciones en que transcurre la lucha de clases. Dicho proceso ha adquirido proporciones globales, abarca a todos los países, influyendo con fuerza creciente en la política interna y la vida social de cada uno de ellos, incluido Brasil. Por otra parte, a que, simultáneamente con este proceso y en relación con él, aumenta la importancia del factor nacional en el movimiento revolucionario, particularmente en los países en vías de desarrollo, en los que están lejos de haber sido resueltos los problemas de la liberación nacional y de la garantía de la soberanía y la independencia frente al imperialismo mundial. ¿Cuál debe ser, teniendo en cuenta tales circunstancias, la política de un partido revolucionario de la clase obrera? ¿Cuál es la dialéctica objetiva de lo internacional y lo nacional en el desarrollo del movimiento antiimperialista en la presente etapa y cómo se refleja en la actividad de los comunistas?

Para nosotros, estas cuestiones (que creemos también de actualidad para los partidos comunistas de otros países) en modo alguno tienen un cáracter abstracto, sino que se hallan estrechamente ligadas a la práctica, a la elaboración de nuestra estrategia y nuestra táctica, a la búsqueda de las formas y los métodos más eficaces para la lucha por la democracia y el socialismo.

Los principios generales en que se inspira la solución del problema de la relación entre lo internacional y lo nacional en la lucha de clases fueron fundamentados científicamente por los clásicos del marxismo-leninismo. Al estudiar este problema siempre partieron del análisis de los antagonismos fundamentales de la sociedad burguesa, que tienen un carácter internacional, y señalaron que la lucha revolucionaria del proletariado es esencialmente internacional. «La emancipación del trabajo —decía Marx— no es un problema local ni nacional, sino un problema social que engloba a todos los países en los que existe la sociedad moderna...»[1]. Al mismo tiempo, los fundadores del comunismo científico destacaron insistentemente y en repetidas ocasiones la necesidad de tener muy en cuenta el factor nacional, que es el que determina las peculiaridades del proceso revolucionario correspondientes a las condiciones históricas concretas de cada país dado. «Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país deba acabar en primer lugar con su propia burguesía»[2].

Como vemos, lo internacional se plasma en la lucha revolucionaria de los obreros en forma nacional, adecuada a las condiciones concretas de cada país, expresando los intereses genèrales del proletariado internacional, independientes de la nacionalidad. Se trata de una cualidad histórico-social de la clase obrera, la cual «es internacional por naturaleza»[3]. En este plano general, lo internacional, que se materializa como principio básico de la actividad revolucionaria de los obreros —como internacionalismo proletario—, aparece como factor de la transformación del proletariado de objeto pasivo de la historia universal en creador activo de la misma, de «clase en sí» en «clase para sí».

El internacionalismo proletario es inseparable de la esencia del movimiento obrero revolucionario, de su misión histórica, e impregna los aspectos fundamentales de la ideología, la política, la cultura y la lucha práctica de los partidos comunistas. No hay esfera de la actividad revolucionaria de los comunistas en la que el internacionalismo no esté presente de tal o cual manera, no influya en una forma u otra en su lucha. Siendo de notar que los marxis-

tas-leninistas no sólo no rechazan la soberanía de las naciones y la diversidad de las condiciones nacionales concretas sino que, por el contrario, arrancan de ellas y tienen rigurosamente en cuenta la especificidad nacional al abordar la solución de los problemas internacionales. Engels recalcaba que la unidad internacional del proletariado es absolutamente imposible al margen de lo nacional, que «la unión internacional sólo es posible entre *naciones*, cuya existencia, autonomía e independencia en los asuntos internos se engloban, por consiguiente, en el propio concepto de internacionalismo»[4].

El marxismo-leninismo considera lo internacional y lo nacional en unidad indisoluble, unidad que no es una simple suma que surge ocasionalmente, en dependencia de una confluencia espontánea de circunstancias, sino una relación dialéctica en desarrollo, consustancial de la lucha de clases en la sociedad contemporánea. No es algo dado de una vez y para siempre, válido para todas las épocas y para las revoluciones en todos los países, sino que cambia con el curso de la historia y depende del carácter del régimen social de tal o cual país, del nivel de desarrollo socio-económico y de otras condiciones concretas. ¿Qué proporciones tiene esa relación? ¿Existe una medida general que permita determinarlas correctamente en su aplicación a la lucha de los comunistas en una u otra situación? Sí, esa medida existe. Lenin señalaba que el criterio supremo para determinar el acierto con que se combinan lo internacional y lo nacional en la política de un partido marxista es, en todas las condiciones, la práctica revolucionaria. Y formuló con precisión este criterio al indicar a los comunistas la necesidad de hacer «todo lo posible en un solo país *por* el desarrollo, el apoyo y el despertar de la revolución *en todos los países*»[5].

El enfoque marxista-leninista de este problema está siendo desvirtuado desde hace muchos decenios y en todas las formas por los ideólogos burgueses y oportunistas. El rasgo común de tales tergiversaciones es la esquematización de la unidad dialéctica de los factores internacional y nacional reflejada en la teoría revolucionaria. La relación entre ellos se intenta reducirla a una contradicción, en la que dichos factores se excluyen mutuamente. Los adversarios del socialismo científico afirman que el internacionalismo de los comunistas es incompatible, supuestamente, con los intereses nacionales y conduce a la «negación» de lo nacional.

Es sabido, por ejemplo, que en Brisil y en otros países de nuestro continente el anticomunismo, que especula ampliamente con esta «tesis», no está dirigido solamente contra los comunistas. El antipatriotismo siempre ha sido el principal pretexto para reprimir los movimientos patrióticos de contenido democrático y nacional. Los principales periódicos de la llamada «gran prensa» no se cansan de acusar a las fuerzas de izquierda de ser, supuestamente, contrarias a los legítimos intereses del país, no obstante que la trayectoria del PCB desmiente concretamente tales acusaciones. «Las fuerzas democráticas y, en particular, la clase obrera, pensamos los comunistas, deben contribuir activamente a articular e impulsar el movimiento patriótico a partir de cuestiones concretas, como la defensa de la Amazonia y de los recursos naturales del país, la denuncia de los acuerdos lesivos impuestos por el imperialismo y de las presiones ejercidas por él contra nuestro desarrollo y nuestra política exterior (como las desencadenadas por el Gobierno Reagan, por el FMI y por los bancos internacionales y las transnacionales)»[6] – afirmamos en el documento *Una alternativa democrática para la crisis brasileña*, documento que vio la luz después del Encuentro Nacional por la Legalidad del PCB (1984).

El marxismo-leninismo concede en efecto una importancia de primer orden al factor internacional. Pero, en primer lugar, esto no tiene nada que ver con el nihilismo nacional, del que siempre se han distanciado los fundadores del socialismo científico. En segundo lugar, la relación entre lo internacional y lo nacional no es una especie de subordinación de principios o ideas sino que constituye una relación dialéctica que refleja procesos sociales reales, determinados precisamente por la lucha de clases, por los antagonismos sociales, y que se presentan en la propia realidad objetiva como factores determinantes del desarrollo.

La interpretación marxista-leninista de lo nacional y lo internacional deriva del análisis de la estructura social de

la sociedad, de la situación que ocupan y del papel que desempeñan en ella las distintas clases y capas sociales, de su relación con los medios de producción, de la interacción de todos estos factores en los planos nacional e internacional, en una palabra, deriva de un estudio integral de los procesos objetivos del desarrollo social. Tal modo de enfocar la cuestión ofrece una base segura para revelar la dialéctica de lo internacional y lo nacional en el movimiento obrero; nos proporciona la clave de la lógica objetiva del proceso revolucionario, del conocimiento de las leyes generales del tránsito del capitalismo al socialismo en su interconexión orgánica y teniendo en cuenta las condiciones concretas de la lucha de clases, la diversidad de sus manifestaciones en los distintos países y en las diferentes etapas de desarrollo.

En nuestra época, el proceso revolucionario ha tomado un carácter verdaderamente universal y se extiende de hecho a todos los Estados capitalistas, independientemente de su tamaño, población, nivel de desarrollo y carácter de su régimen político. En el plano social se ha generalizado, tanto por los objetivos (liquidación de todas las formas de explotación y opresión, reestructuración radical de todos los aspectos de la vida de la sociedad en beneficio de los trabajadores) como por la composición de las fuerzas que participan en él. El proceso antiimperialista se ha hecho indivisible: la internacionalización de la lucha de clases ha consolidado y ahondado la interconexión de todas las corrientes y componentes del movimiento internacional de liberación y ha vinculado las posibilidades y perspectivas de la lucha de los trabajadores de cada país con el enfrentamiento global de los dos sistemas sociales.

América Latina es arena de la encarnizada lucha entre las fuerzas de la opresión y la reacción y las fuerzas de la liberación nacional. Aquí adquieren creciente envergadura los movimientos democráticos y antiimperialistas. Al proceso revolucionario se incorporan nuevas capas sociales. Despliéganse batallas del proletariado y de las grandes masas populares por la independencia económica, la soberanía y la emancipación social. Esta lucha se desarrolla en cooperación cada vez más estrecha con los otros componentes del proceso revolucionario mundial. Y nunca ha de-

pendido tanto como ahora de la correlación general de fuerzas en el ámbito internacional, de los éxitos del movimiento antiimperialista en otros países.

Todos estos factores, que expresan la unidad objetivamente existente del proceso revolucionario contemporáneo, no significan en modo alguno una uniformidad de sus manifestaciones en todos los países y regiones. Al contrario, por su contenido social se va haciendo cada vez más complejo, lo dual se debe principalmente a su desigual desarrollo en las condiciones del imperialismo, en tanto que las formas de su realización son cada vez más diversas. Incluso en el marco de América Latina las fuerzas revolucionarias actúan hoy no sólo en condiciones distintas sino que, además, se encuentran a distintos niveles socio-económicos y políticos. La composición de clase de los movimientos de liberación en nuestros países se distingue por su extraordinaria heterogeneidad. Según las condiciones concretas, ofrecen complejas combinaciones de muchas fuerzas sociales. A la lucha antiimperialista se incorporan enormes masas, que no están políticamente preparadas.

La desigualdad del desarrollo económico y político bajo el imperialismo se manifiesta en los países de América Latina en formas distorsionadas que consolidan la existencia –a veces en el marco de un mismo Estado– de las más diversas formaciones socio-económicas, que van de la comunidad primitiva al capitalismo monopolista de Estado. En estas condiciones, el proceso de internacionalización económica, al contribuir a la desaparición de formaciones arcaicas y al crecimiento industrial, de ninguna manera va acompañado al mismo tiempo de transformaciones progresistas ni disminuye la dependencia del imperialismo, pues dicho proceso está supeditado a las demandas egoístas del capital extranjero, principalmente del norteamericano, y a los intereses de las corporaciones transnacionales.

Brasil es uno de los países donde en los últimos veinte años y bajo el influjo de este proceso los cambios han sido más profundos. Aparecieron industrias modernas, se configuraron estructuras económicas y mecanismos de gestión estatal-monopolista de la economía que aproximaron a Brasil a las potencias capitalistas industrializadas. Cambió sustancialmente la composición social y demográfica de la

población. La cuantía numérica del proletariado casi se triplicó, pasando de 8 a 23 millones, o sea, aproximadamente, la mitad de la población activa. Las dos terceras partes de los brasileños viven en las ciudades. Brasil ha pasado a ser un país con un nivel medio de desarrollo del capitalismo. Al igual que México y Argentina, exporta artículos industriales acabados a países menos desarrollados. Pero, ¿a qué precio ha sido conseguido el «milagro brasileño»? ¿Y qué ha sido hoy de él?

La mayoría de las nuevas industrias se encuentran en manos de las transnacionales: el 100 por 100 de la fabricación de automóviles, el 70 por 100 de la industria electrónica, el 59 por 100 de las construcciones mecánicas, etc. Las deuda exterior de Brasil se ha acercado a los 100.000 millones de dólares, y sólo en 1984 la amortización de los intereses le costó más de 11.000 millones. El crecimiento industrial, la diversificación de las estructuras económicas, y sobre todo la necesidad de importar tecnología moderna, lejos de aminorar la dependencia de Brasil respecto del imperialismo, la han aumentado, y no han conducido a la solución de agudos problemas sociales como una redistribución más justa de la renta nacional, la eliminación del hambre y la miseria, la reducción del desempleo. La crisis económica en que se encuentra sumido el mundo capitalista en los años 80, agrava aún más las relaciones de dependencia e injusticia social.

Las inversiones en la industria brasileña, que comenzaron a disminuir a mediados de la década de los 70, ahora han cesado por completo. Aumentan sin cesar las quiebras de empresas pequeñas y medianas pertenecientes a la burguesía nacional. El 30 por 100 de las potencias instaladas en Brasil no funciona. La inflación crece a un ritmo que sobrepasa el 10 por 100 al mes. Simultáneamente crece el desempleo. En 1984, el nivel de ocupación es el mismo que en 1969. La penetración de las transnacionales ha conducido a la superexplotación de la fuerza de trabajo. Debido a la productividad laboral más baja, el obrero brasileño debe trabajar un mes para ganar lo que un obrero norteamericano gana en 10 horas. La desigualdad social se hizo aún mayor durante los años de auge económico. La concentración de la riqueza va acompañada de la depauperación de vastas capas de la población. Los ingresos del 10 por 100 de los brasileños más ricos superan los que percibe el 50 por 100 de los más pobres. Las dos terceras partes de las familias brasileñas están subalimentadas. Cada día mueren mil niños, y en ciertos lugares la mortalidad infantil alcanza el 40 por 100. El «milagro brasileño» se ha convertido en un desastre nacional, cuyos símbolos más visibles son los campamentos para desocupados en una serie de ciudades, donde las revueltas de hambre de los pobres han pasado a ser un fenómeno corriente.

¿Qué relación tiene esto con los problemas que estamos examinando? La más directa. Los datos que acabamos de mencionar y que podrían ser multiplicados muestran, en primer lugar, que el proceso de internacionalización de la producción y del cambio en la zona del capitalismo «periférico» presenta rasgos específicos bien marcados: reproduce sin cesar y agrava sobre una base nueva las desproporciones sociales y económicas entre los países imperialistas y las naciones en vías de desarrollo, a la vez que mantiene el status dependiente y subordinado de estas últimas. Muestran, en segundo lugar, que el proceso de internacionalización, lejos de eliminar los problemas nacionales, los agudiza.

Todos estos elementos, al ser tomados en consideración, permiten poner de manifiesto la inconsistencia de aquellas ideas según las cuales la creciente internacionalización de la vida social relega y reprime la tendencia a la autoafirmación de las naciones y rechaza el fortalecimiento de la independencia nacional. Una de las contradicciones que tiene en nuestra época el desarrollo mundial, consiste precisamente en que, al adquirir un contenido internacional cada vez más acusado, refuerza a la vez determinados rasgos de la especificidad nacional. La dialéctica de la relación entre estas tendencias no consiste en modo alguno en que una de ellas se desarrolle a expensas de la otra. Se desarrollan de manera que se ahonda también su interacción.

Si nos vemos precisados a centrar la atención en este problema es porque en Brasil, al igual que en varios otros países latinoamericanos, sigue teniendo vigencia la lucha contra la ideología del nacional-nihilismo, propia de trots-

kistas, anarquistas y otros grupos ultraizquierdistas metidos en el movimiento antiimperialista y que ejercen un influjo perceptible entre los depauperados, los desocupados y parte de la juventud de tendencias revolucionarias. Los ideólogos de estos grupos, que desvirtúan la esencia misma y todos los principios fundamentales del internacionalismo proletario, desorientan a las fuerzas que sostienen la lucha emancipadora. Sustituyen la dialéctica del movimiento internacional y nacional por la metafísica del «internacionalismo puro», que ellos oponen al patriotismo y, en general, a lo nacional; reemplazan el principio de la solidaridad revolucionaria por la doctrina aventurera de la «exportación de la revolución»; la tesis leninista sobre la posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país, por el lema, de resonancias románticas y políticamente irracional, de la «revolución» continental o planetaria, etc. El enfoque oportunista izquierdizante ante los problemas nacionales empuja a la clase obrera a negarse a participar en los movimientos democráticos generales y conduce al sectarismo y al aventurerismo. Al criticar semejantes tendencias, Lenin decía que significan «el desconocimiento de la lucha política ahora, en este momento, inmediatamente y en todo momento»[7].

El rechazo de estas ideas anticientíficas por la clase obrera y su vanguardia revolucionaria es calificado de «nacionalismo» por los líderes ultraizquierdistas, quienes sostienen que el patriotismo de los comunistas y su lucha en defensa de los intereses nacionales «dividen» al proletariado internacional y «unen» a los obreros con la burguesía. Nuestro partido repele decididamente tales ataques, por considerarlos totalmente infundados y contrarios a los intereses del movimiento antiimperialista. Actuando desde posiciones marxistas-leninistas, el PCB se esfuerza por acrecentar su papel en la vida de la nación. Ello presupone aprovechar al máximo las formas legales de lucha, adelantarse siempre con iniciativas propias al reformismo burgués cuando se trata de dar soluciones a los problemas nacionales, participar activamente en las coaliciones y los movimientos democráticos de carácter general. En resumen, presupone todo lo que crea premisas para transformar al partido en una influyente fuerza nacional.

Los comunistas estiman que la tarea principal en este camino es la legalización del PCB. ¿Por qué? Porque para un partido que, en toda su historia, funcionó sin estar prohibido sólo en 1945–1947, la legalización significa algo que es mucho más importante que la simple formalización de su actividad. Significa el reconocimiento social del PCB como elemento orgánico de la vida nacional. Significa nuevas posibilidades para poder utilizar los institutos políticos con el fin de extender su influencia en las masas y en la solución de los problemas que se plantean ante la nación. Significa una condición vital para que nuestro partido se convierta en fuerza capaz de encabezar la lucha de los trabajadores, disputar el poder y encauzar los procesos sociales por un camino que conduzca al socialismo. Significa, finalmente, un gran paso adelante en la causa de la democratización del sistema estatal y político de todo Brasil.

Ya hoy, como resultado de la lucha de los comunistas apoyada por otros movimientos democráticos, el PCB en la palestra de la lucha social actúa como una organización prácticamente reconocida. Junto con otros partidos que se pronuncian por la democracia, los comunistas insisten activamente en el restablecimiento de las libertades democráticas, la abolición de la reaccionaria «Ley de seguridad nacional» y las demás leyes extraordinarias, la convocatoria de la asamblea constituyente y la realización de elecciones presidenciales directas. En las últimas elecciones efectuadas en 1982, varios miembros del PCB fueron elegidos al parlamento.

Al aplicar la política de cohesión de todas las fuerzas democráticas de la sociedad en un frente nacional general, nuestro partido ve la perspectiva de desarrollo de este frente en que la clase obrera llegue a ser su núcleo y su vanguardia. Consideramos que esta perspectiva es por completo real. Los intereses del proletariado como clase, su aspiración a eliminar todas las formas de opresión, a lograr el verdadero poder del pueblo y la justicia social coinciden objetivamente con los intereses cardinales de la nación y le permiten unir en torno suyo a todas las capas de la sociedad oprimidas por el capital local y el capital monopolista extranjero. En el movimiento antiimperialista contemporáneo, junto con la clase obrera y el campesi-

nado, participan sectores cada vez más numerosos de intelectuales, militares, pequeños propietarios y parte de la burguesía no monopolista. La aspiración a unir los esfuerzos de estos sectores en la lucha contra los monopolios y en la búsqueda de una salida a los procesos de la crisis en interés de las masas trabajadoras, es lógica para un partido revolucionario que obra en nombre de la clase obrera.

¿No se tratará en este caso de una concesión al nacionalismo? Ni mucho menos. Los comunistas brasileños han sido y son internacionalistas consecuentes. Al elaborar la estrategia de las alianzas, el PCB compagina en la misma la firmeza revolucionaria de principios con la disposición a colaborar con todos los movimientos democráticos y antiimperialistas. Y el ahondamiento de tal colaboración en modo alguno exige que alguien renuncie a sus propios principios ideológicos. Tenemos mucho en común para desarrollar una lucha mancomunada contra el imperialismo manteniéndonos en nuestras respectivas posiciones de principios. En la actividad revolucionaria de los comunistas, el internacionalismo es inseparable del patriotismo que expresa el amor a la patria, el orgullo por el aporte de su nación al progreso de la humanidad, la aspiración a liberar al pueblo de todas las formas de opresión y a transformar la sociedad sobre principios socialistas. La responsabilidad nacional de los comunistas se fusiona con su deber internacionalista; y la lealtad a los principios revolucionarios, con la fidelidad a la patria y la defensa de los intereses de la nación.

Son las aspiraciones patrióticas, precisamente, las que presiden la concepción de la unidad nacional que los comunistas, junto con todas las fuerzas verdaderamente democráticas, contraponen al rumbo burgués nacionalista hacia la «integración nacional», que siguen los círculos oligárquicos gobernantes. La esencia de este rumbo consiste en lograr, so pretexto del «consenso nacional», la paz entre las clases y, por otro lado, minar y debilitar al movimiento obrero organizado. Tal política responde a los intereses del imperialismo norteamericano y las transnacionales. Ellos siempre se han apoyado en aquellos sectores privilegiados de la sociedad en los países latinoamericanos que, haciendo pasar el nacionalismo por una fuerza supraclasista y por un remedio válido para la solución de todos los problemas, lo utilizan en la práctica para encubrir la explotación de los trabajadores y aplastar su lucha.

Una de las principales medidas tomadas en el marco de la «integración nacional» se redujo a hacer de los obreros «partícipes de los beneficios» concediéndoles parte de las acciones, destinadas a ser un cierto símbolo material de su adherencia al mundo de la propiedad privada. Sin embargo, los contrastes de clases en Brasil hacía ya mucho que contrapusieron irreversiblemente los intereses del proletariado a los de los monopolios. Aunque el capital, recurriendo a la maniobra social y la propaganda nacionalista, todavía puede alimentar entre cierta parte de los trabajadores la ilusión de la comunidad nacional de estos intereses, es incapaz de eliminar el abismo que los separa. Tampoco salvaron la situación los intentos de tender un puente a través de este abismo, utilizando como material de construcción las llamadas «acciones populares». Lógicamente, dicho puente se derrumbó bajo el empuje de la lucha de clases.

Fracasaron también las pretensiones del Gobierno de convertir los sindicatos en órganos de coparticipación social y «poner fin» a las huelgas. Así lo demuestra la enorme envergadura de los pronunciamientos económicos y políticos del proletariado, en los que los comunistas participan activamente y en muchos casos actúan como dirigentes. En este sentido son más que significativos los movimientos huelguísticos que están registrándose en todo el país. En ellos participan amplios sectores de la población, desde trabajadores agrícolas temporeros (boias-frias) hasta profesores de las universidades federales autónomas. Cabe citar, por ejemplo, la huelga de los cortadores de caña de Pernambuco y São Paulo, la de los recogedores de la naranja de São Paulo, en la cual participaron millares de trabajadores; la huelga de trabajadores de la Compañía Siderúrgica Nacional (la primera huelga en esta empresa desde su fundación hace 43 años) que abarcó a 20.000 obreros y terminó con la victoria, todas ellas realizadas durante el año 1984.

Es, precisamente, en la lucha antimonopolista y antiim-

perialista de las masas donde nace la verdadera unidad de la nación. Al estructurarse sobre una base democrática, esta unidad fortalece la independencia nacional y contribuye a cambios sociales y políticos progresistas.

Tal es el enfoque que tiene el PCB de este problema. Enfoque que, lejos de contradecir las ideas del marxismo-leninismo y las tradiciones internacionalistas de nuestro partido, se deriva lógicamente de las mismas. Al defender los intereses nacionales, partimos de la indicación leninista de que la patria «es el factor más poderoso en la lucha de clase del proletariado»[8].

El crecimiento del papel de este factor en la actividad del partido comunista en modo alguno conduce a la minimización de la importancia de sus tareas internacionalistas. Ellas centran permanentemente la atención de los comunistas. Lo dicta la necesidad de tomar en consideración los cambios que hoy se operan en el proceso revolucionario mundial y en la arena internacional, cambios que vinculan cada vez más estrechamente los problemas nacionales a las tareas relacionadas con el robustecimiento de la solidaridad de los comunistas de todos los países y con la consolidación internacional de las fuerzas democráticas, antiimperialistas y adictas a la paz de todo el mundo.

En las condiciones contemporáneas, las relaciones de solidaridad internacionalista entre los comunistas y las de su colaboración con las otras fuerzas antiimperialistas han llegado a ser más ramificadas y multiformes que nunca en el pasado. Estas relaciones continúan desarrollándose: pierden unos rasgos y adquieren otros, asumen nuevas formas de expresión ideológica y de materialización práctica. Es un proceso natural y condicionado por la lógica de todo el desarrollo anterior del movimiento revolucionario mundial, así como por aquellos cambios que hoy se operan en él. Este proceso plantea ante los comunistas problemas complejos relacionados con la necesidad de perfeccionar las formas existentes de sus vínculos y elaborar formas nuevas, ampliar la solidaridad internacional con otras fuerzas progresistas.

El PCB atribuye importancia especial al sucesivo desarrollo de la colaboración con los partidos hermanos de América Latina. Lo condiciona tanto el factor geográfico, como

la notable comunidad de condiciones de la lucha de clases en la región. Las estructuras económicas básicas, las formas de explotación, distribución y consumo, los aspectos esenciales de las condiciones de trabajo y de vida son, en lo fundamental, similares en la mayoría de los países latinoamericanos. Son similares los síntomas de la polarización de clases, en el curso de la cual otras capas trabajadoras oprimidas por el capital monopolista y los latifundistas se acercan cada vez más al proletariado. El enemigo principal de los comunistas latinoamericanos es el mismo: el imperialismo de EE.UU. que busca perpetuar la rapaz explotación de las masas trabajadoras y las riquezas naturales de la región, crear al sur del Río Grande su propia y segura cabeza de playa militar-política. Teniendo en cuenta todo esto, los comunistas de América Latina aspiran a robustecer la colaboración regional sobre principios clasistas, internacionalistas. Ella se materializa hoy en amplios y sistemáticos vínculos entre los partidos, en encuentros bilaterales y multilaterales, discusiones teóricas, acciones políticas conjuntas relacionadas con las cuestiones concretas de la lucha antiimperialista.

Esta actividad nada tiene que ver con la tendencia a erigir en algo absoluto la solidaridad regional, ni con la contraposición de ésta a los principios del internacionalismo proletario. Ella es inseparable de la solidaridad y la cooperación de los comunistas de todos los países, unidos por intereses y objetivos comunes de lucha en un movimiento internacional único. Como subrayó la Conferencia de los Partidos Comunistas de Sudamérica, en la que participaron los comunistas brasileños y que tuvo lugar en Buenos Aires en 1984, los comunistas de la región continuarán contribuyendo por todos los medios al desarrollo del movimiento comunista mundial sobre la base de los principios del marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario.

En nuestra opinión, el problema de la actitud hacia el socialismo triunfante tiene importancia de principios en la teoría y la práctica del internacionalismo. La experiencia histórica testimonia que una política revolucionaria que excluya la solidaridad con el socialismo real no puede ser eficaz. Los comunistas brasileños consideran su deber in-

ternacionalista sostener consecuentemente la lucha ideológica y política contra quienes pretenden socavar las posiciones del socialismo o desacreditarlo ante las masas populares. Una actitud diferente se vuelve inevitablemente contra el movimiento obrero y sus organizaciones, contra los intereses nacionales de los pueblos, sobre todo en tiempos difíciles para la lucha por la paz, la democracia y el progreso social.

Justamente, vivimos estos tiempos, ahora que el imperialismo, ante todo el norteamericano, lleva a la práctica un curso aventurero enfilado a la revisión de los resultados del desarrollo mundial precedente, a la carrera armamentista, a la confrontación militar con los países socialistas y a la preparación de una guerra termonuclear. La política exterior del imperialismo persigue el objetivo de fortalecer la situación internacional del capitalismo en tanto que sistema e impedir los sucesivos cambios sociales y políticos en el mundo. Es una política de expansión y contrarrevolución. En contraste con ella, el rumbo del socialismo es una política de paz y solidaridad internacionalista con las fuerzas progresistas, es una política de lucha por la independencia nacional y el progreso social de todos los pueblos.

Todos los acontecimientos trascendentales en el mundo contemporáneo se hallan ligados de uno u otro modo a la lucha entre los dos sistemas sociales. Objetivamente, ningún proceso social que se desarrolla dentro de los límites nacionales de países aislados, ningún movimiento político y corriente ideológica puede evitar la incidencia de este conflicto internacionalizado de clases que tiene lugar en nuestra época. Es imposible quedarse al margen del mismo. En este plano, el problema de elegir posiciones no existe para los comunistas brasileños. La estrecha solidaridad con el socialismo en la lucha contra la reacción imperialista está dictada por la propia vida, por toda la experiencia del PCB.

La comunidad internacional de los comunistas continúa profundizándose en base al internacionalismo proletario, que no deja de absorber todo lo nuevo que el proceso revolucionario introduce en las relaciones entre los destacamentos nacionales de la clase obrera y sus partidos.

La ampliación de las esferas sociales y políticas de ac-

ción del internacionalismo proletario va acompañada del enriquecimiento de su contenido, principalmente en los aspectos democráticos generales que tienen su propia especificidad en cada una de estas corrientes revolucionarias. Lo cual no significa, desde luego, que el internacionalismo pierda su carácter proletario. Todo lo contrario, las ideas proletarias y los principios de la solidaridad internacionalista se convierten en patrimonio de masas trabajadoras cada vez más amplias, incluidas masas no proletarias. Nuestro partido está convencido de que la fidelidad al internacionalismo proletario es una premisa indispensable para la eficacia de la lucha de los comunistas contra la amenaza nuclear, por asegurar condiciones para el avance de los pueblos por el camino de la paz, la liberación nacional y el progreso social.

Revista Internacional, Nº 11 de 1984

[1] C. Marx y F. Engels. *Obras*, t. 16, p. 12.
[2] Ibíd., t. 4, p. 435.
[3] Ibíd., t. 22, p. 420.
[4] Ibíd., t. 39, p. 74.
[5] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XXX, p. 143.
[6] *Uma Alternativa Democrática Para a Crise Brasileira*. São Paulo, 1984, p. 183.
[7] V. I. Lenin. *O. C.*, t. XXIV, p. 12.
[8] V. I. Lenin. *O. C.*, t. XV, pp. 198–199.

El socialismo real y los destinos de América Latina

Rubén DARIO SOUZA,
Secretario General del CC del
Partido del Pueblo de Panamá (PPP)

Nuestro siglo pasará a la historia como un período de amplia propagación y materialización de la teoría marxista-leninista, de activa incorporación de las masas oprimidas y explotadas a la creación revolucionaria, de magnos cambios en la vida de los pueblos de las diversas partes del mundo. El triunfo del Gran Octubre señala el nacimiento de una nueva formación económica y social que viene a sustituir al régimen explotador, la conversión del socialismo en una realidad objetiva. El surgimiento del sistema socialista mundial significó la aparición de un poderoso factor, que ejerce influencia polifacética en todos los países y regiones sin excepción, en todos los partidos y movimientos políticos.

La concertada política exterior de paz de la comunidad socialista y su posición realista y constructiva en las cuestiones fundamentales de nuestra época han hecho realidad las ideas de Lenin acerca de la coexistencia pacífica de los Estados con distinto ordenamiento social, han constituido una aportación de peso a la defensa de los imprescriptibles derechos del hombre a la vida, la libertad, una existencia digna y la libre elección de su destino y han pasado a ser una brillante manifestación de internacionalismo y humanismo.

El socialismo es una sociedad cuyos pensamientos y cuya acción en el ámbito internacional están dirigidos a apoyar los anhelos de independencia y progreso social de los pueblos y supeditados a un objetivo principal: salvaguardar y consolidar la paz. Para nosotros, que hemos elegido el camino clasista y revolucionario, para nuestra actividad

teórica y nuestra praxis en las condiciones concretas y específicas de la realidad panameña, adquiere particular importancia la comprensión del influjo ejercido por el socialismo real en los destinos de América Latina. El propósito de este artículo, sin que pretenda desarrollar un análisis exhaustivo de este tema, es precisamente el de examinar algunos de sus aspectos.

El socialismo real abrió el verdadero camino de la libertad

Es difícil calibrar en toda su magnitud la importancia que tiene la experiencia de los pueblos de la Unión Soviética y de los demás países de la comunidad socialista. Esta experiencia ha demostrado de modo convincente que es posible vencer a las fuerzas de la reacción interna y externa, alcanzar la libertad nacional y social y promover el progreso económico y cultural. La teoría de la construcción de la nueva sociedad ha sido comprobada en la práctica histórica. El socialismo se ha afirmado en gran parte de la Tierra, ha contribuido con su ejemplo a la ampliación de los movimientos comunista, obrero, antimonopolista, antibélico y otros movimientos de masas en los países capitalistas y ha generado un auge sin precedentes de la lucha de los pueblos en favor de la liberación nacional y el progreso social.

Así lo atestiguan ante nuestros ojos no sólo el triunfo de las revoluciones socialistas en varios países, no sólo el surgimiento de Estados recién independizados que eligen la vía de orientación socialista, sino también el combate unitario de los representantes de diferentes organizaciones y movimientos políticos que coinciden en una vasta plataforma de acción por la salvaguardia de la paz mundial, por el progreso económico y social.

Lenin escribió en 1919: «No sólo luchamos para que el socialismo triunfe en nuestro país, no sólo para asegurar que nuestros hijos recuerden a los capitalistas y terratenientes como monstruos prehistóricos, luchamos para asegurar que los obreros del mundo entero triunfen junto con nosotros»[1]. En la comunidad socialista, en Cuba en parti-

cular, que está en tierra americana, dentro de los márgenes de la cultura latinoamericana y a miles de kilómetros de los demás países socialistas, han crecido ya varias generaciones que no saben lo que significa trabajar para los explotadores. Y aunque no puede decirse, ni mucho menos, que el camino del futuro esté sembrado de rosas, confiamos en que no están lejos los tiempos en que en otros países de América Latina y aquí también, en Panamá, acabaremos de una vez para siempre con el dominio del imperialismo y la oligarquía y se abrirá la senda del socialismo.

De ahí el valor imperecedero que tiene para nosotros la experiencia de los fraternos partidos de la comunidad socialista, su estrategia y su táctica, su labor orientada a crear las condiciones necesarias para asegurar el triunfo de la revolución y la edificación de la nueva sociedad y sus enseñanzas de dirección revolucionaria, que nos abren la posibilidad real de ejercer desde ya la vanguardia efectiva del movimiento popular, confirmando en la práctica no sólo la validez y la fuerza de las ideas comunistas sino también la inconsistencia de las críticas que llueven sobre ellas desde la «derecha» y la «izquierda». La vida ha puesto de manifiesto el carácter irreversible de las conquistas socialistas y ha demostrado convincentemente que la única política revolucionaria justa es una política de principios firmemente asentada en los enunciados fundamentales de la doctrina más avanzada de nuestra época.

En los años 20, bajo la influencia del Gran Octubre, en nuestro continente empezaron a surgir por todas partes partidos comunistas. Panamá, pese a todas las adversidades y hostilidades que de inmediato se manifestaron, no se quedó al margen de este proceso universal. Hace poco hemos celebrado el 55º aniversario del Partido del Pueblo de Panamá, que fue fundado el 4 de abril de 1930 y que hasta 1951 se denominó Partido Comunista. Este acontecimiento constituyó un hito fundamental en la historia y la cultura de nuestro país y marcó un momento decisivo de elevación de la conciencia revolucionaria de distintos sectores populares en la lucha por la independencia nacional y la emancipación social. Significó también la entrada del marxismo-leninismo en nuestro país y que la teoría revolucionaria

del proletariado mundial había dejado de ser patrimonio exclusivo de algunas personas progresistas para convertirse en ideología y guía para la acción de un partido revolucionario de nuevo tipo. Significó asimismo que, desde entonces, como teoría y como praxis política, el marxismo-leninismo había roto el monopolio que tenía en Panamá la ideología burguesa, en especial su expresión liberal, abriendo el verdadero y cristalino camino de la revolución.

El marxismo-leninismo nos brinda a los comunistas un método de conocimiento de la realidad panameña y contribuye al desarrollo del pensamiento social y la cultura nacional. La idea de la formación de amplias alianzas que nos legara Lenin, idea que ha sido comprobada en la práctica de la creación y desarrollo de la nueva sociedad, adquiere especial importancia para nosotros en la presente etapa y es la estrella polar que nos guía en nuestra lucha por una democracia avanzada, contra el latifundismo y la dependencia económica en la perspectiva de la sociedad sin clases. Estudiando, difundiendo y utilizando la inestimable experiencia del socialismo real contribuimos a perfeccionar la estrategia y la táctica de la revolución democrática de liberación nacional, contribuimos al movimiento antiimperialista en nuestro país y ayudamos a resolver los problemas que enfrentamos y que nos han sido señalados por el último Congreso del PPP.

Los 55 años transcurridos han sido para nosotros años de lucha exitosa contra la presencia imperialista en suelo panameño, contra los regímenes oligárquicos venales. Se está robusteciendo el Estado nacional independiente y se han conseguido conquistas sociales y derechos democráticos que han creado condiciones favorables para el proceso revolucionario panameño, a pesar de las pérdidas sufridas, a pesar de la persecución política, incluida la cárcel y el destierro de camaradas. La memoria de quienes ofrendaron su vida en aras de un futuro luminoso para nuestra Patria, de la dignidad y la liberación nacional, nos inspira a seguir avanzando por las intrincadas sendas de la historia.

El impacto del socialismo en América Latina y la conspiración contrarrevolucionaria del imperialismo

En el contexto de la nueva realidad internacional hemos asistido a un reagrupamiento de fuerzas en el campo del imperialismo. Convertidos en baluarte de la reacción internacional, en centro de la actividad subversiva y la acción contrarrevolucionaria, los círculos imperialistas más agresivos de EE.UU. pretenden arrogarse el papel de gendarme mundial, tratan de cohesionar al mundo capitalista en una «cruzada» contra los países socialistas, el movimiento comunista y obrero y las fuerzas de liberación nacional agitando como pretextos los espantajos de la «amenaza comunista» y la «exportación de la revolución».

Al mismo tiempo, en contradicción con la realidad y el sentido común, los apologistas del imperialismo hablan de la «debilidad económica» del socialismo y predicen su «próxima muerte». Eso se dijo también en los primeros meses de existencia de la República de los Soviets, cuando se hincaban en su carne las tenazas del cerco enemigo, y en 1941, tal vez el año más duro para el pueblo soviético, cuando los fascistas hitlerianos agredieron alevosamente a la URSS y llegaron a las puertas de Moscú. Algo parecido les oímos decir hoy a quienes califican el régimen socialista como «una aberración de la historia, que está condenada a desaparecer». En las profecías de los heraldos de la caduca sociedad explotadora percibimos su propio reconocimiento de que el socialismo es una realidad pujante e invencible.

De todas las tesis manoseadas, la más peligrosa, a nuestro juicio, es la que se refiere a la «agresividad» de la comunidad socialista, ya que con esa mentira se pretende encubrir los siniestros planes imperialistas que apuntan a seguir espoleando la carrera de armamentos y trasladarla al cosmos, los intentos de recuperar mediante «guerras locales» las posiciones perdidas, intentos que entrañan la amenaza de un enfrentamiento nuclear global.

El socialismo no amenaza a nadie con desatar la guerra. La guerra es ajena a su propia naturaleza. La realidad desmiente todos los infundios: la Unión Soviética y, más tarde, la comunidad socialista han sido abanderadas de la política antibélica desde sus primeros días de existencia. La revolución necesita objetivamente de paz para transformar el viejo modo de vida. La paz era una necesidad vital tanto para los bolcheviques rusos como para los revolucionarios cubanos, como también lo es hoy para los pueblos de Nicaragua, El Salvador y otros países ubicados en Centroamérica y el Caribe, que rechazan las agresiones del imperialismo, de sus mercenarios y sus sátrapas.

Entre el famoso Decreto leniniano de la Paz y las audaces y constructivas iniciativas adoptadas últimamente por la comunidad socialista mediaron muchos años, en el transcurso de los cuales ha quedado demostrada —no de palabra sino en los hechos— la unidad indisoluble de los conceptos de paz y socialismo. Y lo que ha permitido a la Unión Soviética y otros países socialistas ganarse fieles amigos en todos los países, granjearse el respeto de quienes piensan con realismo, incluso entre sus adversarios, no es una mítica «penetración», no es esa supuesta «intervención» en los asuntos internos de otros Estados, sino el ejemplo vivo de la construcción económica, su consecuente política exterior, su invariable fidelidad a los principios del internacionalismo proletario y su solidaridad con los pueblos que luchan por liberarse.

Absurdas también, y esto es lo menos que puede decirse, aparecen las especulaciones en torno al tema de la «exportación de la revolución». La experiencia histórica demuestra que no se puede importar la revolución, que ésta es producto obligatorio de una agudización de la crisis que afecta a un sistema caduco, del surgimiento de una situación revolucionaria, de la coincidencia de factores objetivos y subjetivos en uno u otro país. Nadie exportó la revolución a Bolivia en 1952, ni a Guatemala, donde de 1944 a 1954 ejercieron el poder los gobiernos progresistas de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, que «osaron» restringir el poder de la oligarquía y desafiar a la todopoderosa Mamita Yunai[2]. La democracia en Guatemala fue estrangulada en la cuna por los mercenarios del imperialismo, y los frutos de la revolución boliviana fueron acaparados por la burguesía criolla y los monopolios de EE.UU.

Por cierto que en aquellos años el imperialismo y sus

lacayos se sentían sobre seguro, subestimaban esas revoluciones y no se consideraron en peligro cuando Fidel Castro y sus compañeros asaltaron el cuartel Moncada ni cuando más tarde protagonizó el desembarco del «Granma» y se adentró en la sierra para prender allí la llama de la lucha popular contra la tiranía de Batista. El Washington oficial pensaba que todo quedaría reducido a un nuevo golpe de Estado «a la latinoamericana», al reemplazo de un dictador por otro o, en caso extremo, a la implantación de un régimen de democracia burguesa.

Sin embargo, a partir de comienzos de los años 60, las cosas fueron tomando «mal cariz» para los imperialistas. Sus estrategas comprendieron que la Revolución Cubana había abierto un nuevo capítulo en la historia política de América y que el socialismo ya se había hecho realidad también en el Hemisferio Occidental. Fue entonces cuando pusieron en juego todos los medios, desde la propaganda anticomunista y antisoviética y el bloqueo económico hasta la actividad subversiva, el sabotaje y la intervención armada directa, movidos por el invariable afán de aplastar los brotes del progreso social en una región que estaban acostumbrados a considerar como «esfera de sus intereses».

El imperialismo ya no es omnipotente, pero sigue siendo fuerte, y esto no podemos perderlo de vista. Tras el descalabro militar de Playa Girón, lanzó contra los movimientos liberadores y democráticos una contraofensiva frontal, cuya cronología es bien conocida. Nos limitaremos aquí a mencionar algunos puntos de referencia: 1964: golpe de Estado en Brasil; 1965: intervención armada en la República Dominicana; 1971: derrocamiento del Gobierno democrático de Juan José Torres en Bolivia; 1973: putschs fascistas en Uruguay y en Chile. Sobre muchos países de América del Sur cayeron las tinieblas de la contrarrevolución. Incluso intelectuales progresistas expresaban el temor de que ese reflujo del movimiento de liberación iba a ser muy prolongado. Pero no debemos olvidar las sagaces palabras de Lenin: «No importa que los bandidos consigan frenar el movimiento por cierto tiempo; pero no pueden detenerlo, es invencible»[3]. En los flujos y reflujos de la revolución se manifiesta la dialéctica del desarrollo social. Y esta dialéctica se expresa de diferentes maneras, en función de las condiciones concretas que se dan en tal o cual región o país.

A partir de mediados de los años 70, el potencial revolucionario que había madurado en las entrañas de América Latina empezó a manifestarse en términos regionales y subregionales, particularmente en la Cuenca del Caribe, comenzando con el movimiento anticolonial en Panamá y hallando su punto culminante hasta ahora en la toma del poder por los sandinistas. Su victoria en 1979 fue para muchas personas algo inesperado y aislado. No pensaban que pudiese llegar ese momento después de decenios de extenuante lucha armada del pueblo nicaragüense contra el dominio del imperialismo y del clan de los Somoza. Semejante subestimación obedecía a que se omitían las peculiaridades de la situación concreta de Nicaragua, favorable a un nuevo flujo revolucionario. Pero en este desenlace nicaragüense tampoco tuvieron nada que ver los imaginarios «manejos del comunismo», no fue obra de la Unión Soviética ni de Cuba, si bien es cierto que su ejemplo y solidaridad internacionalista alentaron a los combatientes del FSLN que asaltaban los reductos de la dictadura. La victoria de los continuadores de la causa de Sandino fue un efecto de las leyes generales del desarrollo social en las condiciones específicas de un país donde la crisis de las estructuras económicas, sociales y políticas había llegado tan lejos y el poder de Somoza era ya tan insoportable para las masas populares y tan odioso para la opinión mundial que la revolución resultaba, a la vez, objetivamente necesaria y posible.

El imperialismo consideró que el hundimiento del régimen somocista constituía una «nueva Cuba», un «ejemplo peligroso» más para los países vecinos, inmersos también en un proceso de agitación revolucionaria. Como si se hubiesen olvidado de la vergüenza con que se habían cubierto en Vietnam y en Playa Girón, los círculos reaccionarios de EE.UU. pusieron en marcha amplios preparativos para aplastar la revolución nicaragüense, sin haber comprendido que los tiempos han cambiado y que la existencia del socialismo real es el principal obstáculo que se opone a la realización de los planes agresivos.

La instauración del régimen socialista en Cuba, la revolución en Nicaragua, otros movimientos de liberación y los procesos de democratización atestiguan el surgimiento de una situación esencialmente nueva en el Hemisferio Occidental. Después de la crisis de las Malvinas y la criminal intervención en Granada, en América Latina quedan ya pocos gobiernos que mantengan su lealtad tradicional al «gran vecino del Norte». La situación explosiva en Centroamérica suscita seria inquietud incluso entre políticos nada sospechosos de simpatizar con el socialismo. Ellos comprenden que las fuentes de la protesta popular no hay que buscarlas en supuestas «intrigas del comunismo internacional», sino en la profunda crisis estructural, la enorme deuda externa y la dependencia del imperialismo, entienden que los movimientos de liberación no han sido importados, sino que nacen de la monstruosa realidad latinoamericana. Esta actitud realista es un nuevo fenómeno que amplía los horizontes de la política de alianzas de clase.

El proceso democrático y de liberación nacional en nuestro país ha llegado a una fase en que se hace necesario acometer nuevas transformaciones, más profundas. La fase anterior del desarrollo de la sociedad panameña se caracterizó por la exclusión de la oligarquía del poder y la eliminación de la base jurídica del colonialismo en la Zona del Canal de Panamá. Pero la oligarquía existe todavía. Sigue ocupando posiciones dominantes en algunas ramas de la economía y, tras la muerte del general Torrijos, ha ido penetrando en todos los resortes de la administración pública. Se han reactivado notablemente los sectores que quieren volver al pasado, resolver los problemas del país sin consultar con el pueblo. Emerge igualmente el anticomunismo cavernícola, totalmente identificado con la política de Washington y los intereses de los elementos fascistoides internos.

Tampoco el imperialismo norteamericano ha sido expulsado de nuestro país, ya que el Tratado Torrijos–Carter no prevé la desaparición del enclave colonial hasta fines del presente siglo. Los tratados sobre el Canal de Panamá y sobre su neutralidad permanente y funcionamiento fueron firmados el 7 de setiembre de 1977. Con varias enmiendas y reservas, dichos documentos fueron aprobados por el pueblo panameño y ratificados por el Congreso de EE.UU. y entraron en vigor el 1 de octubre de 1979. Estipulan la derogación de todos los acuerdos inicuos concertados con anterioridad acerca del Canal, que quedará bajo control definitivo y total de Panamá a partir del año 2000. Fue una victoria importante, si bien todavía incompleta, en la lucha de nuestro pueblo por sus derechos soberanos.

A pesar del status de «neutralidad permanente» del Canal, en territorio panameño se encuentran bases del llamado Comando Sur de EE.UU. En ellas reciben instrucción unidades de «destino especial» y expertos en «contrainsurgencia». Aquí nace, y no en la Unión Soviética, en Cuba o en Nicaragua, una amenaza directa para nuestros pueblos.

Por eso, una de las tareas inmediatas que se plantean hoy ante el PPP, ante todos los patriotas y demócratas panameños, ante todos aquellos que hacen suya la causa iniciada por Torrijos, consiste no sólo en defender las transformaciones alcanzadas, sino en reforzar aún más la lucha contra la presencia militar de EE.UU., contra sus actos de bandidaje en Centroamérica, en impulsar la solidaridad con los pueblos de Nicaragua, El Salvador y otros países.

Sólo con los esfuerzos mancomunados de la humanidad progresista se podrá poner coto a la contrarrevolución mundial. En este plano le corresponde un gran papel al internacionalismo proletario, por cuyos principios nos guiamos. En su tiempo, la solidaridad internacional prestó notable ayuda a la Rusia Soviética, ha ayudado a defender Cuba revolucionaria, y no cabe duda de que ayudará a los pueblos en lucha de Nicaragua, de toda América Latina y otros continentes a salvaguardar su soberanía y dignidad nacionales. En la lucha del pueblo panameño por la independencia de su Estado nacional, la solidaridad del socialismo real y de todas las fuerzas progresistas fue decisiva. Lo recordamos y lo apreciamos.

Los que dominaron a Panamá antes de 1968 crearon leyes para vedar a la clase obrera y a los campesinos desear el poder. Y si hoy diversas clases, diversos representativos de esas clases ostentan este derecho, ello demuestra que hemos avanzado. Hemos conquistado un derecho y

ese derecho hay que defenderlo. Nosotros estamos actuando para que la cuota que tenga que pagar nuestro pueblo no sea inútil ni demasiado costosa. Pero hay quienes en Panamá quieren sangre y violencia. Lo que podemos prometer en este momento es que no vamos a ser los iniciadores de la violencia. Pero si nos imponen la violencia, responderemos con la violencia. En la historia de mi Patria están inscritas con letras de oro las palabras de ese gran patriota y demócrata que fuera Torrijos: «Este país, este pequeño país, Panamá, no va a ser una estrella más de la bandera de los EE.UU.».

La amistad de América Latina y el socialismo real ayudan a nuestra lucha liberadora

En función del problema de eliminar el atraso y la dependencia de los países de la región revisten notable significación las relaciones con el mundo socialista. El desarrollo de estas relaciones ha pasado por etapas difíciles, con altibajos. La prioridad en este campo corresponde a México, que fue el primer país del continente en establecer relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética, que pueden ser conceptuadas como un ejemplo de coexistencia pacífica y cooperación mutuamente ventajosa de países con diferente régimen social. A fines de la II Guerra Mundial, por influencia de las impresionantes victorias del Ejército Soviético sobre las hordas fascistas, varias repúblicas latinoamericanas intercambiaron representaciones diplomáticas y comerciales con la URSS. Cuando el imperialismo desencadenó la «guerra fría» contra la Unión Soviética y la naciente comunidad socialista, dicho proceso sufrió una notable recesión, para proseguir más tarde, en la década del 60. En la actualidad, los países socialistas, incluida Cuba, desarrollan contactos multifacéticos con muchos países de nuestra región, a excepción de aquellos en los que se hallan instaurados regímenes reaccionarios.

Dicha cooperación es uno de los efectos de la evolución que ha experimentado la correlación mundial de fuerzas. Están dando frutos el creciente prestigio de la comunidad

socialista, que cuenta con amplias posibilidades de participación en el comercio mundial y la división internacional del trabajo, el buen crédito y solvencia de las agrupaciones y entidades socialistas de comercio exterior, respaldadas con garantías del Estado.

Los logros del socialismo real en los más diversos terrenos y su consecuente política exterior son bien conocidos. Y esto obliga a los políticos latinoamericanos, a representantes de la burguesía, incluso de la gran burguesía, que mantienen posiciones realistas o pragmáticas, a reflexionar seriamente en el futuro de sus países. Por un lado, se agudiza la crisis estructural en medio de la prepotencia de las transnacionales, aumenta la inestabilidad de la coyuntura económica, crece la deuda externa, ya impagable; por otro, se está produciendo un endurecimiento general de la política latinoamericana de EE.UU. Se establecen nuevas medidas proteccionistas, descienden continuamente los precios de las tradicionales exportaciones latinoamericanas y aumenta la carestía de las importaciones en procedencia de los países capitalistas desarrollados. En ese contexto, la cooperación recíprocamente ventajosa con los países socialistas aparece a los ojos de dichos políticos como una de las vías apropriadas para hacer bajar la fiebre de la economía de esta región.

Reconocen el valor de la experiencia socialista de planificación de la economía, exploración, extracción y procesamiento de las riquezas naturales, aprovechamiento de los recursos energéticos, construcción de grandes centrales hidroeléctricas y sistemas de irrigación, de fomento de la industria pesquera, solución de los problemas del transporte urbano y formación de cuadros técnicos, científicos y culturales altamente cualificados. Esta experiencia ya es utilizada por varios países de América Latina, sin hablar de Cuba, que forma parte ella misma de la comunidad socialista y asienta sus relaciones internacionales sobre una base distinta de la que rige para las potencias capitalistas.

En una entrevista al periódico mexicano *Excélsior*, Fidel Castro subrayó que Cuba no sufre medidas proteccionistas por parte de los países socialistas, no sufre dumping ni competencia desleal por parte de ellos. Los problemas financieros de Cuba derivados de la necesidad de crédito

han sido resueltos sin dilaciones ni dificultades. Cuba, agregó, ha solventado sus problemas no sólo con los cambios sociales, sino porque ha establecido una cierta forma de nuevo orden económico en sus relaciones con otros países socialistas. Sin esas bases, los éxitos económicos y sociales, las victorias en el campo de la salud pública, de la educación, de la cultura física y del deporte, en la erradicación del desempleo y la desnutrición, en la elevación del nivel de vida cultural y material del pueblo no habrían sido posibles. Tampoco hubiese podido Cuba brindar la colaboración técnica que presta a decenas de países del Tercer Mundo[4].

No es fortuito el interés manifestado en nuestra región hacia la actividad del CAME, en el cual –además de Cuba, que es miembro efectivo y con plenos derechos de este organismo– México está representado en calidad de observador. La coincidencia de criterios entre algunos Estados de este área y la comunidad socialista en problemas sumamente importantes de la política mundial, tales como la renuncia al uso de la fuerza en tanto que método de solución de los problemas internacionales, la desnuclearización de la zona, la oposición a la carrera armamentista, la actitud hacia el Movimiento de los No Alineados, la solución del problema de la deuda externa, el establecimiento de un nuevo orden económico e informativo, etc., tiende a convertirse también en una especie de signo de nuestro tiempo. La política exterior de EE.UU. suscita también creciente descontento en sectores oficiales de América Latina. Cabe decir que muchos países de nuestro continente, que aún no hace tanto actuaban bajo la batuta del departamento de Estado de EE.UU., han dejado de estar integrados en la «máquina de votación» en la ONU y la OEA, para transformarse en un factor independiente e influyente de la política mundial.

Todo ello crea en conjunto una base objetiva para acciones unitarias antiimperialistas de las fuerzas progresistas, patrióticas y democráticas por los ideales de la libertad, la independencia y el progreso. Esta batalla, como hemos dicho, encuentra un poderoso impulso en el ejemplo alentador del socialismo real, en su política exterior, en su disposición a cooperar en todos los terrenos sobre una

base de justicia e igualdad y por encima de divergencias ideológicas.

Panamá, al igual que los demás países capitalistas de la región, vive hoy bajo el peso de una crisis económica y política agravada por la carga de la insoportable e impagable deuda externa. Más de 4.000 millones de dólares para un país con dos millones de habitantes significan que cada panameño «debe» como mínimo 2.000 dólares, mientras que los ingresos medios anuales del 30 % de la población apenas representan una décima parte de esa suma. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pretenden cobrarse altas cifras de nuestros magros recursos en concepto de intereses y amortizaciones, a costas del sacrificio de las masas y la entrega de nuestra independencia nacional.

La situación se hace más peligrosa porque determinados círculos realizan irresponsables esfuerzos para transformar los países del área en una retaguardia «modernizada» del Pentágono. Quieren uncirnos a su carro de guerra, involucrándonos en sus aventuras en Centroamérica, saboteando a Contadora y mediatizando con presiones por vía diplomática el papel que Panamá puede jugar en favor de la paz.

Por estas razones el PPP ha hecho un llamado a todas las fuerzas y sectores democráticos y nacionales, a los patriotas de todos los grupos y corrientes políticas a no dejarse distraer y confundir por la reacción, a batallar en todos los frentes de masas y ligar esta lucha cotidiana con el principal objetivo: impedir que el imperialismo convierta a Panamá en un apéndice colonial y lo haga cómplice de sus agresiones. El Gobierno se encuentra ante una disyuntura: o conduce la nave del país contra la corriente histórica y la pone bajo la rectoría total del FMI y el BM o retoma el modelo torrijista, de independencia nacional, que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas populares y patrióticas. No hay otro camino.

El XXVII Congreso del PCUS vigoriza el progreso social de la época

El pueblo soviético y su partido, con sus realizaciones históricas, con su disposición al sacrificio y a la hazaña en bien de las futuras generaciones, se han ganado el grande y arduo derecho, que no privilegio, de ser el baluarte de la paz y del progreso social.

Una nueva confirmación de ello nos la ha ofrecido la reunión en la cumbre celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra. Como dijera Mijaíl Gorbachov, Secretario General del CC del PCUS, los comunistas soviéticos acudieron a ella dado que la evolución de los acontecimientos en el mundo había llegado a un límite que reclama decisiones de particular responsabilidad y cuando la inactividad o la demora constituyen un crimen, pues se trata de salvaguardar la civilización y la vida misma en la Tierra. No se debe desaprovechar la menor oportunidad de detener el peligroso desarrollo de los acontecimientos en el mundo.

Entre otras cuestiones, en Ginebra se debatió el grave problema de los conflictos regionales, cuyas eventuales consecuencias no pueden ser menospreciadas en la era nuclear. Los círculos imperialistas de EE.UU., acostumbrados a operar con la categoría «esferas de intereses», reducen tales conflictos a una confrontación entre el Este y el Oeste. Es un anacronismo, una recaída en la reflexión imperial, que niega el derecho de los pueblos a pensar y decidir por su cuenta. Washington hace caso omiso de las raíces profundas de dichos conflictos y coloca en un mismo plano los gobiernos legítimos de los países que siguen la senda de la liberación nacional y del progreso social y las fuerzas contrarrevolucionarias. El PCUS, en cambio, aboga por el reconocimiento del derecho inalienable de cada pueblo a la libertad, la independencia y la libre elección de su camino, por que nadie pisotee ese derecho y por que no haya injerencias desde fuera. Los comunistas soviéticos siempre han estado y –lo sabemos– siempre estarán al lado de los pueblos que defienden su independencia. Tal es la política de principios del partido de Lenin.

Estamos de acuerdo con que el resultado general de la cumbre de Ginebra es positivo. A ello ha contribuido la política constructiva y consecuente del PCUS y ciertos elementos de realismo presentes en la postura de la parte norteamericana. Ciertamente, el verdadero significado positivo de los acuerdos a que se llegó en Ginebra sólo podrá manifestarse en acciones concretas. No dudamos que la URSS seguirá procurando que se detenga la carrera armamentista y se logre un saneamiento de la situación internacional.

Los comunistas panameños siempre hemos considerado que nuestro deber internacionalista es la solidaridad con la Unión Soviética, Cuba y los demás países de la comunidad socialista. Nos identificamos con su política y sus iniciativas, hacemos propaganda de ellas y explicamos los complejos problemas que ha de enfrentar el perfeccionamiento del socialismo real. Somos conscientes de nuestra responsabilidad histórica y del papel que nos incumbe jugar en la solución de los problemas nacionales e internacionales, estrechamente relacionados entre sí. Y cumpliremos nuestro deber en la lucha común por la plena liberación y el progreso social de nuestra América.

Revista Internacional, Nº 2 de 1986

[1] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XXX, p. 352.

[2] La United Fruit Company era conocida con este nombre en América Latina. *–N. de la Red.*

[3] V. I. Lenin. *Obras Completas*, t. XXVIII, p. 151.

[4] Véase F. Castro. *La impagable deuda externa de América Latina y del Tercer Mundo, cómo puede y debe ser cancelada y la urgente necesidad del Nuevo Orden Económico Internacional.* La Habana, 1985, p. 35.

América Latina: en la hora de la unidad y la lucha antimperialistas

Jesús MONTANE OROPESA,
miembro del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba (PCC)

Los ultimos años han constituido un período particularmente importante para la historia latinoamericana. Las contradicciones del capitalismo dependiente y del sistema de dominación hemisférica impuesto por el imperialismo norteamericano a nuestros pueblos, han conducido a todo el continente hacia una profunda crisis. Se trata de la crisis de las estructuras que conformaron en América Latina una economía subdesarrollada y dependiente; sus causas están lejos de poderse explicar únicamente por factores externos. Obviamente, la fase de crisis por la que actualmente atraviesa el ciclo de la economía mundial capitalista, se superpone a las deformaciones estructurales de la economía latinoamericana y provocan un efecto particularmente fuerte.

Sin embargo, una eventual recuperación de la economía en los países capitalistas desarrollados, e incluso una cancelación absoluta de la gigantesca deuda externa, no solucionaría los problemas esenciales de nuestra región. Desde luego que esas circunstancias aliviarían las tensiones actuales, pero las deformaciones permanecerían y se reproducirían en problemas aún mayores. Las contradicciones de la economía latinoamericana no se reducen a los efectos particulares de una crisis cíclica.

Lo que hoy sucede en América Latina es parte de la crisis general del capitalismo y su expresión en este hemisferio. En ese marco y partiendo de la política inflexible y agresiva del imperialismo norteamericano, cada vez son menores las alternativas de solución con que se cuenta. Esto crea una situación cuya solución definitiva e históricamente viable es la realización de profundos cambios estructurales, lo que, como demuestra la historia, debe enfrentar la oposición del imperialismo norteamericano, ya que ello choca directamente con su sistema de dominación.

La actual crisis ha convulsionado la vida latinoamericana en todas las esferas. Su manifestación no es sólo económica sino también política, e incluso ideológica, y ha desplegado un nuevo abanico de contradicciones entre el imperialismo, de un lado, y las masas populares latinoamericanas, del otro, que ahora perciben, de manera mucho más clara, que el imperialismo no es sólo un factor externo, sino además un conjunto de poderosos intereses arraigados en sus propios países.

Las contradicciones entre las aspiraciones de amplios sectores populares y democráticos de América Latina y la política de EE.UU. han creado las condiciones objetivas para que se desarrolle un amplio frente anti-intervencionista y de rechazo a la política económica restrictiva de la Administración norteamericana.

En los años 50 comenzó un proceso de agotamiento y cambio de los modelos económicos de industrialización sustitutiva implementados en los países más grandes del continente durante las décadas anteriores. Una vez cubiertas las primeras fases del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, la falta de tecnología y capital nacional suficiente no permitían enfrentar las fases superiores del proceso. Frente a esta situación, sectores de la burguesía industrial de estos países, cuyos capitales ya asumían la forma de capital financiero, comienzan a pugnar por imponer un nuevo modelo de acumulación subordinado a la banca internacional y favorable a los intereses de las compañías transnacionales. El estancamiento del mercado interno hizo que éste dejara de tener prioridad, se pasó a liberalizar las economías para favorecer sólo a aquellas producciones que podían orientarse hacia la exportación. En estas condiciones, el nivel de la demanda interna dejó de ser un factor esencial del modelo de acumulación, con lo que se quebró la base objetiva de las alianzas de clase y de los gobiernos populistas.

La crisis económica mundial, que comienza a principios de la década de los 70 favoreció en América Latina la im-

plementación de ese nuevo modelo de acumulación. El incremento de la dependencia externa que trajo consigo la crisis y el crecimiento de la deuda externa, condicionaron la adopción de políticas económicas que buscaron incrementar la entrada de capitales a través del estímulo al sector exportador y financiero.

Este fenómeno trajo importantes consecuencias políticas para todo el continente. El nuevo modelo afectó directa y fuertemente a las clases trabajadoras, las capas medias y a importantes fracciones de la burgesía, favoreciendo únicamente a los sectores exportador y financiero de las burguesías locales en alianza con los sectores más agresivos del capital transnacional. Con esto se fracturó la unidad de la clase dominante en América Latina. En busca de una salida se recurrió, en general, a gobiernos militares o a gobiernos civiles tutelados por las fuerzas militares para imponer el nuevo modelo. Sin embargo, las nuevas fracciones dirigentes, a pesar de sus políticas de fuerza, no han podido controlar la fuerte crisis económica y social que afecta a América Latina, sino que han profundizado sus causas cuyos efectos son cada vez más dramáticos.

Sería demasiado extenso relacionar detalladamente los problemas que plantea la crisis en el orden directamente económico. Basta revisar algunos indicadores. En el año 1983 el producto interno bruto del continente se redujo en 3,3 % tras haber disminuido 1 % en 1982, lo que unido al crecimiento de la población provocó una reducción del producto por habitante de 5,3 %. La inversión fija sufrió un marcado descenso y en algunos países se registraron incluso tasas negativas de crecimiento del correspondiente capital. Esta declinación de la actividad económica causó la elevación de las tasas de desempleo que en algunos países, para los que se cuenta con datos relativamente confiables, está por encima del 15 %. A nivel continental el número de desempleados y subempleados asciende a 110 millones. La inflación también tuvo un incremento importante. En Argentina, por citar el caso más grave, se ha alcanzado una tasa anual de 1.000 %.

La deuda externa, que es sin lugar a dudas el elemento más dramático de la actual situación económica latinoamericana, superó los 360 mil millones de dólares a media-

dos de 1985, es decir que América Latina debe hoy tanto o incluso más que lo que debía todo el mundo subdesarrollado en 1979.

Este fenómeno, cuyas raíces han sido suficientemente explicadas en la prensa comunista, se ha ido agravando progresivamente. Durante los últimos años se ha producido una fuerte privatización de los flujos financieros, donde ha jugado un papel muy importante la banca privada norteamericana. Las bajas tasas de ganancias que la crisis económica mundial ha condicionado en los países capitalistas desarrollados han estimulado la exportación de capitales hacia los países subdesarrollados. La agresividad del capital privado ha provocado un endurecimiento de las condiciones de los préstamos. De otra parte, el hecho de que los préstamos se hayan concertado a tasas de interés variables y que éstas crezcan considerablemente, determinado esencialmente por la magnitud del déficit fiscal norteamericano, provoca incrementos significativos e indetenibles en la magnitud del servicio de la deuda de los países deudores. Se calcula que por cada punto de incremento de la tasa de interés aumenta en 1.500 millones de dólares la cantidad a pagar por América Latina.

Frente a la difícil situación de escasez de divisas, los países han intentado incrementar sus exportaciones, sin embargo la baja en los precios de los principales productos de exportación latinoamericana y la agresiva política proteccionista de los países capitalistas desarrollados, principalmente Estados Unidos, han constituido un obstáculo infranqueable. Téngase en cuenta que a pesar de que el volumen de las exportaciones latinoamericanas creció en 1983, el valor de éstas disminuyó en 200 millones de dólares en comparación con 1982.

Paradójicamente el vuelco que dio el balance comercial, que de un déficit de 2.000 millones en 1981 pasó a un superávit de 9.700 millones en 1982 y de 31.400 millones en 1983, fue fundamentalmente producido por la reducción de las importaciones que marcaron un decrecimiento de 20 % en 1982 y de 29 % en 1983. Estas reducciones fueron el efecto y se convierten en causa de la contracción de la actividad económica interna y, además, de las rigurosas políticas de ajuste impuestas en numerosos países de la

región bajo las presiones del Fondo Monetario Internacional, que intenta garantizar a todo trance el cobro de la deuda externa a la banca internacional.

Esta política imperialista de aliviar sus problemas económicos a costa de los países subdesarrollados, ha incrementado los niveles de explotación y saqueo a que están sometidos nuestros pueblos. Este hecho ha sido uno de los factores más importantes que han contribuido al fortalecimiento de una conciencia antimperialista en todo el continente, no sólo en las clases trabajadoras sino también en las capas medias e importantes fracciones de la burguesía latinoamericana.

Las deformaciones estructurales de estas economías agudizadas por la crisis mundial y por el incremento de las presiones imperialistas, han gravado de manera particularmente violenta el nivel de vida de las masas populares. La recesión, la inflación y el desempleo han polarizado más aún la distribución del ingreso y han incrementado el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de pobreza. Cerca de 130 millones de latinoamericanos están en condiciones de desnutrición. Esta situación en países como Brasil ha provocado el asalto masivo a supermercados de numerosos grupos de personas que vagan buscando alimentos.

El estado de la educación, la salud pública, y la seguridad social en general es también dramático. Toda esta situación ha agudizado la lucha de clases en América Latina. Se ha incrementado considerablemente la presión de las masas populares, obreras y campesinas, a las que se suman otros sectores afectados, demandando mejoras y repudiando las medidas antipopulares tomadas por los gobiernos. El carácter antimperialista de estas manifestaciones es cada vez más marcado.

En el Cono Sur, ante la incapacidad de las dictaduras militares para enfrentar las gravísimas consecuencias de la crisis económica, se ha impuesto la necesidad de un recambio político. El desgaste de los gobiernos castrenses, bajo la resistencia de las masas populares y la presión de los sectores burgueses desplazados del gobierno, ha planteado a la burguesía la tarea de recomponer sus mecanismos de dominación. A su vez, el imperialismo norteamericano también percibe la urgencia de reparar el fraccionamiento de la clase dominante, provocado por la gestión de los militares al frente del aparato del Estado. Sin embargo, existe una clara intención de preservar el papel estratégico de la institución castrense como garante de sus intereses globales.

Se busca una vuelta a la democracia representativa como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, donde el descrédito y el aislamiento de los militares, provocados por la represión y la corrupción de los altos mandos, fue total. En Uruguay, donde la presión popular es grande, y en el Brasil se diseñan aperturas democráticas aunque el imperialismo trata de dejar en manos castrenses importantes resortes de poder. En Chile la dictadura se aferra, pero enfrenta la creciente resistencia del pueblo y sus organizaciones, la mayoría de las cuales avanza por el camino de unidad y lucha antifascista.

Los países que han mantenido el régimen de democracia representativa como Venezuela, Ecuador y otras repúblicas sudamericanas enfrentan también la difícil crisis económica y se debaten en la contradicción de aliviar la situación a través de medidas económicas, que cada vez resultan menos eficientes, y a la vez tratan de evitar el incremento de las movilizaciones y protestas populares. En Venezuela, por citar un caso, la deuda externa ha alcanzado el nivel de 35.000 millones de dólares y el desempleo afecta al 17 % de la población económicamente activa, los dos partidos más importantes del país se pasan el gobierno sin que ninguno tenga un proyecto coherente para enfrentar la actual situación económica, cuando ni siquiera las exportaciones de petróleo logran aliviar las tensiones. Estos gobiernos de democracia representativa del continente, han reconocido los efectos negativos de la política norteamericana hacia la región y se han pronunciado por la realización de foros que permitan alcanzar una percepción latinoamericana de la actual situación.

En Centroamérica y el Caribe, donde la presencia histórica y las presiones imperialistas han sido más fuertes, las tensiones son aún mayores. En el área centroamericana en particular el grado de contradicción con el imperialismo es hoy cualitativamente superior al que existe en el resto

del continente. En esta área se presenta una auténtica crisis del sistema de dominación que el imperialismo y la oligarquía local históricamente diseñaron para el área. Allí están hoy los eslabones más débiles de la cadena imperialista en este hemisferio.

Hay que decir que las sociedades centroamericanas se han caracterizado históricamente por un alto nivel de tensiones sociales. El cáracter del modelo de acumulación implantado en el área por la oligarquía agroexportadora con el apoyo del imperialismo, condicionó una muy polarizada distribución del ingreso. Este hecho no permitió que el crecimiento económico que alcanzaron estas sociedades durante la década de los 60 y primera mitad de los 70, se reflejara en una elevación de los ingresos y el nivel de vida de los sectores populares. Paradójicamente el carácter concentrador del modelo hacía que aun en los años de crecimiento estos indicadores decrecieran. Obviamente en los años de crisis tal efecto se profundiza.

Agreguemos que, con la excepción de Costa Rica, el Estado adoptó históricamente en Centroamérica formas dictatoriales, para garantizar a las fracciones dominantes de la burguesía el funcionamiento de la economía en condiciones que les fueran ventajosas, reprimir toda demanda reivindicativa de los trabajadores e incluso cerrar el espacio político a los más tímidos sectores reformistas.

Sobre estas condiciones objetivas de sobreexplotación y miseria en que han vivido las clases trabajadoras centroamericanas y el virtual desplazamiento a que han estado sometidos los sectores no oligárquicos de la burguesía, las vanguardias revolucionarias del área han logrado movilizar a todos los sectores históricamente explotados y desplazados de estas sociedades bajo un proyecto de transformaciones revolucionarias encabezado por las masas populares.

En Nicaragua y El Salvador la lucha ha alcanzado su expresión más desarrollada. En estos países se ha desarrollado una auténtica guerra popular, donde el pueblo, conducido por su vanguardia política, ha enfrentado con las armas en las manos a los regímenes proimperialistas. En julio de 1979 las fuerzas revolucionarias del FSLN alcanzaron el triunfo en Nicaragua.

También en Guatemala se lleva a cabo la lucha armada popular contra un régimen represivo que ha asesinado a más de 100 mil personas desde el golpe antidemocrático de 1954.

Como resultado, en Centroamérica la crisis económica y estructural se ha transformado en crisis del sistema de dominación oligárquico-imperialista imperante.

Los cambios y el carácter revolucionario de la situación actual en Centroamérica han enfrentado, desde luego, la oposición del imperialismo norteamericano, que se ha hecho particularmente violenta bajo la Administración republicana. Para Washington, esta área de la Cuenca del Caribe —en la cual Centroamérica ocupa un lugar importante— posee un especial interés geopolítico.

El absoluto control de un área tan cercana a sus fronteras y de tanta importancia en términos de vías marítimas comerciales y militares, ha sido un punto constante de la política exterior norteamericana desde mediados del siglo pasado hasta Ronald Reagan. En particular, para la actual Administración de EE.UU., que se autoproclamó campeón de la lucha anticomunista en el mundo, la liquidación de la lucha revolucionaria en El Salvador y el aniquilamiento de la revolución sandinista en Nicaragua, se convierten en objetivos prioritarios que deben probar la capacidad y la voluntad norteamericana para restituir y sostener su hegemonía en el mundo.

Se trata, además, de destruir el ejemplo de la alternativa revolucionaria como solución a los actuales problemas del continente, donde la situación centroamericana y en particular la experiencia revolucionaria nicaragüense, unido a los éxitos sociales indiscutibles de la revolución cubana, se han convertido en estímulo al desarrollo de una conciencia antimperialista y revolucionaria en toda América Latina.

Buscando estos objetivos, el gobierno norteamericano ha sostenido a través de la ayuda económica y militar a los gobiernos que en El Salvador han enfrentado a las fuerzas revolucionarias del FMLN – FDR. Es precisamente ese constante y creciente apoyo norteamericano el que ha evitado hasta el momento el triunfo revolucionario. Por su parte la revolución sandinista ha estado sometida a cons-

tantes agresiones en el campo económico, político, diplomático y militar, las fuerzas contrarrevolucionarias son coordinadas y apoyadas por la CIA. Las fuertes presiones del imperialismo sobre Nicaragua han buscado quebrar el programa popular de economía mixta, pluralismo político y no alineamiento, que han caracterizado el modelo sandinista y que le han valido un amplio apoyo internacional. Se trata de aislar a la revolución para poder enfrentarla directamente con potenciales aliados externos, como la socialdemocracia europea, que ha manifestado su apoyo al proceso nicaragüense y que ha cuestionado la política norteamericana en el área.

Sin embargo, el gobierno revolucionario de Nicaragua ha logrado enfrentar exitosamente a las fuerzas contrarrevolucionarias y avanzar por la vía trazada. En el mes de noviembre de 1984 se han realizado con éxito las elecciones presidenciales con un triunfo absolutamente mayoritario del candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega. Previamente a las elecciones se desarrolló una amplia campaña electoral, donde los partidos de oposición tuvieron el espacio necesario para plantearle al electorado su programa de gobierno.

Managua ha manifestado una invariable voluntad negociadora. Pruebas de ello son la disposición a firmar el Acta para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, elaborada por el Grupo de Contadora, la declaración del Presidente Ortega acerca del retorno de 100 asesores cubanos a su patria y otras muchas iniciativas. Todos estos gestos de buena voluntad, que han sido apoyados por Cuba, demuestran que el gobierno revolucionario es consecuente en la aplicación de una política de paz.

Entretanto, la Administración norteamericana ha ido creando las condiciones necesarias para poder producir una intervención directa en El Salvador o Nicaragua en el momento que considere necesario y oportuno. A pesar de haber tropezado con la resistencia de los pueblos, los Estados Unidos han logrado implementar progresivamente los diferentes escalones de la estrategia militar norteamericana de reacción flexible. Su presencia militar en la zona se ha incrementado significativamente, se han fortalecido las fuerzas militares de los gobiernos que sirven a sus intereses, bien directamente o bien a través de aliados como Israel; se ha convertido a Honduras en una gigantesca base militar norteamericana; se ha intentado reconstituir el CONDECA con el objeto de coordinar a todos los ejércitos reaccionarios de la región en una variante que pudiera desembocar en nuevas agresiones al estilo de la desarrollada en Granada.

Otro paso importante de la Administración Reagan, en este sentido, ha sido el constante desarrollo de un discurso político tendente a crear una disposición favorable en la opinión pública norteamericana sobre una posible intervención militar en la región. El elemento central de esta argumentación es el supuesto peligro que sufriría «la seguridad nacional de los Estados Unidos» si se fortaleciesen «regímenes prosoviéticos» en una región denominada por ellos mismos como su cuarta frontera. La propia constitución de la comisión Kissinger fue un intento dirigido a crear un consenso bipartidista y nacional de apoyo a la política de la Administración para el área. El Informe final de esta comisión constituye una clara expresión de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos y la voluntad de emplear la fuerza militar incluso para sostenerlos.

De modo que la intervención militar es una posibilidad real y de probabilidades crecientes, como demuestran los hechos: la agresividad de la Administración norteamericana aumenta y su negativa a favorecer una solución negociada real es tácita. El fortalecimiento de la revolución sandinista y del resto de los movimientos revolucionarios de la región, que abogan por una solución negociada, sumado al apoyo y la solidaridad de todas las fuerzas progresistas del mundo y en particular del continente cuyos sentimientos antimperialistas son cada vez más fuertes, deben ser el factor de disuasión fundamental para reducir las probabilidades de un nuevo zarpazo imperialista sobre nuestros pueblos americanos.

En la subregión del Caribe, después de la invasión norteamericana a Granada, se impone la necesidad de alcanzar la unidad de todas las fuerzas revolucionarias y progresistas en la batalla contra la política intervencionista del imperialismo norteamericano.

Diversos hechos demuestran el desacuerdo con elemen-

tos importantes de la política norteamericana hacia América Latina por parte de los gobiernos con sistemas democráticos en la región, esta situación es notable en la crítica a la política económica norteamericana, en la búsqueda de una solución al problema de la deuda, y en la oposición a la política norteamericana en Centroamérica. Los dos acontecimientos que marcaron el grado más alto de condena al imperialismo por parte de las fuerzas democráticas del continente fueron el conflicto de las Malvinas y la invasión norteamericana a Granada. El apoyo de Estados Unidos a Inglaterra puso en crisis toda la retórica sobre la cual el imperialismo había constituido su sistema de hegemonía hemisférica. Los Estados Unidos, miembro más importante e inspirador del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, apoyaba a una potencia europea que hacía la guerra a una nación americana que reclamaba su derecho sobre una porción de su territorio sometido todavía a condición colonial. El hecho provocó también un resentimiento en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas latinoamericanas que asumieron lo sucedido como traición norteamericana.

A pesar de lo que puedan exhibir las apariencias, las relaciones políticas de los Estados Unidos con los países latinoamericanos no han podido restituirse tal y como estaban antes del conflicto británico-argentino.

Un año y pocos meses después de la guerra de las Malvinas, los Estados Unidos deciden la invasión a Granada. Una vez más, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del continente condenaron la acción como una violación escandalosa del derecho de soberanía y autodeterminación de los pueblos. El desproporcionado número de efectivos militares utilizados en relación con la pequeña dimensión de la isla y el aprovechamiento de una crisis interna, fueron circunstancias que hicieron más repudiable el hecho. Granada fue, sobre todo para América Latina, la muestra más descarnada de la voluntad de la actual Administración de sostener su hegemonía en la región con el uso incluso de la fuerza militar directa.

Nuestro país también ha sido objeto de las nuevas amenazas imperialistas. El imperialismo norteamericano ha tratado de manipular y falsear los éxitos de Cuba en el

orden social, económico y político que prueban la superioridad de nuestro sistema social. A pesar de estas tergiversaciones y del bloqueo que durante 25 años nos han impuesto, el prestigio de la Revolución Cubana en el continente es hoy extraordinario. La inclaudicable posición de principios que durante un cuarto de siglo ha mantenido a Cuba Socialista como respuesta a la permanente agresividad imperialista, el apoyo de Cuba a las fuerzas progresistas y antimperialistas del continente, el destacado papel jugado por nuestro país en el movimiento de países no alineados, la posición cubana en pro de una solución negociada frente al conflicto centroamericano, unido a los indiscutibles logros en el orden social y económico han sido las fuentes de ese prestigio y autoridad de que goza hoy la Revolución Cubana.

El imperialismo es consciente del efecto de demostración que los éxitos de la Revolución Cubana y más recientemente la Revolución Sandinista, tienen sobre las masas populares y las fuerzas progresistas del continente. Esta razón hacen de Cuba y Nicaragua el primer objetivo de las agresiones imperialistas.

Los planes intervencionistas que ha venido implementando la Administración Reagan en Centroamérica no descartan una agresión militar directa a nuestro país. Esta posibilidad real ha llevado a todo nuestro pueblo, bajo la dirección de su Partido Comunista y Fidel, a prepararse para enfrentar al enemigo con una guerra popular generalizada. El costo que tendrá que pagar el imperialismo si decidiera tal acción será extraordinariamente alto y su derrota política y militar será segura.

Respecto al problema centroamericano, la Revolución Cubana ha tenido una posición clara, no obstante el falseamiento de la realidad por parte del imperialismo y sus aliados regionales. A pesar de que Cuba no está inmiscuida directamente en el conflicto centroamericano, ha expresado su voluntad de contribuir a una solución negociada que tenga un carácter honorable y que sea tratada entre todas las partes que tienen una participación directa en el conflicto, incluyendo a los Estados Unidos, que por haber reconocido intereses estratégicos en el área y por poseer numerosas fuerzas y recursos militares en la región,

es sin dudas el principal responsable de la desestabilización en el área. Todas las gestiones de paz del Grupo de Contadora han sido apoyadas por el Gobierno cubano, quien ha advertido además que cualquier solución definitiva, tiene que incluir la solución del problema salvadoreño reconociendo la representatividad y fuerza política del FMLN – FDR. El respeto a la autodeterminación de los pueblos nicaragüense y salvadoreño debe ser el principio para la solución definitiva de la crisis.

La dirección cubana ha rechazado el intento del imperialismo y demás fuerzas reaccionarias del área, en el sentido de establecer paralelismos entre la situación de El Salvador y Nicaragua. En El Salvador se libra una guerra popular en la que se enfrenta la mayoría del pueblo, representada por su vanguardia militar y política del FMLN – FDR, frente a un gobierno dictatorial y antipopular, sostenido por la ayuda económica y militar que le brinda EE.UU. En cambio Nicaragua, dirigida por un gobierno popular, en medio de un proceso democrático, es agredida desde el exterior por bandas contrarrevolucionarias apoyadas por el imperialismo.

Respecto a la presencia de asesores militares en el área, hemos expresado que no puede establecerse comparación entre la participación cubana y la norteamericana. Los especialistas cubanos están en Nicaragua a solicitud del Gobierno nicaragüense y se ocupan en tareas de instrucción y asesoramiento a las fuerzas sandinistas. En cambio, Estados Unidos tiene virtualmente ocupada a Honduras con sus fuerzas militares, mantiene tropas y equipos militares con carácter permanente en la zona y, además, ha desarrollado varias maniobras con participación directa de efectivos de combate del ejército norteamericano en la región.

La posición cubana ante el conflicto está sustentada por los principios que rigen su política exterior. El gobierno y el pueblo cubanos mantienen un invariable apoyo al movimiento revolucionario centroamericano, sin ceder en ninguna circunstancia a las presiones imperialistas y mantienen paralelamente una absoluta disposición al diálogo y una constante contribución a la búsqueda de una solución honorable a través de la negociación.

Como hemos visto, las condiciones objetivas que la crisis del capitalismo dependiente impone a la América Latina, unido a la agresiva política imperialista en el orden económico, político, diplomático y militar cuando persisten en sostener una hegemonía caduca y crecientemente cuestionada, han provocado un incremento de los sectores sociales que reconocen algún grado de contradicción con el imperialismo, donde el papel protagónico lo juegan cada vez de manera más clara las masas populares. Este fenómeno ha creado condiciones en el orden objetivo y subjetivo para el fortalecimiento de la alianza entre todas las fuerzas democráticas y progresistas del continente, que permite el desarrollo y la consolidación del frente antimperialista latinoamericano.

«La crisis económica y la deuda es lo que va a unir a los países de América Latina, y los va a unir mucho más de lo que los unió la guerra de las Malvinas»[1], ha subrayado Fidel Castro. La situación política, económica y social de América Latina es tal, que no resiste ya nuevas restricciones y sacrificios. Es del todo evidente que las repúblicas latinoamericanas no pueden pagar la deuda externa. Y si no se resuelve este problema y continúa la crisis, en América Latina se va a producir un estallido social generalizado. La situación creada supone para nuestros pueblos tal grado de dependencia, tal grado de explotación, de penalidades y perjuicios, que la lucha por la independencia y por el nuevo orden económico mundial se ha convertido en la cuestión fundamental.

La historia de Cuba en el período transcurrido desde el triunfo de la revolución muestra claramente el importante papel de la ayuda internacionalista constante y desinteresada que nos presta la Unión Soviética. Esta ayuda ha permitido a Cuba no sólo resistir al bloqueo imperialista, sino lograr impresionantes éxitos en el terreno de la economía y el bienestar del pueblo. Los avances alcanzados por Cuba en el desarrollo económico y social no obedecen sólo a los cambios sociales en el interior del país. Habiendo emprendido la vía socialista de desarrollo, Cuba se desenvuelve hoy en el contexto de ese nuevo orden económico internacional por el que luchan los Estados del Tercer Mundo. El 85 % de nuestras relaciones comerciales corres-

ponde a la comunidad socialista. Son relaciones que se basan en los principios de respeto mutuo, no injerencia en los asuntos internos y cooperación verdaderamente fraternal. Nosotros nos hemos liberado por completo de la trágica ley del intercambio desigual que ha regido históricamente las relaciones entre el Tercer Mundo y las potencias capitalistas desarrolladas. Tenemos precios justos por nuestros productos de exportación. Por supuesto, las relaciones económicas en el marco del CAME desconocen fenómenos tales como son las medidas proteccionistas, el dumping o la competencia desleal.

Los problemas financieros de Cuba, derivados de las necesidades de crédito para el desarrollo, se resuelven sin dilaciones ni dificultades. Hemos logrado, por ejemplo, posposiciones de la deuda por 10 años, 15 años y hasta 20 años, sin intereses.

Todo esto, en conjunto, es lo que asegura nuestro progreso económico acelerado, nuestros éxitos universalmente reconocidos en el campo de la salud pública, de la educación, de la cultura física y el deporte, en la erradicación del desempleo y la desnutrición, en la elevación del nivel de vida cultural y material del pueblo.

La experiencia de Cuba muestra hasta qué punto es importante para los países de América Latina y de todo el Tercer Mundo luchar por el nuevo orden económico mundial, porque precisamente esa lucha es la que puede llegar a traducirse en la creación de condiciones para una independencia y soberanía reales, incluido el derecho, y no sólo el derecho, sino la posibilidad objetiva de realizar cambios sociales. Esta brega guarda indisoluble relación con los problemas acuciantes que preocupan hoy a toda la humanidad.

Para resolver los problemas con que se enfrentan los países en desarrollo es necesario, como señaló en 1985 Fidel Castro en el XXXII aniversario del asalto al Moncada, acabar con locuras como la carrera armamentista, como la «guerra de las galaxias», locuras en las que se invierten hoy miles de millones de dólares cada año, mientras cientos de millones de personas carecen de los más elementales medios de subsistencia. Si se invierten todos esos recursos en el desarrollo pacífico, pronto llegará el día en que el Tercer Mundo podrá respirar con alivio y mirar al futuro con esperanza.

Revista Internacional, Nº 11 de 1985

[1] F. Castro. *La impagable deuda externa de América Latina y del Tercer Mundo, cómo puede y debe ser cancelada y la urgente necesidad del Nuevo Orden Económico Internacional*, La Habana, 1985, p. 1.

Romper las cadenas de la deuda

Athos FAVA,
Secretario General del Partido Comunista
de la Argentina (PCA)

La política expoliadora del imperialismo de EE.UU. con respecto a los países en desarrollo, y en particular a América Latina, es un hecho bien conocido y condenado por la inmensa mayoría de las naciones de la comunidad internacional. Las repúblicas latinoamericanas constituyen de antaño un área acostumbrada de bandolerismo y subversión económica del «gran vecino del Norte». Los latinoamericanos, lo mismo que otros pueblos del llamado Tercer Mundo, no sólo tienen que pagar a precios inflados los artículos manufacturados e insumos que compran a los monopolios, sino que debido a la vigencia de relaciones financieras desiguales y, sobre todo, el mecanismo avasallador del endeudamiento, cargan de hecho con el peso fundamental de la crisis económica que afecta a las potencias occidentales. La deuda externa de América Latina ha alcanzado la cifra astronómica de más de 360.000 millones de dólares y sigue creciendo vertiginosamente. Mi país, que recién ingresó en una nueva etapa, en la que la lucha de clases se desarrolla en las condiciones de la recuperación de las instituciones democráticas, es justamente uno de los principales deudores agobiados por estas cadenas.

La lucha en las nuevas condiciones

En la Argentina, en 1983, la dictadura militar fue sustituida por el gobierno constitucional del Dr. Alfonsín. Apenas electa, caracterizamos la nueva Administración como un gobierno reformista, burgués, heterogéneo, en el que conviven desde elementos democráticos y patrióticos, inclusive antiimperialistas, hasta sectores de derecha, conciliadores con la oligarquía y el imperialismo.

Sobre el mismo se ejercen dos presiones, una reaccionaria y proimperialista y otra democrática, progresista y popular. De cuál de las dos predomine, dependerá el curso de los acontecimientos.

El proyecto político de nuestro partido, que vamos precisando, se ubica en el marco de la defensa de la democracia, para obtener su consolidación y cerrar el ciclo golpista en la Argentina. El eje de este proyecto es la lucha por la constitución de un Frente de Liberación Nacional y Social con las fuerzas antioligárquicas y antiimperialistas, que pueda convertirse en una alternativa real de poder popular.

La lucha de los comunistas por llevar a la práctica esta propuesta política tiene lugar en las condiciones de grave crisis que dejó la dictadura. Este contexto se agrava todavía más como consecuencia de las oscilaciones y vacilaciones del gobierno sometido a las dos presiones mencionadas. Es descarada y muy fuerte la que ejercen la oligarquía, los monopolios extranjeros y el gran capital nativo vinculado al imperialismo, sobre todo yanqui, así como los propios Estados Unidos a través del Pentágono, el Departamento de Estado y su embajada en Buenos Aires. Todos ellos tratan de anular aquellos aspectos más positivos de la política oficial, tanto en la afirmación del funcionamiento de las instituciones democráticas y la vigencia de las libertades públicas como en política exterior.

Irritan a la reacción interna y externa la libertad de expresión existente en el país y el juicio que se lleva a cabo contra las Juntas Militares responsables de los atroces crímenes de la dictadura, juicio que se va convirtiendo en un verdadero alegato contra los golpes de Estado y el terrorismo interno. La reacción trata también de torcer el rumbo de la política exterior eliminando en ella elementos positivos tales como la actitud en defensa del principio de no intervención en Centroamérica y el apoyo al grupo de Contadora, y el repudio al embargo criminal e inmoral decretado por Reagan contra Nicaragua. Porfía en sus intentos

de cortar el curso de la política internacional del gobierno en favor del cese de la carrera armamentista y la actuación junto a los demás jefes de Estado que firmaron la Declaración de Nueva Delhi, condenando la «guerra de las galaxias». Le molesta el grado de desarrollo importante de las relaciones comerciales y culturales con el campo socialista, en particular con la URSS.

Donde la situación se hace más difícil y las vacilaciones y concesiones del gobierno muestran su carácter de clase, es en la política económica y social, fuertemente condicionada por una de las cuñas más dolorosas que dejó clavada la dictadura militar: la deuda externa.

El saqueo legalizado

El problema de la deuda externa es un punto clave dentro del dilema de nuestra patria entre la liberación o la dependencia. Este no es un tema nuevo en el análisis de los comunistas. Como ayer lo hizo Malvinas, ha vuelto a poner al rojo vivo la contradicción entre los intereses del imperialismo yanqui y los de la nación argentina, contradicción que se expresa y se expresará con agudeza, al margen de los cambios que puedan producirse tanto en el gobierno de la Argentina como en el de los EE.UU.

La deuda externa –ese nuevo medio de modernizar y acentuar la dependencia– es un tema de importancia capital en torno al cual se despliega hoy en el continente una intensa batalla social y política, de cuyo resultado dependerá en gran parte la propia estabilidad constitucional y el futuro de la democracia.

El endeudamiento es una nueva forma de dependencia neocolonial, que agrava y profundiza todos los problemas que sufrimos. Ante el país se abren dos caminos: el de aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y reforzar la condición de país dependiente, o el de plantarnos dignamente ante los usureros logrando una moratoria por diez años de la deuda y sus intereses. Este es el único camino válido para el pueblo, un camino que puede llevarnos a la liberación.

No hacen falta muchos datos para ilustrar el difícil momento que vivimos en Argentina. Los sueldos no alcanzan ni siquiera a cubrir las necesidades mínimas (el Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que sólo cubre el 30 % de la canasta familiar). La inflación devora día a día los ingresos populares con una proyección anual que supera el 1.000 %[1]. La demanda laboral ha caído en un 40 %. Hay 500.000 obreros industriales menos, y más de un millón de personas sufren la angustia de la desocupación total o parcial.

8 millones de argentinos viven en el mapa de la pobreza y, sólo en la provincia de Buenos Aires, la más poderosa del país, 1.800.000 niños padecen desnutrición. En 1970, según datos oficiales, la pobreza no pasaba del 10 % de la población, actualmente se estima en un 30 %. ¿Qué, si no la dependencia, explica que hayamos descendido del 10° puesto en el mundo en el año 1928 en ingreso por habitante al 50° en la actualidad, y que se amplíe cada vez más la brecha tecnológica con los países desarrollados, incluso en el campo, pese a algunas mejoras técnicas introducidas?

La deuda externa es el mecanismo por el que el imperialismo en alianza con la oligarquía nativa de viejo y nuevo cuño, busca reforzar y remachar la dependencia, haciéndonos pagar su crisis y el costo de la demencial carrera armamentista. Sobre cada uno de los 30 millones de habitantes cae el peso de una deuda de 1.600 dólares.

Sólo en concepto de intereses, en los últimos cinco años pagamos cerca de 22.000 millones de dólares, casi el triple de todo lo que debíamos en 1976. Esto equivale al costo actual de dos Paraná Medio[2], la obra del siglo que podría transformar el país.

Pero aquí no termina el saqueo del imperialismo y sus socios nativos. A los 5.500 millones de dólares que exigen anualmente en concepto de intereses se agregan toda una serie de pagos, producto de maniobras fraudulentas, que implican la pérdida de otros 14.700 millones de dólares por año[3]. Este es el brutal saqueo que hizo que la Argentina pasara de ser un país acreedor en 1947 a constituirse en uno de los grandes deudores del mundo.

El histórico despojo de las riquezas se agudiza con altas tasas de interés, la sobrevaluación del dólar, con la de-

sigualdad entre los bajos precios de las materias primas que exportan los países en desarrollo como Argentina y el alto precio de los productos manufacturados que importan. Veamos un ejemplo gráfico que muestra la caída de los precios internacionales de nuestras exportaciones: si en 1976–77 hacía falta 156 toneladas de trigo para comprar un tractor, en el año agrícola 1984–85 se necesitaron ya 270 toneladas. Y en el caso de los insumos importados el deterioro es mayor.

Los mecanismos del endeudamiento

Los países en vías de desarrollo han definido como cuestión esencial para su progreso la concreción de un Nuevo Orden Económico Internacional, que termine con esta injusta relación e inicie una nueva era en las relaciones económicas mundiales.

El combate contra la deuda externa es parte inseparable de esta decisión, aprobada por las Naciones Unidas en 1974 y cuyo objetivo principal consiste en resguardar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, eliminar la desigualdad económica entre los Estados y crear un régimen ventajoso de intercambio para los países en desarrollo, mejorando su situación financiera.

Dijimos que quieren hacernos pagar la carrera armamentista. Esta política tiene incidencia directa en el crecimiento de la deuda externa. El gobierno de EE.UU. ha elevado las tasas de interés y sobrevaluado el dólar, precisamente para obtener fondos del exterior que le permitan cubrir su déficit causado por los enormes gastos militares. Gastos que, si en 1984 llegaron a la cifra de 391.000 millones de dólares, para fines de 1989 están estimados en 597.000 millones. ¡Nada menos que unos 1.500 millones de dólares diarios que tenemos que desembolsar los pueblos del mundo no socialista, incluida la clase obrera norteamericana, para sostener la demencial política de guerra de Washington!

La deuda externa otorga un inmenso poder al capital financiero yanqui para intervenir, directamente o mediante el FMI, en la orientación de la política económica de nuestro país por un largo período, especialmente en sectores donde puede obtener grandes beneficios, como sucede con el petróleo, servicios, finanzas y otros. El corto plazo en que están contraídos la mayoría de los préstamos obliga a constantes renegociaciones ante la imposibilidad de pago, lo cual favorece este mecanismo.

Ningún país atado a los acuerdos con el FMI puede cambiar la paridad de su unidad monetaria sin el consentimiento del mismo, o sea, sin el beneplácito de los EE.UU. Argentina, que adhirió al FMI después del golpe de Estado de 1955, tampoco es libre de decidir soberanamente sobre su propia moneda. Así, el FMI desde sus inicios, y hoy más que nunca, es un instrumento de la expansión del capital, sobre todo norteamericano.

Como condiciones para la firma de un acuerdo con cualquier país del mundo, el FMI reclama rebajas salariales, aumento de la desocupación, incremento de las exportaciones a costa del consumo interno, desvalorización de la moneda nacional, liquidación de la protección arancelaria, reducción del área estatal de la economía y desnacionalización, recorte del gasto público, es decir, de la inversión en obras nacionales, educación, salud, y otras medidas.

El mecanismo que emplea con los préstamos es un refinado sistema de «torniquete» que podría describirse así: 1) se crea la imposibilidad de pagar la deuda; 2) viene un «crédito puente», que no hace sino engrosar el endeudamiento, porque él mismo es una deuda; 3) luego vienen nuevas y más fuertes exigencias para prestar fondos destinados a pagar intereses. Se integra así una cadena sin fin de más y más deuda, de más y más inflación, de más y más austeridad para el pueblo. Un importante resorte de este sistema es la política de ajuste basada en los salarios, para que estos no alcancen nunca el 100 % de la inflación.

En lo que se refiere a la exportación de capitales, la etapa actual de desarrollo del imperialismo se caracteriza por el predominio del capital privado sobre el financiamiento estatal y el de las inversiones financieras sobre las de carácter productivo. Es el caso de nuestro endeudamiento, donde el mayor porcentaje se debe a la banca

privada y donde en su casi totalidad fue canalizado por y hacia la especulación pura y simple. Más del 90 % del aumento de la deuda entre 1977 y 1982 es de origen financiero, sin ninguna contrapartida de compra de bienes, maquinaria o instalaciones de empresas.

Un 70 % del endeudamiento corresponde al sector público y fue contraído mediante la hipoteca de empresas estatales. El restante 30 %, al privado, y de él se hizo cargo el Estado a través, por ejemplo, del seguro de cambio. Puede hablarse de este mecanismo de saqueo y préstamo como el primer factor de endeudamiento. Hoy la hipoteca que devora a nuestro país trepó a la cifra de 48.420 millones de dólares. La deuda representa nada menos que cerca del 70 % de todo lo que Argentina produce en un año. El dato es más dramático aún si tenemos en cuenta que la deuda en 1975 representaba el 10 % del PBI.

Buena parte de la deuda privada es el resultado de autopréstamos de empresas o personas que enviaban recursos propios al exterior, fundamentalmente a EE.UU. y Europa Occidental, para luego retomarlos como si fueran préstamos de los bancos donde se habían depositado. El asunto no termina aquí. Después de especular en el mercado interno, estos señores volvían a enviar ese mismo capital al exterior sin denunciar la salida como pago de deuda. De este modo y con el nombre de cuenta de «salida de capitales no individualizados» del Banco Central de la República Argentina, figura hasta 1982 la cantidad de 9.524 millones de dólares[4].

Por otra parte, entre 1976 y 1983 fugaron del país alrededor de 30.000 millones de dólares, con los cuales se adquirieron propiedades en Canadá, España, EE.UU., Brasil, Uruguay, Paraguay o se depositaron en bancos norteamericanos y europeos. Argentina fue virtualmente desangrada[5].

¿Por qué los «fondomonetaristas» en Argentina defienden con tanto énfasis la necesidad de pagar? Porque, en rigor, ellos mismos son acreedores, los que han puesto en «fuga» capitales y luego los han prestado a nuestro país con garantías. Son los que han efectuado autopréstamos que luego aparecen como parte de la deuda al exterior. Proponen vender las empresas estatales para amortizar la

deuda, entregar el petróleo, que es un recurso no renovable, agotando nuestra riqueza, y poner, en definitiva, bandera de remate al país para que el núcleo del privilegio argentino reciba en el exterior, junto a los monopolios imperialistas y la gran banca, el pago puntual de los intereses de la deuda.

Los lineamientos del actual ministro de Economía de Argentina para el período 1985–89 dieron una apariencia tecnicista a la amortización de la deuda. De ser aplicado, ese plan traería el hecho monstruoso de que, al cabo del quinquenio, los intereses pagados por la deuda alcanzarían 23.500 millones de dólares, a los que se sumarían otros 6.000 millones de dólares exportados en concepto de dividendos y royalties. Es decir, en total la nación perdería 29.500 millones de dólares. Con sólo 25.000 millones de dólares sería posible pagar los salarios de un año de todos los trabajadores del país, públicos y privados. A título de ejemplo, se podría aumentar el salario real en un 20 % anual en el próximo quinquenio, y aun así todavía quedarían 4.500 millones de dólares, suficientes para resolver el problema de la vivienda a 750.000 familias humildes. En cambio, de aplicarse el plan oficial, al cabo de los cinco años habría que refinanciar, o sea, tomar nuevos préstamos por la suma de 5.600 millones de dólares. Y Argentina llegaría a deber entonces más de 50.000 millones de dólares.

La moratoria, una solución realista

Economistas de relieve y sectores del propio oficialismo en Argentina han aportado argumentos para una actitud digna frente al FMI. El planteo de la moratoria se hace carne cada vez más en las fuerzas progresistas del país, ante quienes se abren dos únicas perspectivas: seguir por el camino andado, junto al FMI, reforzando la dependencia, o romper con el pasado.

Lo que se discute es si trabajaremos para nosotros o para los monopolios yanquis y oligarcas. La pelea, entonces, es para definir quién paga la crisis. Si nosotros –como hasta ahora– o ellos. Por eso, respecto a lo negociado con

el FMI, decimos que hay que impedir su aplicación. Que hay que pelear por el frente de los deudores. Que no hay que pagar un peso de deuda ilegítima. Y lo principal, que hay que *imponer ya una moratoria*. Los comunistas, en resumen, afirmamos que todas las variables en discusión sobre plazos de refinanciación, con «stand by»[6] o «crédito» puente, son tan sólo formas distintas de someternos por igual a los dictados del FMI. Por eso proponemos *moratoria por 10 años congelando y sin pagar en ese período ni capital ni intereses. Invirtiendo ese dinero en desarrollo del país, en salarios, trabajo, viviendas, educación, salud.*

Seguir las recetas del FMI llevará al desmembramiento económico. Sería como aceptar la herencia de la dictadura sin beneficio de inventario, abonando el terreno para un nuevo «gobierno fuerte», un nuevo golpe de Estado que venga a poner «orden» en el caos deliberadamente creado. Porque el atraso tecnológico, en el que ya estamos viviendo y que se acentuará con las recetas del FMI, agravará la situación económico-social a límites extremos.

Si se pagan los intereses, habrá menos fondos para la inversión interna, se reducirá el ingreso real de los asalariados, continuará la espiral inflacionaria del dólar y las tasas de interés; la presión impositiva caerá en definitiva sobre el pueblo y la desocupación irá en aumento. El mercado interno se contraerá aún más para la actividad productiva y se favorecerá una mayor concentración monopolista con las quiebras y cierres de numerosas pequeñas y medianas empresas.

Los compromisos con el FMI, o sea su «política de ajuste», llevarán a la venta total o parcial de empresas estatales que son rentables; al aumento constante de las tarifas y servicios públicos; a la restricción del crédito interno; al reemplazo de la regulación o control estatal sobre las filiales de transnacionales y fuertes grupos locales, en nombre de la «libre empresa y la libertad de mercados».

Nosotros partimos de la conclusión generalizada de que la deuda es impagable y ofrecemos una solución realista. Lo irreal es, precisamente, seguir atados a esa macabra rueda que nos lleva a pagar intereses sobre intereses, mientras el país se desangra y la deuda sigue creciendo sideralmente.

La moratoria de los deudores del «Tercer Mundo» no provocaría el crac económico y financiero mundial, como se afirma apocalípticamente. Pese a sus monstruosas dimensiones, esta deuda no alcanza al 10 % del PBI anual de los países capitalistas desarrollados. Esa cifra no sería la muerte para los países desarrollados como sí lo es para los nuestros. Por lo demás, la moratoria ayudaría a sanear la economía y el comercio mundial, superando los efectos restrictivos del endeudamiento acumulado, que conduce generalmente a la baja del consumo y al alza de la inflación, el desempleo y la desinversión. La deuda no es vital ni para los países que prestan ni para los que venden, y menos para los que se endeudan y compran. Una solución como la que propiciamos interesaría, por tanto, a los propios países industrializados, donde se podría reactivar la economía, producir, vender, crear nuevos empleos, etc.

Todo lo expuesto pone en evidencia que se puede y se debe unir la lucha de todos los pueblos de América Latina y el «Tercer Mundo» con la de la clase obrera y el pueblo norteamericano y de otros países capitalistas industrializados, contra la política de Reagan y las corporaciones transnacionales monopolistas vinculadas a la demencial carrera armamentista nuclear.

El problema de la deuda es un problema político, tanto para los deudores como para los acreedores. Precisamente por eso, el camarada Fidel Castro planteó que los países industrializados acreedores pueden hacerse cargo ante sus propios bancos privados de la deuda de los países latinoamericanos y de todo el «Tercer Mundo», lo que podría lograrse reduciendo entre un 10 % y un 12 % los gastos militares, sin afectar en lo más mínimo la economía de esos países ni los bolsillos de los contribuyentes.

Pero esta propuesta no quieren aceptarla un puñado reducido de grandes bancos norteamericanos e ingleses, porque *su interés privado no coincide con el interés nacional ni siquiera de los propios países acreedores.* Los grandes bancos privados acreedores reconocen que la deuda afecta a la economía mundial, pero no están dispuestos a ceder ni un ápice. Cabría preguntarse entonces: si los países deudores, sus gobiernos, se hacen cargo de la deuda, con la transformación de la deuda privada en pública, ¿por qué no

debieran los gobiernos de los países acreedores hacerse cargo del pago de esta deuda a sus bancos?

Nuestra propuesta de moratoria va al encuentro del necesario enfoque político del problema que proclaman jefes de Estado, sectores políticos y sociales de América Latina y del mundo. Ofrece, además, una determinada perspectiva a los propios acreedores para deshacer el nudo de una deuda que sus mismos cálculos revelan incobrable.

Desde el punto de vista de la grave crisis económica y de nuestra incipiente democracia, conquistada con tantos sacrificios, la moratoria que proponemos atacaría directamente las causas de la inestabilidad. Tal decisión, a juicio del Partido Comunista de la Argentina, debería ir necesariamente acompañada de un programa alternativo de liberación, apoyándose en la movilización del pueblo, programa que comenzaría por resolver la angustia popular. Esto acercaría y promovería la tan declamada unidad nacional, sobre bases patrióticas, poniendo una sólida barrera al golpismo.

¿Qué se podría hacer con esos 5.500 millones de dólares que pagamos anualmente por intereses, si declaramos la moratoria? Entre otras cosas, permitirían alimentar a 2.300.000 familias carenciadas. Podríamos seguir con otros datos que dan una dimensión de este robo colosal a que se ve sometido nuestro pueblo. Así, por ejemplo, los intereses a pagar en 1985 representan hoy el equivalente de 50 millones de toneladas de maíz o 41 millones de toneladas de trigo. Es decir, tres cosechas nacionales de trigo o cinco de maíz.

Nuestras posibilidades y tareas

Es necesario enfrentar al FMI porque no hay, en conclusión, cómo pagar en las actuales circunstancias. Y ello es posible, por las condiciones nacionales e internacionales.

Nuestro país, a pesar de su estancamiento, produce anualmente un volumen importante que llega a 70.000 millones de dólares. Con la moratoria liberaríamos recursos y se podría elevar la tasa de inversión, llevándola del 20 al 25 %. El país obtendría entre 14.000 y 17.500 millones de dólares disponibles para la inversión interna reproductiva.

Argentina cuenta con un comercio diversificado. Estados Unidos sólo nos compra un 10 % del total, el Mercado Común europeo el 25 % y el resto, o sea entre el 60 y el 70 %, va a los países de América Latina y de la comunidad socialista. Pero un hecho poco conocido (porque se oculta) es que tampoco es Washington el principal proveedor de nuestro importación, pues sólo concurre con el 20 %, en tanto el 35 a 40 % proviene de América Latina.

La mayor parte de las importaciones en procedencia de EE.UU. y de Europa Occidental, es cierto, están constituidas por insumos industriales (química, siderúrgica, etc.), así como bienes de capital. En caso de represalias, en su gran mayoría esos productos podrían adquirirse en países latinoamericanos, en naciones integrantes del movimiento de los No Alineados, en países europeos que no se adhieran al bloqueo y en los países socialistas, con los cuales Argentina tiene un saldo comercial favorable.

Para la adopción de una actitud digna ante el imperialismo contamos con grandes reservas: autoabastecimiento energético y alimenticio; la posibilidad, con medidas mínimas, de duplicar la actual producción de granos. La industria de artículos de consumo satisface las necesidades nacionales, en tanto que el sector de bienes de capital cuenta con un importante nivel a pesar del retroceso de los últimos años.

El país dispone de una gran variedad de recursos mineros y las empresas estatales tienen todavía un peso estratégico en energía, desarrollo nuclear, comunicaciones, siderurgia, petroquímica, transporte, comercialización, sector financiero. Por otra parte, no obstante el retroceso de los últimos años, existe una capacidad profesional y técnica, para ser utilizada en beneficio del desarrollo industrial independiente. Las pequeñas y medianas empresas nacionales tienen la posibilidad de adoptar formas de coordinación para uso de tecnología, compras, etc. (formas ya ensayadas con éxito en otro momento), lo cual elevaría su peso actual en el país.

Una actitud de ese tipo crearía, además, mejores condiciones para la unidad latinoamericana. Sabemos que no planteamos cosas fáciles. Pero tampoco es fácil el momento. Vivimos una encrucijada histórica donde está en juego la

perspectiva de Argentina como nación independiente. ¿Qué hubiera pasado si los patriotas de Mayo de 1810 hubiesen antepuesto las dificultades a la impostergable lucha por la independencia? Si hubieran obrado así, todavía seríamos colonia. Teniendo en cuenta las enseñanzas de la historia es como se trata de dar hoy la batalla de la deuda externa, parte fundamental de la lucha por la segunda y definitiva independencia.

Existe un fuerte entrelazamiento entre la lucha por la paz, la defensa del orden constitucional, la democracia, la libertad y la lucha contra el FMI. El dogal de la deuda se aplicó sobre miles de vidas tronchadas por la dictadura. No puede separarse en el movimiento popular de liberación la consolidación de la democracia y el problema de la deuda.

En la lucha contra los efectos del endeudamiento, nos proponemos movilizar a las masas contra la inflación, los impuestos antipopulares, la caída de sueldos y salarios, el cierre de las fuentes de trabajo, las crisis en las provincias y economías regionales, en la salud, la educación, etc. Esta lucha debe iniciarse desde abajo. El enemigo principal es hoy el FMI, y los trabajadores deben enfrentarlo con la unidad y la lucha. Así, y sólo así, es como podremos ir construyendo los embriones del Frente de Liberación Nacional y Social.

Nuestra propuesta de la moratoria debe estar respaldada en la movilización popular, la unidad de las fuerzas democráticas y un plan de medidas mínimas entre las que deberían figurar –a nuestro juicio– la nacionalización de los rubros fundamentales del comercio exterior, la nacionalización del sistema bancario, el establecimiento de un estricto control de cambios, dar nuevas bases al sistema impositivo –sobre todo a las tierras improductivas y a las grandes fortunas– y poner fin al saqueo del Estado por los monopolios; organizar una amplia y efectiva participación popular en el control de los precios y la gestión estatal, con participación de las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales.

Convocamos a un movimiento patriótico contra la deuda, con una amplitud tal que abarque a todos los argentinos. Este es hoy el centro de la actividad de los comunistas. Significa avanzar en el perfeccionamiento y aplicación de nuestro proyecto político, cuyo eje es la construcción del Frente, en el marco de la defensa de la democracia.

El problema de la deuda afecta no sólo a la Argentina, sino a todo el continente. Es un problema económico, es político y –como dijo Fidel Castro– al paso que van las cosas, empieza a ser revolucionario[7]. La lucha por resolverlo es una de las más importantes tareas que encaran hoy los pueblos de Latinoamérica. Esta lucha contará sin duda con el apoyo de los más vastos sectores sociales, contribuirá a la unidad continental en que soñaran San Martín y Bolívar y será parte de la batalla general de los países en desarrollo por su definitiva independencia, por el establecimiento de relaciones económicas más justas a nivel mundial.

Revista Internacional, Nº 10 de 1985

[1] Apoyándose en esta angustia popular, y con un tremendo despliegue propagandístico que generó no pocas expectativas, el gobierno anunció el 14 de junio de 1985 un plan llamado «antiinflacionario», cuya esencia es la aplicación, y aún el agravamiento, de las recetas del FMI.

[2] Se refiere a la construcción, con el concurso técnico de la URSS, de una gran obra hidroeléctrica en el curso medio del Paraná. *–N. de la Red.*

[3] Estimaciones propias acerca de remesas de utilidades, deterioro de los términos de intercambio, sobre y subfacturación en el comercio exterior, renta venal de la tierra; etc.

[4] Véase *Clarín*, 3 de julio de 1983.

[5] Véase *Tiempo Argentino*, 4 de mayo de 1984.

[6] Los créditos de reserva *stand-by* –una de las formas de operaciones del FMI– se conceden a los países que afrontan graves desajustes de la balanza de pagos. *–N. de la Red.*

[7] Véase F. Castro. *La impagable deuda externa de América Latina y del Tercer Mundo, cómo puede y debe ser cancelada y la urgente necesidad del Nuevo Orden Económico Internacional.* La Habana, 1985.

AMERICA CENTRAL
Y EL CARIBE:
TERRORISMO NORTEAMERICANO
DE ESTADO EN ACCION

El Caribe, contra la política de conflictos locales

Cheddi JAGAN,
Secretario General del Partido
Progresista Popular de Guyana (PPP)

La situación en América Central y el Caribe se ha agravado. Este brusco deterioro es resultado de la constante interferencia de Washington en los asuntos de los pueblos latinoamericanos, de sus presiones sobre los gobiernos de esta subregión y, en ocasiones, de la intervención directa.

El discurso programático de Reagan del 9 de mayo de 1984 ha reafirmado con dureza las pautas agresivas de la política de EE.UU. en el área. El presidente norteamericano ha conceptuado en él la represión del movimiento revolucionario y de liberación nacional que abarca esta zona como un «derecho legítimo y el deber moral» de EE.UU. Tales declaraciones significan que el inquilino de la Casa Blanca sigue la línea orientada a exacerbar la tirantez internacional y encender nuevos focos de conflictos militares.

La política aventurera de EE.UU. en América Central está preñada de trágicas consecuencias para los pueblos del área. Continúa la escalada de la guerra sucia contra la Nicaragua sandinista, con el minado de los puertos, los ataques a depósitos de combustible y el envío de mercenarios somocistas desde los países vecinos. Washington estimula a los grupos ultraderechistas y genocidas de El Salvador. Presta apoyo a los regímenes reaccionarios de Guatemala y Honduras. Por su contenido, el discurso de Reagan no podía sino alarmar aún más a nuestros pueblos y provocar legítima indignación.

La situación en América Central y el Caribe es un producto de las complejas condiciones económicas y sociales, y se ve agravada por la intervención del imperialismo norteamericano. Bajo el actual presidente, con sus trazas de cruzado fanático, Estados Unidos, en su papel de gendarme internacional, profiere abiertamente amenazas de guerra a otros países.

Con la brutal invasión de Granada, llevada a cabo en violación de las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el pretexto de «salvar vidas» y de «restablecer la ley, el orden y la democracia», Washington pretende retrotraer la historia a los tiempos en que EE.UU. aplicaba en el Hemisferio Occidental las recetas del «gran garrote» y de la «diplomacia de las cañoneras». Entonces corrieron ríos de sangre, y las víctimas de las agresiones eran los pueblos latinoamericanos. Hoy, los conflictos en Centroamérica y el Caribe pueden provocar un enfrentamiento militar en escala mundial.

EE.UU. trata de llenar el «vacío»

América Central y el Caribe se distinguen por una gran variedad y contraste de formas estatales y estructuras económicas. Aquí colindan vestigios de territorios coloniales y Estados independientes: monarquías constitucionales[1] y repúblicas. Nos encontramos con un vasto espectro de regímenes políticos y administrativos: democracia socialista, parlamentarismo democrático-burgués, neobonapartismo, autarquía burocrático-militar, dictadura ultraderechista, etc. Hay Estados alineados, y otros no alineados.

El período de la postindependencia, particularmente en la pasada década, ha sido muy traumático para la economía caribeña. Para la Casa Blanca, la partida de los ingleses creaba en el Caribe una situación de «vacío», y el imperialismo norteamericano se encargó de llenarlo. En los primeros dos años consecutivos a la formación de la Asociación Caribeña de Libre Comercio (ACLC)[2], EE.UU. duplicó con creces sus exportaciones con destino a esta zona. En 1978 su parte en el volumen total de las inversiones extranjeras en el Caribe representaba ya un 86 %[3]. Terrence Todman, que fue ayudante del secretario de Estado norteamericano bajo la presidencia de Carter, caracterizaba así la dependencia del Caribe con respecto a

Washington: «La economía de EE.UU. influye de la manera más directa en la salud de las economías del Caribe. Cubrimos un 25 % de las importaciones caribeñas y ofrecemos mercado al 70 % de las exportaciones del área. Traducido en dólares, esto significa que el volumen anual de nuestro comercio pasa de 6.000 millones de dólares norteamericanos.»

La dominación foránea y la dependencia de EE.UU. han creado serios problemas en el Caribe. En 1976, la cumbre de los países miembros de la Comunidad Caribeña (CARICOM)[4] destacó que esta subregión se enfrentaba con «dificultades sin precedente», incluida una tasa de inflación de 20 %, una «escandalosa» deuda de 1.000 millones de dólares por importación de alimentos y una enorme tasa de desocupación, que requería la creación de decenas de miles de empleos para acabar con ella. Aunque los participantes en el evento pretendían mejorar la situación, ésta en los años 80 ha ido empeorando. Un voluminoso informe preparado por el Banco Caribeño de Desarrollo[5] habla de estancamiento y describe siniestras perspectivas. La mayoría de los países sufren déficits que amenazan con serios desequilibrios de las balanzas de pago y desproporciones en el comercio exterior. Los precios de exportación del azúcar y los bananos han alcanzado la cota más baja de todos los tiempos.

Guyana y Jamaica encaran una situación muy complicada. Sus industrias mineras han sufrido graves descalabros. El acuerdo de almacenamiento de bauxitas («stockpile»)[6] suscrito por Jamaica con EE.UU., no ha logrado sacar a la economía isleña de la depresión. Es más, posteriormente, representante de uno de los principales monopolios de bauxitas de EE.UU., la Reynolds Metal Company, ha anunciado el próximo cierre de todas sus empresas en Jamaica.

Trinidad y Tobago experimenta serias dificultades económicas, que ha venido a agravar la caída de los precios mundiales del petróleo. Mientras tanto, la flamante industria del acero, en la que se habían depositado grandes esperanzas e invertido muchos millones, se ha visto notablemente afectada por las medidas proteccionistas de EE.UU.

Las fuerzas imperialistas, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras instituciones, tratan de imponer la adopción de recetas burguesas frente a la grave crisis social y económica y reforzar así los vínculos que atan a los países caribeños al curso de desarrollo dependiente. Por una parte, el objetivo fundamental del FMI consiste en que no se interrumpa el flujo de divisas extraídas de estos países, principalmente en forma de servicio de la deuda, la cual ha alcanzado dimensiones alarmantes, sobre todo en Guyana[7] y Jamaica. Por otra, la burguesía nacional y, sobre todo, la élite gobernante no piensan renunciar a sus privilegios, ni al lujo, ni a la corrupción. El resultado del llamado programa de «estabilización» del FMI es una mayor inestabilidad; para la inmensa mayoría de los caribeños, la vida se hace cada vez más difícil.

Así, pues, el período de la descolonización ha estado marcado por una fuerte penetración de los monopolios norteamericanos, que han pasado a ocupar posiciones dominantes en la economía subregional. Todo esto ha tenido repercusiones en el carácter y el contenido de los procesos político-sociales en curso dentro del área caribeña.

Tendencias del desarrollo político

Los ejemplos de Cuba, Nicaragua, Granada son muestras del considerable potencial revolucionario de los pueblos caribeños. Al mismo tiempo, muchos partidos y grupos políticos de los países del área tienen un carácter pequeñoburgués, nacionalista y una orientación ideológica democristiana o socialdemócrata.

La mayoría de los países caribeños obtuvieron la independencia política, cuando los colonialistas consideraron que eran «inofensivos». La de Guayana Británica (Guyana) sólo fue reconocida en 1966, después de que el Partido Progresista Popular (PPP) quedase apartado del Gobierno. En el caso de Granada, los círculos gobernantes británicos le «otorgaron» la independencia en 1974, instaurando en el poder a E. Gairy[8].

En otras palabras, las antiguas estructuras administrativas coloniales se mantuvieron virtualmente intactas en un contexto neocolonialista, bajo el dominio de las «capas medias» (pequeña burguesía doméstica). Dichas capas pasaron a ocupar posiciones dominantes en la sociedad en circunstancias especiales: bajo un sistema de esclavitud y de grandes plantaciones, con una rígida estructura social y el mantenimiento de las barreras raciales. La raza, la educación y la cultura han influido en la formación de la mundivisión y el modo de vida de estas capas. Por una parte, se distanciaban del pueblo trabajador y, por otra, sentían constantemente las barreras que las separaban de los dueños de las grandes plantaciones. De ahí que se haya desarrollado una especie de «esquizofrenia política»: la pequeña burguesía se revela tan pronto pragmática y oportunista como radical. Esa dualidad característica de su conducta, que la hace apelar unas veces a los obreros y otras a los capitalistas, es causa de bandazos en el terreno político.

En los años que siguieron a la crisis económica mundial de los años 30 y durante la II Guerra Mundial, las «capas medias» crearon sus grupos políticos, tomaron bajo su control el movimiento sindical y desempeñaron un papel positivo en la lucha anticolonial por la independencia política de los países caribeños. Pero en el período de la posguerra inmediata, como resultado de la presión imperialista y la influencia del ala derecha de la socialdemocracia de las potencias capitalistas desarrolladas, en la élite política de los países caribeños se produjo una inflexión a la derecha. Adoptó programas conservadores de médula anticomunista y, en particular, no se solidarizó con los pueblos de Guyana y Guatemala cuando los gobiernos legítimos del PPP (Guayana Británica, 1953) y J. Arbenz (Guatemala, 1954) cayeron víctimas de las intrigas imperialistas y la agresión directa. Las «capas medias» adoptaron asimismo el modelo puertorriqueño de desarrollo económico, basado en la «industrialización con invitación de capitales foráneos» y la creación de «un clima favorable para las inversiones»[9].

En la década de los 60, siguiendo las pautas trazadas por Washington, los Estados del Caribe sometieron al ostracismo a Cuba y otros países socialistas a nivel diplomático, económico, comercial y cultural. Sólo la Guayana Británica mantuvo relaciones con ellos, hasta 1964.

La década siguiente estuvo marcada por el deterioro de la situación económica y social, así como por la intensificación del movimiento de liberación nacional en la subregión y los efectos de la distensión y de la lucha que se desplegó entonces, con el apoyo de la Asamblea General de la ONU, con miras a articular un nuevo orden económico internacional e implantar el control de los países en desarrollo sobre sus recursos naturales. En la dualidad inherente a la pequeña burguesía se acentuaron las tendencias radicales. Allí donde las «capas medias» están en el poder, se han visto obligadas a adoptar una serie de medidas nacionales de carácter limitado: la «caribización», o sea, cambios en las estructuras de las compañías extranjeras para lograr una mayor participación de personal y accionistas locales; la «coparticipación», cuando el Estado adquiere una parte de las acciones o, en algunos casos, el paquete de control de compañías foráneas; una mayor presión fiscal sobre las transnacionales, como ocurrió en Jamaica, o la nacionalización con generosas indemnizaciones, como tuvo lugar en Guyana.

En la época mencionada se operó también cierta inflexión en la orientación de la política exterior de varios Estados caribeños. Trinidad y Tobago participó en la cumbre de los No Alineados celebrada en Lusaka en 1970. En la segunda Reunión Preparatoria de los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de los No Alineados (Georgetown, 1972), Guyana, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago estuvieron representados oficialmente por sendas delegaciones, y Barbados participó en calidad de observador. Ese mismo año, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomáticas con Cuba. Posteriormente, entre Cuba y dichos países, sobre todo Jamaica y Guyana, se desarrollan estrechas relaciones.

Los frutos amargos de «la iniciativa para la Cuenca del Caribe»

A comienzos de la década de los 80, cuando volvieron a soplar los vientos de la guerra fría y en un contexto de constante agudización de la situación económica, los círculos gobernantes de la mayoría de los Estados caribeños adoptaron un curso pragmático y oportunista de derecha. A cambio de unas limosnas, eligieron la vía de la «iniciativa para la Cuenca del Caribe»[10] de Reagan y quedaron atados por los vínculos de una alianza político-militar con EE.UU. Durante la guerra de las Malvinas (Falkland), todos los países de la CARICOM, a excepción de Granada revolucionaria, se pusieron del lado del imperialismo anglo-norteamericano.

En octubre de 1982, Antigua-Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y Granadina (Granada revolucionaria no fue invitada, aunque era miembro de la Organización de Estados del Caribe Oriental) firmaron un Memorándum sobre la Cooperación en operaciones conjuntas de seguridad. El Primer Ministro de Antigua-Barbuda, Vere Bird, dijo entonces que el mecanismo de Seguridad y Cooperación Militar Regional estaba llamado a prevenir el derrocamiento de «gobiernos democráticos» y explicitó que era necesario evitar la aparición de «otra Cuba u otra Granada»[11]. Posteriormente, llamó a asegurar una «mayor y más activa» presencia norteamericana en el área para salvaguardar la «democracia». Para su propio país, la respuesta a este llamamiento se tradujo en la aparición de dos instalaciones militares de EE.UU., una retransmisora de la «Voz de América» y una Embajada de EE.UU.[12].

La política conformista y proimperialista de los círculos gobernantes de los países de la CARICOM predeterminó en 1983 su adhesión (a excepción de Trinidad y Tobago, Guyana, Bermudas y Bahamas) a la criminal invasión norteamericana de Granada. Entre los participantes activos en la intervención figuraba Barbados. Este país, donde rige un Gobierno socialdemócrata de derecha encabezado por Tom Adams, ha asumido el papel de gendarme del imperialismo norteamericano en el Caribe. En 1979, de acuerdo con la «doctrina de Adams», según la cual San Vicente y

Granadina entran en la «zona de seguridad de Barbados», se enviaron contingentes de policía y tropas a ese país para reprimir la rebelión en la isla de la Unión. Dos años más tarde, EE.UU. financió un desembarco aéreo de tropas de Barbados al objeto de «apaciguar» las acciones antigubernamentales de los militares en Dominica. Estas acciones se inscriben por completo en el marco de la tradicional política reaccionaria del Partido Laborista de Barbados en defensa del neocolonialismo y en contra de la lucha de liberación nacional.

En Jamaica, la Administración proimperialista de Edward Seaga, con el apoyo del Gobierno de Dominica, está maniobrando para lograr una reagrupación de los Estados caribeños, incluyendo a Haití y a la República Dominicana, bajo la dominación total del capital norteamericano. A su vez, el derechista Partido Socialdemócrata de la Republica Dominicana, actualmente en el poder, ha firmado con EE.UU. un acuerdo de cooperación en la lucha contra la «amenaza comunista», el cual prevé, en particular, que el ejército dominicano acudirá en auxilio del régimen dictatorial de Duvalier en Haití, caso de que éste «sea atacado» por fuerzas patrióticas.

En cuanto a Trinidad y Tobago, los círculos gobernantes de este país, con sus vacilaciones nacionalistas pequeñoburguesas, si bien no apoyaron el proceso revolucionario en Granada, tampoco intervinieron en el derrocamiento de su gobierno. Esta posición derivaba de los postulados ideológicos del Movimiento Nacional Popular, que se encuentra en el poder desde 1956 y que proclamó la necesidad para Trinidad y Tobago de seguir una «vía intermedia» entre «la nacionalización total tal como la realizó Castro y la obsoleta organización capitalista respaldada por los marines y los dólares de Estados Unidos».

En Guyana, el Congreso Nacional Popular (CNP), partido nacionalista pequeñoburgués (socialdemócrata de derecha, y a partir de 1970 de utópico signo «socialista cooperativista») ha establecido lo que él denomina un régimen «nacional-estatista»[13]. Pero la implantación del control estatal sobre las industrias de bauxitas y del azúcar, de propiedad extranjera, no redundó en beneficio del pueblo. Es más, la situación de las masas populares em-

peoró; el único que salió ganando fue un sector estrecho, en lo fundamental el más influyente, de la burguesía. Posteriormente, el Gobierno CNP optó por seguir la línea del FMI. Actualmente, las autoridades no quieren ni renunciar definitivamente, cediendo a las presiones de Washington, al «capitalismo cooperativista», ni avanzar por la vía de orientación socialista en colaboración con el PPP.

Los principales grupos gobernantes de los países caribeños, que no desean ni pueden realizar transformaciones socio-económicas radicales, buscan cada vez más la solución de los crecientes problemas derivados de la dependencia de EE.UU. –y en particular, el desempleo– en una ampliación de las estructuras burocráticas, que estimulan la corrupción, y una creciente discriminación política y racial. Ante la agudización de la lucha de liberación nacional y de la lucha de clases, aumentan y refuerzan los órganos coercitivos del Estado.

Las serias dificultades con que se enfrentan las fuerzas democráticas, antiimperialistas, del área en su brega por transformaciones sociales y por la paz tienen que ver no sólo con la necesidad de hacer frente a la política de los partidos reformistas y proimperialistas. También se deja sentir el hecho de que el movimiento sindical se encuentre, en rigor, al servicio de los monopolios de EE.UU. Históricamente, los sindicatos del área han estado relacionados con los principales grupos políticos. En los años 30 y 40, las centrales sindicales desempeñaron un papel positivo. Sin embargo, al iniciarse la guerra fría, sus dirigentes abandonaron las posiciones progresistas, reorientándose hacia la política de la oportunista Confederación Internacional de Sindicatos Libres. Hoy, a través de los centros de estudios sindicales –colegios e institutos– subsidiados por el capital norteamericano, la CIA propala las ideas del anticomunismo y la renuncia a la lucha de clases. De ahí que el movimiento sindical desempeñe a menudo un papel abiertamente contrarrevolucionario, como ocurrió en la Guayana Británica en 1962–1964, o bien adopte posiciones de colaboración con el capital y de traición a los intereses de los obreros.

Para el movimiento de los pueblos por la liberación nacional y la paz, el control que ejerce la burguesía nacional vinculada al imperialismo anglo-norteamericano sobre la prensa, la radio y la TV, supone dificultades complementarias. Este hecho fue denunciado por la Conferencia de personalidades de la cultura e intelectuales, en defensa de la soberanía de los países del área, celebrada en enero del año en curso. La conferencia condenó la intervención de EE.UU. en Granada y señaló que «en la cobertura informativa de la invasión, algunos medios de comunicación de masas de los países caribeños revelaron una disposición servil y vergonzosa a actuar como apologistas de los invasores». Más adelante, el documento indica que en una región en la que funcionan 27 emisoras de radio (de las cuales al menos 16 se encuentran directa o indirectamente en manos del Estado) y 12 de televisión (todas, menos una, son propiedad del Estado), estamos sometidos a una dieta de vulgares programas extranjeros, en los que no encontramos ningún mínimo reflejo de la vida en los países caribeños. La conferencia recalcó la necesidad de poner los medios de comunicación de masas al servicio de los pueblos.

La enconada batalla ideológica y política en torno al tema de las vías de desarrollo en la subregión caribeña, sigue en el orden del día. Sus perspectivas dependerán en grado decisivo de la fuerza y profundidad con que se logre enraizar en la conciencia de las masas la idea de que es necesario consolidar la paz y poner fin a la carrera armamentista.

Factores favorables a la paz

El cada vez mayor aislamiento de EE.UU. en los organismos internacionales, la creciente resistencia a la política militarista de Reagan y las contradicciones en el campo del imperialismo propician el desarrollo de las luchas antibélicas.

EE.UU. ha sido criticado en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el desarme, por su negativa a adoptar un programa racional de desarme. El Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, se refirió aprobatoriamente a las propuestas presentadas

por la URSS, a su compromiso inequívoco de no ser la primera en emplear las armas nucleares, declaró que si todos los Estados poseedores de armas nucleares asumieran este mismo compromiso y lo cumplieran, ello equivaldría en la práctica a la prohibición del uso de tales armas.

Los Estados socialistas, fieles aliados de los pueblos que pugnan por la independencia y la soberanía nacional, condenaron enérgicamente la agresión norteamericana a Granada y prestan pleno apoyo a Nicaragua y a los movimientos de liberación en el Caribe. Hacen asimismo una enorme contribución a los esfuerzos por convertir nuestra región en una zona de paz.

En los propios EE.UU., se amplían las acciones de la opinión pública en favor del desarme y de la paz. Una encuesta realizada por la revista Time[14] indica que el 93 % de los norteamericanos respaldan la idea de que los litigios internacionales deben ser resueltos por medios pacíficos. En el Congreso se observa una creciente oposición a la política aventurera de Reagan en América Central. La negativa de Washington a acatar el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre la actividad terrorista contra Nicaragua[15] desenmascara a EE.UU. como infractor de las normas del Derecho Internacional y un país que aplica una política de terrorismo de Estado.

La inmensa mayoría de los países miembros de la comunidad internacional, incluidos aliados de EE.UU. en la OTAN, ha censurado abiertamente o criticado la intervención de las tropas norteamericanas en Granada. En la sesión de la OEA, por ejemplo, varios delegados condenaron dicha aventura como «una violación flagrante y brutal del principio de no intervención y de la Carta de la OEA». Los representantes de 13 de los 18 Estados que asistieron a la sesión señalaron que la intervención violaba los principios de autodeterminación y respeto de la integridad territorial de uno de los miembros de la organización regional latinoamericana.

También se están produciendo cambios positivos en la opinión pública británica. En un informe publicado en diciembre de 1982, la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de los Comunes enjuició en términos desaprobatorios la política de EE.UU. en nuestra subregión, destacando que «una visión preconcebida del Caribe en tanto que teatro de confrontación entre el Este y el Oeste predetermina las insuficiencias de una política» que pone demasiado énfasis en la «contención del comunismo» y muy poco en la necesidad de ayudar a los países de la región a «resolver sus propios problemas siguiendo su propia vía»[16].

El gobierno francés ha aceptado prestar ayuda al desminado de las vías de acceso a los puertos de Nicaragua. Anteriormente, en 1981, los gobiernos de Francia y de México reconocieron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario de El Salvador en calidad de «fuerza política representativa», pronunciándose en favor del arreglo político de la situación en ese país mediante negociaciones. Es de notar también el papel positivo que desempeña el Grupo Contadora en la búsqueda de una salida pacífica a los problemas de América Central y el Caribe.

La victoria de los sectores democráticos y progresistas en Argentina, la heroica resistencia del pueblo chileno, las luchas de los trabajadores de la República Dominicana y otros países contra el *diktat* del FMI y las acciones de masas en Brasil en favor de elecciones presidenciales directas son otros tantos factores que influyen benéficamente en las acciones por la paz en el Caribe.

En las acciones en pro de la paz desempeñan un papel de notable importancia representantes de los medios religiosos. El Consejo Caribeño de las Iglesias apoyó en su tiempo la propuesta de convertir nuestra región en una zona de paz. También ha adoptado, a pesar de la oposición del sector reaccionario del clero, una postura de condena ante la agresión de EE.UU. a Granada.

Una gran fuerza en la lucha contra la guerra es el Movimiento de los No Alineados. Las cumbres de La Habana (1979) y Nueva Delhi (1983) han destacado que la responsabilidad por la carrera armamentista y muchos males sociales que azotan a los países en desarrollo, recae directamente sobre EE.UU.

A pesar del papel servil que han desempeñado los gobiernos de varios países caribeños en la agresión imperialista a Granada, no debemos pasar por alto las agudas

contradicciones que les oponen a EE.UU. Los jefes de casi todos los gobiernos del área han protestado contra las limosnas que les ofrecen en virtud de la «iniciativa para la Cuenca del Caribe» de Reagan y contra las condiciones de concesión de la ayuda, que hipotecan su soberanía. También indisponen a los miembros de la CARICOM las estrechas relaciones que sostiene Washington con el régimen fascista de Guatemala, puesto que ellos apoyan a Belice en su lucha por el mantenimiento de la integridad territorial frente a la dictadura guatemalteca.

Observamos, pues, la existencia de una serie de factores que determinan una creciente resistencia a la política agresiva de EE.UU. en la zona del Caribe.

Iniciativas de los comunistas

En el presente contexto de agudización de la situación regional e internacional, los comunistas de la Cuenca del Caribe desempeñan un importante papel en el seno de las fuerzas de la paz. Para ganar a las masas y sustraerlas a la influencia de la ideología pequeñoburguesa y socialdemócrata, luchan contra el oportunismo de derecha y de «izquierda», contra el anticomunismo y su variante especial, el antisovietismo. Y, por supuesto, los partidos hermanos bregan en favor de la distensión. Recordemos que el desarrollo en la zona del Caribe registró notables avances precisamente en el período de 1975 a 1980, es decir, en condiciones de distensión. Consideramos indispensable potenciar el Sistema Económico Latinoamericano (SELA)[17] en calidad de organización independiente.

Los comunistas insisten en la necesidad de consolidar coaliciones antiimperialistas en el marco de cada formación estatal y forjar la unidad democrático-revolucionaria a nivel regional para salirle al paso a la política imperialista de «divide y vencerás». Combaten las ideas del «fatalismo geográfico»[18] y las del «exclusivismo caribeño»[19]. Los comunistas caribeños contribuyen con su esfuerzo a la unificación de las fuerzas de las tres corrientes revolucionarias de nuestra época: el sistema socialista mundial, el movimiento de liberación nacional y la clase obrera del

mundo capitalista. Debemos fortalecer orgánicamente nuestros partidos y a los grupos de izquierda, aplicar en la práctica con espíritu creador los principios teóricos del marxismo-leninismo. Nos esforzamos también por intensificar el trabajo de partido en los sindicatos; esto es absolutamente necesario para eliminar la influencia oportunista en las organizaciones sindicales.

Los temas de la independencia nacional y el avance hacia el socialismo llevan ya muchos años inscritos en la agenda de los países caribeños. En este sentido, las dos fases de la revolución —liberación nacional y liberación social— están intervinculadas. En todas partes la lucha contra el imperialismo confluye con las acciones contra la reacción doméstica. Pero, siendo el imperialismo el principal apoyo de los latifundistas, los monopolios y la oligarquía financiera, y también el responsable de la dependencia, del atraso y de la existencia de regímenes dictatoriales y fascistas, la tarea que se plantea ante las fuerzas de izquierda en la primera fase es la de promover una alternativa democrática, antiimperialista.

Al mismo tiempo, en varios países como, por ejemplo, Barbados y Trinidad y Tobago, donde existen desde hace tiempo partidos socialdemócratas de derecha, es muy importante no sólo formular esa alternativa, sino también mostrar las perspectivas que despeja el socialismo científico. Sólo un partido dirigido por una teoría de vanguardia, subrayaba Lenin, puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia[20].

Los partidos marxistas-leninistas de la subregión se atienen a una línea flexible en el cumplimiento de sus tareas nacionales e internacionales. Elaboran una política de alianzas con otros sectores sociales —de gobierno o extragubernamentales— sobre una base de unidad y de lucha. Los comunistas emprendemos acciones antiimperialistas junto con grupos políticos que se encuentran en el poder, y al mismo tiempo colaboramos estrechamente con otras corrientes democráticas y progresistas, nos oponemos enérgicamente a las medidas antiobreras y antipopulares de los gobiernos. Consideramos que si prestásemos un apoyo incondicional, no crítico, a sus posiciones antiimperialistas, sin combinar este apoyo con la lucha en defensa de los

derechos del pueblo trabajador, los resultados serían catastróficos. En ese caso los comunistas podrían quedar debilitados en el aspecto organizativo y también numérico, sobre todo allí donde las fuerzas políticas gobernantes se emplean a fondo para restringir el campo de actividad de la vanguardia revolucionaria que defiende las posiciones del socialismo científico. Al mismo tiempo, la propaganda imperialista y la reacción local, al presentar la realidad guyanesa como si fuera una plasmación del socialismo, tratan de utilizar diversos aspectos de la misma —el hambre y la evasión del hambre (emigración), el fraude electoral y el menoscabo de los derechos humanos— para desacreditar las ideas auténticamente socialistas.

Los problemas que han surgido en nuestra subregión a raíz de los acontecimientos de Granada, han centrado la atención del Encuentro Consultivo de los partidos y organizaciones comunistas y democráticos revolucionarios del Caribe celebrado en marzo de 1984 en Guyana por iniciativa del PPP. Los reunidos determinaron las tareas de la lucha contra la agresión imperialista, por la paz, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos nuestros Estados, por el bienestar de nuestros pueblos. Coincidieron en que el empeoramiento de la situación económica y la disminución del nivel de vida en nuestra área suponen un peligro para la paz y la seguridad. La «iniciativa para la Cuenca del Caribe» de Reagan es conceptuada como un instrumento para articular un bloque político-militar al servicio del imperialismo. El documento final subraya la necesidad de enfrentarse a la política agresiva de EE.UU. y condena enérgicamente la militarización acelerada del Caribe.

En el Encuentro Consultivo se denunció la creciente amenaza que se cierne sobre la revolución sandinista y se reiteró la solidaridad combativa con el pueblo y el Gobierno de Nicaragua, con las fuerzas revolucionarias de El Salvador y con la fraterna Cuba, que construye con éxito la sociedad socialista. Se enfatizó asimismo la necesidad de intensificar la lucha por la paz mundial y hacer del Caribe una zona de paz.

Idéntico fue el temario del I Encuentro Consultivo de Organizaciones Antiimperialistas del Caribe y Centroamérica celebrado en La Habana en junio de 1984 en el que estuvieron representados más de 30 partidos y movimientos de liberación nacional. El comunicado conjunto recoge una apreciación unánime de la situación explosiva que se ha creado en esta subregión por culpa de Washington y destaca que la presión de las fuerzas imperialistas repercute tanto sobre las víctimas de las aventuras armadas como sobre los demás países de la Cuenca, afectados por la crisis de la economía capitalista mundial, el desempleo masivo, el hambre y la miseria.

Los reunidos han elaborado colectivamente la estrategia y la táctica de lucha contra la expansión de EE.UU. y las arbitrariedades de sus fantoches. Los lineamientos inmediatos de esta lucha incluyen acciones concertadas en apoyo de Cuba socialista, la ayuda a Nicaragua revolucionaria, el desarrollo de la solidaridad con los patriotas de El Salvador, Guatemala y otros países y el despliegue de una amplia campaña en defensa del pueblo de Granada ocupada. Se han trazado también metas a largo plazo: desmantelamiento de las bases militares extranjeras y no instalación de armas nucleares en la región; prohibición de la agresión militar, económica y política en todas sus formas; renuncia a la utilización de mercenarios; superación de la dependencia colonial de varios países con respecto a los monopolios imperialistas; estricta observancia del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados; cese de las maniobras militares y disolución de los bloques militares ensamblados por Washington en el área.

Más recientemente, se ha pronunciado contra la presión imperialista de EE.UU. sobre los pueblos de América Central y del Caribe y ha condenado los actos criminales de Washington, la Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur (julio de 1984, Buenos Aires). En el encuentro se examinaron problemas agudos tales como la intervención de EE.UU. en América Central, las provocaciones contra la revolución nicaragüense y la amenaza a los gobiernos democráticos del continente por parte de los sectores militares reaccionarios. Al señalar la acrecida agresividad del imperialismo norteamericano en la palestra internacional, los participantes en la conferencia sub-

rayaron que ésta alcanza en América Latina sus formas más brutales en relación con Cuba socialista y Nicaragua revolucionaria.

El comunicado final del encuentro –la Declaración de Buenos Aires– subraya que la Administración Reagan realiza una política militarista y pretende colocar a la humanidad ante la amenaza de un holocausto nuclear. Esta política contrasta fuertemente con las iniciativas de la URSS en favor de la paz y va en contra de lo que exigen todos los hombres de buena voluntad.

Lo peculiar del momento que vivimos radica en que se está preparando una agresión directa contra Nicaragua, que significaría una intervención contra toda América Central y el Caribe con el fin de aplastar a los movimientos de liberación nacional y social. Empezando por aquí, EE.UU. podría arrastrar a la humanidad a la pesadilla de una guerra nuclear total. Los comunistas y todas las fuerzas progresistas del Caribe llaman a los pueblos a oponer una enérgica réplica a esta política aventurera.

Revista Internacional, Nº 9 de 1984

[1] Se refiere a las antiguas posesiones británicas, hoy independientes, donde la jefatura del Estado suele ser asumida por un Gobernador General designado por la Corona inglesa. *–N. de la Red.*

[2] La ACLC se constituyó en 1968 en virtud de un tratado suscrito en Saint John (Antigua). Agrupaba tanto a Estados independientes como posesiones de Gran Bretaña y territorios que se hallaban bajo su control, en calidad de «Estados asociados». Integraban la ACLC Antigua, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal-Nevis-Anguilla, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad y Tobago. La asociación era considerada por sus fundadores como un primer paso hacia el Mercado Común Caribeño (MCC), instituido en 1973. *–N. de la Red.*

[3] Hillbourne Watson. *United States Policy Towards the Caribbean, Presented to CEESTEM Conference*, March 1982, México, p. 128.

[4] La Comunidad Caribeña (CARICOM) es una agrupación político-económica de los países del Caribe. Se constituyó sobre la base de la ACLC en 1973. *–N. de la Red.*

[5] Banco regional de desarrollo económico que atiende a las necesidades de la CARICOM y del MCC. Fundado en 1969. *–N. de la Red.*

[6] Contrato en virtud del cual la mercancía adquirida no se destina a su procesamiento inmediato, sino que simplemente se almacena. *–N. de la Red.*

[7] En Guyana, la deuda y los pagos de compensación han crecido de un 15 % del ingreso público en 1964 a un 92 % en 1983; el servicio de la deuda aumentó de un 10 % de los ingresos producidos por el comercio exterior en 1977 a un 42 % en 1983.

[8] Ex primer ministro y, de hecho, dictador de Granada, fue derrocado por la revolución de 1979 y huyó a EE.UU. En 1983, tras la invasión de las tropas norteamericanas, regresó a la isla. *–N. de la Red.*

[9] Se trata del modelo de desarrollo impuesto a Puerto Rico por Washington, que supone, en esencia, una total dependencia política y económica con respecto a EE.UU. *–N. de la Red.*

[10] Presentada por Reagan en febrero de 1982, dicha «iniciativa» ofrecía a los países centroamericanos y caribeños una «ayuda» de alrededor de 350 millones de dólares (para el año fiscal de 1982) y garantías para la venta en Norteamérica de varias mercancías de exportación tradicionales. A cambio, dichos países deberían crear en sus territorios condiciones favorables para la actividad de los monopolios de EE.UU. y solidarizarse plenamente con la política de Washington. *–N. de la Red.*

[11] *Vere Bird's «Defense Force» Warning, Caribbean Contact*, Barbados, April 1983, p. 13.

[12] Hasta 1983, EE.UU. estuvo representado en todos los países del Caribe Oriental por un solo embajador con residencia en Granada.

[13] Concepto tomado de la politología burguesa, que presupone una intervención activa del Estado en la vida económica de la sociedad. *–N. de la Red.*

[14] *Time*, January 2, 1984, p. 27.

[15] Se refiere al fallo dictado en mayo del año 1984, por el cual el tribunal invitaba a EE.UU. a cesar inmediatamente cualesquiera acciones que pudieran obstaculizar la entrada en los puertos nicaragüenses o la salida de los mismos, y abstenerse en adelante de toda acción similar. El Tribunal dictaminó asimismo que el derecho de Nicaragua a la soberanía y la independencia política debía ser respetado y no debía ser vulnerado por ninguna medida militar o paramilitar de cuantas prohíbe el Derecho Internacional. *–N. de la Red.*

[16] Jeremy Taylor. *Rediscovering the Caribbean, The Caribbean Chronicle*, West India Committee, February/March 1983, p. 10.

[17] Comunidad económica de los países latinoamericanos, fundada en 1975 e integrada por unos 30 países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. La creación del SELA con la participación

de Cuba y sin EE.UU. refleja el firme deseo de los países comunitarios de lograr la independencia económica y acabar con la preponderancia de las transnacionales. *–N. de la Red.*

[18] Concepción según la cual la proximidad de EE.UU. hace imposible el triunfo de revoluciones en los países latinoamericanos. *–N. de la Red.*

[19] Posición sectaria, cuyos adeptos sostienen que las tesis generales de la teoría marxista-leninista son inaplicables en la zona del Caribe.

[20] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. V, p. 426.

Cuatro años de ofensiva revolucionaria en El Salvador

Schafik Jorge HANDAL,
Secretario General del CC del
Partido Comunista de El Salvador (PCS)

1

El pasado 10 de enero se cumplieron cuatro años de guerra en El Salvador. La actual administración norteamericana insertó a nuestro país en su esquema geopolítico, como parte de una «zona vital» para Estados Unidos; impedir la victoria de la revolución salvadoreña y aplastarla fue asumida como una causa personal y de honor de Ronald Reagan, desde su arribo a la Presidencia el 20 de enero de 1981 y varias veces ha puesto en juego su prestigio ante el Congreso para conseguir que apruebe crecientes partidas de ayuda militar y económica a la dictadura genocida.

Al analizar lo que ocurre en El Salvador, no debe perderse de vista, ni un segundo, que el imperialismo yanqui no lucha por apoderarse de grandes riquezas en este país en extremo desprovisto de recursos naturales, sino tras un objetivo muchísimo mayor: de la derrota del movimiento revolucionario salvadoreño calcula obtener desaliento y frustración para los movimientos revolucionarios en toda América Latina –en cierta medida también en todo el «tercer mundo»– y derivar de ello argumentos para alimentar el chovinismo imperial entre el pueblo norteamericano. Como se sabe, este chovinismo es el que le aporta base de apoyo político a la hegemonía del complejo militar-industrial y a su línea antisoviética y antisocialista en general de espoleo de la carrera armamentista.

Junto a la ayuda material llegaron los asesores milita-

res yanquis (se calcula que ya hay más de 300) quienes han aplicado sucesivos planteamientos estratégicos y tácticos en cuya elaboración se vierte el talento de los oficiales del Pentágono, su experiencia en su derrotada agresión a Vietnam, el saber y la astucia de sus más avezados políticos y analistas, como Henry Kissinger, dos Secretarios de Estado (primero A. Haig y, actualmente, G. Shultz), dos Sub-Secretarios para América Latina, los equipos del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y de algunas Universidades, lo mismo que la esmerada actividad de la CIA.

Para sopesar el influjo de esta ingerencia yanqui, hay que tener en cuenta que El Salvador es el más pequeño país continental de América Latina (21.000 km², en cifras redondas), cuyo Presupuesto Nacional no fue muy superior a los 1.500 millones de dólares hasta 1980.

Esta voluminosa ayuda norteamericana acudió en apoyo de una corrompida, sanguinaria y moribunda dictadura militar de medio siglo y de una oligarquía burguesa-terrateniente muy reaccionaria, para humillar y sojuzgar a un pueblo que derrotó a este régimen oprobioso varias veces en las urnas electorales, sin lograr cambiar nada, y que, consecuente con sus aspiraciones históricas, se alzó en armas después de agotar los procedimientos legales, para alcanzar la democracia y el progreso social. Desnuda de toda legitimidad, la dictadura recurría a la matanza desde 1974 –como en 1932 y 1944–[1], y trataba de sobrevivir echando mano de su único método disponible: el terrorismo de Estado, es decir, el reinado de los «desaparecimientos», de la tortura, de las capturas masivas arbitrarias, de las matanzas contra las masas desarmadas, de los «escuadrones de la muerte» con su cadena interminable de asesinatos –incluido el de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador– y su espectáculo diario de cadáveres mutilados en la vía pública.

El Presidente Reagan involucró a Estados Unidos en apoyo de todo esto: aportó sus dólares, sus armas y su dirección militar y política para llevar el terrorismo de Estado a la dimensión del genocidio bajo el postulado de «lucha contra el expansionismo soviético y la intervención cubano-nicaragüense». Alrededor de cincuenta mil personas no combatientes han sido asesinadas desde entonces por la maquinaria «made in USA».

En el terreno militar, la ayuda yanqui acrecentó, modernizó y adaptó a la Fuerza Armada de la dictadura a los modelos de «contrainsurgencia» creados por el Pentágono. A fines de 1980, ésta contaba con menos de 14.000 efectivos y en diciembre de 1984 había alcanzado los 43.000. Su poder de fuego aumentó muchas veces más, fue dotada con una Fuerza Aérea, un cuerpo creciente de helicópteros y una marina liviana, apropiados para la guerra irregular; las tropas han recibido o reciben entrenamiento de instructores yanquis o conforme a sus reglas, incluso para desembarcar en combate desde los helicópteros. Los mandos de la Fuerza Armada fueron sucesivamente remplazados bajo presión de la Embajada de Estados Unidos, hasta lograr el triunfo y predominio del pensamiento militar de contrainsurgencia; sus estructuras organizativas fueron substituidas conforme las plantillas acordes con estos mismos requerimientos. Así, el antiguo ejército pro-oligárquico es hoy una Fuerza Armada títere, moderna. La tradicional hegemonía de la cúpula oligárquica sobre el ejército fue, en consecuencia, quebrada y substituida, en alto grado, por el timón político-militar de Washington.

Esto transcurre en medio de agrias contradicciones: la oligarquía, por un lado, necesita angustiosamente de la salvación yanqui y, por el otro, no se resigna a su nuevo lugar segundón y trata, de un modo casi igualmente desesperado, de recuperar el timón principal del poder.

La soberanía y la independencia nacionales han sido asfixiadas, aunque Duarte –según el estilo aprendido de los yanquis– hace, de vez en cuando, declaraciones afirmando la «independencia» de su gobierno.

Washington despliega constantes presiones sobre gobiernos de todos los continentes, en especial latinoamericanos y europeo-occidentales, buscando rodear de apoyo al gobierno de Duarte o impedir su condena en los foros internacionales y aislar al FMLN – FDR[2]. Al mismo tiempo, los expertos del Departamento de Estado diseñan y asesoran la conducta internacional del gobierno títere.

No obstante el enorme y saturador involucramiento global de Estados Unidos en contra del FMLN, éste ha crecido cuantitativa y cualitativamente, ha mantenido en sus manos la ofensiva en el movimiento general de la guerra, controla hoy alrededor de un 40 % del territorio nacional –incluidas posiciones inmediatas a San Salvador, la capital del país– y disputa activamente el resto al enemigo, operando prácticamente en todo el país. Durante los cuatro años de guerra, el FMLN puso fuera de combate alrededor de 19.000 efectivos del ejército títere, le ocupó más de 6.000 fusiles, cientos de armas de apoyo y de equipos de radiocomunicación militar, cientos de miles de municiones. Y después de los años de guerra está claro que, de no ser por el apoyo de Estados Unidos a ese ejército, lo habríamos derrotado hace tiempo.

En 1984 el FMLN – FDR llevó al fracaso el nuevo esquema estratégico táctico del imperialismo yanqui en El Salvador, según el cual nuestras fuerzas armadas revolucionarias serían arrinconadas en un reducido territorio del norte del país (la región más atrasada y despoblada), dejando en pleno control del ejército títere las vitales franjas central y sur (las más pobladas y desarrolladas económicamente); mientras, apoyándose en el gobierno «centrista» de Duarte, seríamos despojados de nuestra influencia en las masas, aislados internacionalmente, la economía reactivada y desarrollada en el centro y sur mediante las grandes inversiones previstas en el Plan elaborado por la Comisión Kissinger. Se profundizaría, así, el avasallamiento neo-colonial sobre nuestra Patria rumbo a su conversión en una firme base de la contrarrevolución y el dominio norteamericano en la cuenca del Caribe.

Entre tanto, las tropas títeres, acrecentadas aún más en su número, movilidad, coordinación, poder de fuego y calidad combativa, procederían a nuestro aniquilamiento en un rincón norteño fronterizo con Honduras, con el ejército de este país sirviendo como *yunque* al demoledor *martillo* «salvadoreño».

Dicho explícitamente, al finalizar 1984 la situación era la siguiente:

a) El FMLN había causado un profundo desgaste al ejército títere, contrarrestando sus planes de crecimiento y llevando desmoralización a sus filas. Consolidamos y ensanchamos nuestras zonas de control y retaguardia, y ampliamos nuestra presencia combativa en el norte, el centro y sur; desplegamos la actividad guerrillera suburbana e intensificamos la lucha armada en las más grandes ciudades.

b) Extendimos nuestros teatros de operaciones hasta el occidente del país, decisiva región agro-industrial conservada durante más de tres años como gran retaguardia enemiga.

c) A consecuencia de todo lo anterior y específicamente de los golpes del FMLN contra la economía de guerra, la crisis económica sufrió un nuevo ahondamiento. Ahora serán necesarias mayores transfusiones de dólares para mantenerla a flote y, así, una parte importante de la incrementada ayuda que Reagan proyecta entregar al gobierno títere en 1985, servirá para compensar pérdidas y no le dará poder ofensivo.

d) El movimiento huelguístico mantuvo su continuidad y creció durante 1984, se incrementó el movimiento en defensa de los derechos humanos, la Universidad Nacional recuperó la ciudad universitaria, invadida, ocupada y destruida desde 1980 por las tropas de la dictadura, y cuya matrícula sobrepasó los 20.000 estudiantes. Crecieron las luchas y la organización de los trabajadores del campo por la tierra y los aumentos salariales.

El gobierno de Duarte, pese a su demagogia, no ha podido ni puede satisfacer las demandas de las masas. En efecto: por un lado mostró su incapacidad de mejorar los salarios, literalmente devorados por la inflación, de los trabajadores del Estado que formaron el grueso de los huelguistas. Por el otro lado, se demostró claramente impotente para meter en cintura a la oligarquía, obligarla a mejorar las pagas y jornales y aceptar la reforma agraria. Todo lo contrario, los diputados de la oligarquía en la Asamblea Legislativa suprimieron la legislación que sustentaba el proceso de transformación agraria, mientras la banca estatal mantiene los raquíticos niveles del crédito a los campesinos y los precios de los insumos agrícolas continúan aumentando sin freno.

e) El FMLN – FDR consolidó sus relaciones y espacios diplomáticos en torno a su consecuente búsqueda del diálogo y la negociación para dar una solución política a la guerra. Como se sabe, desde comienzos de 1981, es decir desde el inicio mismo de la guerra, el FMLN – FDR ha presentado diversas propuestas de negociación, tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de El Salvador y su Fuerza Armada. Tales propuestas fueron reiteradamente rechazadas, hasta septiembre de 1984.

f) Como consecuencia de la acumulación de estos cambios favorables en la correlación de fuerzas militar, política y diplomática, el gobierno de Duarte, aunque aparentando tomar la iniciativa, se vio forzado a sentarse a la mesa del diálogo en octubre de 1984 con la aprobación de Washington, por supuesto. De este modo, Reagan y Duarte otorgaron al FMLN – FDR un evidente y para ellos doloroso reconocimiento, que ensanchó nuestro espacio internacional y aportó un extraordinario estímulo y mayor legalidad al movimiento popular reivindicativo y político, particularmente en la capital y otras ciudades, donde las masas comenzaron a retomar la calle, a pesar del exterminio de sus cuadros y activistas que realizan los «escuadrones de la muerte» y desafiando el estado de sitio vigente desde 1980.

Aunque en el primer momento la decisión de dialogar elevó el prestigio de Duarte, los encuentros realizados trajeron consecuencias que mostraron su falta de sinceridad, el desacato de su autoridad por el mando militar que declaró su negativa a cumplir la tregua de Navidad y Año Nuevo pactada con el FMLN – FDR, y que, efectivamente, violó, así como la agudeza de sus contradicciones con la oligarquía las cuales parecían haberse atenuado.

Las esperanzas que pudo engendrar la llegada de Duarte a la Presidencia, al menos en una parte del pueblo, se han derrumbado, su gobierno ha resultado incapaz para conquistar a las masas. Este, que es una pieza clave en el esquema de la contrainsurgencia que aplica el imperialismo yanqui en El Salvador, está muy lejos de consolidarse y se debilita; su prestigio dentro y fuera del país se desgasta y, en el momento de escribir este artículo, una grave crisis se abate sobre él.

En noviembre del año 1984, México, Francia, España, Grecia, Suecia y Argelia presentaron a la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución condenando al gobierno salvadoreño por el incremento de sus violaciones a los Derechos Humanos, particularmente con sus bombardeos a la población civil. En el texto de esta propuesta se caracteriza la situación en El Salvador como «un estado de guerra convencional generalizado», rechazando de esta manera la acusación de «terrorismo» que Reagan y Duarte acostumbran lanzar contra nosotros. Esto constituye, sin duda, un grado mayor de reconocimiento internacional para el FMLN – FDR.

Así, pues, el FMLN – FDR que según los planes yanquis debería encontrarse debilitado políticamente, arrinconado territorialmente y aislado internacionalmente, se encuentra hoy más fuerte y desplegando aún más su ofensiva en lo militar, lo político y lo diplomático.

La bandera de la soberanía y la independencia, la causa de la nación traicionada por el régimen títere, está en manos del movimiento revolucionario, en relación con el cual tienden a reagruparse todas las fuerzas patrióticas, organizadas o no. El movimiento revolucionario es también el abanderado de la democracia y la liberación social. Esta es la causa que le dio origen.

3

Si se miran superficialmente los acontecimientos en El Salvador, podría concluirse: «Ha pasado demasiado tiempo sin que los revolucionarios alcancen la victoria y teniendo decididamente en su contra a Estados Unidos, nunca lograrán triunfar.»

¡Este es un juicio miope! El mismo gobierno de Reagan, que en enero de 1981 anunció nos derrotaría en los tres a seis meses siguientes, sabe bien que no habernos podido vencer después de años de crecientes esfuerzos e involucramiento, constituye para el FMLN una enorme victoria. También sabe que lo peor para sus propósitos es que la ofensiva revolucionaria continúa avanzando, ganando nuevas posiciones políticas y diplomáticas sobre la base

de los constantes golpes de desgaste y aniquilamiento que el FMLN asesta a la Fuerza Armada títere, suministrada ya con más de un millón y medio de dólares por día.

Para valorar los años de guerra popular revolucionaria en El Salvador, conviene imaginar lo que habría ocurrido si el FMLN hubiera sido derrotado: la Revolución Popular Sandinista enfrentaría mayores dificultades teniendo activamente en su contra al fogueado, agrandado y modernizado ejército salvadoreño, manipulado por el imperialismo, y a la rica y cavernaria oligarquía de nuestro país; los imperialistas yanquis y toda la reacción centroamericana y de toda América Latina estarían envalentonados, embistiendo furiosamente contra los movimientos democráticos y revolucionarios; el hitleriano sueño dorado de invadir a Cuba, jamás desechado totalmente por Estados Unidos, habría recibido un enorme estímulo y la paz mundial estaría mucho más amenazada que hoy.

Mantenernos combatiendo y avanzando, ha asegurado la continuidad del proceso revolucionario centroamericano, constituye el aporte del pueblo y los patriotas salvadoreños a la defensa de Nicaragua, un estímulo al avance de las luchas democráticas y revolucionarias en América Latina, que en los últimos años han expulsado de la escena regímenes fascistas implantados por el imperialismo yanqui durante los años setenta en Sur América, y que hoy levantan fuerzas frescas al combate en los puños chilenos alzados contra el bestial régimen de Pinochet procreado por la CIA. Nuestra invicta lucha entrega una contribución cotidiana al desprestigio y el debilitamiento de la tozuda política agresiva de la administración Reagan en su propio país y en el mundo y, por tanto, refuerza la lucha antimperialista y por la paz en el mundo.

Tal es, a nuestro juicio, la única valoración correcta del papel internacional de la lucha del pueblo salvadoreño.

4

Sostenernos y mantener la ofensiva frente al imperialismo yanqui decidido a derrotarnos, en un país pequeño, sin fronteras con ningún Estado gobernado por fuerzas progresistas, muy cerca de los Estados Unidos y muy lejos de la Unión Soviética, ha requerido un extraordinario esfuerzo y un gran desarrollo, sólo posibles por la unidad de todas las fuerzas revolucionarias dentro del FMLN, su línea acertada, su firme alianza con las fuerzas democráticas encabezadas por el FDR, las hondas raíces de nuestro proceso revolucionario en las grandes masas obreras, campesinas, trabajadoras y populares en general y la extensa solidaridad internacional que recibe nuestra lucha.

¿Cómo explican el gobierno de Estados Unidos y la dictadura salvadoreña el hecho evidente del fracaso de sus planes?

Ellos alegan que el FMLN recibe grandes volúmenes de armas desde la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, no han podido aportar pruebas convincentes de esta afirmación. Los periodistas de todas las ideologías y diversa nacionalidad, incluidos los norteamericanos, que visitan los frentes de guerra en El Salvador, testimonian en sus reportajes que las armas del FMLN son de fabricación norteamericana, exactamente iguales a las que el gobierno de Reagan le envía a la Fuerza Armada de la dictadura. Por su parte, los servicios de inteligencia militar sofisticados de los Estados Unidos saben perfectamente que eso del «enorme flujo de armas» para el FMLN desde Nicaragua es una falacia. Pero aún suponiendo que ello fuera verdad, tampoco explicaría los resultados en el campo de batalla, puesto que todos, incluso el Pentágono, aceptan que los volúmenes y poder de fuego de las armas norteamericanas enviadas al ejército de la dictadura (aparte de la asesoría, el entrenamiento de tropas, la cooperación en la inteligencia militar, etc.), son más de un centenar de veces mayores que los más grandes volúmenes que la propaganda enemiga de nuestro movimiento atribuye a los supuestos suministros desde Nicaragua.

A esto habría que agregar que el FMLN no tiene helicópteros, aviones, obuses, naves acuáticas artilladas, transportes blindados y nadie pone en duda que cuenta con soldados y oficiales en un número varias veces menor que el de sus enemigos, que no tiene control sobre la industria y el gran comercio, ni dispone de decenas de millones de dólares de la ayuda exterior para vestir, alimentar, curar

y transportar a sus fuerzas, que no dispone de *la maquinaria* del Estado y carece de los incontables resortes del mundo empresarial de la burguesía, con todo lo cual, en verdad, sí cuenta el ejército títere.

Así, el alegato de los enemigos del FMLN se derrumba y genera una contrapregunta: ¿Por qué la dictadura y sus amos imperialistas están perdiendo la guerra en El Salvador?

La explicación que indirectamente difunde la administración Reagan —y a veces, incluso, en boca de sus asesores y funcionarios gubernamentales— consiste en uno o varios de los alegatos siguientes: «Los jefes militares salvadoreños, con algunas excepciones, son incapaces y corrompidos, no entienden ni aprenden lo que los asesores les enseñan; los soldados apenas tienen cuatro o cinco grados de la escuela primaria, mientras que el soldado norteamericano tiene diez como promedio, y, por eso, la tropa salvadoreña no asimila las enseñanzas avanzadas; los funcionarios civiles del gobierno también son corrompidos y restan eficacia a la ayuda norteamericana.»

Dejemos de lado lo de la evidente y galopante corrupción de los jefes militares y funcionarios civiles, ya que estos son los socios e instrumentos escogidos por el imperialismo para «defender el mundo libre» en esta región del planeta y no tiene derecho legítimo a quejarse de ellos. En cambio, detengamos la atención sobre la supuesta inferioridad de los trabajadores salvadoreños para convertirse en excelentes soldados y oficiales.

En efecto, más del 80 % de los combatientes del FMLN proceden de los trabajadores del campo y las ciudades. Una alta proporción de ellos llegan a nuestras filas sin siquiera saber leer ni escribir, desnutridos y con una salud precaria. Todo ello refleja, en parte, la realidad social de nuestro país, resultante de la brutal explotación que practica la insaciable oligarquía de los más grandes terratenientes, industriales, banqueros, importadores y exportadores, y los propios monopolios estadounidenses y de otros países. Esas condiciones patéticas nos imponen limitaciones que demandan del FMLN no poco trabajo para vencerlas, a pesar de las increíbles privaciones con que combatimos. Pero estos problemas son, al mismo tiempo, un componente inseparable de las profundas motivaciones que impulsan a nuestro pueblo a lanzarse al combate revolucionario. Así formadas, las filas principales del FMLN agrupan a experimentados jefes y combatientes, que cuentan con gran dominio del arte de hacer la guerra popular en nuestro pequeño y densamente poblado país. Por otra parte, esos mismos soldados del ejército enemigo que en su mayoría son mediocres combatientes cuando combaten contra nosotros, dando motivo a tantos reproches de los militares yanquis, resultan de primera calidad cuando se pasan a nuestro lado, trayéndonos, además, valiosos conocimientos militares.

Simple y llanamente, el argumento contra los trabajadores salvadoreños no es válido y constituye, propiamente, una muestra de la arrogancia imperial y de insultante menosprecio hacia nuestro pueblo.

Dicho sintéticamente, el FMLN está ganando la guerra porque está al lado del pueblo, que es quien en verdad está haciendo esta guerra revolucionaria salvadoreña. La elevada moral y eficiencia de nuestros combatientes y oficiales tienen en su base esta realidad esencial que determina la justeza de la causa por la cual luchamos. Es en esto donde radica la diferencia imborrable entre la alta calidad de nuestros combatientes y la mediocridad de los soldados del ejército títere.

El FMLN es guía, organizador, conductor, brazo armado y vanguardia indiscutible del pueblo salvadoreño. Expresado sin ningún lirismo, «es sangre de su sangre y carne de su carne, es su sentimiento, su anhelo y su conciencia»[3].

Como consecuencia de la acumulación de derrotas y del control que ejercen los militares yanquis sobre ella, la Fuerza Armada vive unas graves contradicciones internas, que, junto con el desastre de la economía nacional y la enconada lucha entre facciones, está arrastrando a la crisis a todo el bloque de las fuerzas de poder.

5

De nuestra experiencia deducimos algunas enseñanzas.

Ella demuestra que la revolución es capaz de abrirse paso en medio de las peores condiciones, siempre que

exista una vanguardia unida, que se mantiene indisolublemente ligada a las masas, con una línea revolucionaria acertada, posesionada de la voluntad y la decisión inquebrantables de cumplir su misión histórica y vencer. Incluso el pueblo más pequeño seguirá a una vanguardia con tales atributos revolucionarios.

La esencia de la revolución como proceso histórico es ofensiva y su problema central es la conquista del poder y su defensa. Sin proyección de poder ni continuidad ofensiva no puede haber línea verdaderamente revolucionaria, sin ésta no puede movilizarse ni educarse a las masas en la dirección correcta, no habrá avance de la revolución sino pantano.

El FMLN – FDR combinan la lucha armada, la lucha política y la lucha diplomática. En cada uno de estos terrenos y en todos, tomados de conjunto, procuran mantener la ofensiva continua. Estos son principios fundamentales de la conducción revolucionaria, según nuestra experiencia.

Para mantener la ofensiva se necesita, aparte de la línea acertada en cuanto al carácter de la revolución, asegurar la acumulación de fuerzas en cada etapa de la lucha de clases, teniendo en cuenta las condiciones existentes en cada momento, y organizar, conducir y realizar en la práctica el paso sucesivo de una a otra etapa superior en ella, no contenerla ni estancarla.

Si la vanguardia no cumple su deber de impulsar y organizar el paso a etapas superiores de lucha, cuando su necesidad ha madurado, deja de ser vanguardia, puede descomponerse y fraccionarse, vegetar e, incluso, integrarse en el engranaje político que sustenta el sistema de los explotadores «propios» e imperialistas. La lucha de clases revolucionaria no admite una estable zona intermedia, un «limbo»; los retrocesos y zigzags, no pocas veces indispensables, deben conducir obligatoriamente a reforzar y asegurar el movimiento ofensivo del proceso de la misma tomado en conjunto. Retroceder indefinidamente o mantenerse zigzagueando sin avanzar, de hecho significa renunciar a imprimir a la lucha de clases una conducción revolucionaria y cultivar la ilusión, jamás confirmada por la vida, de que el final del dominio de los explotadores, de la explotación misma o la liberación nacional del yugo imperialista pueden lograrse sin revolución, por vía evolutiva, mediante reformas.

La unidad de la vanguardia revolucionaria es una condición esencial para cohesionar a las masas trabajadoras y populares tras las banderas de la revolución; es determinante para concertar y mantener una alianza firme con las demás organizaciones democráticas y patrióticas; excepto en la propaganda, las fuerzas revolucionarias divididas y aisladas no pueden convertirse, en los hechos, en las abanderadas de la democracia y los intereses nacionales; y sin todo esto no puede oponerse al imperialismo y sus lacayos la fuerza suficiente, ni la voluntad inquebrantable de luchar y vencer. En estas condiciones, el imperialismo, con su riqueza y su poderío militar y político, puede derrotar a la revolución y hasta derrocarla si ya hubiera tomado el poder.

En el curso de nuestra experiencia, hemos podido comprobar la radical diferencia de peso e influencia nacional, de prestigio y apoyo internacional de las fuerzas revolucionarias mientras estuvimos divididas y luego de nuestra unificación.

La unidad de las fuerzas revolucionarias significa mucho más que la suma de sus componentes, es el surgimiento de una nueva calidad: la integración y sucesiva construcción de la vanguardia.

6

Corresponde al VII Congreso del Partido Comunista de El Salvador, celebrado en abril de 1979, el mérito de haber dotado a los comunistas con una línea revolucionaria, poniendo fin a antiguas vacilaciones y cortando el proceso de su conversión al reformismo, que estaba desnaturalizándolo. Esto permitió a nuestro Partido el honor de participar entre los actores de la hazaña del pueblo salvadoreño y entregar a ésta su contribución.

El VII Congreso trazó una línea correcta, comprobada por la práctica de estos años de ardua lucha. El viraje del Partido acordado por el Congreso hacia la unidad de las fuerzas revolucionarias y hacia la lucha armada, fue reali-

zado consecuentemente, sin fraccionamientos ni crisis interna.

En marzo–abril de 1984, tuvo lugar el IV Pleno del Comité Central en una de las zonas bajo control del FMLN; éste, entre otros puntos, examinó la situación del Partido, resultante del viraje ordenado por el VII Congreso. El Pleno concluyó que el viraje fue efectivamente cumplido: El PCS es uno de los participantes en el proceso de unificación de las fuerzas revolucionarias, desde el primer paso con el acuerdo de diciembre de 1979, que creó la «Coordinadora Político-Militar», cuyo desenvolvimiento condujo, en octubre de 1980, a la fundación del FMLN.

El PCS realiza acciones armadas desde 1979 y participó en la ofensiva general del 10 de enero de 1981; desde entonces actúa intensamente en la guerra popular revolucionaria, pues, construyó su propio brazo armado, las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), en el curso de la guerra.

El nuestro es hoy un Partido en guerra, su organización, la naturaleza de sus tareas, su temple ideológico, su estilo de trabajo, corresponden con este carácter. Hemos construido las estructuras partidarias de base y dirección intermedia también en las filas de las FAL y hemos resuelto el difícil problema de asegurar la conducción del Partido sobre su fuerza armada, de una manera directa y a todo nivel.

El Comité Central, la Comisión Política, los Comités Regionales, sus órganos de conducción política y militar, los cuadros y dirigentes del Partido tienen no sólo capacidad política sino también militar.

El Partido ha mantenido en pie su trabajo en el movimiento sindical y en el campo, en las universidades, entre la intelectualidad y en la esfera política, propiamente tal, a pesar de la brutal y sanguinaria represión, que ha segado la vida de muchos cuadros, incluso miembros del Comité Central.

El Partido extendió y ramificó su organización en áreas del país donde era débil antes de la guerra; creó y desarrolló un amplio trabajo internacional, el cual realizan cuadros capaces dispersos en numerosos países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

El PCS es ahora más grande, tiene mayor calidad y continúa creciendo.

En la segunda mitad de 1979 y la primera de 1980 nuestro país vivió una situación revolucionaria madura, inmediata, dentro de la cual tuvo lugar el proceso unificador de las organizaciones político-militares. En enero de 1980 se fundó la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), en abril el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y fue elaborada la «Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario», base política de la alianza de todas estas fuerzas.

Estremeció al país un despliegue sin precedentes del movimiento huelguístico, de las tomas de tierra, de enormes manifestaciones de calle como la del 22 de enero de 1980, en San Salvador, que alcanzó las 300.000 personas, luchas todas impregnadas hasta la médula por la violencia de masas y las acciones armadas de las unidades de combate del emergente ejército revolucionario, construido y desarrollado después, en sus niveles superiores, durante la guerra, en el marco del FMLN.

Las masas estaban dispuestas a jugarse la vida, incluso a morir, por la victoria de la revolución, como lo demostraban diariamente durante meses al enfrentarse en las calles a los bárbaros ametrallamientos, capturas masivas, «desaparecimientos» y asesinatos, realizados por el ejército y los cuerpos policiales de la dictadura.

La crisis económica experimentó un brusco agravamiento. Las clases dominantes luchaban agudamente entre sí, las filas militares se dividieron.

El retraso en el logro de la unidad durante los años anteriores impidió que maduraran a tiempo las condiciones subjetivas de la revolución, particularmente la constitución de la vanguardia, la superación del hegemonismo en sus filas unificadas, y la elaboración de su plan único de acción para organizar y conducir la insurrección.

Aquel momento maduro, sin embargo, no pasó en vano. El FMLN se lanzó a la ofensiva del 10 de enero de 1981, poniendo en marcha la guerra que libramos y, con ella, el proceso de construcción de las fuerzas armadas revolucionarias en su etapa superior, en cuyas filas y apoyos se recogió y acumuló gran parte de la formidable energía

social desatada por la situación revolucionaria. De este modo, aquella insuficiencia del factor subjetivo fue superada con una gran acción ofensiva que ha permitido el avance de nuestra lucha revolucionaria a lo largo de estos años de guerra, la construcción, el aprendizaje y la maduración de la vanguardia, el bloqueo a la salida burguesa de la crisis estructural y, en consecuencia, la prolongación del estado de situación revolucionaria general.

Hasta comienzos de 1984, la dictadura títere logró mantener un férreo control, basado en el terror y el genocidio, en la capital y las ciudades mayores, lo mismo que en toda la región occidental del país, es decir, en todo el espacio donde habitan las masas más avanzadas, experimentadas y organizadas; vale decir, el grueso de la clase obrera, de la intelectualidad, de los estudiantes, gran parte del proletariado agrícola y donde históricamente han tenido lugar las más grandes luchas, incluidas las insurrecciones de 1932, de abril, mayo y diciembre de 1944, las vastas acciones pre-insurreccionales de agosto–octubre de 1960 y, sobre todo, las de octubre de 1979 a junio de 1980.

Como ya lo apuntamos atrás, ahora se encuentra en desarrollo un nuevo flujo de la lucha de masas en las principales urbes del país, al mismo tiempo que hemos llevado la actividad guerrillera a sus suburbios; hemos intensificado las acciones armadas dentro de la zona metropolitana de San Salvador e irrumpido, con enérgicas acciones militares y con nuestro trabajo organizativo, en la zona occidental, la «tranquila» retaguardia enemiga.

En adelante, pues, el FMLN podrá crecer y desarrollarse aún más, incorporando a la acción revolucionaria directa a estas enormes masas avanzadas, en el propio corazón del dominio enemigo. Así, aunque parezca increíble, después de cuatro años de guerra la energía y el poderío del pequeño y heroico pueblo salvadoreño aún no se ha desplegado totalmente; lo que falta es la parte mayor de su potencial revolucionario y todo marcha hacia esas grandes batallas.

Ahora se encuentran en curso los factores que conducirán al estallido de una nueva situación revolucionaria inmediata, en la cual, a diferencia de 1979–80, actuará una experimentada y unida vanguardia, que posee una fogueada y eficiente fuerza armada revolucionaria, que realiza la ofensiva combinada en lo militar, político y diplomático y tiene vínculos más profundos, sólidos y multifacéticos con las masas, lo mismo que relaciones internacionales desarrolladas.

8

Se acerca la luz de la victoria del pueblo salvadoreño, por la que ha vertido y vierte tanta sangre; la oscura noche del genocidio está por terminar. Pero precisamente por ello, en este momento se agranda el peligro de la agresión militar directa de los Estados Unidos.

Junto con todas las fuerzas democráticas de Centroamérica y el mundo, incluidas las fuerzas progresistas y los sectores sensatos de Estados Unidos, el FMLN – FDR lucha y lo hace todo para impedir que Washington invada Nicaragua o El Salvador, o a ambos a la vez, incluso esforzándose para abrir paso a una negociación que logre una solución política, justa y digna, a la guerra. Junto a los patriotas hondureños luchamos por poner fin a la presencia militar yanqui en su país y frustrar su plan de convertirlo en una base permanente de agresión contra los pueblos centroamericanos y del Caribe. En una palabra, luchamos en defensa del derecho a la autodeterminación y la paz del pueblo salvadoreño y de todos los pueblos hermanos.

Al mismo tiempo, el FMLN – FDR se preparan en todos los terrenos y aprestan a las masas salvadoreñas para resistir y derrotar la agresión militar imperialista yanqui directa, si este proyecto reaganiano fuera realizado a pesar de las dificultades que enfrenta en los mismos Estados Unidos y en el mundo.

Revista Internacional, Nº 4 de 1985

[1] En 1932 la dictadura reaccionaria del general Martínez anegó en sangre una de las más grandes acciones revolucionarias en la historia de América Central. Cerca de 30.000 obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales y casi todos los dirigentes del

PCS cayeron víctimas de la represión. En 1944, tras la sublevación contra la tiranía de Martínez de un sector de las fuerzas armadas unido a sectores civiles, se declaró una huelga política general que, a pesar de la brutal represión, desembocó en la caída de la dictadura. *—N. de la Red.*

[2] El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), constituido en 1980, es una alianza político-militar de cinco organizaciones insurgentes de izquierda, entre ellas las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), del PCS. El autor del presente artículo, camarada S. J. Handal, es miembro de la Comandancia General del FMLN. El Frente Democrático Revolucionario (FDR) es una agrupación política (1980) considerablemente más amplia, integrada por más de 100 organizaciones políticas, sindicales, sociales y otras organizaciones de masas opositoras al régimen títere. *—N. de la Red.*

[3] Comunicado oficial de la Comandancia General del FMLN con motivo del fin de año de 1983.

Intervencionismo armado bajo pretextos anticomunistas

Rigoberto PADILLA RUSH,
Secretario General del CC del
Partido Comunista de Honduras (PCH)

Pocas veces en toda nuestra historia, los países centroamericanos y del Caribe habíamos enfrentado una situación tan dramática y a la vez cargada de tantos peligros, como ahora. Lo que ocurre en torno a Cuba y a Nicaragua, en El Salvador, en Honduras y en otras repúblicas del área se inscribe en la llamada estrategia de los conflictos locales, que surgen principalmente allí donde las luchas de las masas populares por la libertad y el desarrollo independiente se enfrentan con la furiosa resistencia del imperialismo y las oligarquías domésticas. Precisamente en esos puntos neurálgicos es donde la reacción interna y externa desencadenan guerras contrarrevolucionarias procurando no sólo conservar su dominio, sino extenderlo a toda costa.

Se trata de una de las manifestaciones más importantes de la revancha social que el imperialismo se empeña en aplicar desde que perdió la iniciativa histórica en escala mundial. Por eso cabe considerar el área centroamericana y del Caribe y otros «puntos calientes» del globo como las regiones donde se revela en su forma más aguda, a menudo indirecta, la contradicción fundamental de nuestra época entre las fuerzas del progreso y las de la reacción.

El conflicto local del que somos testigos y partícipes, presenta algunos rasgos específicos. En primer lugar, se desarrolla en la cercanía inmediata de la principal ciudadela del imperialismo, en una zona considerada de antaño por los yanquis como su traspatio, y esto exacerba aún más sus accesos de histeria anticomunista. En segundo lugar, la situación en el área se distingue por su grado extremo

de tensión y amenaza con transformarse en un conflicto generalizado de dimensión regional e incluso global. En tercer lugar, la continua agravación de la crisis estructural en nuestros países y el auge de la lucha de liberación viabilizan objetivamente nuevas roturas en la cadena de la opresión imperialista.

El miedo a nuevas derrotas

Si repasamos las declaraciones hechas por personeros de la Administración norteamericana, desde el discurso del presidente norteamericano ante el Parlamento británico en junio de 1982, cuando proclamó la nueva «cruzada» contra el comunismo, es fácil detectar un brusco giro de la política interior y exterior del imperialismo. Saltan a la vista el desafío a los países socialistas, en primer lugar a la Unión Soviética, el empeño de «apretar las tuercas» y reprimir a los movimientos progresistas en los países capitalistas, de combatir a las fuerzas de democracia nacional en los jóvenes Estados independizados, y el endurecimiento de la política latinoamericana de EE.UU.

Semejante giro necesitaba, *naturalmente*, la correspondiente cobertura ideológica. Y nuevamente se esgrimen las raídas banderas y trilladas consignas del anticomunismo cerril. Para ellos, todos los medios, sin despreciar los infundios y la mentira, son buenos. La Unión Soviética, proclaman, es el «imperio del mal»; el socialismo real, «una aberración de la historia» que debe ser borrada; los éxitos de las fuerzas progresistas son «intrigas del comunismo», al cual se le imputan todos los pecados habidos y por haber, incluido el atentado contra el Papa, esa sucia provocación de la CIA. A la opinión pública se la quiere hacer creer en el papel «mesiánico» de EE.UU., que supuestamente estaría llamado a salvar a la humanidad de la «terrible pesadilla del comunismo».

El objetivo principal de esta guerra sicológica sin precedente por su envergadura es crear un contexto ideológico que justifique la política norteamericana de terrorismo de Estado y chantaje económico, de desestabilización y derrocamiento de los regímenes «indeseables», de intervención armada directa, como ha ocurrido ya en Granada y puede ocurrir ahora en Nicaragua y El Salvador.

Como es sabido, medio año antes de que se instalara en la Casa Blanca la Administración que representa los intereses de los sectores más reaccionarios del capital yanqui y de su complejo militar-industrial, el grupo de expertos de Santa Fe confeccionó un programa titulado *Una nueva política interamericana para los años 80.* Este documento, inicialmente secreto y que fuera denunciado por varias publicaciones progresistas, constituye algo más que una mera variante modernizada de la famosa doctrina de Monroe, es la quintaesencia de las actuales apetencias hegemonistas, fuertemente condimentadas con postulados anticomunistas.

En una evocación del pasado los autores del documento califican la doctrina Monroe de «piedra angular histórica de la política de EE.UU. sobre América Latina». Como si no supieran que a lo largo de 150 años EE.UU. jamás ha aplicado esta doctrina para defender a sus vecinos del Sur contra atentados de las potencias europeas y que dicha doctrina se desacreditó por completo a los ojos de los latinoamericanos ya en el siglo pasado, pues sólo sirvió para encubrir la expansión del entonces joven capital estadounidense. Tropas yanquis se apoderaron de más de la mitad del territorio mexicano, ocuparon Cuba, que justo acababa de liberarse de la dominación española, Puerto Rico, y, posteriormente, la zona del Canal, convirtieron el Caribe en un «lago interior de EE.UU.».

Ahora, a juicio de los «cerebros» de Santa Fe, el Caribe se está transformando en un «lago marxista-leninista» y los países de la cuenca se ven amenazados por la actividad incontenible de Cuba, apoyada por la Unión Soviética.

«Una política exterior integral y global es esencial —profetiza el grupo de Santa Fe—. Es hora de hacer sonar una clarinada por la libertad, la dignidad y los intereses nacionales. O la *Pax soviética* o una contrapuesta proyección de la potencia americana a nivel mundial es la alternativa. La hora de las decisiones no puede ser postergada.»[1]

Los autores del documento procuraban inculcar en las mentes latinoamericanas la idea de que la guerra es inherente a la humanidad y que las Américas (incluida aque-

lla a la que Martí llamaba «Nuestra»[2]) tienen valores y tradiciones comunes, que es menester defender[3].

Los años pasados demostraron que la «nueva» política latinoamericana de EE.UU. es precisamente el curso «fundamentado» en el documento de Santa Fe. Cuando estalló la crisis de las Malvinas, y Argentina enfrentó la agresión imperialista británica, Estados Unidos traicionó de la manera más infame a su tradicional «aliado» en aras de «intereses supremos», pisoteando la doctrina Monroe y todos los pactos político-militares de defensa del Hemisferio Occidental. Más tarde llevó a cabo la criminal intervención en Granada, cuyo pueblo se había atrevido a optar por la vía del desarrollo independiente. Y ahora juega con fuego en Centroamérica.

Hoy todos comprenden, incluso políticos latinoamericanos de inspiración reaccionaria, que cualquier país de la región puede ser objeto de la agresión norteamericana aunque no tenga nada que ver con la alternativa socialista de desarrollo y se limite a reivindicar en los hechos su derecho a la plena independencia. Y los *Libros Blancos* fabricados en Washington a comienzos de 1981 y 1985 para «demostrar» la intervención de la URSS, Cuba y Nicaragua en los asuntos de El Salvador y toda clase de documentos oficiales y oficiosos de estos últimos años no son más que los intentos de turno de «fundamentar» ideológicamente el intervencionismo armado, meras patrañas propagandísticas que para nosotros se tornan en drama.

Más de una vez nos hemos enfrentado con el anticomunismo en sus formas más viscerales. Su activación es un rasgo determinante de la actual situación ideológica en América Latina. Tras la ascensión de Reagan al poder, la lucha total contra la presunta «intervención soviético-cubana» en los asuntos internos de la región, el «terrorismo comunista» y la «agresión comunista» se ha convertido en una obsesión de la Administración estadounidense, el principal pretexto alegado para justificar la represión en los países con regímenes dictatoriales derechistas y allí donde se emplean rótulos «democráticos» para encubrir las arbitrariedades de la oligarquía y la soldadesca domésticas.

En Honduras, por ejemplo, se trata de ocultar los crímenes del régimen tras la cortina de humo de la «amenaza sandinista» y las supuestas incursiones del Ejército Popular de Nicaragua en el territorio de nuestro país. El terror contrarrevolucionario erigido al rango de política oficial confirma una vez más las palabras de Marx de que «la civilización y la justicia del orden burgués aparecen en todo su siniestro esplendor dondequiera que los esclavos y los parias de este orden osan rebelarse contra sus señores. En tales momentos, esa civilización y esa justicia se muestran como lo que son: salvajismo descarado y venganza sin ley»[4].

La Unión Soviética, los demás países de la comunidad socialista y los Estados de reciente independencia no amenazan a nadie. En 1932 Manuel Cálix Herrera, uno de los precursores de nuestro partido, escribía desde la cárcel que «no es la Unión Soviética la que viene hacia nosotros, sino que, al contrario, son los pueblos centroamericanos los que van hacia la Unión Soviética inspirados por su ejemplo». Estas palabras conservan su vigencia y adquieren nuevo contenido en nuestros días, refutando los infundios de la reacción, pues los éxitos del socialismo en todas las esferas y en todos los países socialistas, en Cuba particularmente, los éxitos del movimiento comunista y obrero internacional y de las revoluciones democrático-nacionales tienen hoy para nosotros más significado que ayer, nos alientan a luchar contra el imperialismo y la oligarquía.

Y si los *mass-media* reaccionarios de América Latina participan activamente en la campaña anticomunista inspirada desde Estados Unidos y persisten en sus intentos de inculcar clisés y conceptos contrarrevolucionarios, antisoviéticos, nosotros defendemos tesoneramente en nuestro trabajo de agitación y propaganda la idea de que las revoluciones en Cuba y en Nicaragua, la lucha armada del pueblo de El Salvador no han sido importadas de fuera, sino que son resultado de una profundización de la crisis estructural, de las justas luchas contra los regímenes tiránicos y contra el saqueo imperialista. Subrayamos también que la actual ofensiva anticomunista no es indicio de fuerza, sino de debilidad del enemigo de clase, de su temor ante una derrota en cierne.

Juegan con fuego

El imperialismo yanqui se empeña en hacer valer el «derecho» a la hegemonía político-militar y socio-económica, que ellos mismos se han atribuido gratuitamente. Preocupado por la pérdida de muchas posiciones en otras regiones, el imperialismo ha declarado nuestro continente «zona de seguridad prioritaria», Centroamérica y el Caribe, «zona de supervivencia», y Honduras, su «cuarta frontera».

Desoyendo las duras críticas que le dirigen muchos norteamericanos de inspiración progresista, Washington se empecina en redoblar la ayuda económica y militar a mandatarios entreguistas y militares inescrupulosos que convierten a los ejércitos centroamericanos en «carne de cañón» de los objetivos expansionistas y contrarrevolucionarios de EE.UU. Tal es el vergonzoso papel que se le asigna en los planes estratégicos del imperialismo al ejército hondureño.

Situada en el corazón mismo de la región más convulsa del continente y teniendo tres fronteras precisamente con los países rebelados contra el dominio imperialista, Honduras ha cobrado de pronto importancia «geopolítica» a los ojos de la Administración estadounidense.

En los documentos del PCH hemos señalado reiteradas veces que el poder en Honduras lo detenta una coalición liberal-*militar, típica plasmación* de la concepción imperialista de «democracia *restringida*». Esta modalidad de dictadura militar ha llevado al ejército hondureño a situarse como gendarme de Centroamérica, a constituirse en una fuerza de ocupación y soporte de *la* presencia militar de EE.UU. en nuestro territorio, desde donde se proyecta una seria amenaza a toda la región[5].

El potencial bélico del ejército hondureño ha crecido vertiginosamente. Se construyen aeródromos habilitados para el aterrizaje de aviones pesados. También a la fuerza naval se le han incorporado modernas unidades. A partir de 1982 han llegado al país un gran número de asesores militares y unidades especiales norteamericanas de entrenamiento procedentes de Fort Bragg, Carolina del Norte, y de las bases del Comando Sur en Panamá. En los centros de instrucción instalados por los yanquis se adiestran fuerzas contrainsurgentes para reprimir las luchas populares en Centroamérica. En Cerro de Hule, cerca de Tegucigalpa, se instaló un gigantesco radar con alcance de 400 kilómetros a la redonda, que es atendido por unos 50 técnicos norteamericanos y cuenta con la custodia de una unidad hondureña.

Agreguemos a eso, para completar el cuadro, el aumento del personal de la Embajada de EE.UU., una considerable extensión de la red de agentes de la CIA, la notable intensificación de las actividades de toda clase de expertos norteamericanos, chilenos e israelíes en «contrainsurgencia» y la constante afluencia de *boinas verdes.* Nuevamente, nuestro territorio es escenario de las maniobras *Pino Grande, Universal Track* y otras realizadas por fuerzas combinadas de los «ejércitos aliados» con la participación de militares y material de guerra de EE.UU. En Honduras han encontrado cobijo ex guardias somocistas que realizan correrías en Nicaragua perpetrando nuevos y horrendos crímenes contra la patria de Sandino. Se conocen también casos de incursión de tropas hondureñas al territorio salvadoreño.

Ni el Presidente Suazo Córdova ni los demás altos dirigentes liberales pueden ignorar estos hechos y eludir la enorme responsabilidad histórica que asumen por esta conducta criminal y traidora a los verdaderos deseos y anhelos de paz del liberalismo de base y de todos los que votaron en 1981 por un cambio en Honduras.

Los altos oficiales, dejándose intimidar por el Pentágono o por el falso espejismo de un «paseo militar», arrastran al país a una guerra contra Nicaragua de consecuencias imprevisibles para el destino de los pueblos del área.

La creciente presión imperialista explica la sistemática negativa del gobierno liberal a negociar directamente con el Gobierno Sandinista, la complicidad de la camarilla militar con los criminales planes del Pentágono y de la CIA, y la utilización de bandas paramilitares para el secuestro y asesinato de dirigentes populares y revolucionarios que han desaparecido sin dejar otra huella que el clamor desesperado de sus familiares o los numerosos cementerios clandestinos ya descubiertos.

El brutal asesinato de nuestro camarada Herminio Deras,

el secuestro en Tegucigalpa de los dirigentes sindicales y populares Rolando Vindel y Gustavo Morales, cuya suerte se desconoce, para sólo mencionar algunos nombres del largo martirologio de activistas del movimiento democrático revolucionario y antiimperialista víctimas de la represión, evidencian la existencia de planes dirigidos a descabezar el movimiento de masas y liquidar todo intento de oposición a los nefastos preparativos de guerra.

Con sus planes militaristas, con sus cálculos basados en que podrá reprimir por la fuerza de las armas la revolución nicaragüense y los movimientos populares, de liberación en otras repúblicas del área, la reacción hondureña ha llevado al país a una situación catastrófica. Como señalábamos en documentos del PCH, «no se puede jugar a la guerra, mucho menos con una economía al borde de la bancarrota: con una tasa de crecimiento económico de signo negativo, con un alza en flecha del costo de la vida, con un desempleo masivo que ronda la tercera parte de la población económicamente activa, con una espiral inflacionaria que volatiliza los magros ingresos de nuestra población, y una deuda externa multimillonaria que compromete hasta el esfuerzo futuro de las próximas generaciones; en fin, una economía en crisis que no han podido ni podrán sacar a flote los préstamos atados, las supuestas «ayudas» y ni siquiera las cuotas de recompensa con las que la Casa Blanca soborna, para deshonra nuestra, la complicidad del gobierno con el agresor de pueblos hermanos que luchan por su derecho soberano a escoger su propio destino con dignidad e independencia».

El imperialismo y la camarilla liberal-militar cometen un grave error si pretenden lanzarse por el despeñadero de una guerra de agresión contra Nicaragua o contra el movimiento revolucionario en El Salvador. Se encontrarán con un nuevo «Vietnam» en Centroamérica. Quien siembra vientos cosecha tempestades.

Estar a la altura de las exigencias del momento

Hace más de un cuarto de siglo, la Revolución Cubana triunfante abrió una nueva página en la historia del Hemisferio Occidental, enterró la teoría del «fatalismo geográfico» y demostró lo factible de la construcción de una sociedad nueva y justa en la cercanía inmediata de EE.UU., a pesar del constante bloqueo, la guerra sicológica, las provocaciones políticas y la actividad subversiva.

Veinte años después, la victoria de la Revolución Sandinista en Nicaragua ha asestado un nuevo y rudo golpe al sistema del dominio imperialista en el área latinoamericana y alentado con su ejemplo el desarrollo del movimiento de liberación en El Salvador, al combatividad del pueblo guatemalteco, y la activación de las fuerzas patrióticas en Costa Rica y Honduras. Los procesos revolucionarios en Centroamérica marcan hoy la realidad cotidiana de nuestros pueblos. Y si bien es cierto que estos procesos transcurren de manera diferente, con sus rasgos específicos propios, no menos cierto es que obedecen a las leyes generales de desarrollo de la sociedad establecidas por el marxismo-leninismo, y son resultado como ya hemos dicho, no de una mítica intervención soviética, cubana o nicaragüense, sino de una brusca agravación de la profunda crisis que sacude las estructuras socio-económicas y políticas de los países del área.

En Honduras, por ejemplo, esta crisis ha llegado a tales extremos que cabe prever el estallido de un agudo conflicto interno en una perspectiva inmediata. La inestabilidad es una constante de nuestra vida nacional. En el transcurso de muchos años, cada vez que se agotan las posibilidades de la democracia burguesa, surge el peligro de un golpe de Estado reaccionario. Las masas populares, convencidas por su propia experiencia de que los recursos cívicos de lucha política no permiten resolver los problemas fundamentales, recurren a la «crítica de las armas», como ocurrió en su tiempo en Nicaragua y como está ocurriendo en El Salvador y Guatemala.

La experiencia de Cuba, Nicaragua, El Salvador y otros países demuestra que la lucha revolucionaria, incluida la acción armada —cuya promotora es siempre la reacción—, es una dura escuela. Como dijera Lenin, «el curso completo de esa escuela *necesariamente* incluye victorias de la contrarrevolución, desenfreno de los contrarrevolucionarios enfurecidos... Pero sólo los pedantes empedernidos y las momias que han perdido el juicio pueden lloriquear de que los pueblos ingresen en esa escuela dolorosa...»[6].

La caída de algunos combatientes no significa la muerte del movimiento revolucionario, los reveses de determinados destacamentos del mismo no detienen su marcha victoriosa. La perspectiva histórica de la doctrina marxista-leninista se concreta invariablemente en la práctica, y en ello difiere de la de otras teorías y concepciones, en primer lugar de las anticomunistas. En la sucesión de éxitos de las fuerzas del progreso vemos una manifestación de la tendencia dominante del desarrollo mundial que determina el principal contenido de nuestra época.

Esto lo comprenden muy bien nuestros enemigos ideológicos y de clase. Por eso, la nueva ofensiva de la reacción, la nueva oleada anticomunista no nos ha sorprendido, sino que nos induce a estar vigilantes, siempre prestos a oponer una digna respuesta a las maniobras ideológicas y a los designios agresivos del adversario en cualquier zigzag del acontecer.

Tenemos claras nuestras perspectivas revolucionarias. El proceso de liberación nacional en Centroamérica se desarrolla en virtud de leyes y factores objetivos, es un proceso irrefrenable, y nadie podrá detenerlo. Por supuesto, existe la amenaza de una intervención directa del imperialismo en Nicaragua y en El Salvador. Es un peligro que no podemos ignorar, y así lo subrayamos en los documentos de nuestro partido. Para conjurarlo, es necesario articular un frente único de las fuerzas de la democracia y del progreso en Centroamérica, a nivel continental y de todo el mundo; denunciar constantemente las maniobras de la reacción; manifestar resueltamente nuestra solidaridad con los pueblos nicaragüense, salvadoreño y otras naciones en pie de lucha.

Estos pueblos no están solos. Con ellos están los Estados de la comunidad socialista, el movimiento comunista y obrero de los países capitalistas, incluido EE.UU., las fuerzas de democracia nacional, toda la humanidad progresista. Con ellos estamos también los revolucionarios hondureños, patriotas e internacionalistas. Rechazamos enérgicamente el calificativo de «vendepatrias» y «quintacolumnistas» con el que pretenden inmovilizarnos los voceros a sueldo de las transnacionales y de la oligarquía.

Defender a Nicaragua y al movimiento revolucionario salvadoreño, es la mejor forma de salvaguardar los intereses de nuestro pueblo, es salvaguardar nuestra propia soberanía violentada por la presencia militar norteamericana, es luchar contra las desapariciones misteriosas y los asesinatos políticos. Estar con ellos es una firme garantía de que también nuestra Honduras con el concurso de sus hijos tendrá por fin libertad, verdadera independencia, democracia y progreso social. Nicaragua y las fuerzas revolucionarias salvadoreñas libran junto a nosotros la gran batalla que conducirá a nuestra propia liberación nacional y social.

En el actual momento político de Honduras aparecen nítidamente los principales elementos de la «nueva» política latinoamericana de EE.UU.: anticomunismo visceral, terrorismo de Estado, militarismo fascistizante. De la prédica de sus teorías contrarrevolucionarias y de las operaciones secretas, el imperialismo pretende pasar ahora a la intervención armada directa.

Esto nos obligó a buscar un mayor entendimiento de las fuerzas populares, democráticas y revolucionarias para impulsar un proceso único que se ha plasmado en la creciente unidad de acción de las fuerzas revolucionarias y democráticas de nuestro país. El PCH y otras organizaciones progresistas se convencen cada vez más de que ya no es posible buscar la salida a la actual situación en el camino del diálogo con el gobierno.

La nueva etapa del movimiento revolucionario en Honduras exige el empleo creador de una táctica flexible, una justa política de alianzas y un estrecho entendimiento con los sectores sociales y partidos que comparten el objetivo de luchar contra el intervencionismo norteamericano, por el restablecimiento de las libertades democráticas y la paz en nuestro país. Nos esforzamos por corresponder a las exigencias del momento, preparándonos orgánica y políticamente para llevar a la práctica nuestros planes estratégicos.

•

Herederos del legado de Francisco Morazán, de otros demócratas revolucionarios del siglo pasado, de nuestros pre-

cursores Manuel Cálix Herrera y Juan Pablo Wainwright, pioneros del movimiento comunista en Honduras en los años 20, los comunistas hondureños dijimos NO a la guerra que nos querían imponer las Bananeras contra Guatemala en 1932; NO á la contrarrevolución guatemalteca encabezada por Carlos Castillo Armas en 1954; NO a la guerra en que Somoza nos quiso comprometer en 1957; denunciamos junto con los comunistas salvadoreños a los verdaderos responsables del conflicto armado entre nuestros países en 1969.

Ahora, llamamos a nuestra militancia y a nuestros compatriotas a rechazar nuevamente la guerra y decir NO a la intervención con que se pretende impedir el triunfo de los heroicos combatientes del FMLN – FDR en El Salvador, NO a las bandas somocistas que desde nuestro territorio llevan dolor y luto a los hogares nicaragüenses, impidiendo con nuestra oposición activa que arrastren a Honduras a una guerra insensata contra el heroico pueblo de Sandino.

Unidos alrededor de nuestro Comité Central, cumplimos la línea de Febrero[7] y rechazamos, como una maniobra enemiga, todo intento divisionista en nuestras filas.

Al impulsar el movimiento de masas debemos hacerlo en forma nueva. Uniéndonos con fuerzas democráticas y revolucionarias, con la Iglesia y los partidos políticos de oposición, e incluso con sectores de las Fuerzas Armadas que se pronuncien por una Honduras auténticamente democrática, independiente y progresista, sin presos ni desaparecidos políticos, sin tropas extranjeras hollando nuestro suelo, respetuosa del derecho de autodeterminación de los pueblos y que pueda mirar de frente, sin avergonzarse de su situación actual de subordinación, a las demás naciones del mundo.

Tenemos la firme convicción de que en la unidad y la acción conjunta de todas las fuerzas políticas y sociales interesadas en evitar la fascistización y militarización del país, está la garantía de la victoria. Y no sólo creemos en ella, sino que sabemos que esa victoria la obtendremos aunque tengamos que pagar enormes cuotas de sacrificio entre el momento de la siembra y el de la cosecha.

Revista Internacional, Nº 7 de 1985

[1] *Documento secreto de la política Reagan para América Latina*, en *Soberanía*, 1981, Nº 1, Managua.

[2] Referencia al artículo programático de José Martí *Nuestra América*, que sentó las bases de la ideología anticolonial y antiimperialista en nuestra región. *–N. de la Red.*

[3] Véase J. Carrión. *Ideología imperialista en América Latina*, en *Estrategia*, Nº 44, 1982, México, pp. 43–44.

[4] C. Marx, F. Engels. *Obras Escogidas.* Editorial Progreso, t. II, p. 249.

[5] Véase *El proceso revolucionario hondureño en el momento actual. Intervenciones del Secretario General del Partido Comunista de Honduras, c. Rigoberto Padilla Rush*, 1983. *–N. de la Red.*

[6] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XV, p. 184.

[7] Llamamos línea de Febrero al programa de acción aprobado por el Pleno del CC del PCH en febrero de 1980 y que se basa en la posibilidad de acceso al poder por medio de la violencia armada de las masas.

Un caso de «neutralidad» en América Central

Luis Orlando CORRALES,
miembro de la Comisión Política del Partido
Vanguardia Popular de Costa Rica (PVP)

A primera vista la afirmación de que en un país «los comerciantes siempre estaban pendientes de la fecha en que cada semana la CIA lleva los dólares... porque de acuerdo con esa circunstancia la cotización... frente al dólar baja tres o cuatro puntos»[1], podría hacerle creer a usted que se trata de una broma o de la exageración pintoresca de algún escritor. Pero si el Presidente de la República confirma paladinamente que ese país «*se ha convertido en una de las plataformas... de la CIA*»[2], usted se verá obligado a reconocer, con sorpresa, que aquella situación no es producto del humor o de la ficción. Más se sorprenderá cuando se entere que se trata de Costa Rica, el país centroamericano que ha proclamado su neutralidad «perpetua, activa y no armada».

Costa Rica, universalmente asociada a una imagen de nación democrática, pacífica y civilista, parecía destinada a ser un factor activo para promover la paz y disipar los graves peligros de una guerra generalizada en América Central. Pero el ex Presidente del Partido Liberación Nacional, partido en el poder, a quien corresponden las palabras transcritas al inicio de este artículo, las propias palabras del actual Presidente, don Luis Alberto Monge Alvarez, y las informaciones de la prensa mundial, indican otra cosa.

¿Qué y quiénes han hecho que Costa Rica se haya transformado en una plataforma de la CIA, es decir en una plataforma de agresiones contra la vecina Nicaragua?

Muy a menudo en los análisis históricos, políticos, sociológicos que se hacen sobre Centroamérica, Costa Rica aparece como la «excepción». Se ha subrayado tanto la «excepcionalidad» que a veces pareciera que Costa Rica contradice a Centroamérica. Por ejemplo, según Mario Solórzano Martínez, político socialdemócrata y científico social guatemalteco, «en los últimos treinta años de la vida centroamericana se han operado cambios importantes. En Guatemala el pensamiento conservador regresó al poder en 1954 (a raíz de la intervención armada llevada a cabo por mercenarios de EE.UU. —*Red.*), impulsando un ordenamiento constitucional de corte anticomunista y tratando de cortar las medidas reformistas del período anterior. Igual cosa ha sucedido en el resto de los países, con excepción de Costa Rica»[3].

Dudamos que sea cierto que «igual cosa ha sucedido en el resto de los países». Pero en esta ocasión, lo que nos interesa es subrayar que la «excepción» de Costa Rica no ha existido, por lo menos en el sentido radical con que se expresa en esta opinión. Ignora hechos tan sustanciales como la represión desatada por la reacción nacional y el imperialismo a raíz de la Guerra Civil del 48, la persecución de los comunistas, la ilegalidad, elevada incluso a rango constitucional, del partido de los comunistas durante casi 30 años, de los sindicatos clasistas, etc. En cuanto a las reformas del «período anterior»[4], si bien no fueron liquidadas y en algunos casos más bien incrementadas, no hay duda de que, junto al establecimiento de un sistema jurídico que vino a poner mil obstáculos a la organización popular y propiciar su represión, ellas fueron «absorbidas» para facilitar un desarrollo relativamente rápido del capitalismo, el reacomodamiento de fracciones en el bloque oligárquico-imperialista, el reforzamiento de su dominio y el aseguramiento de los vínculos de la dependencia, etc. Los cambios no asumieron formas tan rudas y despóticas como en los otros países, pero como salta a la vista, la diferencia no es tal como para hablar de «excepción» sin más.

Existen sin duda algunos rasgos históricos, políticos e institucionales que diferencian a nuestro país de otros que son comunes al resto de los países centroamericanos. Pero el difundido criterio —lo encontramos aun en círculos de pensamiento avanzado— que exagera esa diferencia, no sólo no tiene base real sino que es uno de los soportes

ideológicos sobre lo que la burguesía y el imperialismo han asentado su dominio en nuestro país. La fuerza y persistencia con que se la ha impuesto y se reproduce son tan grandes que incluso se ha filtrado en el seno de la izquierda. Así, la tesis de que la democracia burguesa en Costa Rica es siempre y en todos los casos un obstáculo permanente ante el dominio imperialista y que luchar por defenderla es la tarea fundamental y constante del movimiento popular es un reflejo de esa presión.

Esa tesis oscurece los límites de clase de esa democracia y olvida que, junto a sus indudables aspectos positivos, también ha mostrado su eficacia para que el bloque oligárquico-imperialista asegure su dominio. Decir esto no es rebajar el valor de la democracia ni la urgencia de pelear por ella. Todo lo contrario: sólo sobre la base de este enfoque clasista adquiere plenitud y sentido.

Pero no se trata, en este momento, de analizar exhaustivamente el problema de la democracia en Costa Rica, problema que escapa a los límites del presente artículo, sino de subrayar el hecho de que al imperialismo puede serle útil la imagen de Costa Rica tal y como es y no un obstáculo con el cual hay que terminar lo más pronto posible. La actual Administración de EE.UU., como cualquier otro gobierno norteamericano, no dudará en liquidar la democracia si sus intereses y fines así lo exigen. Pero esos mismos intereses y fines pueden también aconsejar, fortaleciendo algunos mecanismos de control ideológico y de represión, la ventaja de mantenerla. En una entrevista a «*La Nación*», destacado vocero de la oligarquía costarricense, Curtis Winsor, hasta hace poco embajador de Estados Unidos en San José, declaró: «Nosotros queremos el modelo político que hay, pero hemos tenido un gran miedo por su futuro».

Hoy, sin la menor duda, Costa Rica está jugando un papel importante en la estrategia global del gobierno norteamericano en la región. Lo ha venido jugando desde que las cosas empezaron a complicárseles a los Estados Unidos con el triunfo de la Revolución Sandinista, el desarrollo del movimiento armado del pueblo salvadoreño y el ascenso de las luchas y la agudización de las contradicciones en todos los países. No es, por lo tanto, correcto

afirmar, como lo hace en un análisis publicado en 1982 el sociólogo latinoamericano José Miguel Insulza, que «en lo que respecta a Costa Rica, a pesar de la preocupación de Washington debido a las dificultades políticas por las que atraviesa ese país y por el surgimiento de formas muy incipientes de terrorismo, no ha habido un intento por incorporar a Costa Rica en la política regional de contención. El rechazo tajante del gobierno de Costa Rica a la oferta de ayuda militar hecha pública por la embajadora Kirkpatrik y el hecho de que ese país tiene ante el conflicto salvadoreño una posición muy distinta de la que tuvo en el caso de Nicaragua (cuando apoyó en definitiva a las fuerzas sandinistas), parecen haber convencido a la Administración Reagan de que, de no mediar una regionalización del conflicto, es más conveniente no acentuar su presión sobre este país»[5].

Ya los hechos demostraban en aquel momento que eso no era así. Pero, por si hacía falta, lo confirmó con la habitual crudeza de que siempre hizo gala, el embajador Curtis Winsor, al expresar en la citada entrevista que el gobierno norteamericano decidió redoblar su presencia en este país desde el triunfo de la revolución en Nicaragua.

Es a partir de esta realidad palpable que hay que examinar el sitio que ocupa Costa Rica en la crisis centroamericana. Desde el inicio de esta crisis el bloque oligárquico-imperialista, a pesar de las contradicciones y desajustes que han surgido o pueden surgir entre sus diferentes sectores sobre cuestiones secundarias, ha seguido una línea de ayuda en la aplicación de la política agresiva de Reagan con respecto a Nicaragua.

A partir de la victoria de la Revolución Nicaragüense, los Estados Unidos se han propuesto imputarle al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al gobierno popular surgido, un carácter agresivo y expansionista. Este ha sido uno de los pretextos fundamentales para promover su propia intervención, reforzar la militarización de nuestros países y llevar adelante sus planes para involucrarlos en una agresión contra el pueblo nicaragüense. En el caso de Costa Rica, país constitucionalmente sin ejército, «indefenso» y «pacífico», había un amplio espacio para maniobrar con el objeto de presentarla como agredida.

La Casa Blanca se dio cuenta que era preferible, hasta tanto las circunstancias no hicieran pensar en otra cosa, utilizar el buen nombre de Costa Rica en sus planes orientados a aislar y agredir a Nicaragua. Este aspecto de las relaciones de nuestro país con el imperialismo es incluso, como dijimos más arriba, menospreciado por grupos progresistas que sólo miran la democracia costarricense como el principal obstáculo ante la acción del imperialismo, dispuesto, según ellos, a imponer a troche y moche un gobierno de corte fascista.

Pero el imperialismo, por ahora, no se propone tal cosa: el establecimiento, en el momento actual, de un gobierno de ese tipo no contribuiría a facilitarle el manejo de los problemas con los que tiene que lidiar en la región y a tratar de apaciguar un poco la opinión pública mundial que, cada vez más, clama por una salida política para los conflictos en el área. El gobierno actual, además, ha dado tantas muestras de lealtad y consecuencia con la política de Reagan que esa alternativa, siempre a mano para ser usada en cualquier momento, no parece ser la principal e inmediata.

A Washington le conviene más presentar a Costa Rica como víctima inocente de los «agresores sandinistas». Esto puede dejar más réditos políticos. Esto es lo que se definía, sin ninguna clase de reservas, en un documento secreto del Departamento de Estado: «Nuestras ventajas serán limitadas y el respaldo político elusivo, mientras Nicaragua tenga éxito en su acción destinada a presentar las actividades de ARDE[6] como una provocación antisandinista: para efecto de las relaciones públicas es importante neutralizar este factor. La cuestión debe ser Nicaragua contra Costa Rica y no Nicaragua contra su oposición armada»[7].

Por otro lado, debemos tomar en cuenta que, como parte de su política, el gobierno de Reagan ha buscado maquillar un poco los rostros ajados y desagradables de los regímenes tiránicos con el fin de hacerlos más aceptables tanto en sus propios países como a nivel internacional. Aun a los «nuevos conservadores» instalados en la Casa Blanca les es muy difícil ignorar el hecho de que para combatir el «totalitarismo» —el cual, según ellos, se ha entronizado en Nicaragua— e impedir que triunfe en El Salvador, los peones de que dispone sean regímenes tan desprestigiados como los que allí imperan. Por supuesto, no se trata de desecharlos sino de mejorar su presentación, por lo que han apoyado a Duarte en El Salvador y están satisfechos con que el gobierno de Honduras conserve algún trasunto de «democrático». No es difícil colegir que el gobierno costarricense, rodeado por la aureola de prestigio democrático de que goza Costa Rica, calza con esta línea.

Hasta el momento, para Washington ha sido más ventajoso un gobierno costarricense plegado a su política como es el del Partido Liberación Nacional —afiliado a la Internacional Socialista— que uno del tipo de los que prevalecen en otros países del área. El gobierno de Monge concuerda permanentemente sus posiciones con los de El Salvador y Honduras para aislar a Nicaragua, facilitar la agresión y socavar los esfuerzos del Grupo de Contadora. Desarrolla una política de enfrentamiento antes que de entendimiento con Nicaragua y exacerba al extremo cualquier oportunidad que lo haga aparecer como «víctima».

La predisposición política e ideológica para someterse a los mandatos de Reagan, se ha visto reforzada por la esperanza de buscar una salida a la crisis económica que enfrenta el país aferrándose a los Estados Unidos como tabla de salvación. Con ese propósito, las luchas y las victorias de los pueblos centroamericanos, juzgados por los Estados Unidos como avances del «comunismo internacional», son utilizadas como medio de presionar y asustar para obtener ayuda extraordinaria.

El Presidente Monge, en noviembre de 1982, ante el Presidente Reagan y los delegados a la «Primera Conferencia Mundial sobre Elecciones Libres», celebrada en Washington, insistió en que la «ofensiva expansionista del comunismo» en nuestra región, «sorprende a Costa Rica, debatiéndose en la más aguda crisis económica y social de su historia. Esta circunstancia ha puesto en peligro, como nunca antes, nuestra libertad y nuestra paz». Y agrega: «Los partidos y los sindicatos de ideología comunista actúan con sus correligionarios de la Tercera Internacional: atacan y tratan de desestabilizar al gobierno constitucional elegido por la mayoría del pueblo, boicotean los esfuerzos del pueblo y el gobierno para reactivar las fuentes pro-

ductivas y superar la crisis. En verdad, en medio de la crisis resulta más difícil la lucha frente al totalitarismo comunista. Por eso estamos urgidos de solidaridad activa y de asistencia efectiva de las naciones democráticas»[8].

Simultáneamente los Estados Unidos emplean las amplias expectativas que crean y lo poco que entregan, como medio de coacción y compromiso. Los resultados están a la vista: nuestro gobierno no sólo no desafina en el coro de los regímenes que luchan contra el movimiento popular centroamericano, sino que a veces hace de primera voz.

Es más, en la propia Costa Rica se intensifica y acelera un proceso de militarización que los Estados Unidos vienen estimulando por todos los medios. Así, los informes anuales del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres indican que durante los últimos cinco años en nuestro país los efectivos de la Guardia Civil y la Guardia Rural, así como de diferentes formaciones paramilitares, se duplicaron con creces. En total, cuentan actualmente con más de 12.500 hombres. La ayuda que presta Washington al rearme y readiestramiento de estas fuerzas ha aumentado notablemente, pasando de 358.000 dólares en 1981 a 2,1 millones en 1984 y 18 millones en 1985[9].

El entrenamiento de unidades costarricenses forma parte del quehacer cotidiano de los expertos y consejeros norteamericanos. En la primera mitad del año en curso llegó a nuestro país un contingente de «boinas verdes» con la misión de crear unidades especiales de contrainsurgencia. Como base de sus actividades han habilitado una antigua propiedad de los Somoza, situada en las inmediaciones de la frontera con Nicaragua, donde reciben instrucción cientos de guardias civiles. En abril de 1985, 45 oficiales de la guardia civil concluyeron un curso de 10 meses bajo la dirección de instructores militares de los EE.UU. en el centro regional de formación militar ubicado en Honduras. Y podríamos agregar aquí otros muchos ejemplos de esta índole.

¿Cómo, entonces, empatar esa conducta con la «neutralidad» proclamada por el Presidente Monge?

La proclama de «neutralidad perpetua, activa y desarmada», formalmente adoptada en noviembre de 1983, fue recibida con simpatía no sólo en nuestro país sino en el

mundo. Fue vista por la opinión progresista mundial como una contribución para enfriar tensiones y desbrozar el camino de las negociaciones y la paz. Sergio Ramírez Mercado, Vicepresidente de Nicaragua, ha expresado muy bien las esperanzas que logró despertar: «Cuando el Presidente Monge proclamó su doctrina de la neutralidad, los nicaragüenses encontramos que una vez más se había alcanzado la síntesis del tradicional buen juicio costarricense en los momentos difíciles»[10].

Sin embargo, poco a poco se fue haciendo claro que esa neutralidad no sólo no tenía vigencia en la práctica sino que, peor aún, servía como pantalla para disimular la participación en los planes agresivos de Reagan. Es lo que había advertido desde el principio el Partido Vanguardia Popular. Por eso, el desencanto frente a una neutralidad de papel fue cundiendo entre vastos sectores de la población costarricenses, la opinión pública mundial y alcanzó hasta a gobiernos de Europa Occidental y América Latina. Esto explica por qué el Presidente Monge, para ocultar su responsabilidad y la de su gobierno, habla constantemente de «feroces campañas internacionales para desprestigiarnos».

Como una forma de combatir estas míticas campañas, hizo un largo recorrido por muchos países de Europa en la primera mitad del año pasado. Pero el viaje, a juzgar por todo, no logró su objetivo. En octubre del mismo año, *Inforpress Centroamericana*, autorizada publicación de comentarios e información, totalmente libre de simpatías por Nicaragua o de animosidad por Costa Rica, al analizar la visita de Willy Brandt a nuestro país, la califica como de «tácita censura a Costa Rica por la IS»[11].

La proclama de «neutralidad» vino al mundo con deformaciones que la hacían una creatura contrahecha. Por una parte, en ningún momento el gobierno de Monge pretendió romper sus lazos con acuerdos militares como el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca o su intensa colaboración con gobiernos derechistas que no quieren oír ni una palabra de neutralidad y que, más bien, son colaboradores de las dictaduras y de las bandas contrarrevolucionarias organizadas por la CIA contra el pueblo nicaragüense. Por la otra, la «neutralidad» estaba imposibili-

tada de desarrollarse debido a la extrema beligerancia política e ideológica que la acompañaba. Por supuesto que no existe una neutralidad químicamente pura. Tampoco es obligatorio que la que se observa en el plano de los conflictos militares deba darse en el plano ideológico y político. Pero en el caso de Costa Rica se trata de tal desproporción que no podía dejar de terminar en una farsa. No se puede sostener una auténtica neutralidad si, por ejemplo, el gobierno que la proclama apoya al mismo tiempo la agresión imperialista contra Granada.

En la práctica, la «neutralidad» ha servido para un doble juego: permitir la actuación de los «contras» nicaragüenses y presentarse como mansa víctima de las «agresiones sandinistas». Los «contras» han hecho de Costa Rica un santuario desde el que incursionan en territorio nicaragüense. Para ello cuentan no sólo con la tolerancia de las autoridades costarricenses, sino con las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo: campamentos, hospitales, casas de seguridad, sistemas de comunicación, aeropuertos. Los «contras» se sienten particularmente libres e impunes en la zona fronteriza del norte del país, en los cantones de San Carlos, Los Chiles, Guatuso y algunos otros. Precisamente aquí es donde se han instalado las fuerzas de Pastora, que utilizan esta zona como principal base de retaguardia a la que regresan después de sus incursiones en Nicaragua. Hay allí varios «campos de refugiados» convertidos de hecho en verdaderos lugares de concentración de los mercenarios. Los hombres de ARDE pueden desplazarse tranquilamente por toda la región. Es más, se dedican al merodeo, cometen desmanes, actos de vandalismo y aterrorizan a la población local. A menudo ayudan a «apaciguar» a los campesinos que luchan contra las arbitrariedades de los latifundistas[12]. Todo esto ha sido ampliamente conocido, incluso por medio de la gran prensa occidental. Baste mencionar aquí el testimonio del periódico francés *Le Monde Diplomatique* según el cual en el territorio de Costa Rica se hallan concentrados 5.000 «contras»[13].

En varias ocasiones, organizaciones políticas y sociales, diputados costarricenses o el gobierno nicaragüense han mostrado de manera incontrovertible la actividad tenaz de

los contrarrevolucionarios desde el territorio de Costa Rica. Así, por ejemplo, el diputado independiente en la Asamblea Legislativa, Ricardo Rodrígez Solórzano, denunció públicamente y con datos concretos los lugares de acantonamiento de los destacamentos de mercenarios a sueldo de la CIA[14]. Otro diputado, Danilo Chaverrí, nada menos que jefe de la fracción parlamentaria del conservador Partido Unidad Socialcristiana, se vio obligado a reconocer que «la libertad de acción» concedida a los «contras» daña el prestigio internacional de Costa Rica. La respuesta oficial ha sido el rechazo, confusas explicaciones o el redoblamiento de la guerra ideológica contra Nicaragua.

La «agresividad» y el «expansionismo» de los sandinistas que, según la inmensa campaña propagandística impulsada de manera sistemática y uniforme por los grandes medios de comunicación, amenazan a Costa Rica, no tienen el menor asidero. En cambio, ahí están los «contras» listos para hostigar a Nicaragua, provocar incidentes y proporcionar motivos para exacerbar sentimientos antisandinistas.

Pero, ¿es que realmente Nicaragua está en capacidad de ser agresora? Es ella la que se ha visto obligada a concentrar todas sus fuerzas y recursos, aun en detrimento del desarrollo económico que tanto necesita, para defenderse. ¿No sería en estas circunstancias una verdadera locura dedicarse a intervenir en países vecinos y, ante todo, en Costa Rica? «En ningún caso —comenta con razón el periódico español *El País*— ni por el número de hombres ni por la cantidad y calidad del armamento, Nicaragua estaría en condiciones de asumir la ocupación de otros territorios, que cuentan además con la gran protección del gran aliado del Norte»[15].

Pero, todas estas razones, por más peso que posean, no tienen valor alguno para quienes aplastar las luchas de los pueblos centroamericanos es el fin que justifica todos los medios.

La neutralidad de Costa Rica, como vemos, se convirtió en un mascarón de proa al servicio de la oligarquía y el imperialismo. Los sectores que sinceramente creían en ella fueron reducidos a la mínima expresión. En agosto del año pasado, los ministros favorables a que la neutralidad sir-

viera para algo más que para ocultar las actividades de los «contras», fueron obligados a renunciar.

La actitud ante el Grupo de Contadora es una prueba más de esta engañosa neutralidad. Objetivamente, el surgimiento del Grupo, cuyo papel y autoridad ha trascendido los límites de la región, constituyó un cierto reproche para Costa Rica. ¿En qué sentido hacemos esta afirmación? El Grupo de Contadora pudo ser algo así como el espacio «natural» para que una Costa Rica con fama de ser un factor de paz, equilibrio y buenas relaciones, desplegara una activa labor. Pero esto no fue así: Costa Rica estaba ausente. ¿No era ya muy sintomático? ¿No revelaba esto que nuestro gobierno se había comprometido demasiado en una posición que le menguaba credibilidad y dañaba el prestigio nacional que tanto dice preocuparle?

Puesta en marcha esta loable iniciativa, el gobierno de Monge manifestó su complacencia y le brindó su apoyo. No obstante, a la hora en que los trabajos de ese Grupo se fueron perfilando en resultados concretos, Costa Rica, de acuerdo con los gobiernos de El Salvador y Honduras, ha contribuido a poner numerosos obstáculos a la aprobación del Acta para La Paz y la Cooperación en Centroamérica.

En determinado momento, esta conducta fue motivo para que la Administración Reagan, según un documento secreto preparado por el Consejo de Seguridad Nacional y hecho público posteriormente por el *Washington Post*, se congratulara por haber «bloqueado el tratado de paz de Contadora»[16].

Todo esto no significa que en Costa Rica lo que podríamos llamar corrientes honestamente neutralistas, aquellas que desean ver plasmado en la realidad el espíritu de una proclama en la que han creído sinceramente, no hayan desempeñado y no estén en capacidad de desempeñar un papel positivo. Contar con ellas, buscar puntos de contacto con ellas, es una tarea necesaria para el movimiento revolucionario.

Por la observancia de una genuina neutralidad se han pronunciado vastos sectores populares y algunos grupos, ligados al Partido Liberación Nacional y a otros partidos. En mayo de 1984 una multitudinaria y amplia manifestación recorrió las calles de San José para reclamar que nuestro país pusiera todo su peso a favor de la paz y que se establecieran relaciones de buena vecindad con Nicaragua. El Dr. Fernando Durán Ayanegui, Rector de la Universidad de Costa Rica, ante miles de costarricenses congregados, manifestó: «Ya es hora de que el Presidente eche de su lado a aquellos colaboradores suyos que no vacilan en empujar al pueblo hacia el abismo de la guerra... De su entereza y sabiduría depende el que la historia lo reciba como el hombre que forjó en la paz la felicidad futura de su pueblo o como el líder inconsciente que no se atrevió a detener a tiempo a los mercaderes de la muerte en las puertas de la República»[17]. Más allá de las ilusiones que afloran en esas palabras, está el hecho positivo de un pensamiento y un anhelo en pro de la paz y de una neutralidad que contribuya a forjarla.

Claro es que el movimiento revolucionario costarricense no puede limitarse a denunciar lo que está pasando como la acción de zapa de unos cuantos funcionarios de segundo rango ni de unos cuantos mandos de la Guardia Civil y la Guardia Rural o disculpar de alguna manera al Presidente Monge y a su gobierno. La verdad, la verdad rotunda, es, como ha declarado el Comité Central de nuestro Partido, que «la política del Gobierno de Costa Rica es una parte importante de la política agresiva que desarrolla el imperialismo en la región»[18].

Denunciar esto, llamar las cosas por su nombre, movilizar y organizar al pueblo contra esta política antipatriótica, como lo hace nuestro partido, no sólo es un imperativo moral y político con respecto a nuestro pueblo, al pueblo de Nicaragua y a los otros pueblos centroamericanos, sino también una forma de ganar a amplias corrientes que en el país, incluidas las honestamente neutralistas, están en capacidad de contribuir a derrotar a los incendiarios de la guerra y a los agresores.

Revista Internacional, Nº 12 de 1985

1 *La Nación*, San José, 15 de mayo de 1984.
2 *Le Monde*, 22 mai 1984.
3 M. Solórzano Martínez. *Centroamérica: democracias de fachada*. Polémica, San José, 1983, Nº 12, p. 44.

[4] Se trata de una serie de medidas económicas, sociales y políticas de carácter progresista que fueron adoptadas durante los años 40 de nuestro siglo bajo la presión de las masas. *–N. de la Red.*

[5] *La política de Reagan y la crisis en Centroamérica.* San José, 1982, p. 252.

[6] «Alianza Revolucionaria Democrática», organización contrarrevolucionaria que opera desde el territorio de Costa Rica. Uno de sus dirigentes es el traidor Edén Pastora. *–N. de la Red.*

[7] *La Nación*, 11 de mayo de 1984.

[8] *El reto democrático en Centroamérica.* San José, 1983, p. 354.

[9] Véase *Libertad Revolucionaria*, 12–18 de julio de 1985.

[10] *La Nación*, 11 de mayo de 1984.

[11] *Inforpress Centroamericana*, 1984, Nº 614, p. 6.

[12] *Libertad Revolucionaria*, 7–13 de junio de 1985.

[13] *Le Monde Diplomatique*, juin 1985, p. 11.

[14] Véase *Libertad Revolucionaria*, 13–20 de octubre de 1985.

[15] *El País*, Edición Internacional, 26 de noviembre de 1984.

[16] Véase *El País*. Edición Internacional, 12 de noviembre de 1984.

[17] *La Nación*, 16 de mayo de 1984.

[18] *Libertad Revolucionaria*, 18–24 de enero de 1984.

El nuevo abril dominicano: experiencias de una rebelión social

Narciso ISA CONDE,
Secretario General del Partido
Comunista Dominicano (PCD)

En el curso del mes de abril de 1984 tuvo lugar en la República Dominicana una auténtica rebelión social[1].

La República Dominicana se colocó así nuevamente en las primeras filas del interés noticioso mundial. Los cables internacionales informaron de agudos enfrentamientos en todo el país entre grandes contingentes populares y fuerzas policiales y militares, con un saldo de más de 100 muertos, casi 400 heridos y más de cuatro mil detenidos.

El gobierno liberal del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), encabezado por el doctor Jorge Blanco, mostró un rostro desconocido por la opinión pública internacional.

El Partido Revolucionario Dominicano, conocido por un pasado relacionado con las luchas democráticas de nuestro pueblo y por un presente de afiliación a la Internacional Socialista, manchó con sangre dominicana, e incluso con sangre de algunos de sus propios afiliados, su difundida bandera blanca.

La «vitrina democrática dominicana» exhibida por los gobiernos dominicano y norteamericano como el «modelo» del Caribe y el «oasis de paz social» de esta convulsionada subregión, quedó hecha pedazos ante los ojos sorprendidos de muchos hombres y mujeres del mundo.

¿Qué demonio agitó de esa manera las masas populares dominicanas y convirtió en represivo ese aparentemente «apacible y tolerante» producto político de la combinación de la socialdemocracia internacional y el populismo criollo con la gran burguesía nativa y los intereses que representa la Administración Reagan?

Las recetas del FMI agravan la crisis

Las causas de fondo de esa crisis se relacionan con la aplicación del Acuerdo de Facilidad Ampliada del FMI en una sociedad que no puede soportarlo pasivamente.

La crisis estructural del capitalismo dominicano de por sí dio lugar a un cuadro social realmente dramático antes de la aplicación de las exigencias del FMI.

En nuestro país de cada 100 dominicanos aptos para trabajar 30 carecen de ocupación remunerada en las ciudades. De cada 100 habitantes de la zona rural alrededor de 60 no tienen trabajo fijo, son subempleados y viven en la más absoluta pobreza. Más de medio millón de dominicanos viven en condiciones de marginalidad. Trescientos mil campesinos no tienen tierra y más de 300 mil tienen tan pocas y tan malas tierras que están incapacitados de garantizar la alimentación de sus familias. Setenta y cinco de cada 100 niños tienen problemas de salud a consecuencia de la desnutrición. Ciento cuatro de cada mil niños que nacen mueren antes de los cinco años de vida. Más del cuarenta por ciento de la población es analfabeta.

El salario mínimo de 175 pesos mensuales, que no se paga en más del 50 % de las empresas privadas, sólo alcanzaba (antes de la inflación provocada por el acuerdo con el FMI) para cubrir poco más de la mitad de las necesidades básicas de una sola persona.

Todas las divisas que obtiene el país se consumen en el pago del petróleo y de los servicios de la deuda externa.

En medio de esa situación económico-social, el gran capital financiero internacional y el gobierno norteamericano, interesados en que la República Dominicana pague a los prestamistas del exterior, presionaron para introducirla dentro de la órbita del FMI.

La gran burguesía criolla, interesada por su parte en preservarse y beneficiarse de la crisis a costa de nuevos sacrificios del pueblo y de los sectores de menos poder económico, se inscribió e hizo suyo ese proyecto en un país en que más del 50 % de los productos de la «canasta familiar» son importados y en que todas las maquinarias, combustibles, medios de transporte y una gran parte de las materias primas y de los insumos agrícolas son traídos

del exterior. En un país donde se gastan 200 millones de dólares anuales en importaciones de alimentos que pueden producirse en el territorio nacional.

El FMI comenzó por imponer un paquete de *ajustes*. Traspasó muchas de esas importaciones al mercado libre de dólares, encareciendo una serie de productos industriales, pecuarios y agroindustriales al compás del aumento de la *prima* del dólar.

Diseñó y aplicó nuevos impuestos. Resultado de esas medidas fue el aumento de precios de muchos productos fabricados a base de un fuerte ingrediente importado. El precio de la salsa de tomate, los productos lácteos, de los repuestos y gomas de automóviles y el de otros 43 productos industriales fueron afectados por esos nuevos impuestos.

Se incrementó el desempleo. Quebraron o fueron situadas al borde de la quiebra múltiples empresas pequeñas y medianas.

La gente comenzó a protestar: huelgas, paros, marchas y rebeliones locales.

A ese respecto, en los primeros días de marzo de 1984, el Frente de Izquierda Dominicana (FID)[2] en un Manifiesto ampliamente difundido en todo el país, describió de la siguiente manera la situación en desarrollo: «Las tensiones sociales se incrementan y el espíritu de protesta y rebeldía popular presenta claros indicios y evidentes posibilidades de reactivación en gran escala. El gobierno civil se militariza bajo la tutela norteamericana con la paulatina presencia de generales en el aparato administrativo, con la subordinación del Poder Ejecutivo a una jerarquía militar y a un aparato de seguridad controlados por los asesores yanquis, con la aceptación en los hechos de un proyecto de base militar norteamericana y con la puesta en marcha de un plan de modernización, de equipamiento y reestructuración de los cuerpos castrenses de evidente corte contrainsurgente y represivo. La contradicción entre las libertades políticas conquistadas y las tensiones que genera la presente crisis económica y social tiende a desarrollarse. La política restrictiva del FMI atiza el fuego de esa contradicción y en perspectiva afecta las precarias bases de la democracia representativa dominicana. ¡Ya es-

tán usando las macanas y aceitando los fusiles y ¡ametralladoras!»[3].

Unos días después de ese pronunciamiento, el 16 de marzo pasado, nuestro partido inició su III Congreso y en el informe del Comité Central saliente se hicieron precisiones como éstas: «En las presentes circunstancias, en ese punto, en el sensible punto de alza del costo de la vida, podría encontrarse un primer escalón de convergencia de las diferentes fuerzas populares y sectores medios. Pero eso no es todo. El gobierno está en vías de aceptar exigencias del FMI que harán cada vez más explosiva la crisis social... En tales circunstancias es un deber inaplazable impulsar la movilización popular. Tomar progresivamente las calles, los caminos y los campos enarbolando esa gran reivindicación social contra la política de hambre del FMI y el gobierno»[4].

Insurrección sin armas... Con piedras...

El gobierno persistió en su decisión de imponerle sacrificios al pueblo y algo después de mediados de abril anunció, como resultado de la primera parte de la segunda etapa de negociaciones con el FMI, el incremento de los precios del trigo, la harina, el pan, el aceite comestible, los abonos químicos y las medicinas.

Y la protesta popular no se hizo esperar. Lo sorpresivo fue su carácter explosivo, su rapidez, su dimensión y su extraordinaria potencia. En ella se combinaron la conciencia acumulada, la experiencia de las luchas parciales anteriores y la generalización de nuevas formas de lucha y de organización popular con una potente onda espontánea de las masas.

El estallido popular se inició la mañana del 23 de abril en uno de los barrios de la ciudad capital de mayor concentración de población y desempleo y mayor combatividad y tradición de lucha. Y se extendió como por contagio a casi todas las ciudades y campos del país, al compás de las informaciones radiales y televisadas.

Así, la protesta popular contra la carestía de la vida, el desempleo y el hambre, acentuada por los efectos del acuerdo con el FMI, irrumpió los días 23, 24 y 25 de abril,

después de un año de continuas luchas parciales, con una fuerza extraordinaria, inusitada, desbordante.

El pueblo humilde se lanzó a las calles y caminos, en ciudades y campos. El paro de actividades y la confrontación del pueblo con las fuerzas policiales y militares se extendieron hasta convertirse el día 24 de abril (¡qué hermosa coincidencia histórica!) en una verdadera batalla campal de piedras contra balas.

La economía del país y todo su aparato burocrático se paralizaron en el transcurso del enfrentamiento bravío de multitudes desarmadas, que piedras en manos, desafiaron incluso las balas criminales de las «*tropas élites*», después que al segundo día esos cuerpos especiales reforzaron el nervioso, vacilante e insuficiente despliegue de las fuerzas policiales y militares tradicionales.

Los neumáticos incendiados, las hogueras improvisadas, los derrumbes intencionales, las acumulaciones de escombros a manera de obstáculos, la quema de puentes de madera, la colocación de alambradas en vías públicas urbanas y caminos vecinales, las lluvias de piedras y los asaltos a almacenes de comestibles y latifundios acompañados de la movilización de grandes grupos humanos y de la audacia de los jóvenes, fueron convertidos en eficaces recursos de lucha y de protesta bajo las consignas *¡Fuera del país, maldito FMI!* y *¡No a las alzas!*

Un proceso previo de constitución de Comités de Lucha Popular, de Comités de Defensa Barrial, de Coordinadoras Locales de organizaciones populares —nuevas formas y mecanismos de organización y coordinación de las masas surgidos en el curso de anteriores protestas y luchas populares— se aceleró y expandió bajo el impulso impetuoso de las acciones del pueblo, con y sin la participación de militantes de izquierda. Lo espontáneo y lo consciente se mezclaron en forma difícil de precisar y delimitar.

La embestida de las fuerzas militares y policiales situó la confrontación en un punto extremo donde su continuidad ascendente dependía de un salto en la conciencia política popular y de la adquisición de los medios capaces de contrarrestar la matanza gubernamental. Y ese nuevo nivel no pudo ser alcanzado, lo que dio lugar a un repliegue considerablemente ordenado de la acción popular.

Situación prerrevolucionaria

El movimiento de protesta no fue derrotado, sino que entró en un período de receso que tiene una estrecha relación con la necesidad de fortalecer el elemento consciente y los requerimientos político-organizativos propios de una fase caracterizada por la profundización de la crisis del sistema y el inicio de un nuevo auge de la lucha de masas.

La rebelión de abril estuvo motivada por la objeción a la política económica del gobierno, pero no tenía planteada su sustitución ni la cuestión relacionada con el poder político. Las características del régimen surgido de elecciones en 1982 determinaban esa limitación en el propósito de la protesta. También es claro que la confrontación llegó a un alto grado de violencia gubernamental que no encontró ni la contrapartida de un movimiento popular armado ni la división del ejército. En una primera gran acción de esa naturaleza y en un plazo tan corto resultaba difícil que se conjugaran tan decisivos factores.

Se trató de un gran jalón, de un interesante prólogo de una nueva revolución social en gestación. Por eso hablamos del desarrollo en nuestro país de una situación prerrevolucionaria, sin llegar a calificarla de revolucionaria.

La crisis no es todavía tan profunda como para que los de arriba no puedan sostenerse en el poder, ni se ha forjado todavía la necesaria fusión entre la vanguardia política revolucionaria y el potente movimiento popular en desarrollo, ni el auge de la lucha de masas ha llegado al punto de cuestionar el poder y representar una alternativa respecto al sistema en crisis.

Pero de todas maneras se trata de hechos altamente significativos. Nunca antes en la República Dominicana había tenido lugar un movimiento de tanta profundidad social y de tan extraordinaria potencia y extensión.

Las otras rebeliones de envergadura, incluida la Revolución de abril de 1965 que encabezó Caamaño, se habían inspirado en objetivos políticos democráticos, se habían producido en un escenario geográfico más limitado y en realidad incorporaron activamente a una parte más reducida de las masas populares, con una notable hegemonía política de sectores de la burguesía.

Esta vez la lucha contra el hambre, por el derecho a comer y a trabajar, la indignación frente a la ampliación y profundización de la pobreza, constituyeron las motivaciones esenciales de un vasto movimiento popular que condena la política del Fondo Monetario Internacional y la responsabilidad del gobierno y de los grandes capitalistas criollos y extranjeros en la acentuación de la crisis y en el incremento de las penurias del pueblo y de las dificultades que afectan a los sectores medios.

Esta vez la acción independiente de un amplio y diverso conglomerado popular integrado por desempleados, marginados, trabajadores, campesinos pobres y sectores medios, dominó el panorama nacional.

Esta vez, a diferencia de Abril de 1965, la lucha no se limitó a la ciudad capital: todo el país, ciudades y campos, fue conmovido por esa justa y necesaria protesta popular.

La recurrencia por el gobierno al uso de las tropas especiales y la magnitud de la matanza ejecutada los días 24 y 25 de abril constituyen una expresión de las características y dimensión del enfrentamiento.

Las recetas del FMI en un país afectado por una profunda crisis estructural y con un gran peso de lo importado en su economía, no tardaron en desatar potentes tensiones sociales y en poner en contradicción la política económica restrictiva del gobierno con la democracia política vigente hasta conducir al Presidente Jorge Blanco a autorizar una intensa represión contra las fuerzas de izquierda y el movimiento popular.

Tal conducta ha llevado al presente gobierno a un gran aislamiento político y a enfrentar una alta impopularidad, al tiempo que se acentúa el proceso de militarización y la línea contrainsurgente patrocinada por la misión militar norteamericana y la Administración Reagan.

El nuevo abril dominicano marca el momento del inicio del viraje de la situación del país hacia un período prerrevolucionario. A partir de ese instante todo tiende a cambiar, expresándose con más nitidez nuevos fenómenos políticos y sociales:

– el reflujo de masas, agrietado en el curso del año 1983, ha quedado atrás;

– los de abajo –e incluso los del medio– no están dispuestos a vivir como antes ni a soportar pasivamente los nuevos sacrificios que les imponen;

– los sectores dominantes y sus opciones políticas no cuentan con posibilidades y alternativas, que, acorde con sus intereses, puedan al menos atenuar la crisis ecónomica y contener el progresivo deterioro de los niveles de vida del pueblo;

– el espacio que tiene el bloque dominante para la demagogia y para el ejercicio del reformismo sin grandes riesgos, se reduce a niveles insospechados: si aprietan las tuercas de la economía contra el pueblo, crece la rebeldía y la tendencia a la explosión social; si abren las compuertas de las reformas y de la satisfacción de las reivindicaciones (para lo cual no hay prácticamente recursos disponibles), corren el riesgo de que los reclamos populares los desborden;

– la crisis económica y social gravita con fuerza y pone a vacilar los niveles bajos y medios del propio poder militar-policial, sensiblemente afectado por una inflación galopante;

– las formas democrático-representativas de gobierno comienzan a entrar en contradicción directa con las tensiones sociales que genera la crisis;

– los de arriba tratan de poner en práctica métodos más violentos de dominación política, se mueven entre las imposiciones del FMI y del gran capital financiero y el temor a nuevas explosiones sociales, y ponen en movimiento sus reservas políticas en medio de serias divisiones y significativos desconciertos;

– la violencia económica, social y política de las fuerzas dominantes encuentra ya una respuesta cada vez más enérgica y cada vez más violenta de las masas;

– las tendencias represivas puestas en marcha desde el aparato del Estado se acentúan y los planes norteamericanos para crear cuerpos paramilitares terroristas se aceleran.

Disposición de las fuerzas políticas

La carencia de alternativas económicas burguesas viables respecto al factor hegemónico imperialista y a las exigencias del FMI, reduce los mecanismos de distensión y de contención de la crisis a los recursos propiamente políticos y específicamente político-electorales.

En esa dirección actúan la derecha política que encarna el Partido Reformista de Joaquín Balaguer, sectores centroderechistas del Partido Revolucionario Dominicano que tratan de separarse y diferenciarse del gobierno y la corriente centrista-reformista que representa el Partido de la Liberación Dominicana de Juan Bosch.

El Partido Reformista, en gran medida rehabilitado como consecuencia de la desastrosa gestión de la socialdemocracia perredeísta, ocupa el primer lugar en la oposición electoral seguido del Partido de la Liberación Dominicana, cada vez más inmerso en una política electoralista y distanciado de las exigencias que plantea la presente situación prerrevolucionaria.

El PRD, por su parte, estremecido por el desgaste y seriamente afectado por la división, ha lanzado al ruedo de una competencia electoral anticipada a su principal reserva política, a su principal líder populista y vicepresidente de la Internacional Socialista, José Francisco Peña Gómez. Mientras, Balaguer, consciente de la profundidad de la crisis del sistema y del progresivo deterioro de la democracia representativa, le propone al PRD un pacto político, inspirado en la experiencia colombiana, para presentar candidaturas comunes y constituir un gobierno de coalición de los dos grandes partidos del sistema.

Las maniobras, las competencias y las posibles áreas de entendimientos entre esas fuerzas políticas se mueven en dirección a tratar de impedir que la crisis se convierta en una crisis de dominación política, a sacarla del curso de la protesta y de la rebelión social e introducir el proceso en un cauce electoral considerablemente controlado.

Todavía en ese plano esas fuerzas tienen posibilidades, pero lo incuestionablemente cierto, más allá de los efectos temporales y limitados de esas políticas, es que las elec-

ciones en nuestro país y las opciones políticas que resultan de ellas, van perdiendo capacidad para estabilizar por largo o mediano tiempo la situación. La crisis económica y social termina por tragarse, por corroer rápidamente sus resultados y la mayoría electoral obtenida ha resultado y resultará, además de efímera, considerablemente ineficaz para contener el proceso de agudización de la lucha de clases y la conformación de un movimiento popular cada vez más ajeno en su dinámica cotidiana al acto electoral inmediatamente anterior y al oportunismo legalista.

En ese y otros importantes aspectos se diferencia la conducta de nuestro partido y de las demás fuerzas de izquierda, de las que han asumido esas otras corrientes políticas del país.

Y esto motiva que, en la actualidad, la actitud de participación, promoción y respaldo a la protesta popular y a las nuevas formas de lucha y organización popular, sea fundamentalmente asumida por el conjunto de las organizaciones políticas de izquierda y que el grueso de la represión política se centre sobre ellas.

Así, esforzándose por superar la *conciencia del reflujo* y un largo período de dispersión y división, esforzándose por dejar atrás sus principales debilidades, la izquierda de nuestro país va avanzando en la conformación de su propia unidad, en los esfuerzos por superar la distancia que la separa de la potencia explosiva ya expresada por el movimiento popular.

Participando en la protesta popular, la izquierda dominicana tiene en la actualidad grandes posibilidades de desarrollo, siempre que refuerce, como en efecto está decidida a hacerlo, su unidad política y contribuya cada vez más a la coordinación y elevación de la conciencia política revolucionaria y la capacidad de lucha de un vasto y diverso movimiento unitario de organizaciones obreras, campesinas, barriales, estudiantiles, femeninas, culturales, técnico-profesionales y de pequeños y medianos propietarios, hasta la conformación de una gran *Coordinadora* de organizaciones populares.

La conducta represiva del gobierno, la imposibilidad de las fuerzas del sistema para instrumentar nuevas políticas económicas capaces de sacar al país de la crisis e incluso de atenuarla, la incapacidad del gobierno y del sistema para romper definitivamente con el FMI y satisfacer los reclamos populares y las experiencias del nuevo abril tienden a aproximar el período en que la cuestión del poder se incluya entre los reclamos de ese amplio movimiento popular y en que podrá ser asumido por importantes sectores del pueblo el planteamiento del FID en favor de la implantación en nuestro país de un «gobierno popular, revolucionario y antiimperialista, un nuevo poder político, un nuevo Estado que represente las aspiraciones del pueblo trabajador y de todos los sectores afectados por el dominio de la burguesía imperialista, de la gran burguesía nativa y de los terratenientes»[5].

El esfuerzo por lograr progresivamente ese objetivo es algo verdaderamente trascendente. Esa es una de las vertientes del trabajo necesario para conformar una conciencia popular-revolucionaria que, junto a la construcción de la vanguardia socialista y a la formación de la conciencia anticapitalista y socialista en los sectores populares más avanzados de las masas populares, sentaría las bases esenciales para la conquista del poder y el tránsito al socialismo en nuestro país.

Las causas de la rebelión social siguen en pie

Las causas del levantamiento popular de abril no sólo no se han atenuado sino que incluso se siguen incrementando. Nuevos *ajustes* económicos tienden a provocar nuevas alzas, nuevas tensiones y nuevas luchas.

El gobierno, después de explorar de nuevo y descartar la riesgosa posibilidad de proseguir con el Acuerdo de Facilidad Ampliada o de concertar un Acuerdo de Contingencia *(Stand by)*, se ha inclinado en favor de un *Convenio Sombra* con el FMI que conlleva la aplicación de nuevas medidas inflacionarias, entre ellas el traspaso de gran parte del petróleo importado al mercado libre de divisas y, en consecuencia, el encarecimiento de todos sus derivados y de todas las mercancías y servicios.

En las presentes circunstancias, en el sensible punto del

alza del costo de la vida, de la lucha contra el hambre y la impugnación del acuerdo con el FMI, se ha producido una gran convergencia de los diferentes sectores populares a escala nacional, sin que el sistema tenga a sus manos una opción alternativa. Los acontecimientos de abril pasado demuestran que ese ha sido el punto de partida para enfilar la acción contra el gobierno de turno y contra todo el aparato de poder; una acción de masas que incluso puede ir forjando la integración del pueblo con fines políticos revolucionarios en la medida que la lucha social enfrente una mayor resistencia gubernamental y se transforme en lucha por el poder político.

Ese ha sido un primer elemento unificador de todo el descontento disperso, con posibilidades de profundización si se acompaña desde una instancia política revolucionaria de izquierda, cada vez más unificada, de un claro planteamiento de poder alternativo y de una definida voluntad de poder que conquiste progresivamente el corazón del pueblo.

La unidad de la izquierda y particularmente de la izquierda marxista-leninista y su gravitación en el movimiento popular es un factor clave en el proceso de conformación de una vanguardia política que tienda a imprimirle el curso más avanzado al proceso y a garantizar progresivamente la hegemonía política de la clase obrera. Al compás de ella, la afirmación y desarrollo de la unidad y coordinación de las diversas fuerzas que integran el bloque popular resulta imprescindible para garantizar la continuidad ascendente de esa lucha.

Ya el proceso llegó a nivel de estallido social, de insurrección sin armas, de llevantamiento popular a escala nacional.

La generalización de la protesta y de la lucha, el auge de la lucha popular que por esa vía se ha desatado, está conduciendo a un activo antagonismo entre el bloque popular y el bloque de poder, está acentuando las tensiones sociales y las contradicciones en las propias clases dominantes; está conduciendo a métodos gubernamentales y formas de poder más represivas, constantemente enfrentadas a las conquistas democráticas y a la conciencia en favor de las libertades; está dando lugar a un incremento

del intervencionismo imperialista, que puede conducir, en una nueva curva de la espiral histórica, a revalidar el carácter aglutinante de las consignas antidictatoriales y antiimperialistas y a fortalecer la lucha por un poder político revolucionario con nuevos factores de unificación general y movilización popular, que se agregarían a las reivindicaciones económicas, sociales más generales asumidas ya por las grandes masas populares.

Por ese camino —cuya necesidad de transitarlo se vincula a nuestra condición de partido revolucionario, de fuerza que aspira a la conquista del poder— al compás de las movilizaciones generadas por esas demandas, se están y se seguirán desarrollando nuevas formas de luchas y organización popular, confrontaciones cada vez más violentas y más agudas.

Esas son las perspectivas reales a mediano e incluso a corto plazo de este proceso, y las fuerzas populares y su vanguardia revolucionaria tienen que tensar sus energías y capacidades en esa dirección, en el sentido de ese evidente viraje hacia la violencia social y política, sin ceder voluntariamente un pelo de los derechos conquistados, sin renunciar voluntariamente a la lucha política abierta, sin prestarse a radicalismos estériles, sin aceptar provocaciones procurando ubicarse delante de las masas pero lo suficientemente cerca y junto a ellas para no aislarnos, asumiendo la dirección y organización de las formas de lucha que ellas escogen a tono con sus propias experiencias y con la progresiva elevación de su nivel de conciencia.

Otra expresión de una crisis regional

La situación dominicana es otra expresión de la profunda crisis que afecta la zona del Caribe y América Central. Los hechos acaecidos en 1984, después de toda la propaganda imperialista y gubernamental presentando nuestro país como el «modelo democrático» a imitar por todos los países de esta subregión, evidencian que la crisis se extiende más allá de los países donde imperan regímenes autoritarios y que en los hechos el despotismo económico ter-

mina convirtiendo la democracia política en algo próximo a una caricatura de democracia.

Vivimos una crisis de larga duración que ha sentado las bases para convertir a Centroamérica y el Caribe en una zona en tránsito revolucionario, escenario en la actualidad de un nuevo auge y de la aguda confrontación con el imperialismo y sus fuerzas aliadas. Hay muchos hechos que permiten hoy afirmar que la revolución no es sólo una necesidad histórica o una meta ideal, sino una posibilidad real en este período y a cargo de esta generación.

Cuba abrió el camino y, veinte años después, la revolución sandinista ha venido a confirmar que no se trataba de una exclusión ni de un hecho fortuito. El triunfo nicaragüense vino a demostrar, contra todos los nuevos vaticinios fatalistas, que sí era posible hacer otra revolución en nuestra zona.

A la victoria en Nicaragua le han seguido los avances del FMLN en El Salvador, que no sólo pudo resistir sino desarrollarse hasta constituir un ejército popular con reales posibilidades de victoria.

La brutal intervención militar imperialista contra Granada ha sido sólo un revés limitado, un golpe en el punto más débil de los nuevos avances de finales de la década del 70 y principios de los 80. Pero lo de Granada no ha detenido la continuidad del cambio revolucionario en esta región. El nuevo auge revolucionario no ha sido contenido ni por ese hecho ni por toda la estrategia de subordinación económica, militarización e intervención de la Administración Reagan. Este hecho no ha revertido la tendencia revolucionaria predominante en esta zona.

Mientras por un lado los imperialistas norteamericanos (y especialmente las fuerzas que sustentan la Administración Reagan) y las clases dominantes de nuestros países intentan contener con la aplicación de la fuerza toda reacción adversa a sus designios, por el otro se abren nuevas grietas y nuevos frentes de lucha en el edificio de su dominación.

Lo que acontece en nuestro país, es, repetimos, otra expresión, con sus particularidades propias, de la crisis subregional, de la crisis que incluso afecta a todo el continente. Y esta nueva expresión de esa crisis y de ese proceso

de cambios, este nuevo prólogo de la revolución social y de la emancipación nacional de nuestros pueblos se vincula estrechamente a la defensa de Cuba y Nicaragua, al combate en El Salvador y Guatemala y a todas las luchas que tienen lugar en nuestra zona y en todo el continente.

Y hoy, al respaldo de las dos revoluciones triunfantes de nuestra región, hay que sumarle, de manera inseparable, la asunción de la lucha en El Salvador como si se tratara de nuestra propia lucha. En los dos primeros casos se defienden los avances convertidos ya en Estados revolucionarios y en el segundo se decide la actitud en favor de la continuidad del proceso revolucionario en la región, esto es, el apoyo militante al punto más agudo y más alto en la lucha por la conquista del poder revolucionario en otros países de nuestro continente.

La vida ha confirmado de nuevo que la Cuenca del Caribe es una zona donde los más altos niveles de opresión, saqueo e intervención imperialista tienen que enfrentarse al extraordinario dinamismo revolucionario de nuestros pueblos. Y ese dinamismo revolucionario, enfrentado a la política de guerra e intervención de la Administración Reagan, se vincula más que nunca a los esfuerzos de los pueblos de Europa y las iniciativas de la URSS y de los países socialistas para preservar la paz del mundo, hoy seriamente amenazada por los grupos que dominan la política norteamericana. La instalación de los cohetes de mediano alcance en Europa forma parte de la misma política e intereses que mina los puertos en Nicaragua, amenaza a Cuba y entrega grandes cargamentos de armas al ejército genocida de El Salvador.

En varios países de nuestra zona se libra hoy una guerra contra la guerra, una guerra por la paz. Hoy más que nunca la lucha por la liberación social y nacional se vincula inseparablemente a la lucha por la paz; ambas confluyen contra el gran agresor. Cada derrota del movimiento liberador fortalece la política de guerra y las pretensiones de Reagan de cambiar a través de la fuerza la realidad mundial. Cada victoria de nuestros pueblos debilita los planes de supremacía militar y de hegemonía absoluta de la Administración Reagan.

Todo avance en la carrera armamentista y la escalada de guerra amenaza la existencia de nuestros movimientos y de nuestros pueblos. Si hay guerra mundial, no podrá haber revolución ni cambios, sólo destrucción.

Si hay paz mundial y progreso en la lucha de liberación, nuevos avances, nuevos cambios habrán de producirse y nuevos logros habrán de obtenerse en dirección a la conquista de la plena felicidad del género humano.

A la política de fuerza del imperialismo le acompaña una profunda debilidad. Pero ese ejercicio de la fuerza, esa vocación por la guerra, entraña graves peligros que hay que disponerse a conjurar hasta convertir al mundo amenazado en verdadera zona de paz y al mundo oprimido en reino del bienestar y la felicidad. Ambas tareas van tomadas de la mano, resultan realmente inseparables y tienden en la actualidad a conformar un solo y potente torrente mundial.

Revista Internacional, Nº 12 de 1984

[1] También en el mes de Abril de 1965 un movimiento armado acompañado de una rebelión popular desplazó al triunvirato reaccionario que gobernaba la República Dominicana. Los dirigentes de la insurrección, en la que tomaron parte activa los comunistas, formaron un gobierno encabezado por el coronel F. Caamaño, quien proclamó su fidelidad a la Constitución democrática de 1963. Sin embargo, la intervención norteamericana impidió que llegara a consolidarse la victoria constitucionalista. *–N. de la Red.*

[2] Constituido, en junio de 1983; lo integran el Partido Comunista Dominicano, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, la Unión Patriótica Antiimperialista, el Bloque Socialista y otras organizaciones. *–N. de la Red.*

[3] *Hablan los comunistas*, 5–12 de abril de 1984.

[4] Ibíd., 15–22 de marzo de 1984.

[5] Ibíd., 5–12 de abril de 1984.

Nicaragua
bajo la bandera sandinista

Francisco MAURA,
publicista latinoamericano

Las revoluciones, decía Marx, son las locomotoras de la historia. Esta metáfora acude espontáneamente a la memoria cuando uno echa una mirada retrospectiva al camino recorrido por Nicaragua a partir del 19 de julio de 1979, el día en que fue derribada la dictadura. En este breve lapso se han producido cambios impresionantes en la vida del país y de los trabajadores. Hoy podemos apreciar a simple vista la potencia de esa locomotora de la historia, la evidente distancia que separa ya a la Nicaragua actual, que se ha sacudido el yugo de los monopolios estadounidenses y sus sirvientes locales, de la época de la sanguinaria tiranía que a lo largo de más de 40 años se mantuvo en el poder con ayuda del imperialismo norteamericano.

El pueblo de Nicaragua construye una vida nueva en un momento extremadamente grave, marcado por el continuo encadenamiento de actos de subversión, el chantaje y las amenazas de los enemigos internos y externos. Apoyándose en mercenarios adiestrados y armados por él, Washington realiza una guerra no declarada contra este país. Sobre Nicaragua se cierne la amenaza real de una intervención directa de Estados Unidos con el fin de revertir el desarrollo de los acontecimientos y suprimir las conquistas revolucionarias. A los manejos del agresor se oponen la vigilancia y organización de los trabajadores, de todas las fuerzas patrióticas, que están decididas a defender y salvaguardar la dignidad y la independencia de su patria, el poder popular, y cuentan con las simpatías y el apoyo de la humanidad progresista.

El poder del pueblo

La revolución nicaragüense es, por su carácter, una revolución popular, democrática y antiimperialista. Una revolución en cuyo triunfo participó la inmensa mayoría del pueblo. El principal objetivo programático del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), o sea el de implantar «un régimen de verdadera justicia y progreso social», responde a los intereses cardinales de las masas. De ahí que una de las orientaciones fundamentales en la actividad de la dirección sandinista haya consistido, precisamente, en poner los cimientos de una estructura política que garantizara la realización de este objetivo.

El 20 de julio de 1979, en un grandioso mitin celebrado en Managua, se promulgaron decretos sobre la abolición de la Constitución que había regido bajo la dictadura, la disolución del Congreso títere y del Tribunal Supremo, la supresión de la Guardia Nacional y de otros eslabones del aparato represivo. La destrucción de la maquinaria estatal de explotación iba aparejada a la formación de órganos de poder democrático tanto en el centro como a nivel local.

Los líderes del FSLN han asimilado muy bien el axioma de que la revolución debe saber defenderse con las armas en la mano cuando sea necesario. «Nosotros consideramos –escribe el miembro de la Dirección Nacional del FSLN, Comandante de la Revolución Humberto Ortega Saavedra– que el principal peso en nuestra concepción de la Defensa lo debe seguir jugando el pueblo organizado, porque nadie puede sustituir a ese gran Ejército que son las masas, las masas con un poder adquirido, con un gobierno, con un Estado conquistado»[1].

Esta concepción se ha visto materializada en los Comités de Defensa Sandinista (CDS), que nacieron en el crisol de la lucha antidictatorial y constituyen un brillante ejemplo de creación viva de las masas. Los CDS ocupan un lugar especial en la nueva estructura política. Prácticamente, son los eslabones básicos del poder y, simultáneamente, la organización social más numerosa, que agrupa a los obreros, campesinos, artesanos, empleados, estudiantes, sacerdotes, etc., es decir, de hecho, a la mayoría de la población activa. Los miembros de los comités participan en la campaña de alfabetización, en la lucha contra el sabotaje y el terrorismo, contra la delincuencia; custodian las empresas industriales y agrícolas, los barrios de vivienda. Los CDS realizan también una importante labor propagandística, explican los objetivos y las tareas del FSLN.

Paralelamente, se ha creado un sistema integral de defensa armada de las conquistas revolucionarias. En poco tiempo, sobre la base de las antiguas formaciones rebeldes se organizó el Ejército Popular Sandinista, que se ha convertido en el núcleo de todo ese sistema, del que forman parte también las Milicias Populares Sandinistas y otras fuerzas.

Uno de los rasgos característicos del desarrollo actual de Nicaragua es la vasta participación de creyentes y del clero bajo en la construcción de una vida libre. Así, se continúan y desarrollan las tradiciones de cooperación entre católicos y sandinistas, nacidas en los años de lucha contra la tiranía. Pese a los múltiples intentos del enemigo de sembrar cizaña entre el FSLN y la Iglesia, dentro del actual Gobierno desempeñan carteras ministeriales hombres que recibieron en su día las órdenes religiosas, como Miguel D'Escoto, Ernesto Cardenal y Edgardo Parrales, mientras que el sacerdote jesuíta Fernando Cardenal es uno de los dirigentes de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

Sólidos puntales del nuevo poder son la Central Sandinista de Trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Campo que hacen una notable contribución a la puesta en práctica de la línea estratégica del FSLN. En la actividad de esas organizaciones se plasma la idea de la alianza de la clase obrera y el campesinado, considerada por los dirigentes del Frente como garantía del carácter irreversible de las transformaciones. En las condiciones actuales, dichos sindicatos, aunque no abarcan a todos los trabajadores, se están convirtiendo en una buena escuela de administración de la economía y educación. Al intervenir en el mitin del 1º de Mayo de 1981, el Comandante de la Revolución Luis Carrión, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, declaró: «La misión histórica de los sindicatos no es meramente la de lograr tales o cuales mejoras, sino, fundamentalmente, preparar a decenas de miles de obreros para la construcción de la nueva sociedad»[2].

Consecuente en su línea de democratización social, el Gobierno garantiza la libre actividad de grupos y asociaciones de diferente signo ideológico y político, siempre que no sean de carácter antipopular, contrarrevolucionario. Es más, en el proceso de adopción de las más diversas decisiones participan amplias fuerzas sociales.

Desde los primeros momentos consecutivos al triunfo de la Revolución, sus detractores han querido centrar la lucha ideológica en torno al tema de las elecciones, procurando reducir a éstas todo el problema de la democracia. Por el contrario, los dirigentes del FSLN han formulado y llevado a la práctica una concepción más amplia y omnicomprensiva del poder popular. «La democracia —leemos en un documento del FSLN publicado en 1980— no es simplemente elecciones; es algo más, mucho más... Significa la participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales... La democracia no empieza ni termina con las elecciones... la democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades sociales principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus niveles de vida, allí se origina la verdadera democracia...»[3]. Por lo que se refiere a la elección de los órganos legislativos y ejecutivos, la dirección del FSLN manifestó reiteradas veces, que éstas tendrán lugar tan pronto como maduren las condiciones necesarias[4].

Tratando de engañar a la opinión pública del llamado «mundo libre», la propaganda imperialista dice, reitera y machaca: «¡En Nicaragua se ha vuelto a implantar una dictadura! ¡Los sandinistas han usurpado el poder!». Cabe preguntar: ¿acaso se puede tildar de usurpador a un Gobierno que entrega todas las armas de que dispone a los ciudadanos que manifiesten estar dispuestos a defender la libertad, la independencia y la democracia? Porque esto, precisamente, es lo que decidió el Gobierno sandinista el 19 de julio de 1983. Y esta decisión no ha quedado en letra muerta. Se han distribuido entre los trabajadores 1.600.000 fusiles. Es más, aún han faltado para armar a todos los que arden en deseos de defender las conquistas de la Revolución. Como bien dijera el Comandante de la Revolución Daniel Ortega Saavedra, miembro de la Dirección Nacional de FSLN y Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la entrega de armas al pueblo ha sido «uno de los más hermosos ejercicios de la democracia»[5].

Reconstrucción y transformaciones

No sólo ha cambiado el carácter del poder estatal, sino también todo el modo de vida. Las condiciones en las que hubo que empezar a asentar los cimientos de la nueva Nicaragua, eran extraordinariamente adversas: estructuras deformes, atraso económico, ruinas y miseria, analfabetismo y enfermedades. Esto era, entre otras cosas, lo que dejó en herencia al país el último representante de la dinastía de los Somoza.

A la caída de la dictadura, la deuda exterior del Estado superaba los 1.600 millones de dólares (o sea, 660 dólares per cápita) y los haberes del Banco Nacional apenas sumaban 3,5 millones. Durante la guerra civil, tratando de mantenerse en el poder a cualquier precio, el dictador había sometido a bombardeos aéreos y de artillería los centros vitales de la economía. El 80 % de las empresas resultaron destruidas. Decenas de miles de nicaragüenses fueron muertos, cerca de una tercera parte de la población (más de 800.000 personas) carecían de vivienda y de medios de subsistencia.

Todos estos factores han determinado las características de la presente etapa de la revolución. Las transformaciones socio-económicas y políticas deben realizarse a la par del restablecimiento de la economía en ruinas.

Una de las primeras leyes del nuevo poder fue el decreto de nacionalización de los bienes de Somoza y sus secuaces (más del 40 % del potencial económico del país), así como de los bancos y las compañías de seguros, del comercio exterior y de todos los recursos naturales. Estas medidas destruyeron el poderío de la oligarquía. Sobre la base de los bienes confiscados se constituyó la propiedad social o, como la llaman en Nicaragua, Area Propiedad del Pueblo (APP), que es el elemento fundamental del sistema económico en formación. Con ella coexisten otras formas de propiedad: privada y cooperativa. Así se concreta en la práctica la concepción de la economía mixta.

En esencia, la estrategia económica de la dirección sandinista se atiene a los siguientes lineamientos: elevación del peso específico de la propiedad social en el producto interno bruto, mayores inversiones del Estado y crecimiento del empleo en las empresas del sector público; regulación efectiva de la economía nacional; política de acumulaciones para lograr la independencia económica en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo; participación directa de los ciudadanos en la distribución de los bienes materiales.

Una tarea de especial importancia en las condiciones actuales es la de incorporar al proceso de resurgimiento nacional a representantes del sector privado, concretamente a los empresarios de inspiración patriótica que bajo el régimen dictatorial formaron parte de la oposición. Simultáneamente, se adoptan las medidas pertinentes para que la reconstrucción contribuya a una reestructuración radical de todo el sistema social.

En el campo, las pautas fundamentales de las transformaciones han sido determinadas por la reforma agraria, una de las principales conquistas de la Revolución. Lo mismo que en la ciudad, se hace hincapié en la creación de la propiedad social o APP. Su núcleo lo constituyen más de 1 millón de hectáreas de tierras de cultivo incautadas por el Estado tras la fuga del dictador, en las que se obtenía más de la mitad de la producción nicaragüense de azúcar y de tabaco, una tercera parte de la de algodón y casi el 25 % de la de café. También fueron nacionalizadas las empresas más importantes de elaboración de productos agropecuarios. En las tierras feraces confiscadas a Somoza y sus protegidos se han creado grandes haciendas estatales que están llamadas a convertirse en unidades piloto del sector agrario. En la gestión de esas empresas participan directamente los propios obreros.

El resto de las tierras confiscadas, y diversas extensiones de terrenos yermos, han sido entregadas a los propietarios de pequeñas parcelas y a campesinos sin tierra. El movimiento cooperativista ha alcanzado una gran dimensión. Las autoridades prestan apoyo a los cooperativistas rurales con créditos, semillas, maquinaria, etc.

Una importante particularidad de la Ley de Reforma

Agraria consiste en que admite la propiedad privada de la tierra y no establece límites en cuanto a la superficie de las explotaciones. La reforma no afecta a los propietarios que administran eficazmente sus haciendas, pagan puntualmente los impuestos y respetan la legislación laboral, la cual dispone que es obligatorio concertar convenios colectivos con los trabajadores de sus plantaciones.

Si nosotros hacemos un balance tentativo de las transformaciones operadas en el campo nicaragüense, se puede sacar la conclusión de que durante los años de la revolución se han producido cambios irreversibles en las estructuras agrarias heredadas de la dictadura.

También son impresionantes los éxitos registrados en las esferas cultural y social. Desde los primeros días de la caída de Somoza se iniciaron los preparativos para la campaña nacional de alfabetización. Esta «batalla por la segunda liberación», como la han llamado en Nicaragua, señala una página brillante en la formación del nuevo régimen. El 23 de marzo de 1980, decenas de miles de jóvenes brigadistas —muchachos y muchachas—, se dispersaron por toda la geografía del país para llevar diversos conocimientos a las masas. Se les había planteado la tarea no sólo de enseñar a los trabajadores a leer y escribir, sino también de impulsar al máximo su incorporación al proceso de transformación, de elevar su nivel de conciencia política. Al cabo de seis meses, gracias a los esfuerzos abnegados de la juventud, la proporción de analfabetos ya había disminuido del 50 al 12 %. En el marco de esa campaña, los jóvenes «brigadistas» pusieron empeño para transformarla en el comienzo de un proceso ininterrumpido de ilustración del pueblo. Los grupos de estudio se convirtieron en una tupida red permanente de círculos vespertinos de enseñanza general, cuyo número en 1983 pasaba de 17.000. La batalla contra el oscurantismo y la ignorancia continúa. El país entero es como una inmensa aula en la que todos, pequeños y mayores, estudian. No es casual que Nicaragua, por sus éxitos en el dominio de la educación, se haya hecho acreedora al premio de la UNESCO.

La Revolución abarca también al sistema de sanidad. Se ha logrado erradicar definitivamente varias enfermedades. En 1982 no se registró ningún caso de poliomielitis. La mor-

talidad infantil ha bajado desde un 12 a un 8,8 %. El número de centros de consulta médica se ha duplicado y el de dispensarios es tres veces mayor que antes.

Es mucho también lo que ha realizado el nuevo poder con el fin de mejorar las condiciones materiales de vida de los trabajadores de la ciudad y del campo, acabar con el desempleo y resolver el problema de la vivienda.

Sin embargo, los dirigentes sandinistas no ocultan las dificultades con que se enfrenta el país y subrayan que la reconstrucción y las transformaciones constituyen un proceso complejo y prolongado, cuyo éxito depende de la participación activa de los propios trabajadores.

Amigos y enemigos de la Revolución

La Revolución sandinista cuenta con muchos amigos en América Latina y en el mundo entero. Pero tiene también enemigos acérrimos, entre los cuales se destaca el imperialismo norteamericano.

Los círculos gobernantes de EE.UU. no quieren resignarse con el nacimiento de la nueva Nicaragua, se han esforzado y se esfuerzan por impedir que el pueblo nicaragüense pueda vivir como él lo desee. Tratando de estrangular la Revolución, cuyo ejemplo influye moralmente en el desarrollo del movimiento liberador en la región, los imperialistas intentaron apresarla, desde los primeros días, en las tenazas del bloqueo económico. Esta línea se ha hecho más patente bajo la actual Administración yanqui. Se prohibió el envío de 10.000 toneladas de trigo compradas por Nicaragua. EE.UU. utiliza su influencia en los organismos financieros internacionales y veta la concesión de empréstitos a Nicaragua. Bajo la presión estadounidense, el Banco Interamericano de Desarrollo redujo a su mínima expresión los créditos otorgados a este país, al punto que durante los años de poder popular ha reducido su cuantía a una décima parte. Uno de los principales actos de agresión económica de la Administración Reagan ha sido la decisión de disminuir casi en un 90 % las compras de azúcar[6], lo cual supone para Nicaragua la pérdida anual de 300 millones de dólares.

Por lo demás, los enemigos no se limitan a la adopción de sanciones financieras; tocan todos los registros, desde los métodos de presión política hasta los militares. Al principio, se hizo hincapié en el aislamiento de Nicaragua a nivel regional y continental, y cuando se vio que el proyecto era inviable, se jugó la carta de las bandas contrarrevolucionarias de antiguos somocistas y traidores, que los servicios especiales del Pentágono colusionados con la CIA se encargan de mantener y equipar.

A los contrarrevolucionarios se les ha ordenado la tarea de ocupar aunque sólo sea un palmo del territorio nicaragüense, hacerse fuertes en él y crear allí un «Gobierno provisional» que se dirigiría a EE.UU. y a los regímenes proyanquis de América Central para solicitar su reconocimiento y asistencia. Así se obtendría un pretexto para lanzar la intervención militar directa. La vigilancia de los patriotas y su capacidad para rechazar las incesantes incursiones armadas del enemigo hacen fracasar esos planes.

Por eso, ahora, sin desistir de su objetivo principal, y obedeciendo a la batuta de EE.UU., la contrarrevolución trata de desestabilizar la economía y debilitar al país mediante actos de terrorismo y sabotaje. En cumplimiento de este plan, comandos subversivos destruyen fábricas, cooperativas, puentes, causan graves perjuicios a la propiedad social y personal de los nicaragüenses. Desde marzo de 1982 hasta febrero de 1984, Washington asignó 73 millones de dólares para financiar asesinatos y otros crímenes de los que fueron víctimas más de 2.500 ciudadanos de Nicaragua. Los daños materiales causados por la guerra no declarada sumaron, durante el período señalado, más de 200 millones de dólares.

EE.UU. aplica una cínica política de terrorismo estatal contra Nicaragua. Con la complicidad de los servicios secretos yanquis, se han realizado actos criminales como el minado de los puertos nicaragüenses, que supone una amenaza a la libertad de navegación internacional en la región.

Para justificar su descarado proceder, el imperialismo propala la falacia de que Managua «exporta la revolución». Lo que ocurre en realidad es que los propios EE.UU.

se dedican a exportar la contrarrevolución y han incorporado a la realización de sus planes a varios Estados vecinos a Nicaragua, en primer lugar Honduras. Apoyándose en el régimen reaccionario de la oligarquía local, Washington ha convertido rápidamente a ese país en un gigantesco campamento militar, que es hoy la principal base de apoyo de los somocistas. Durante más de seis meses se realizaron en Honduras conjuntamente con el Pentágono las maniobras *Pino Grande-2*, en las que participaron más de 20.000 soldados y marines norteamericanos[7]. En abril de 1984 se iniciaron nuevos ejercicios en gran escala con el nombre de *Grenadero-1* en cooperación con unidades militares de varias repúblicas centroamericanas. Ahora se concede también un papel importante a Costa Rica, que el imperialismo, a pesar de la oposición con que tropieza por parte de influyentes sectores políticos y sociales de este país, está convirtiendo en uno de los centros de concentración de contrarrevolucionarios y base de constantes incursiones contra Nicaragua.

EE.UU. combina en sus cálculos el empleo de los mercenarios y de los sectores militaristas del área con la amenaza de una intervención directa de sus fuerzas armadas en Nicaragua.

La Administración norteamericana ha proclamado su propósito de destruir las conquistas revolucionarias en Nicaragua, declara «inadmisible» el rumbo seguido por la dirección sandinista. Desde los tiempos del Reich hitleriano, ningún Gobierno ha planteado con tanta desvergüenza la tarea de liquidar regímenes legítimos en otros países soberanos ni recurrido con tanto descaro al bloqueo, el sabotaje, el uso de la fuerza y la agresión.

La Casa Blanca caldea cada día más la situación en torno a Nicaragua. Una nueva prueba de ello ha sido el discurso provocador anticomunista de Reagan pronunciado el 9 de mayo de 1984 y que estuvo dedicado al tema de Centroamérica. Esta intervención, cargada de insinuaciones malintencionadas y falaces, tergiversa las causas de la tensión en el área y, de hecho, da la señal para una escalada en flecha de las acciones agresivas del imperialismo contra las fuerzas de liberación nacional y social en el continente.

A esta política agresiva se contrapone la política exterior pacífica de Nicaragua, que actúa en el marco del movimiento de los no alineados. Es una política que tiende a crear un contexto internacional favorable para que pueda desplegarse en el país el proceso de transformaciones, una política que está en consonancia con los intereses nacionales y es de carácter netamente antiimperialista. Nicaragua propugna la consolidación de la paz mundial, el cese de la carrera armamentista, la conversión de América Latina en una zona desnuclearizada; lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, contra el apartheid, contra cualesquiera formas de ocupación foránea, contra la intervención en los asuntos de Estados soberanos.

La posición constructiva de Nicaragua se ha granjeado creciente reconocimiento en la palestra mundial. El hecho de que fuera elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es una muestra indiscutible de ese creciente prestigio.

En las condiciones presentes, la política exterior del Gobierno sandinista se promueve, por así decirlo, a la primera línea de defensa de la Revolución. El rumbo de principio y consecuente del FSLN, a la par de su flexibilidad y dinamismo, le aseguran a Nicaragua la ampliación de su círculo de aliados políticos y socios económicos y le permiten consolidar sus posiciones. En este sentido, adquiere notable importancia el apoyo que, desde hace varios años, vienen prestando a los sandinistas los países socialistas, el movimiento de liberación nacional y todas las fuerzas de la paz y del progreso.

La Unión Soviética, Cuba y otros países de la comunidad socialista, fieles amigos del pueblo nicaragüense, le prestan una gran ayuda para superar la penosa herencia del pasado; su línea de principios y el peso de su voz en la palestra internacional contribuyen a la movilización de la opinión pública en defensa de la Revolución.

Nicaragua ha ajustado contactos económicos con muchos Estados de Europa Occidental, sobre todo con aquellos donde se encuentran en el poder partidos socialdemócratas. Algunos de esos países, a pesar de las presiones de EE.UU., contribuyen a la realización de los planes económicos y conceden ayuda humanitaria a Nicaragua. Se de-

sarrolla con éxito la cooperación con muchos países de América Latina, tanto bilateral como multilateral.

Cabe señalar también que la Internacional Socialista apoyó, a lo largo de varios años, a los sandinistas en la lucha contra la dictadura. En noviembre de 1980 la IS constituyó el Comité para la Defensa de la Revolución Nicaragüense.

Otro factor substancial es el movimiento de solidaridad que se ha desplegado a nivel internacional y, en particular, en los propios EE.UU. «¡No a la agresión imperialista contra Nicaragua!», es la consigna bajo la que tienen lugar en todo el mundo mítines, reuniones, marchas y otros actos de protesta multitudinarios, en los que participan personas adscritas a las más diversas corrientes políticas y religiosas: socialistas, liberales, católicos, comunistas, etc. La Conferencia Internacional celebrada el pasado mes de mayo en Lisboa, con la asistencia de delegados de 72 países y más de 30 organizaciones no gubernamentales, que agrupan centenares de millones de personas, alcanzó la dimensión de una poderosa manifestación de solidaridad con los pueblos de Nicaragua y otros países de América Central.

El enlace vivo de los tiempos

La Revolución de 1979 ostenta el nombre de sandinista, y lo lleva con toda justicia ya que desde su principio mismo se inspiró en las ideas de Sandino. Hoy, a medio siglo del alevoso asesinato perpetrado por la reacción el 21 de febrero de 1934, muchos preceptos del General de los Hombres Libres se ven materializados en la realidad de Nicaragua. ¿En qué reside el contenido fundamental del sandinismo, de la herencia ideológica que legó a los nicaragüenses su insigne compatriota?

«Soy un patriota que no permite un ultraje a nuestra soberanía»[8], solía decir Sandino. El profundo amor a la patria humillada, tantos años maltratada por la oligarquía nacional y el imperialismo yanqui, es el rasgo distintivo esencial de la personalidad de Sandino y una de las principales fuerzas que ha movido y alzado a luchar a los trabajadores, tanto en vida del héroe como en nuestros días, cuando la Revolución rechaza los ataques del enemigo interno y externo.

La fidelidad sin reservas a la patria se combinaba en Sandino con el odio implacable a los enemigos, en primer lugar a los opresores yanquis. El patriotismo y el antiimperialismo constituyen, por lo tanto, dos aspectos inseparables del credo de Sandino, entrañable y comprensible para millones de sus compatriotas y de centroamericanos. Sandino nunca se cansó de denunciar la política agresiva de EE.UU., esa política a la que se quiso dar una justificación «teórica» con la patraña de la Doctrina Monroe. «*América para los americanos.* Bueno: está bien dicho —comentaba Sandino—. Todos los que nacemos en América somos americanos. La equivocación que han tenido los imperialistas es que han interpretado la Doctrina Monroe así: *América para los yankees*... Yo reformo la frase en los términos siguientes: *Los Estados Unidos de Norte América para los yankees. La América Latina para los indolatinos*»[9].

Con similar claridad formula Sandino su pensamiento de que la defensa de la dignidad nacional frente al codicioso «vecino del Norte» pasa por la vía armada. Bajo la consigna de «la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano», Sandino desplegó la guerra de guerrillas contra intervencionistas (1927–1933). Muchos años después, esos mismos ideales inspirarían a los fundadores del FSLN al frente del poderoso movimiento rebelde que barrería a la dictadura de Somoza, esa dócil marioneta de EE.UU.

Augusto César Sandino demostró no sólo ser un ardiente patriota y luchador por la independencia de su patria, sino también un internacionalista convencido. Se sentía particularmente identificado con la idea de Bolívar sobre la indispensable unidad de América Latina para enfrentar la amenaza norteamericana. No es casual que en el ejército del General de los Hombres Libres combatieran hombres de más de 20 países del continente. Uno de sus compañeros de lucha fue el gran revolucionario Farabundo Martí, fundador del PC de El Salvador. «Mi patria, aquello por que lucho, tiene por fronteras la América española»[10], gustaba decir Sandino. Por eso, consideraba como un deber

supremo ayudar a las repúblicas hermanas en sus luchas contra el enemigo común y, al mismo tiempo, apoyarse en ellas. Los éxitos de la joven república y la solidaridad que recibe de todos los pueblos son una viva encarnación de este sueño de Sandino.

Sandino no era comunista, como intenta presentarlo la propaganda imperialista. Lo que sí es cierto es que, siendo un demócrata consecuente, movido por su fe ilimitada en el pueblo, se aproximó de lleno a la comprensión científica materialista de las principales fuerzas motrices que impulsan la lucha de liberación nacional. «...Sólo los obreros y campesinos irán hasta el fin, sólo su fuerza organizada logrará el triunfo»[11]. Estas palabras proféticas han servido de brújula a todos los que tomaron el timón de manos de Sandino.

La rica experiencia vital, el agudo instinto de clase que le era inherente, le permitieron sacar otra conclusión no menos importante. Al caracterizar la posición de los círculos gobernantes de su país, escribe: «...Los dirigentes políticos conservadores y liberales nicaragüenses son una bola de canallas, cobardes y traidores, incapaces de poder dirigir a un pueblo tan patriota y tan valeroso como el nuestro... Nosotros hemos sido abandonados por nuestros directores políticos, quienes se han aliado con los invasores, pero entre nosotros mismos, los obreros y campesinos, hemos improvisado a nuestros jefes...»[12].

Sandino soñaba apasionadamente en el día en que el pueblo libre tomaría en sus manos el poder y el destino de la patria. Todas las riquezas naturales del país, su subsuelo, las fábricas, consideraba Sandino, deben ser propiedad de la nación, y la tierra, entregada a los que la trabajan. A su juicio, la mejor forma de organización de los campesinos eran las cooperativas. La comuna creada por Sandino, después de expulsar a los invasores, representaba, en opinión de los continuadores de su causa, una comunidad social y política en la que no existía la división en lo mío y lo ajeno, una comunidad en la que se desarrolló la fraternidad y el respeto mutuo en sus manifestaciones más nobles. Era una forma embrionaria de la nueva sociedad.

En la Nicaragua de hoy se venera el nombre de Sandino. Personificando la continuidad de las generaciones, sus epígonos enarbolaron la bandera de la liberación en un contexto histórico diferente. Carlos Fonseca, destacado representante de esa nueva pléyade de revolucionarios, ideólogo y uno de los fundadores del Frente, que ofrendó su vida en aras de la libertad del pueblo en los combates contra la dictadura somocista, escribió que Augusto César Sandino «ha pasado a ser símbolo de la ya secular lucha de los pueblos de América Latina contra el imperialismo yanqui»[13].

Carlos Fonseca inculcó siempre a sus compañeros la idea de que no puede ser auténtico revolucionario el que no eduque en sí un sentimiento de respeto hacia la personalidad y la hazaña de Sandino, la fidelidad a sus legados y disposición a continuar y culminar la obra a la que él consagró su vida. Al definir el papel de Carlos Fonseca en el desarrollo del ideario y la praxis sandinistas, el miembro de la Dirección Nacional del FSLN, Comandante de la Revolución, Luis Carrión ha subrayado que «recogió la experiencia y el ejemplo de Sandino y lo unió a una teoría revolucionaria, que lo unió a una doctrina científica y enseñó a todo el pueblo nicaragüense el camino que conduce a la victoria»[14]. Carlos Fonseca era un gran conocedor del movimiento revolucionario internacional y siempre estuvo al tanto de su desarrollo. Combinando ágilmente la experiencia nacional con la internacional, contribuyó a que la Revolución nicaragüense se fundiera orgánicamente con el proceso mundial de liberación.

...Las semillas que sembró Sandino, que cultivaron Fonseca y sus compañeros, han dado frutos palpables, plasmándose en los hechos actuales protagonizados por los patriotas. El mejor monumento a Augusto César Sandino y Carlos Fonseca es la propia Revolución que inscribió en sus banderas los nombres de estos dos grandes héroes nacionales.

El desarrollo de la nueva vida en Nicaragua transcurre en un contexto difícil. La Revolución se ve obligada a combatir. Con las armas en la mano, los trabajadores defienden sus conquistas contra los atentados del enemigo. Al rechazar los furiosos ataques del imperialismo yanqui y sus secuaces, y aprovechando la ayuda y el apoyo de sus numerosos amigos, el pueblo nicaragüense mira con opti-

mismo al futuro y está decidido a seguir avanzando por el camino de la construcción de una sociedad liberada de la explotación y la opresión.

Revista Internacional, Nº 7 de 1984

[1] *Habla la Dirección de la Vanguardia.* Managua, 1981, p. 81.
[2] Ibíd., p. 181.
[3] Véase *Barricada*, 5 de diciembre de 1983.
[4] En noviembre de 1984 se celebraron las elecciones generales, con el triunfo irrefutable de Daniel Ortega, lo cual desmintió definitivamente los infundios que hacía la propaganda enemistosa acerca del supuesto temor de los sandinistas a la libre expresión de la voluntad popular. *–N. de la Red.*
[5] *Barricada*, 5 de diciembre de 1983.
[6] *International Herald Tribune*, March 14, 1984.
[7] Para más detalle, véase R. Banegas, L. O. Corrales. *De la diplomacia de las cañoneras a la agresión directa*, en *Revista Internacional*, Nº 1 de 1984. *–N. de la Red.*
[8] *El pensamiento vivo de Sandino.* San José, 1979, p. 89.
[9] Ibíd., p. 140.
[10] Ibíd., p. 138.
[11] Cf. J. B. Escobar. *Ideario Sandinista.* Managua, 1980, p. 7.
[12] *El pensamiento vivo de Sandino*, p. 261.
[13] C. Fonseca. *Bajo la bandera del Sandinismo. Textos políticos.* Managua, 1981, p. 263.
[14] *Habla la Dirección de la Vanguardia*, p. 176.

AMERICA DEL SUR: QUIEBRA DE DICTADURAS MILITARES

La unidad contra la dictadura, vía y formas de lucha

Luis CORVALAN,
Secretario General del CC
del Partido Comunista de Chile (PCCh)

Las grandes luchas populares que han tenido lugar en Chile en el mes de septiembre de 1985 remecieron fuertemente a la dictadura de Pinochet y alcanzaron amplio eco internacional. El régimen fascista vive sus momentos más difíciles. Las jornadas de protesta han creado una situación nueva. Pinochet ha sido ya abandonado por la mayoría de sus amigos de la derecha. Aparecen discrepancias entre los miembros de su gabinete y pugnas en las instituciones armadas, en las cuales se considera la cuestión de cómo salir del embrollo en que se metieron.

El golpe de septiembre de 1973 se dio con el pretexto de salvar a Chile del comunismo y del caos económico. Lo que hizo en verdad fue derribar a un gobierno democrático que construía con éxito una economía independiente en medio de dificultades creadas por el imperialismo y la reacción interna. Transcurridos esos años se puede constatar que el Partido Comunista no sólo no ha sido destruido sino que se erige como la fuerza más combativa de la oposición, con influencia creciente, en tanto la dictadura fascista está en franca descomposición. Se puede constatar también que ha sido la dictadura la que ha conducido al país al caos económico, mediante la aplicación de la política neo-monetarista de la escuela de Chicago y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Más del 30 % de la fuerza laboral está cesante y se ha reducido drásticamente el valor real de los salarios. Ha disminuido la producción destinada al mercado interno. Han bajado las ventas del comercio. La deuda externa, que en 1973 era inferior a 4 mil millones de dólares, es hoy de 23 mil millones. Durante el régimen fascista el país ha perdido alrededor de 40 mil millones de dólares sólo por la creciente diferencia entre el precio de los productos que le vende y el precio de los productos que le compra a los Estados Unidos y a otros países capitalistas industrializados. Chile carece hoy de la independencia que tenía durante el gobierno del presidente Allende. La crisis de estructura que lo afecta es ahora más aguda que nunca e impone la necesidad de transformaciones sustanciales en los más diversos órdenes de la vida nacional y, ante todo, en el carácter del Estado. Por tales motivos, nuestro Partido propicia un gobierno democrático avanzado, de amplia coalición, capaz de llevar adelante los cambios antiimperialistas y antioligárquicos que se precisan, democratizar todas las estructuras estatales, comprendidas las Fuerzas Armadas, reactivar la economía y encarar en forma resuelta la solución de los problemas del pueblo. Tal régimen sentaría las bases para la transición al socialismo.

Si a la dictadura le sucediera, en cambio, un régimen democrático de clara orientación burguesa, se trataría, claro está, de un progreso en relación al fascismo, pero ese régimen sería incapaz de sacar al país de la crisis, de resolver los problemas de fondo y ni siquiera de satisfacer las apremiantes necesidades de las masas. No obstante, le prestaríamos apoyo al gobierno que surgiera bajo tal signo en aquello que fuera claramente en interés del pueblo y del país. Al mismo tiempo, seguiríamos luchando en pos de cambios más profundos y de una democracia avanzada.

Salvador Allende hacía siempre una distinción interesante. Hablaba de enemigos y de adversarios, entendiendo por estos últimos a aquellos que sostenían posiciones discrepantes pero no antagónicas. Hoy los enemigos son Pinochet y su camarilla, que han pretendido y pretenden destruirnos, terminar con el comunismo y liquidar físicamente a los comunistas. Los adversarios, en la acepción de Salvador Allende, son personas con las cuales tenemos discrepancias y coincidencias. No comparten nuestra posición en favor del socialismo, pero con ellos nos unen objetivos comunes en lo inmediato y en el futuro mediano. Son fuerzas, en su mayoría progresistas, que luchan contra la

dictadura. Con muchos de los adversarios de este tipo marchamos de conjunto en favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo y por el más pronto retorno a la democracia. Con algunos de ellos, en los niveles oficiales, las relaciones no son tan buenas. Tenemos permanentemente contactos y discusiones respetuosas. Pero nos exigen imposibles. Quieren que desdibujemos nuestra línea política y nos convirtamos en furgón de cola de la Alianza Democrática[1] y de sus nuevos aliados de la derecha. Pública y privadamente nos conminan a renunciar a la violencia en la lucha contra la dictadura, a emplear sólo formas de lucha pacíficas, a poner en práctica no nuestra política sino la política que nos pretenden dictar otros partidos, ante todo la Democracia Cristiana. Además, nos piden submarinear porque, según ellos, la presencia del Partido Comunista en el primer plano y en todo momento sería con frecuencia un factor desfavorable para avanzar en el camino de la recuperación democrática.

Los comunistas creemos que la evolución más probable de los acontecimientos conducirá a un enfrentamiento decisivo entre el pueblo y la dictadura. «*Lo prevemos* –dice el Informe al Pleno del Comité Central de nuestro Partido (1985)– *como un levantamiento o sublevación de masas que involucre a toda la población, a la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales y ojalá también parte de las Fuerzas Armadas que estén contra la dictadura. Se trata de llegar a un estado de rebelión generalizada que logre la paralización real del país: alzamientos populares en los principales centros urbanos con la participación decidida del proletariado industrial, de los estudiantes, de las capas medias y del campesinado. Tales acciones se verían fortalecidas por golpes efectivos en apoyo a la paralización que ayuden a acelerar el desmoronamiento político-moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debiera ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país*»[2].

Por otra parte, hacen su camino tanto la movilización social que patrocina el Comando Nacional de Trabajadores como las ideas de la no-violencia activa y de la desobediencia civil, que han surgido del seno de los partidos que integran el Bloque Socialista[3] y la Alianza Democrática.

Cuenta también con un amplio respaldo en las filas opositoras el propósito de marchar hacia un Paro Nacional de todas las actividades y crearle a Pinochet una situación de ingobernabilidad del país. Se recuerda al efecto el movimiento civil que abarcó a toda la ciudadanía y que condujo a la caída de Ibáñez el 26 de julio de 1931. Muchos creen que se podría reeditar.

Nuestra tesis acerca de una probable sublevación y los planteamientos e ideas que acabamos de citar contienen, a nuestro juicio, los elementos principales que podrían configurar una vía en cierto modo original, no identificable esquemáticamente con la vía armada ni con la vía no armada. Se trata de una vía que en la práctica pueda resultar cercana a una u otra y ser más o menos violenta o más o menos pacífica, en dependencia de la amplitud del movimiento, de la decisión y capacidad combativa de las masas y de los cambios que se puedan producir en la conducta y mentalidad de las Fuerzas Armadas y en la actitud que éstas asuman en los momentos decisivos.

No hay muralla china entre unas y otras formas de lucha. No son antitéticas ni irreconciliables, sino complementarias. Nosotros hablamos de rebelión y de sublevación del pueblo; otros hablan de desobediencia civil y de ingobernabilidad del país. Podríamos preguntar, ¿dónde está la diferencia conceptual? Si la hay, es sólo de matices. Vemos en todos estos planteamientos una actitud de lucha frente a la dictadura y una posición revolucionaria. En alguna medida, los protagonistas del proceso social aprendemos los unos de los otros y recogemos y asimilamos lo que nace de la práctica de las masas.

El desenlace que tenga la situación será –creemos– aproximado a lo que hemos descrito, aunque no se puede descartar otras variantes. Lo que descartamos y consideramos ilusorio es concertar con Pinochet una apertura democrática. En cambio, no la vemos imposible con las Fuerzas Armadas, al margen del tirano.

El imperialismo norteamericano, que prohijó el golpe de Estado en 1973 en colusión con la reacción interna, vuelve a demostrar una gran inquietud por la marcha de los acontecimientos en Chile y, en especial, por la fuerza del Movimiento Democrático Popular y del Partido Comunista. Uno

de sus emisarios, Laghorne Motley, que estuvo en el país, a su regreso a Washington dijo muy orondo: «Chile está en buenas manos». Todo indica que la envergadura de las luchas de nuestro pueblo ha llevado la alarma al Departamento de Estado. Pero que nadie se engañe. El gobierno de Reagan está interviniendo para tratar de evitar una solución verdaderamente democrática, y no para otra cosa. El imperialismo quiere impedir una salida avanzada y contra ella prefiere un cambio superficial que deje a salvo sus intereses. Pero, mientras le sea posible, trabajará con Pinochet. Por lo demás, en vano se ilusionan los políticos de centro-derecha. El imperialismo cuenta con aliados y también con vasallos y peones, pero a estos últimos no los puede poner o sacar en cualquier momento. Instalar en Chile a un dictador a su servicio le costó tres años. Con el tiempo, la criatura se infló, le tomó el gusto al poder, no tiene destino fuera de él y ahora sólo el pueblo puede echarla.

Lo básico, lo central y decisivo es la lucha de las masas y la acción coordinada de todos las fuerzas opositoras. Es esta lucha y esta acción la que tiene a mal traer a la dictadura. Es el factor principal de la agudización de la profunda crisis en que se debate el régimen. Es y será lo fundamental para llevar al movimiento por el mejor camino, cualesquiera sean las situaciones que se puedan presentar en el futuro inmediato.

En su discurso a la memoria de Sverdlov, el 18 de marzo de 1919, Lenin afirmó categóricamente que sin la violencia revolucionaria el proletariado ruso no habría podido vencer, pero agregó, con tanto o mayor énfasis, que «la violencia revolucionaria sólo es un método necesario y legítimo de la revolución en determinadas etapas de su desarrollo, únicamente en condiciones especiales y determinadas, y que una característica mucho más profunda y permanente de esta revolución y condición de su triunfo, es y será siempre la organización de las masas proletarias, la organización de los trabajadores. Y esta organización de millones de trabajadores constituye el mejor ámbito de la revolución, la fuente más profunda de su victoria»[4].

Nosotros nos guiamos por estos principios, es decir, por considerar que lo más importante es el movimiento de masas y que el uso de la violencia y el grado y la oportunidad en que se practique dependen de las condiciones concretas. Esto significa que sin la lucha multitudinaria de las masas no se podría terminar con la tiranía y que la sublevación nacional que consideramos como lo más probable se hará realidad si surge objetivamente como la única salida y el pueblo la hace suya y se juega entero por ella.

La práctica de la lucha del pueblo de estos últimos años demuestra la justeza de estas formulaciones. Las jornadas de protesta que vienen realizándose desde mayo de 1983, las barricadas que en el curso de estas batallas se levantan en las poblaciones, los «apagones» en el servicio eléctrico a lo largo de la extensa red que cubre Chile, los ruidos de cacerolas y otros artefactos en días y horas predeterminados, los paros, las tomas de liceos o escuelas universitarias y los enfrentamientos callejeros con la policía, son formas de lucha que protagonizan centenares de miles y, en ocasiones, millones de personas. Si estas acciones las practican las masas en tal magnitud, es porque son de su propia creación, surgen en el curso mismo de la lucha y corresponden a su voluntad, sentimientos e intereses. La mayor parte de estas acciones derivan en duros enfrentamientos con las fuerzas represivas. Ocurre así, aunque muchas son de carácter pacífico o tienen un limitado componente de violencia. Para el régimen da lo mismo. Descarga la represión contra todas las manifestaciones de lucha, pacíficas o violentas. Los esbirros de la dictadura no permiten siquiera que la gente sepulte tranquilamente a sus muertos o visite sus tumbas y apalean y detienen hasta a personas que se manifiestan con un clavel o una vela en la mano, porque las flores y los cirios se han convertido en símbolos de la lucha por el derecho a la vida.

La disyuntiva a que se ve abocado cada hombre y mujer del pueblo no es la de elegir métodos violentos o métodos pacíficos, sino la de luchar o no luchar contra la tiranía.

Pasando por alto estas realidades tan evidentes, hay gente de oposición que sigue condenando la violencia «venga de donde venga». ¡Extraña posición, para decir lo menos! La mayor parte de los que hoy son enemigos a ultranza de la violencia apoyaron el golpe militar o guardaron absoluto silencio ante el baño de sangre y la feroz

represión que sufrió entonces el pueblo. En aquellos días y en los primeros años de dictadura, fuera de los partidos de izquierda, la única voz que se levantó fue la voz de la Iglesia Católica y de algunas figuras de la Democracia Cristiana, como Bernardo Leighton y Radomiro Tomic.

Los chilenos nos hemos vanagloriado de ser uno de los países que menos golpes de Estado han registrado en su historia y de haber llevado una vida republicana relativamente tranquila. Algo de verdad y mucho de mito hay en todo esto. Lo incuestionable es que la violencia ha estado presente, en mayor o menor grado, incluso bajo gobiernos democráticos. Basta recordar la «pacificación» a sangre y fuego de la Araucanía, el levantamiento de la Marina de Guerra en contra de Balmaceda y del antiguo ejército nacional, y el hecho de que la clase obrera ha sido objeto en Chile de persecuciones sistemáticas y de genocidios abyectos, desde la masacre de la Escuela Santa María hasta la matanza de El Salvador o Pampa Irigoin, pasando por las de Puerto Natales, Punta Arenas, San Gregorio, La Coruña, Ránquil, Plaza Bulnes, José María Caro y tantas otras. Colmando toda medida, el golpe fascista de septiembre de 1973 y el régimen dictatorial de Pinochet son los más brutales y sangrientos de la historia de América Latina.

Si nos atenemos a nuestra propia historia, la violencia casi siempre ha partido de las clases dominantes y hoy ocurre lo mismo. A despecho de esta realidad, hay gente que pone énfasis en criticar los actos que emanan de la justa ira del pueblo contra un régimen que lo hambrea y lo reprime.

La violencia es inherente a toda sociedad donde existen clases antagónicas. Las clases dominantes la suelen usar contra sus propios pueblos de la manera más brutal y despiadada para imponer sus intereses o contener los movimientos liberadores y luchas reivindicativas que amenacen sus privilegios y ganancias. Por su parte, los pueblos, en determinados momentos, se ven obligados a recurrir a la violencia cuando no encuentran otra forma de liberarse de sus opresores. Esto ha sido siempre así, desde los tiempos de Espartaco y aún antes, hasta nuestros días, pasando por la Revolución Francesa, la más importante de las revoluciones protagonizadas por la burguesía, y por la más trascendental de todas, la Revolución Socialista de Octubre.

¿Quién podría negar estos hechos? Y ¿quién puede defender o apoyar la violencia contra el pueblo y criticar a éste cuando recurre a ella contra un régimen fascista, sin demostrar que lo que en definitiva le importa no es la violencia en sí, sino la clase que la pone en práctica y la dirección en que la emplea?

Antes de que planteáramos el derecho del pueblo a rebelarse y la legitimidad del uso de múltiples métodos de lucha, se nos decía que para arribar al entendimiento de todas las fuerzas democráticas se precisaba que nosotros, comunistas chilenos, renunciáramos al leninismo —lo cual significa también renunciar al marxismo— y atacáramos a la Unión Soviética. Ahora se pone el acento en otra cosa. El asunto de la violencia o el empleo de diversas formas de lucha se señalan por parte de la oposición de centroderecha como obstáculos para el acuerdo con el Movimiento Democrático Popular y, particularmente, con los comunistas.

Es cierto que en estos asuntos tenemos diferencias. Las tenemos también en otros terrenos. Pero, de lo que se trata precisamente es de unirnos por sobre las diferencias para luchar juntos por la tarea principal de este momento, que es darle al país un régimen democrático.

Sigue siendo una verdad incuestionable lo que hemos venido reiteradamente planteando en el sentido de que se requiere terminar con las posiciones excluyentes, plasmar un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras, desde la izquierda a la derecha, y colocar en el primer plano la salida del tirano, partiendo de la base —asaz evidente para todos los que tienen ojos y quieren ver, y oídos y quieren escuchar— de que a Pinochet hay que echarlo.

El Movimiento Democrático Popular representa a los sectores más avanzados y combativos de la izquierda chilena, y ninguna fórmula de salida tendrá el apoyo de masas necesario y la fuerza suficiente sin que él esté presente.

La política de exclusión del Partido Comunista y sus aliados más cercanos choca contra la voluntad y los intereses del pueblo. Por eso no prospera en la base social; al revés, allí se abre paso la unidad más amplia. Esta unidad

surge por doquier: en las poblaciones, en los sindicatos, en las universidades y liceos, entre los escritores y artistas, en los colegios profesionales y en muchos otros campos. Un gran ejemplo ha vuelto a dar la juventud, cuyas organizaciones políticas pertenecientes a los partidos del Movimiento Democrático Popular, del Bloque Socialista y de la Alianza Democrática suscribieron un acuerdo de acción común que es a la vez un llamado a la unidad de todas las fuerzas democráticas y antidictatoriales.

La Alianza Democrática está bajo la presión de un ala de la derecha que se vincula a ella imponiéndole tributos reaccionarios. La política de exclusiones es uno de ellos. Pero, en el seno de dicha Alianza hay también un considerable sector que está por el entendimiento con toda la izquierda. Por ejemplo, el Partido Radical, en su Convención (1985), aprobó un voto que establecía un plazo para que se aplicara una política de unidad sin exclusiones en el Frente Cívico que estaba entonces por formarse. A poco andar, se constituyó el llamado grupo de los 11 —de hecho, un frente cívico— con exclusión de los partidos del MDP y otros. Mucho antes, en declaraciones a la prensa, el dirigente socialista Ricardo Lagos (del partido que encabeza Carlos Briones) afirmó tajantemente que si la Alianza Democrática se reunía con el Partido Nacional, al día siguiente lo haría con el Partido Comunista. Como se sabe, la Alianza Democrática se ha reunido y concertado no sólo con el Partido Nacional sino también con el MUN, que está más a la derecha, y con personajes tan reaccionarios como Francisco Bulnes. La anunciada reunión con los comunistas quedó, en cambio, para las calendas griegas. Citamos hechos objetivos. No emitimos juicios u opiniones sobre los partidos o personas cuyas decisiones o declaraciones hemos recordado. Más aún, creemos que esos partidos o personas han sido sinceros en sus propósitos, que deben estar preocupados porque las cosas salieron de otra manera y probablemente se orientan a insistir en sus puntos de vista.

Los partidos de izquierda se han pronunciado en pro del entendimiento y de la acción común de todas las fuerzas opositoras. Lo mismo han hecho el Partido Humanista y las personalidades sin partido que integran la Intransigencia

Democrática. Es más que previsible que la evolución de los acontecimientos conduzca a los partidos de izquierda y a todos los que están por la unidad sin exclusiones a fortalecer y desarrollar sus contactos entre sí, aumentando con ello su gravitación en la búsqueda de ese acuerdo.

¡Que magníficas lecciones dio nuestro pueblo en las jornadas de septiembre del año 1985! Recapitulemos los hechos. El Comando Nacional de Trabajadores había acordado llamar a una nueva Jornada de Protesta para el día 4. El día 26 de agosto se dio a conocer ampliamente el «Acuerdo para la Transición a la Plena Democracia». Es un documento que contiene demandas políticas muy sentidas por las masas y, a la vez, le quita el cuerpo a lo principal, la salida inmediata de Pinochet, ignora las reivindicaciones de los trabajadores, aborda el problema de la propiedad con criterio burgués y rehuye definiciones sobre otros asuntos fundamentales. En razón de sus virtudes y del anhelo general de buscar una pronta salida a la situación, dicho documento despertó algunas ilusiones en vastos sectores de la pequeña y mediana burguesía, que pensaban que bastaría con lo logrado para iniciar el camino triunfal hacia la democracia. Los cables de casi todas las agencias de noticias informaron de la euforia que reinaba en destacados dirigentes de la oposición de centro-derecha. El Departamento de Estado norteamericano dio su bendición al acuerdo concertado. El Cardenal Fresno dio gracias a Dios y a los dirigentes de los 11 partidos por el entendimiento al que habían arribado, y llamó al pueblo a no participar en la protesta del 4 de septiembre. La Alianza Democrática hizo un llamado sólo para que en esta jornada se recogieran firmas de adhesión a dicho acuerdo, dando a la vez la voz de orden en el sentido de que a las 2 de la tarde todo el mundo se retirara a sus domicilios. Lo que pasó, ya se sabe. La vida siguió otro curso. La jornada del 4 de septiembre se transformó en la más grande de todas las protestas habidas, en la más grande movilización combativa que haya tenido lugar en los años de dictadura.

Es un alto mérito del Movimiento Democrático Popular el hecho de haberse decidido por una posición firme y clara, sin perder de vista al enemigo principal. El MDP no adhirió al documento de los 11 partidos por los vacíos e insu-

ficiencias que contiene. Pero no se cruzó en el camino de quienes lo firmaron y siguió y sigue buscando la acción común con todos ellos. Tal actitud ayudó a que en la protesta del 4 de septiembre confluyeran las fuerzas opositoras de todas las tendencias y de las diversas capas sociales del pueblo.

Un papel relevante juega el Comando Nacional de Trabajadores, la instancia sindical más representativa, pluralista y unitaria. Es de justicia destacar la conducta de su dirección, que no se dejó arrastrar a la pasividad en las protestas de septiembre y puso en primer plano los intereses de los que viven de un sueldo o de un salario.

Concluyamos con un reconocimiento honesto. Las diferencias en torno al problema de la violencia no tienen que ver con preceptos morales o principios humanistas que, creemos, compartimos todas las corrientes democráticas. Fundamentalmente, tienen que ver con el carácter de clase de los diversos proyectos políticos que sustentan las fuerzas opositoras. Estos son varios. El Movimiento Democrático Popular, en una firme posición revolucionaria propicia un régimen democrático avanzado con vista al socialismo, el Bloque Socialista está por un régimen democrático de orientación socialista y la Alianza Democrática como tal postula un régimen democrático de tipo burgués más o menos progresista, en tanto que entre las fuerzas de derecha que recientemente se han incorporado al grupo de los 11, hay quienes no hacen misterio de que están por la proscripción del Partido Comunista y de sus aliados, determinando así el carácter claramente antidemocrático de su proyecto político.

La forma en que termine la tiranía y los métodos que se empleen en la lucha por acabar con ella tienen directa relación con la posibilidad de plasmarse uno u otro de los mencionados proyectos o, dicho de otro modo, con el carácter, profundidad y trascendencia de la salida. En la prensa de Europa occidental se asimila el proyecto del grupo de los 11 a una salida «moderada» y «ordenada». No es una apreciación gratuita, pues corresponde al contenido de esa iniciativa y a las propias declaraciones de los dirigentes políticos chilenos de centro-derecha. Pero no es la única salida posible. Por nuestra parte, hemos dicho que

el camino del enfrentamiento es el más corto para terminar con la tiranía y es el que ofrece las mejores posibilidades para que, tras la derrota del fascismo, el país entre a un período de profundos cambios en la estructura del Estado y en todos los aspectos.

El preciso reconocer también que en el seno de la oposición se desarrolla una pugna por la hegemonía, por la primacía de la burguesía –y al fin de cuentas de la oligarquía financiera– o del proletariado y las capas medias en la dirección del movimiento social y en los destinos de Chile. Las diferencias en torno a proyectos políticos y a cuanto nos hemos venido refiriendo, en particular a la cuestión de la violencia y al uso de las más diversas formas de lucha, no son sino reflejos de esa pugna.

El Informe a la Conferencia Nacional de nuestro Partido se refiere a este problema en los siguientes términos: *«La pugna por la hegemonía en el movimiento social y político es un hecho objetivo e inevitable. Ella no puede resolverse, no tiene solución mediante el enfrentamiento de las fuerzas que disputan la primacía, sino a través de una lucha común contra el enemigo común y de la confrontación en la práctica de las posiciones de cada cual. El pueblo es y debe ser, en esto y en todo, el supremo juez».*

La cuestión capital que está planteada ante la oposición es la siguiente: ¿Debemos buscar un proyecto común y tácticas comunes para terminar con el régimen de Pinochet y elaborar de conjunto las tareas del gobierno provisional que suceda a la tiranía o, por el contrario, seguimos como hoy bregando cada cual por su propio proyecto y a su manera, sin perjuicio de los entendimientos ocasionales?

Los comunistas nos pronunciamos decididamente por buscar un proyecto común y tácticas comunes, aunque sólo sea para terminar con la dictadura, en el entendido, claro está, de que cada cual tiene derecho a mantener lo que es de su propia esencia.

La proposición hecha por el Comité Central de nuestro Partido en la carta a Gabriel Valdés[5], en el sentido de configurar de conjunto una vía concreta que logre poner fin a la dictadura y al fascismo, es una proposición sensata y realista, teniendo en cuenta lo mucho que hay en común entre todas las fuerzas opositoras, exceptuando a la ultra-

derecha. La plataforma del Comando Nacional de Trabajadores surgida en la Asamblea de más de mil dirigentes sindicales que se realizó en agosto de 1985 puede ser la base del entendimiento de todas las fuerzas democráticas. Como se expresa en la carta del 6 de septiembre que nuestro Partido le dirigió al Cardenal Fresno, las medidas inmediatas que contiene el documento de los 11, más otras que consideran también los gravísimos niveles de miseria, hambre y cesantía que sufren los sectores más modestos, podrían convertirse en objetivos para la acción común por la que venimos abogando.

Andrés Zaldívar[6] ha declarado a la revista «APSI» que «los dictadores buscan mantenerse en el poder por toda su vida. Y su poder sólo termina cuando Dios se acuerda de los pueblos y se los lleva o cuando los mismos pueblos los echan. Para esto existen dos caminos: o se enfrenta al dictador por la vía armada o se los enfrenta por medio de la movilización y la desobediencia que se traduce en presión social». Esta es una opinión interesante, que se podría discutir y precisar más, con vista a un entendimiento. Es importante, además, porque Andrés Zaldívar parte de la convicción de que Pinochet no se irá por su propia voluntad y concibe la movilización social y la desobediencia civil como una suerte de enfrentamiento al régimen, como «un proceso permanente y creciente de presión».

De no llegarse a un pronto entendimiento entre todas las fuerzas democráticas, manteniendo cada cual inamovible su propio proyecto y sin ceder en esto y en nada, se corre el riesgo de desaprovechar el momento actual, tan propicio para darle golpes contundentes a la dictadura y ponerla «en capilla».

Algunos piensan que el país podría terminar con la tiranía sin esta necesaria concertación. Sí, esto es posible. Los sufrimientos del pueblo, el hambre y la miseria que padecen millones de chilenos, la sed de justicia y el odio contra la tiranía, han convertido al país en un volcán. Son múltiples los signos indicativos de que puede producirse una gran explosión social. De otro lado, se mueven desesperadamente los sectores que están por una salida «moderada» y «ordenada» y, en el seno de las Fuerzas Armadas, que constituyen virtualmente el último sostén del régimen, está

en desarrollo un acelerado proceso de descrédito del dictador. Pero, de cualquier modo, seguirá planteada la necesidad de un acuerdo de las más amplias fuerzas democráticas, porque la situación de hoy y de mañana sería inmanejable si prevaleciera la dispersión.

Los comunistas chilenos, cualesquiera sean las vicisitudes de la vida y los sacrificios que la lucha nos imponga, continuaremos en la primera línea de batalla enfrentando a la dictadura fascista por todos los medios y con entera decisión, junto a las masas y en estrecha ligazón con nuestros aliados. Al mismo tiempo, como parte de esta lucha, seguiremos defendiendo nuestros principios, nuestra línea de clase y nuestra política de lucha y de unidad de todas las fuerzas democráticas contra la tiranía.

Esta política tiene como norte exclusivo el interés del pueblo. En este interés, estamos por un régimen de respeto a los derechos humanos, que erradique el fascismo y las prácticas de la tortura y el crimen político. Lo que buscamos es un régimen democrático bajo el cual el pueblo determine soberanamente los destinos de la patria. Somos el partido más consecuentemente democrático, en el pensamiento y en los hechos. Queremos entendernos con todas las corrientes progresistas para trabajar en conjunto con la mayor eficiencia a fin de hacer realidad lo antes posible el anhelo de eliminar la dictadura.

En manos del pueblo, pero sobre todo de la clase obrera, está la posibilidad de que los acontecimientos se desarrollen por el mejor camino. Si este camino desemboca en un régimen democrático avanzado, el Partido Comunista seguirá sosteniendo su política en favor de la más amplia alianza de las fuerzas sociales, sin exclusión de ningún sector progresista, porque las transformaciones que Chile requiere necesitan de la participación y de la lucha conjunta de la mayoría ciudadana.

Revista Internacional, Nº 1 de 1986

[1] Integran la Alianza Democrática el Partido Demócrata Cristiano, la Derecha Republicana, el Partido Socialdemócrata, el Partido Radical, un sector del antiguo Partido Socialista y el Movimiento Liberal. *–N. de la Red.*

[2] *Partido Comunista de Chile. –Boletín del Exterior*, 1985, Nº 71 (extraordinario), p. 37.
[3] Forman parte del Bloque Socialista: el sector del antiguo Partido Socialista que integra a la vez la Alianza Democrática, la Izquierda Cristiana, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y un sector del MAPU Obrero-Campesino. *–N. de la Red.*
[4] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XXX, p. 429.
[5] Presidente del Partido Demócrata Cristiano y de la Alianza Democrática. *–N. de la Red.*
[6] Dirigente del PDC; desde diciembre de 1982 presidente de la Internacional Demócrata Cristiana. *–N. de la Red.*

Victoria de la lucha y de la unidad

Eduardo VIERA,
miembro del Comité Ejecutivo
del CC del Partido Comunista del Uruguay (PCU)

Dos hechos fundamentales resaltan de los resultados de las elecciones generales del 25 de noviembre en el Uruguay: en primer lugar, la derrota de la dictadura que se había instalado a raíz del golpe de estado de 1973; en segundo lugar, el importante avance del Frente Amplio, antioligárquico y antimperialista, lo que abre amplias perspectivas para el ulterior avance del proceso socio-político.

La dictadura fue derrotada por una vía muy peculiar, pocas veces vista en la historia; en las elecciones que ella misma tuvo que organizar, el pueblo votó masivamente por el retorno a un régimen democrático, a un gobierno constitucional, por el retorno y el respeto a las libertades públicas. Es el resultado de 11 años de resistencia y combativas luchas. Se instalan las nuevas Cámaras Legislativas –Senadores y Diputados–, con una decisiva mayoría de representantes de los sectores opositores, y asume el Presidente electo por el pueblo.

Los mandos militares vuelven a los cuarteles. Se cumple un gran objetivo estratégico: terminó la dura y negra etapa del terror y del intento de institucionalizar un Estado fascista en el Uruguay. Se abre una nueva etapa, que no estará exenta de problemas, de luchas sociales y democráticas, ante todo para acabar con las excrecencias legadas por el régimen; pero será en el terreno de la vigencia de la Constitución, de la presencia de las organizaciones populares, sindicales, gremiales, de la acción pública y legal de las fuerzas políticas y sus órganos de expresión.

Una vez más constatamos que no nos son indiferentes las formas del Estado; el pueblo uruguayo ha hecho una

dura y amarga experiencia que no debe olvidar, que no olvidará por mucho tiempo.

El régimen dictatorial no abandonó el poder por su propia voluntad; por el contrario, maniobró hasta último momento amenazando, golpeando a la oposición, buscando dividirla. Procuró imponer una salida condicionada hacia una llamada democracia «tutelada» por las Fuerzas Armadas. Hasta último momento, pocos meses antes de las elecciones, mantuvo la censura de prensa y la prohibición de las actividades públicas. Dirigió sus golpes particularmente contra los comunistas –como lo hizo a lo largo de los 11 años–, contra el movimiento obrero, contra el Frente Amplio, pero también contra todos los demócratas. El día de las elecciones seguían en la cárcel unos 500 presos políticos y sindicales, unos 1.200 exiliados estaban impedidos de retornar al país, unos 5.000 ciudadanos –la inmensa mayoría de ellos comunistas– tenían proscriptos sus derechos cívicos y no pudieron votar ni ser votados.

Provocativamente el régimen mantuvo en la cárcel, y no permitió que fuera candidato en las elecciones, al líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate –a quien liberó 5 días después–, al igual que no permitió la candidatura del General Líber Seregni, Presidente del Frente Amplio. El Partido Comunista y otros grupos de izquierda seguían ilegalizados y sus dirigentes no pudieron ser candidatos.

El sector fascista de los mandos militares buscó condicionar las elecciones y el funcionamiento del gobierno democrático dejando la herencia envenenada de problemas sociales, económicos y también políticos –la ley sindical, la ley de los Partidos, destitución de trabajadores y funcionarios, diversas otras consecuencias de la represión, e incluso la posibilidad de declarar «estado de emergencia» y pasar en ese caso a los civiles a la justicia militar–, disposiciones que habrá que eliminar de la vida nacional y que requieren que se mantenga activo y vigilante ese amplísimo movimiento popular y democrático que fue creciendo a lo largo de estos años, y que la concertación de fuerzas que derrotó a la dictadura sea ahora una herramienta para que la democracia se transforme en realidad.

No faltó en las elecciones el conocido abuso de los medios de comunicación de masa, la campaña ideológica y

propagandística contra los comunistas y el Frente Amplio, con activa participación de los voceros del régimen. Incluso, a último momento, la Conferencia Episcopal Uruguaya llamó a no votar a los marxistas. No cabe duda que todo esto, en algunos aspectos, incidió en el resultado final.

Pero con todo, hay que subrayar que el pueblo uruguayo y las fuerzas políticas democráticas supieron utilizar las brechas abiertas en el andamiaje fascista, supieron enfrentar y superar la mayor parte de las trampas, hubo reservas en la conciencia popular como para sobreponerse a la dura campaña ideológica de los sectores fascistas, como para hacer de las elecciones un medio y un instrumento para terminar con el régimen.

Se confirmó plenamente la valoración hecha por el Partido Comunista en el año 1983, cuando decíamos que en el Uruguay se vive un nuevo momento político, que «se han creado las premisas objetivas y subjetivas para derrotar definitivamente a la dictadura»[1]. Las fuerzas opositoras veían y rechazaban las intenciones continuistas contenidas en el llamado «cronograma» de los mandos militares, que era, en esencia, el intento de perpetuarse en el poder, de aquietar a la oposición y desmovilizar al pueblo ante las promesas de lo que quisiera conceder el régimen; intentaron un «diálogo» con los Partidos permitidos, para que éstos aceptaran sustanciales modificaciones en la Constitución, la institucionalización de las medidas de carácter fascista que habían ido decretando a lo largo del decenio de dictadura.

No cabían expectativas ni eran admisibles desmovilizaciones, ante ese plan del fascismo.

El resonante fracaso de la dictadura en el plebiscito constitucional que organizó en 1980, marcó un punto de viraje en la derrota de su «cronograma». A partir de ahí fue creciendo la movilidad política, la presencia pública de las fuerzas sociales. En 1983 ésta se hizo particularmente notable: comenzó con la histórica concentración del 1º de mayo, marcando la presencia real de la clase obrera; y culminó ese año con el gigantesco acto de concertación de todas las fuerzas políticas el 27 de noviembre.

En 1984 se ganaron nuevos y mayores espacios de acción y de lucha popular. En enero el movimiento obrero realizó

su primer paro general, después de muchos años; el 27 de junio el país entero participó en el Paro Cívico Nacional; el acto del 1º de mayo duplicó, por su magnitud, el del año anterior. A lo largo del año fue incesante la lucha por soluciones económicas inmediatas, por la recuperación del poder adquisitivo de salarios e ingresos, por los derechos a la sindicalización; las protestas populares, masivas, nacionales, explotaban espontáneamente ante cada amenaza, ante cada intento de imponer sus criterios por parte de los jerarcas del régimen y sus adeptos.

Las brechas abiertas en el andamiaje dictatorial, el aislamiento interno del régimen y la amplia solidaridad internacional, se aunaron para dar sus primeros frutos: en marzo fueron arrancados de la cárcel José Luis Massera y el General Líber Seregni, dos presos emblemáticos. En ese mismo mes de marzo el Frente Amplio realizó su primer gran concentración pública, en una plaza céntrica de Montevideo, con la presencia de sus líderes recién liberados; fue, en los hechos, su autolegalización.

La aparición pública del Frente Amplio, su actitud, su concepción unitaria y la influencia de su militancia –eje de la movilización popular– impulsó la definición formal de la concertación de las fuerzas políticas opositoras en la Multipartidaria[2]. Con la incorporación de los sectores sociales más importantes –la central obrera Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), los estudiantes, las cooperativas, gremiales empresariales–, la concertación se extendió a una Intersectorial, en la que se coordinaron y acordaron mayores niveles de protesta y de exigencia ante la dictadura.

Fue la materialización y la confirmación de nuestra línea, la que el Partido Comunista fundamentó y lanzó poco después que se instaló la dictadura, una línea en la cual coincidió plenamente con el General Seregni: necesidad de combinar la máxima amplitud para derrotar al régimen, con el avance en profundidad en el seno de las masas. Amplitud en la batalla por la máxima convergencia o concertación de las fuerzas opositoras; al mismo tiempo, profundidad en el avance del movimiento social y en la unidad de las fuerzas de izquierda en el Frente Amplio. Esto supuso la continuidad, dentro y fuera del país, de las herramientas históricas del proceso revolucionario uruguayo: la central obrera unitaria, hoy PIT-CNT, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública – Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (ASCEEP – FEUU), el Frente Amplio, el Partido Comunista; en fin, la gama del sistema de organizaciones de masas.

En julio de 1984 se reinició el contacto entre los mandos militares y la Multipartidaria, pero en otras condiciones. Ahora ya no se trataba de un diálogo «limitado» sino de negociaciones entre dos fuerzas: las políticas, apoyadas en la activa movilización de la mayoría abrumadora del país; las militares, disponiendo de las armas y el aparato represivo. La alternativa a estas conversaciones, si fracasaban, hubiese significado la continuidad del régimen, y la posibilidad de llegar a situaciones que costaran mucho más dolor y sufrimientos de los que ya había costado ese largo decenio al país entero.

Hubo acuerdos básicos, exigidos por la Multipartidaria, a instancias del Frente Amplio, que abrieron paso a una salida política. Los mandos militares, sin conceder todo, tuvieron que ir cediendo ante la presión de las movilizaciones, que iban creciendo, y la unidad del frente opositor.

En agosto de 1984 levantaron la ilegalización del grueso del Frente Amplio y desproscribieron a parte de sus dirigentes; pero mantuvieron la ilegalización del Partido Comunista, y otros sectores políticos, y la proscripción de miles de sus dirigentes y militantes, entre ellos al General Líber Seregni. Se acordó que liberarían a presos políticos y sindicales; entre agosto y octubre más de 200 salieron de la cárcel, entre ellos héroes de la patria, vencedores de las torturas como Jaime Pérez, Jorge Mazarovich, Rosario Pietrarroia, el General Víctor Licandro, los Coroneles Carlos Zufriategui y Hugo Frigerio. Pudieron retornar cientos de exiliados, entre ellos el Dr. Hugo Villar –dirigente del Frente Amplio–, Rodney Arismendi y Enrique Rodríguez –Secretarios del Partido Comunista–, valiosas figuras artísticas y culturales. Finalmente, levantaron la prohibición a las actividades políticas públicas y la censura a los medios de comunicación de masas.

Nada de esto fue un regalo ni una concesión gratuita; todo tuvo que ser conquistado con la decidida y decisiva

participación y movilización popular. Nada fue fácil; la táctica a emplear, lograr la concertación opositora y al mismo tiempo mantener la independencia indispensable del movimiento obrero, los temas a negociar, los acuerdos mínimos y hasta dónde conceder, todo fue discutido buscando un equilibrio entre lo que era factible y lo que no podía cederse. Negociaciones con movilización y logros, esa fue la táctica que se impuso y que triunfó.

En estas condiciones es que se acordó ir a las elecciones, que sin ser totalmente democráticas, permitían un nivel mínimamente aceptable de participación popular; ya no eran las elecciones concebidas en el marco del «cronograma» y de los planes de los mandos militares; eran las elecciones conquistadas por las movilizaciones populares para derrotar definitivamente el nefasto régimen dictatorial y abrir paso a un nuevo período en la vida política del país.

Y así como masas humanas, cientos de miles de ciudadanos festejaron cada preso liberado, cada retorno de los exiliados, así festejaron y se prepararon para triunfar en el acto electoral.

Las cifras electorales muestran como vencedor al Partido Colorado, con el 40,2 % de los votos a nivel nacional; le siguen el Partido Nacional, con el 34,2 % y el Frente Amplio con el 21,2 %.

Es contundente la derrota a nivel nacional de los sectores ultraderechistas de ambos Partidos tradicionales. En las anteriores elecciones, las de 1971, el sector que apoyó a Bordaberry en el Partido Colorado —sector que participó en el golpe de estado después— obtuvo el 22,8 % del total de votos, y su candidato fue electo Presidente de la República. En el Partido Nacional, el sector que apoyó al General Aguerrondo —estrechamente vinculado a los mandos militares golpistas— obtuvo el 13,7 % del total de los votos. Entre ambos, estos sectores sumaron más de 600.000 votos, el 36,5 % del electorado nacional.

En estas elecciones, las de 1984, entre ambos sectores suman el 11 % del electorado nacional: la ultraderecha es la gran derrotada. Se suma a ello el total fracaso del intento de formar un nuevo partido, el llamado «partido del proceso».

Dentro del Partido Colorado, más del 75 % de los votos se volcaron hacia los sectores que apoyaron la candidatura de Julio María Sanguinetti, opositor al régimen dictatorial, nuevo Presidente de la República.

Llega al gobierno habiendo asumido compromisos ante toda la ciudadanía. Pocos días antes de las elecciones suscribió, en conjunto con todos los candidatos presidenciales de las otras 3 principales fuerzas políticas, un documento de Concertación Nacional Programática en el que, al tiempo que recuerdan que «la acción coordinada de los Partidos Políticos y las fuerzas sociales constituyó un hito fundamental en la lucha de nuestro pueblo contra la dictadura militar», afirman que «el objetivo central de esta lucha ha sido la reinstitucionalización del país y la construcción de una sociedad democrática, cimentada en la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto mutuo»[3]. Una vez electo, reafirmó las intenciones de procurar un gobierno de unidad nacional para sacar al país de la profunda crisis que se hereda; su sector político dijo ser partidario de una amnistía, aunque limitada, complementada con el indulto y la gracia.

Sin embargo, si bien el Partido Colorado hizo críticas al modelo económico aplicado por la dictadura, propone una política económica que significa, en los hechos, mantener la apertura al dominio del capital financiero. A lo largo de estos años de oposición al régimen, no siempre ha aprobado las movilizaciones populares; en relación al movimiento sindical, ha intentado difundir la idea de un acuerdo o pacto social, en esencia desmovilizador.

El nuevo gobierno hereda una difícil crisis, agravada por el predominio de la especulación financiera y la agresiva política de explotación por parte del imperialismo estadounidense; la actividad productiva está en retroceso, la desocupación ha crecido a niveles pocas veces antes conocidos, el ingreso de los sectores populares está en sus más bajos niveles; el déficit presupuestal —en el cual pesa el costo del aparato represivo—, el endeudamiento de los empresarios nacionales y la inflada deuda externa, son problemas que exigen medidas inmediatas.

Nada de esto tiene soluciones fáciles; pero también hay clara conciencia en el país que si no se empiezan a resol-

ver –y no a costa de un mayor sacrificio por parte de los trabajadores y el pueblo–, los inevitables enfrentamientos sociales pueden estallar en conflictos mayores.

A muy corto plazo el gobierno tendrá que definirse ante las presiones de la banca internacional y del Fondo Monetario, ante sus exigencias de pago de la deuda y sus altísimos intereses, ante sus exigencias de hacerlo en base a una política económica recesiva, que castiga los ingresos de la población, que se contradice con toda promesa de reactivación productiva y de reconstrucción de la vida democrática del país.

Lo acordado en la Concertación Nacional Programática es un punto de partida mínimo, aunque no hubo acuerdo sobre aspectos significativos, tales como el nivel y ritmo de recuperación del ingreso de los trabajadores, la relación con el FMI, la legislación en materia educativa, el alcance de la amnistía y otros. En esencia, y hay que subrayarlo, salvo los golpistas y sectores fascistas, nadie quiere crear más dificultades de las que el país ya tiene. Pero está claro que los acontecimientos dependerán, por una parte, de la actitud del gobierno ante las presiones y el juego de intereses de la oligarquía y el imperialismo, del carácter de las medidas concretas que adopte –o no– para hacer frente a los más urgentes problemas económicos y sociales, de su actitud ante el movimiento sindical y popular.

Pero lo esencial, junto a la concertación de fuerzas para estabilizar la democracia y pacificar el país, será el impulso que le impriman a la vida nacional las luchas de un movimiento de masas independiente y la acción del Frente Amplio, defendiendo las reivindicaciones inmediatas y soluciones a la crisis, en el marco de un programa de cambios de fondo.

Quedó claro, a lo largo de estos años, la necesidad y la importancia que tienen el que el movimiento obrero y popular mantengan su independencia de acción, que no esperen pasivos lo que se les quiera conceder. La activa participación de masas populares, vertebrada en torno a la resistencia y *lucha* del movimiento obrero, a la reconstrucción del movimiento sindical, fue un factor de primera importancia en la imposición de una salida política, en la derrota de la dictadura; su activa participación será ahora un factor positivo para vigilar y exigir que se encaminen medidas que resuelvan los problemas de los sectores populares en lo económico, en lo social y en lo político.

Los resultados electorales son contundentes; la etapa democrática que se abre debe ser sin retorno para los sectores reaccionarios y el aparato represivo aun enquistados en la vida nacional.

Es particularmente importante el avance del Frente Amplio en estas elecciones, en relación a las de 1971, las primeras y únicas en las que había podido participar.

El electorado del Frente Amplio creció en un 36 % a nivel nacional; fue la única gran fuerza política que aumentó su porcentaje en el total de votos[4].

En la capital, Montevideo, donde vive casi la mitad de la población del país y está concentrado el grueso de los trabajadores industriales, el Frente Amplio obtuvo el 34 % de los votos, creció en un 40 % respecto a 1971; se reafirmó su arraigo en los barrios obreros –en algunos de ellos obtuvo cerca del 50 % de los votos–, en el estudiantado, en la intelectualidad. A pesar de los miles de proscriptos que no pudieron votar, el Frente Amplio hubiera ganado la Intendencia de Montevideo, si no fuera que se ordenó a los miembros de las Fuerzas Armadas que se inscribieran y votaran en las mesas electorales de la capital.

Formalizado orgánicamente en febrero de 1971, ilegalizado en 1973, después de años de haber sufrido los frentistas el permanente hostigamiento, la persecución, el exilio, enfrentando una dura y sucia campaña ideológica de calumnias, el Frente Amplio reapareció públicamente con la fuerza y la pujanza que sólo puede dar el profundo arraigo de su programa y de sus objetivos antioligárquicos y antimperialistas, mostrando que no es una alianza transitoria con fines electoralistas sino una firme opción de gobierno, que rompe con el bipartidismo que durante muchos años impusieron los Partidos tradicionales. Al mismo tiempo, en pocos meses se reconstruyeron sus muchos centenares de Comités de Base.

Los comunistas no nos equivocamos cuando tenazmente defendimos la vigencia del Frente Amplio, fuerza política

real, unitaria y unificadora, opción programática estratégica en esta etapa —que no será corta— de nuestra lucha de liberación nacional y social.

Sin abdicar de ninguno de sus principios, de su programa de profundas transformaciones estructurales, el Frente Amplio propuso nuevamente, como ya lo había hecho en 1973, la idea táctica de «paz para los cambios y cambios para la paz».

Se integró públicamente a la Concertación, a la Multipartidaria, a la Intersectorial. Los mandos militares tuvieron que aceptar en la mesa de negociaciones a una fuerza política que se habían propuesto borrar de la vida del país, que habían buscado dividir y fraccionar.

Recién cuatro meses antes de las elecciones el régimen legalizó a algunos de sus Partidos y organizaciones, desproscribió a parte de sus dirigentes y militantes. Pero el Frente como un todo —los legales y los entonces aún ilegales, los proscriptos y los desproscriptos— se lanzó a la actividad política legal, a la lucha electoral.

El Frente Amplio sale de este proceso con mayor prestigio y fuerzas; ha crecido en cantidad de militantes, de votos, de representantes parlamentarios y en los gobiernos municipales. Su programa, su táctica y su organización es patrimonio de masas, se ha verificado en la dura prueba de estos años, se ha enriquecido en la experiencia de la lucha en la que participaron centenares de miles.

La dictadura ha fracasado en su modelo político, económico y social. El Frente Amplio es cada vez más la alternativa democrática, de cambios profundos, de una política independiente, antioligárquica y antimperialista para asentar soluciones a la larga crisis que sufre el país.

Los comunistas hemos estado permanentemente en la primera fila de todas estas luchas, en cada paso y en cada alternativa de este proceso. Hemos pagado un alto precio de mártires, desaparecidos, de miles de torturados y exiliados; en las elecciones no pudimos actuar legalmente, con nuestros propios y conocidos candidatos, con nuestros propios locales. Pero en ningún momento nos pudieron borrar de la vida del país. Ni un día abandonamos la resistencia a la dictadura.

Mientras haya clase obrera habrá comunistas, afirmó

Jaime Pérez, secretario del Partido, en momentos en que se desataba —en 1972— la guerra interna contra el pueblo; a lo largo de estos años los comunistas fueron inseparables de la clase obrera, estuvieron presentes en cada una de sus luchas —las pequeñas y las grandes—, promovieron la continuidad y el renacimiento del movimiento sindical clasista, independiente, unitario, combativo, en sus formas legales, semilegales y clandestinas, en lo que es hoy el PIT-CNT, renovación y a la vez continuidad histórica de la organización y de las experiencias de las luchas obreras.

El movimiento obrero uruguayo sigue estando hoy en la vanguardia de las luchas sociales de su pueblo.

Los jóvenes comunistas han estado activamente presentes en la reconstrucción del movimiento estudiantil, en la renovación de la clásica consigna de «¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante!».

Nos integramos en las elecciones a todos los niveles de la organización y del trabajo del Frente Amplio, en el apoyo a su programa y a sus candidatos comunes para Presidente e Intendentes. Al mismo tiempo, dentro del Frente, los comunistas volcamos nuestro apoyo a las candidaturas parlamentarias y municipales de una coalición de activos militantes sindicales, estudiantiles, intelectuales y personalidades políticas que propuso —a partir de la base común del programa inmediato del Frente Amplio— medidas que abrieran paso a una democracia avanzada (que es su consigna de identificación). La joven coalición «Por una Democracia Avanzada» —formada en poco más de un mes— recibió el 28 % de los votos del Frente Amplio, 2 de sus 6 senadores (de un total de 30 para el país), 4 de sus 21 diputados (de un total de 99 para el país). Contra Democracia Avanzada se volcó el grueso de la campaña anticomunista, de todos los medios de comunicación de masa, con la directa intervención de los mandos militares —con el tema del terror—, y con el apoyo de los sectores derechistas de los Partidos tradicionales —insinuando y propagandeando la necesidad de las salidas menos radicales, más «realistas», y tratando infructuosamente de dividir al Frente Amplio. Pero no lograron aislarla, Democracia Avanzada es hoy una fuerza real, parte indisoluble del

gran triunfo del Frente Amplio sobre 11 años de dictadura.

Ni lograron aislar a los comunistas. Integrantes del Frente Amplio –desde su forja y nacimiento–, partícipes de primera fila en la dura lucha de estos años, somos parte de este triunfo popular. Quisieron borrar al Partido Comunista por 50 años del Uruguay; hoy está vivo y presente, Partido de la clase obrera para toda la sociedad. Sale herido y golpeado, pero con nuevas fuerzas y, por sobre todo, plenamente unido en torno a su línea y a su ideología marxista-leninista. Estos meses han mostrado hasta qué punto se volvieron a restablecer los lazos de la actividad común entre los comunistas que lucharon durante años en la clandestinidad, los que pasaron por el infierno de la cárcel y salieron, y los que retornaron del largo exilio; fue el respeto mutuo por lo que cada uno hizo, por la heroica firmeza de los clandestinos y de los presos, por la incesante actividad de los exiliados en la solidaridad internacional, siempre de cara a las necesidades y problemas del país; fue la elaboración conjunta de la táctica y la labor de una dirección siempre atenta a la situación concreta, expresada en los documentos únicos, en la prensa clandestina y pública, en la del interior y la del exterior.

En los hechos, ya antes de las elecciones, el Partido –al igual que el conjunto del Frente Amplio– se autolegalizó, con la salida de la cárcel de José Luis Massera y Jaime Pérez primero, con el retorno de Enrique Rodríguez y Rodney Arismendi después; las banderas del Partido y de su Juventud flamearon en los grandes festejos con los que el pueblo uruguayo recibió su inmenso triunfo sobre la dictadura. Siguen flameando hoy, más libres, como anuncio de que estaremos presentes firmemente en la continuidad de la lucha por la definitiva liberación nacional y social de nuestro pueblo, en las nuevas condiciones que hemos conquistado para nuestro país.

Las elecciones culminaron una etapa; abren un nuevo momento en la vida nacional, en el cual vamos a una nueva fase, de acumulación cada vez más amplia de fuerzas del pueblo. Se trata de la creciente movilización, organización y capacidad de participación del pueblo –de sus organizaciones sociales y políticas avanzadas– en un proceso de cambio de la correlación de fuerzas que permita la conquista de una nueva calidad, de una democracia avanzada. Se trata de crear las condiciones para dar reales soluciones a los problemas vitales del país, para aplicar una política económica y social patriótica, independiente, de rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario; se trata de concretar reformas estructurales efectivas y radicales, la estatización de la banca, del comercio exterior, del control de cambios, de medidas de reforma agraria; se trata de una política exterior independiente, de paz, junto a la Nicaragua Sandinista y las luchas de autodeterminación de los pueblos.

La democracia avanzada debe ser un paso en adelante hacia las profundas transformaciones antioligárquicas y antimperialistas, en el camino al socialismo.

Factor de impulso a este proceso es la presencia y el engrandecimiento incesante del Partido Comunista y su Juventud, un Partido de masas enraizado en la clase obrera, en la intelectualidad, en las capas medias de la ciudad y del campo, fuerza política real; como ya lo definiéramos en nuestro XVI Congreso, el problema cardinal de la revolución uruguaya sigue siendo la construcción de un fuerte Partido Comunista.

La caída de la dictadura reintegra al Uruguay al grupo de los países democráticos. Su proceso se suma al de la democratización de Bolivia, de Argentina, a los progresos democráticos en el Brasil; se une a los avances de las fuerzas de izquierda en Perú. Las tenaces y heroicas luchas del pueblo chileno, contra el brutal régimen de Pinochet, auguran que también allí pronto el fascismo será derrotado. Inclusive se refuerza la oposición en Paraguay.

En poco tiempo ha cambiado cualitativamente la situación de la región; el plan imperialista de sembrar el continente de dictaduras fascistas, parte de sus objetivos de poder global a nivel mundial, ha fracasado. Los pueblos, cada uno a su manera, han ido imponiendo cambios democráticos que abren nuevas perspectivas de colaboración y de defensa conjunta, de un peso distinto de la región en los problemas internacionales.

No es casual que, al igual que otros gobernantes de la región, el nuevo Presidente del Uruguay haya declarado su

intención de mejorar las relaciones económicas con los países socialistas y que incluso hable de restablecer relaciones con Cuba.

El pueblo uruguayo sin la represión dictatorial está ahora en mejores condiciones de brindar solidaridad efectiva –y de influir a su gobierno para hacerlo a su nivel–, a la Nicaragua amenazada, a las luchas de los pueblos de El Salvador y Guatemala; el pueblo uruguayo está ahora en mejores condiciones para aportar a la lucha mundial contra la aventurera política belicista de la Administración Reagan, a la defensa de la paz, a salvar la vida de la humanidad de un holocausto nuclear.

Hemos cumplido en esta etapa de nuestra lucha; sabremos hacerlo en lo que viene por delante, en nuestros compromisos solidarios para con todos los pueblos.

Revista Internacional, Nº 3 de 1985

[1] *Estudios*, Nº 86, abril de 1983, p. 14.
[2] Integrada por el Partido Colorado, el Partido Nacional (Blanco), el Frente Amplio y la Unión Cívica. –*N. de la Red.*
[3] *Aquí*, Montevideo, 20 de noviembre de 1984, p. 7.
[4] *La Semana*, suplemento del diario *El Día*, Montevideo, 7 de diciembre de 1984, p. 2.

La fuerza de la solidaridad de clase

José María LANAO,
miembro del CC
del Partido Comunista de la Argentina (PCA)

Al mediar la década de los años 80, el movimiento obrero de la Argentina atraviesa momentos de cambio, de recomposición de sus fuerzas, de galvanización de su organización y de búsqueda de una dirección que le permita afrontar con éxito los graves y complejos problemas que tiene ante sí.

La situación no es enteramente nueva, otros períodos de nuestro acontecer nacional han tenido como elemento definitorio la elección del rumbo que tomaron las masas ante determinada coyuntura histórica. Pero en nuestros días se trata de ver lo nuevo que se ha ido decantando en el movimiento obrero como producto de una experiencia social y política también nueva en muchos aspectos.

Tal como se señala en la «Declaración de Buenos Aires»[1], «los últimos años muestran un avance muy importante del proceso democrático de América del Sur. En él, cada vez más, la clase obrera desempeña su papel de vanguardia. Fortalecer su unidad política y sindical, tanto en el plano nacional como latinoamericano, contribuirá decisivamente al triunfo y la consolidación de la democracia y garantizará las transformaciones revolucionarias en nuestros países»[2].

La situación económica

La situación económica de la clase obrera en el conjunto de la sociedad se ha deteriorado aceleradamente en los últimos diez años. La participación de los asalariados en

la distribución de la renta nacional ha caído verticalmente. Si en 1974 era de un 41 %, para los fines de 1984 se estima en un 30 %. Durante los recientes 7 años de régimen militar, según lo denunció el presidente Alfonsín, los asalariados perdieron la mitad de su capacidad de compra. El salario de un obrero industrial no calificado representaba el 51 % de los ingresos que necesita para sostener una familia compuesta de su esposa y dos hijos menores. La mayor parte de los salarios obreros son absorbidos por los gastos de alimentación, quedan sin satisfacer otras necesidades materiales y espirituales que tradicionalmente formaban parte del nivel de vida del trabajador[3].

Signos de decadencia social que antes sólo era posible encontrar en las llamadas «provincias pobres», ahora son frecuentes en los barrios obreros de la periferia de Buenos Aires.

La desocupación, el semi-empleo o la ocupación en tareas que están por debajo de la calificación profesional del trabajador, han venido acentuándose en los últimos años como consecuencia de la política que implementó la dictadura según un proyecto que desmantelaba importantes sectores del aparato productivo. En el pasado, el índice relativamente alto de alfabetización de la población con relación a otros países de América Latina llenaba de orgullo a muchos argentinos. Ultimamente se han dado a conocer cifras oficiales que indican que 6 millones de personas son analfabetas o semi-analfabetas en la patria de Sarmiento[4], aproximadamente el 22 % de la población[5].

Anatole France escribió con aguda ironía que los millonarios y los mendigos tienen igual derecho a pernoctar bajo los puentes del Sena. Claro está que los sectores del privilegio en nuestro país o en cualquier otro país capitalista nunca han tenido necesidad de ejercer ese «derecho». Pero para muchas familias de trabajadores, el arriendo de un techo resulta poco menos que imposible. Muchos, en busca de un alojamiento al alcance de sus posibilidades, deben localizar su vivienda en zonas alejadas de sus lugares de trabajo, lo cual presupone que deben adicionar a la jornada de labor de 8–10 horas o más las que consumen para trasladarse, que en muchos casos representan alrededor de tres horas[6]. El tiempo que el trabajador insume viajando a su lugar de trabajo, recorta sensiblemente su descanso, su educación, su actividad sindical y política, y atenta contra una relación familiar normal, ya que no son pocos los que se convierten, durante la mayor parte de la semana, en ocasionales huéspedes de sus propios hogares.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha estimado que el 28 % del total de la población del país, es decir, 7.600.000 personas, tienen necesidades básicas insatisfechas, según el Censo de 1980. Esta cifra, con ser alarmante, no refleja todavía fielmente la cantidad de pobres efectivos[7].

Nueva etapa en la organización sindical

El movimiento obrero argentino ha debido enfrentar en condiciones muy difíciles la ofensiva de las clases dominantes en los últimos años, particularmente los que corresponden al período del régimen militar. La dictadura instalada en el poder tras el golpe de Estado de 1976, dispuso la caducidad de las organizaciones gremiales y descargó una feroz represión dirigida principalmente sobre los militantes de base y los dirigentes intermedios.

La causa judicial que se le siguió a varios integrantes de la cúpula militar durante el gobierno de Videla por el secuestro y posterior desaparición de personas, ha dado a luz que existieron directivas de los altos mandos de las fuerzas armadas para la represión, a través de procedimientos irregulares, de activistas sindicales y para la infiltración de elementos de los servicios de inteligencia de los institutos militares en los cuerpos de delegados y comisiones internas[8]. El objetivo de las operaciones era «depurar de marxistas» los establecimientos fabriles y promover nuevas estructuras gremiales.

No existen antecedentes de un momento tan adverso como el descrito para el movimiento obrero argentino. A pesar de ello, superando enormes dificultades, el proletariado fue gradualmente reconstruyendo, en gran parte, su organización en las fábricas, en las ramas de trabajo y a nivel de su conducción central. Logró expresar, a través de fórmulas inéditas, sus pliegos reivindicatorios, acom-

pañados de medidas de lucha, y en el curso del combate antidictatorial fue convirtiéndose en el abanderado de la recuperación de la democracia. Derrotada la dictadura y restablecidas las instituciones constitucionales, la clase obrera transita una nueva etapa política, con las ventajas que presupone la democracia burguesa, pero a su vez con todas sus limitaciones. Apoyándose en la vigencia de las libertades ciudadanas el movimiento obrero cuenta con mejores condiciones para desplegar sus demandas. Pero, por otra parte, la democracia burguesa es incapaz de suprimir el predominio en la vida nacional de los monopolios, el gran capital y la oligarquía latifundista, fuente principal de los padecimientos del pueblo y de los procesos de desestabilización institucional.

Los sectores reaccionarios sobreviven a la caída de la dictadura e imponen, a despecho de las nuevas circunstancias democráticas, la loca carrera de los precios de los artículos que componen la canasta familiar, hacen caer el salario real y buscan remozados medios para descargar sobre las espaldas del pueblo trabajador las consecuencias de la crisis económica.

La instancia democrática abierta en el país, entonces, lejos de diluir los enfrentamientos de clase, los replantea en otras condiciones y hace más exigente, si cabe, la necesidad objetiva que tiene el movimiento obrero de unir sus reclamos reivindicativos con el fortalecimiento de su organización gremial como elemento insustituible de la estabilización de esa misma instancia y de su desarrollo, con justicia social y participación popular.

Por ello, a pesar del abigarrado conjunto de problemas que inquieta hoy a la Argentina (inflación, deuda externa, esclarecimiento de los desaparecidos, Malvinas, etc.), la cuestión de la normalización sindical se ubica entre todos ellos como un asunto de importancia decisiva.

Durante muchos años, el predominio de la ideología burguesa en los medios obreros se ha apoyado en el cercenamiento de las libertades sindicales, en el método vertical, de arriba hacia abajo, en la resolución de los problemas gremiales, en la violación de la voluntad de los trabajadores. En la actualidad se ha reducido considerablemente el campo de maniobra para tales procedimientos. Estos

métodos son incompatibles con las luchas que libró el pueblo trabajador para reconquistar la democracia en el país y, al mismo tiempo, como producto de ellas, con el reciente marco institucional establecido.

Tal como señalara Athos Fava, Secretario General del CC del Partido Comunista de la Argentina, «el movimiento obrero...ha entrado en una nueva etapa que se puede caracterizar por un mayor avance en la conciencia de clase y de la lucha por la democracia en general y por la democracia sindical en particular»[9].

Expresión de la nueva situación que se vive en las filas obreras es el interés creciente de sus miembros por participar activamente en la vida gremial, decidir en el destino de sus organizaciones, elegir según su voluntad a los dirigentes y desterrar viejas prácticas antidemocráticas de la burocracia sindical. Este mayor protagonismo está determinado, sin duda, por circunstancias económicas y sociales que actúan en beneficio del incremento del movimiento gremial y de la intensificación de la defensa de los intereses profesionales. Facilitan también la expansión de una y otra cosa las nuevas condiciones políticas sustentadas en la vigencia de las instituciones republicanas.

Pero no sólo está determinado por estos factores objetivos. Actúa también de un modo importante, como factor subjetivo, la experiencia acumulada por los obreros durante los años de la reciente dictadura. En ese período, una gran parte de los militantes sindicales de base y dirigentes intermedios fueron detenidos, secuestrados o cesanteados. En las grandes empresas fabriles, en muchos casos, la organización gremial fue descabezada. Al mismo tiempo, sectores de la burocracia sindical que lograron «adaptarse» a las condiciones del régimen militar disminuyeron sus vínculos con los obreros. De modo que los trabajadores, por abajo, apelando a sus propias fuerzas, se vieron ante la necesidad de ir reconstruyendo sus órganos de lucha y de ejercitar, frente a la brutal ofensiva patronal y del Estado, formas de reclamo inéditas en correspondencia con una correlación de fuerzas muy desfavorable.

Se fue gestando así una nueva camada de dirigentes, forjada no al amparo de viejas prácticas burocráticas, sino

en el fragor de una intensa lucha de clases, donde la acción colectiva más la solidaridad de clase resultaban un requisito indispensable para defender cada una de las posiciones conquistadas por el proletariado tras largos años de lucha frente a un enemigo que había acrecentado sus fuerzas bajo la protección de la dictadura.

Todo este período como el que sigue a la derrota del régimen militar representa un retroceso de los procedimientos de digitar desde arriba a los dirigentes sindicales, un rechazo del matonismo como principal «argumento» para imponer decisiones contrariando la voluntad de los obreros y un serio revés al verticalismo como método de conducción sindical. Para la emergencia, los obreros eligieron democráticamente en una serie de lugares de trabajo a sus compañeros más combativos y unitarios, desplazando a los elementos conciliadores que habían frenado las luchas y a los que tenían un pasado comprometido con prácticas negativas del sindicalismo.

La irrupción de esta nueva generación de dirigentes compuesta por peronistas, comunistas, de otras tendencias políticas, como así también por activistas no pertenecientes a las agrupaciones tradicionales, constituye uno de los rasgos sobresalientes de la tendencia renovadora en el movimiento sindical.

Los comunistas elegidos para las nuevas conducciones gremiales se han esforzado por mostrar en la práctica lo que siempre han sostenido desde el llano con relación a la concepción que debe primar en la dirección de las organizaciones gremiales, esto es: vigencia de los principios democráticos y unitarios en la defensa de los intereses de la clase obrera. Para muchos trabajadores ha quedado en evidencia que existe una manera distinta a la empleada por la burocracia sindical para tratar los asuntos obreros y dirigir el sindicato.

Con todo, queda todavía un largo camino por recorrer y arduos problemas a superar para la normalización verdadera de la estructura gremial. No puede menospreciarse la acción de las clases dominantes, las cuales han realizado y realizan ingentes esfuerzos para desnaturalizar las organizaciones obreras, vaciarlas de su contenido de clase. Su modo de operar –superadas las circunstancias que permitieron la represión de los militantes clasistas durante el período de la dictadura– descansa ahora, en una nueva situación institucional, principalmente en el papel que cumplen los dirigentes sindicales que sirven su política de «conciliación de clases», tendiente a socavar los avances hacia la unidad pluralista de las corrientes obreras.

En cuanto a las organizaciones gremiales, la burguesía está en contra del ascenso a puestos de dirección de los obreros más conscientes y combativos. Pero de todos modos, pese a las posibles trampas que se instrumenten, no se puede dejar de tener en cuenta la nueva situación que atraviesa el movimiento obrero, con la presencia de nuevos dirigentes elegidos por las bases y el cambio de mentalidad de no pocos viejos jefes sindicales. Es que en la voluntad de los trabajadores se expresa el avance de la conciencia democrática y la certeza de que no se pueden repetir experiencias de un sindicalismo sectario y excluyente.

Está en juego el papel que desempeña la clase obrera en este momento y en los próximos años. Se explica, entonces, que el campo obrero se haya convertido en el centro de gravedad de una lucha ideológica muy enconada por la dirección de las masas.

Objetivos políticos

Si bien siempre resulta imposible divorciar la suerte de los intereses profesionales de los trabajadores del curso socio-económico y político del país, en la actualidad, en las condiciones de una aguda crisis económica y de una situación política muy tensa, esta íntima vinculación se ha hecho mucho más evidente, aun para los sectores menos conscientes del proletariado.

Con singular fuerza los problemas del pan y del trabajo aparecen unidos a la incontrolable inflación, a la demencial carrera de los precios, a la deuda externa, a los intentos de desestabilizar el régimen institucional, a las enormes presiones que ejerce el imperialismo a través del FMI y de la banca mundial para imponer la política que debe seguir el Gobierno.

Crece, entonces, la exigencia de que la clase obrera for-

mule su propia alternativa y luche por ella, una alternativa cuyo contenido económico por mejores condiciones de vida y de trabajo sólo podrá tener sustento firme si va unido a reivindicaciones políticas en defensa de la democracia y de su ulterior profundización con sentido social y participación popular.

De los proyectos que se ofrecen a la clase obrera desde posiciones no proletarias está el que cuenta con el aval del Gobierno y de la mayoría de los partidos burgueses y pequeñoburgueses. Dado el carácter del nuevo Gobierno, democrático burgués y reformista, y la naturaleza de clase de las agrupaciones políticas que lo patrocinan, dicho proyecto no es el de la clase obrera, como tampoco —conviene subrayarlo— el que sostienen los sectores vinculados al poder oligárquico-imperialista. Su contenido es una suerte de concepciones nacionalistas burguesas y de ideas reformistas, con el agregado de algunas tesis cuya marca en el orillo pertenece a los que propugnan el desarrollo de las fuerzas productivas sobre la base de la inversión de capitales extranjeros, sin mengua de las relaciones de producción dominantes. Tampoco es difícil distinguir entre sus enunciados la presencia ideológica de la socialdemocracia y el socialcristianismo.

El alma del plan consiste en lograr una concertación de clases que permita recorrer el período de la post-dictadura sin conmociones sociales, y que las masas trabajadoras se hagan cargo de la pesada herencia que dejó el régimen militar, en tanto la burguesía consigue mantener intactos sus privilegios y acrecentar sus ganancias. Todo ello sazonado con grandilocuentes palabras de «reconciliación nacional», «pacto social» y otras, a las que es tan afecta la burguesía en el arte de elevar al rango de los grandes intereses nacionales sus propios intereses de clase. Se quiere comprometer a los trabajadores en una alternativa que no es la suya y que, por otra parte, además de postergar la satisfacción de sus necesidades apremiantes, ni siquiera servirá para estabilizar la democracia.

En rigor, la clase obrera es la más consecuente defensora de las libertades públicas, aun cuando éstas no excedan el marco del régimen burgués. Muchos de sus hijos han caído durante la dictadura en la lucha por restablecer las instituciones democráticas, y volverá a ser, ya lo es, la combatiente principal contra los planes desestabilizadores.

No cabe, entonces, el falso argumento, con el cual se pretende a veces chantajear a los trabajadores, de que las luchas sociales favorecen los intentos golpistas. Todo lo contrario, justamente una clase obrera en cuyas banderas aparezcan unidas la reivindicación del plan y la de la democracia, se convierte en el obstáculo más grande para el retorno del autoritarismo y de los regímenes fascistizantes. Una democracia, en cambio, que ampare la injusticia social y el hambre estimula la indiferencia sobre su existencia y socava la conciencia acerca de las bondades de su ejercicio.

Por todo ello es necesario diferenciar entre un acuerdo de las fuerzas democráticas para el sustento del régimen constitucional y la llamada «concertación», ya que si bien ésta hace suyo ese punto, como contrapartida, al frenar el avance social y no remover los fundamentos que promueven la inestabilidad de las instituciones republicanas, deja intactas las condiciones que alimentan los intentos golpistas.

Tampoco es cierto, como se sostiene desde ciertas posiciones «izquierdistas», que la defensa de la democracia, en las actuales circunstancias, se reduce a fin de cuentas a proteger al Gobierno burgués. La defensa de la estabilidad democrática, que contempla, naturalmente, el cumplimiento del mandato constitucional del Gobierno elegido por el pueblo, facilita —con la activa movilización obrera y popular— su ulterior desarrollo en un sentido de renovación social y participación popular, y crea una situación más propicia para golpear al poder oligárquico-imperialista, causa principal de la crisis económica y de la subversión institucional.

En cuanto a los sacrificios que se les piden a los trabajadores para llevar a la práctica el mencionado proyecto, hay que decir que ya han sido los obreros los principales sacrificados por el modelo económico que implementó la dictadura[10]; y que, por otra parte, ya está demostrado que esa receta, lejos de ser el remedio de los males que pretende curar, los agrava.

Hay una vieja cantinela a la que recurren, en todo tiempo y lugar, la oligarquía y los monopolios, para reducir el pan en las mesas de la gente sencilla. Ella dice: los aumentos de salarios que no se basan en el aumento de la producción generan inflación, condicionando el aumento de los ingresos de los asalariados a la previa recuperación económica y modernización del aparato productivo. Pero es el caso que Argentina ostenta con holgura en los últimos años el record mundial de inflación, al tiempo que los salarios reales, como queda dicho, han sufrido una abrupta caída.

Si se quiere realmente reactivar la vida económica y renovar los medios de producción debe partirse de la recuperación del salario, lo cual elevaría el nivel de compra del pueblo y pondría en marcha sectores de la producción que hoy permanecen ociosos como consecuencia del estrechamiento del mercado interno.

A los aspectos negativos, ya señalados, de la concertación hay que agregar otro, que la condiciona aún más en un sentido perjudicial a los intereses nacionales y populares. El hecho es que en el seno del Gobierno se examinaron los límites «en los cuales debería desarrollarse la concertación a fin de que los acuerdos salariales a los que arriben los obreros y los empresarios no constituyan problemas en las negociaciones con el FMI por el pago de la deuda externa»[11]. En otras palabras, la concertación, como el conjunto de la política económica del Gobierno, está atada a los dictados del FMI. Confirmando lo dicho, el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Ferrer, ha escrito que «lo que los deudores debaten con sus acreedores y el FMI es su propia política económica y la asignación de sus propios recursos». Para agregar: «Pocas veces, antes de ahora, ha existido un tal grado de injerencia externa en la definición de las políticas económicas nacionales»[12]. Podría añadirse que tampoco queda fuera de la mira del imperialismo la marcha de la vida institucional, si nos atenemos a las declaraciones amenazantes, referidas a la Argentina, de Donald Reagan, secretario del Tesoro de EE.UU., cuando dijo que una democracia no podrá sobrevivir a tanta inflación y aislamiento económico[13].

Parece difícil creer que la concertación, como la que se promueve, con sus inconsecuencias y vacilaciones de nacimiento, pueda crecer en el medio asfixiante que impone el FMI y la banca internacional, con sus exigencias contra la recomposición del salario, que convierten a éste, en definitiva, en la variante de «ajuste» de la economía, para obtener mayores saldos exportables a fin de pagar los intereses de la deuda externa.

Las tentativas por arriba para alcanzar su concreción presentan enormes dificultades, principalmente porque abajo los trabajadores no están dispuestos a convalidar un acuerdo donde ellos sean, otra vez, los que carguen con el fardo de la crisis. Así lo atestigua el hecho de que en el primer semestre de 1984 el índice de huelgas ha triplicado el mismo indicador en igual período del año anterior.

En la clase obrera y otros sectores populares va madurando, con la decisiva participación de los comunistas, un proyecto unitario, donde la defensa de la democracia sea un punto de partida para atacar la raíz de la crisis, es decir, la persistencia del latifundio y el dominio sobre ramas fundamentales de la economía por parte del imperialismo, particularmente el norteamericano.

La protección del orden democrático, producto del protagonismo obrero y popular, aparece así unida al imperio de la justicia social y al ejercicio de la soberanía nacional. Todo esto establece una diferencia esencial entre el proyecto unitario y las propuestas de los reformistas burgueses, que también se pronuncian en favor de la democracia pero no tienen el propósito de tocar las raíces que alimentan a las tendencias antidemocráticas.

Posiciones ideológicas

La influencia ideológica principal en el movimiento obrero argentino corresponde en la actualidad a la corriente nacionalista burguesa de carácter reformista. Su expresión más acabada comienza a tomar cuerpo a mediados de los años 40, en el momento en que la industria alcanza un ritmo impetuoso con relación al nivel anterior y cuando se

contaba con importantes saldos exportables de la producción agropecuaria frente a las necesidades alimenticias de Europa devastada por la contienda bélica.

La expansión de la industria trajo aparejado el crecimiento acelerado del proletariado fabril, nutrido principalmente por mano de obra proveniente del campo. Los trabajadores rurales ingresaban en las fábricas y se radicaban en las ciudades. Para los nuevos reclutas del movimiento obrero, sin mayor experiencia sindical y política, el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo y el ascenso cultural que devinieron, aun con limitaciones, del proceso objetivo de industrialización y de determinadas circunstancias políticas fueron adjudicados al papel que desempeñó Perón desde el Gobierno.

Este se presentó como un Gobierno defensor de los trabajadores y levantó reivindicaciones muy sentidas. Si bien las más importantes, como las referidas al problema de la tierra y a la ruptura de la dependencia no fueron cumplidas, otras, a favor del momento económico próspero y ante el reclamo de las masas, fueron satisfechas.

En estas condiciones, al tiempo que se sofocaba la labor de los comunistas en el movimiento obrero, la mayoría de los trabajadores fueron ganados por las ideas del peronismo, al influjo de un líder carismático y con el apoyo del aparato del Estado, de la central única de trabajadores y de un partido policlasista con una gran base de masas. La tendencia reformista del nacionalismo burgués, que prolifera en este terreno, trata de demostrar que existe «un tercer camino» o «una tercera posición» entre el capitalismo y el socialismo; que de lo que se trata es de alcanzar la justicia social sobre la base de «humanizar el capital»; que la lucha de clases concebida como la vía para superar las contradicciones antagónicas de la sociedad responde más a una exigencia ideológica que a una necesidad del desarrollo social. No queda otra cosa, entonces, que conciliar los intereses proletarios con los intereses de los patronos.

Claro está que estas ilusiones burguesas y pequeñoburguesas deben enfrentar en la realidad argentina, por un lado, la profunda crisis estructural que agrava constantemente la situación económico-social de los trabajadores,

y por otro lado, que el movimiento peronista, aunque es policlasista, tiene como parte más dinámica sus masas obreras y otros sectores populares, los cuales, lejos de ser un objeto pasivo de las ideas y de la acción del reformismo burgués, pugnan por jugar un papel activo con el fin de conquistar las reivindicaciones antilatifundistas, antiimperialistas y de justicia social que han sido levantadas propagandísticamente por sus dirigentes, pero no cumplidas.

De allí se nutre gran parte de la complejidad del movimiento peronista, la contradicción que se establece entre su ideología no proletaria y sus adherentes, que en su mayoría son proletarios y están interesados en profundas transformaciones revolucionarias.

La alternativa reformista, de la cual no se puede desconocer la significación positiva de algunos de sus aspectos para la etapa recorrida por el país, no ha sido capaz históricamente de remover las causas principales de la crisis argentina. Dejó intacta la base económica generadora del accionar de los sectores reaccionarios que impusieron en diversos tramos de la historia política regímenes dictatoriales con su secuela de padecimientos y frustraciones para el pueblo.

En ese período, alternando victorias y reveses, los trabajadores peronistas han acumulado una valiosa experiencia –transitada en común con los comunistas– que los ha llevado a posiciones de izquierda y a asimilar elementos de la ideología proletaria. Ahora, enfrentados a la derecha de su propio movimiento, pugnan por desbaratar los planes de los que pretenden convertirlos en dique de contención de las ideas avanzadas y buscan los caminos para aportar decisivamente al proyecto unitario de liberación nacional y social. Para los comunistas, encauzar este proceso hacia un desenlace positivo constituye un objetivo fundamental de su línea política.

En los umbrales de la última mitad de los años 80, el crecimiento, en general, de la actividad política de los trabajadores y, en particular, el hecho de que el 80 por ciento de los miembros del Partido Comunista de la Argentina son asalariados y que una cifra importante de ellos son obreros[14] es el resultado de que el fundamento social de la ac-

14*

ción del partido marxista-leninista es la clase obrera. La actividad de los comunistas está dirigida hacia el movimiento obrero y en particular hacia los grandes centros industriales, donde se concentra el proletariado más consciente y combativo.

Sería una simplificación pensar que los comunistas puedan cumplir su misión instruyendo y educando a los obreros al margen de su propio movimiento proletario, reduciendo su labor a una mera tarea propagandística, de esclarecimiento. Sólo apoyándose en la propia experiencia de lucha de los obreros y en su organización, en primer lugar el sindicato, los militantes revolucionarios están en condiciones de cumplir su rol en el movimiento obrero. Para ello, los comunistas, sin olvidar las funciones y los objetivos específicos de la organización gremial, bregan para que ésta se convierta en una escuela de lucha revolucionaria; para que la clase obrera una firmemente la reivindicación de sus intereses profesionales con la lucha por la democracia, por la liberación nacional, por la paz mundial y la solidaridad internacional; y para que en el proceso de las luchas el proletariado gane en experiencia, aumente su peso específico en el conjunto de la vida social y adquiera mayor conciencia de su fuerza y de su cometido histórico: la construcción de la sociedad socialista.

Revista Internacional, Nº 2 de 1985

[1] Documento político emitido por la Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur, reunida en Buenos Aires los días 5, 6 y 7 de julio de 1984. –*N. de la Red.*
[2] *Nueva Era*, 1984, Nº 17, p. 21.
[3] *Qué pasa*, 4 de julio de 1984.
[4] Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888), político, escritor y eminente pedagogo argentino. –*N. de la Red.*
[5] Véase *Clarín*, Edición Internacional, 23–29 de abril de 1984.
[6] Ibíd., 2–8 de julio de 1984.
[7] Ibíd., 16–22 de julio de 1984.
[8] Ibídem.
[9] *Nueva Era*, 1984, Nº 16, p. 17.
[10] Se estima que en los siete largos años del régimen militar, como resultado de la política salarial oficial, fueron sustraídos de los bolsillos de los trabajadores alrededor de 65.000 millones de dólares.
[11] *La Nación*, Edición Internacional, 30 de julio de 1984.
[12] *El País*, 27 de mayo de 1984.
[13] Véase *Clarín*, Edición Internacional, 2–8 de julio de 1984.
[14] Véase *Qué pasa*, 24 de octubre de 1984.

Paraguay: crece la lucha contra la dictadura fascista

Hugo CAMPOS,
miembro de la Comisión Política
del CC del Partido Comunista Paraguayo (PCP)

Rogelio GONZALEZ,
miembro del CC del PCP

Los mediados de los años 80, en la vida política de Paraguay han sido marcados por acontecimientos de importancia trascendental: por primera vez después de muchos años de la sangrienta dictadura fascista, tuvieron lugar en la parte céntrica de Asunción mítines políticos masivos, organizados por la oposición. Los manifestantes exigieron medidas inmediatas y concretas para sanear la economía nacional, la dimisión de la camarilla reaccionaria, el restablecimiento de los derechos y las libertades democráticas, el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. Los oradores estigmatizaron el estado de sitio que durante todos estos treinta años ha mantenido el régimen. Los combativos participantes coreaban la aspiración más sentida del pueblo: «se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar».

Estos pronunciamientos han sido un testimonio de que la dictadura de Paraguay, la más antigua de América Latina (Stroessner asaltó el poder en mayo de 1954), pese a la represión terrorista desatada contra el pueblo paraguayo y sus trabajadores, no ha logrado doblegarlos ni paralizar sus luchas emancipadoras.

La camarilla fascista encabezada por el general Alfredo Stroessner se mantiene en el poder únicamente gracias a la sucesiva ayuda económica, política y militar del imperialismo norteamericano, reforzada con el asesoramiento e intervención descarada de la CIA yanqui en la policía y en el ejército.

Como compensación por la «ayuda» norteamericana, la dictadura antinacional no sólo apoya incondicionalmente la política belicista y expansionista de la Administración Reagan —muestra elocuente de lo cual ha sido la agresión de EE.UU. a Granada—, sino contribuye a convertir a nuestro país en un apéndice económico de los monopolios foráneos, que saquean sus recursos naturales y someten a una explotación despiadada a su pueblo. El caso de Paraguay evidencia el papel que el imperialismo asigna a sus títeres dentro de los delirantes planes de dominación mundial del complejo militar-industrial de Estados Unidos.

Actualmente, como dice el Programa del PCP, «Paraguay forma parte del sistema capitalista mundial en condición de país económicamente subdesarrollado y dependiente del imperialismo»[1]. Después de recorrer exitosamente casi seis décadas de verdadera soberanía en el siglo pasado, la historia paraguaya confirma cabalmente la tesis leninista respecto a los países de América Latina que conquistaron su libertad, pero quedaron dependientes económicamente de las metrópolis imperiales. Lenin definió a la mayoría de los Estados latinoamericanos como un grupo especial de «países dependientes que, desde un punto de vista formal, son políticamente independientes, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática»[2].

La historia del Paraguay confirma también la justeza de la tesis leninista acerca de la esencia del imperialismo y el papel de las oligarquías nativas que le sirven de instrumento para llevar a cabo sus fines egoístas y expoliadores. En el aspecto político, destacaba con toda razón Lenin, «el imperialismo es, en general, una tendencia a la violencia y la reacción». Y agregaba: los «rasgos políticos específicos del imperialismo son la reacción en toda la línea y la intensificación de la opresión nacional...», la reacción en toda la línea «cualquiera sea el régimen político»[3].

Versión paraguaya del fascismo

«La dictadura fascista —decía el insigne revolucionario Jorge Dimitrov en su informe en el VII Congreso de la Internacional Comunista— *es la dictadura terrorista de las fuerzas más reaccionarias, más chovinistas e imperialistas del capital financiero*»[4].

Como ha mostrado la experiencia, según las condiciones concretas, las particularidades de la lucha de clases y ciertas tradiciones nacionales, las dictaduras terroristas abiertas adquieren diversas peculiaridades. Por ejemplo, en Chile y Uruguay fueron suprimidos violentamente el sistema parlamentario y la actividad de los partidos políticos. En cambio, en nuestro país se mantiene un «parlamento de cartón», una caricatura de «democracia representativa».

En Paraguay, el fascismo nativo ofrece notorias peculiaridades, pero éstas no modifican su esencia ultraderechista, conservadora. En su aspecto clásico, la dictadura fascista de Stroessner se expresa en la represión terrorista, el apresamiento de miles de patriotes paraguayos, en sucesivas escaladas, a través de las «operaciones rastrillos», de allanamientos casa por casa, de la «operación corralito» en el campo, con su secuela de torturas, vejaciones, asesinatos y desapariciones. La tortura se ha convertido en un sistema, así como el asesinato de los dirigentes y militantes comunistas se ha elevado a la categoría de política estatal, de la supuesta «democracia sin comunismo». Además, la discriminación política, el encarcelamiento por tiempo indefinido, leyes liberticidas de persecución contra las fuerzas democráticas bajo el gastado pretexto de combatir las actividades «subversivas» del «comunismo internacional». Las autoridades intervienen descaradamente en los sindicatos y en la Confederación Paraguaya de Trabajadores para imponer a los agentes policiales y patronales en la dirección de los sindicatos.

Entre las particularidades del fascismo en Paraguay cabe destacar, primero, el *sistema permanente del estado de sitio*, instrumento de que se sirve el régimen para la anulación de todos los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo. Ante el pedido de *hábeas corpus* interpuesto a favor de una persona detenida en virtud de la aplicación del Artículo 79 de la Constitución nacional que establece la vigencia del estado de sitio, la policía responde invariablemente que dicha persona está encarcelada de conformidad con el citado Artículo, por «orden del Presidente de la República». Con el agravante que la Suprema Corte de Justicia aprobó, en 1982, una resolución por medio de la cual «cualquier autoridad política» está facultada

a detener a las personas. De esta manera, el derecho de *hábeas corpus* ha sido prácticamente anulado. En la mayoría de los casos, los inculpados de transgresión de las leyes represivas ni siquiera son presentados ante los tribunales.

Segundo, el *sistema de fraude*, uno de los más grotescos que se conoce en la historia, una burla descarada de la voluntad popular, una caricatura de elecciones. Cada cinco años se repite la misma farsa electoral, en un clima de persecuciones, de proscripción del partido de la clase obrera, democristianos y otros partidos de la oposición. A todo esto se suma el hecho de que los votos depositados en las urnas son contados por los funcionarios del gobierno. De este modo, el dictador fascista, casi vitalicio, el general Stroessner, tras cada comedia de «elecciones» se atribuye invariablemente el 87–90 por ciento de votos.

En esto consiste la trampa electoral del continuismo fascista, para dar la apariencia de una «democracia representativa» y para que los voceros del imperialismo de Estados Unidos, con el aventurero belicista Ronald Reagan a la cabeza, declaren (como en el caso de El Salvador) que la situación de los derechos humanos en Paraguay «ha mejorado».

Tercero, la camarilla militar fascista encabezada por Stroessner es la que *controla todos los resortes principales del Estado*, con la particularidad de que el titular del Poder Ejecutivo concentra en su manos las decisiones fundamentales. Además, esa misma camarilla corrupta, enriquecida con el gran contrabando oficializado, las coimas, los negociados, el tráfico de drogas, las especulaciones, etc., ha logrado utilizar para sus fines egoístas a un sector de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), presidido por el pelele Juan R. Chaves. Este sector se presenta como presunto partido gobernante.

Cabe señalar al respecto que el Partido Colorado es una agrupación política heterogénea. Por un lado, Stroessner, a base de prebendas, de cargos bien rentados y de la repartija de una parte del botín, obtuvo la incondicionalidad de la Junta de Gobierno colorado oficialista y ordenó que todos los mandos de las Fuerzas Armadas, los jefes y oficiales, los funcionarios públicos, maestros y profesores, etc., se afiliaran al Partido Colorado que apoya al decano de

los dictadores fascistas latinoamericanos. Por otro lado, diversos sectores del coloradismo y sus dirigentes más esclarecidos se manifiestan cada vez más abiertamente contra el «gringo» (apodo despectivo dado por los paraguayos a Stroessner. —*N. de la Red.*) y su política entreguista y antipopular.

Cuarto, Stroessner aplica una deliberada política de *estímulo a la corrupción* de sus allegados, a cambio de la fidelidad, principalmente a los mandos de las Fuerzas Armadas. Les ofrece facilidades para convertirse en latifundistas, ganaderos, contrabandistas, traficantes de drogas, especuladores con divisas, etc., y como reconoce el propio dictador, es el «precio de la paz interna».

Bajo la máscara de una supuesta «democracia sin comunismo», de las mentiras más descaradas acerca de la supuesta «democracia» vigente en el país, de la rabiosa *campaña anticomunista y antisoviética*, la dictadura fascista pretende encubrir sus crímenes contra el pueblo y apoya servilmente la política militarista y agresiva de los círculos más guerreristas del imperialismo de EE.UU. Invocando la representación del «mundo libre occidental y cristiano», Stroessner plantea descaradamente la intervención armada norteamericana en Nicaragua y otros países de América Central y el Caribe, como apoyó la vil y cobarde agresión a la pequeña Granada a fin de «ahogar al comunismo», tal como lo proclama Reagan, que llama a una aventurera «cruzada» contra el sistema socialista con la ilusoria esperanza de «enterrar al comunismo».

Viene al caso agregar que la nueva Constitución reaccionaria impuesta en 1967, en una caricatura de asamblea nacional constituyente fraudulenta, establece en uno de sus artículos la «prohibición de la lucha de clases», una disposición que no toma en consideración la realidad socio-económica del país, la existencia de clases antagónicas y que, por la misma razón, resulta sumamente ridícula. Sin embargo, la policía del régimen utiliza ese Artículo como justificativo «legal» de sus arbitrariedades y violencias contra los trabajadores de la ciudad y el campo, contra diversas capas sociales y fuerzas políticas, principalmente contra los comunistas.

La propaganda reaccionaria presenta a los comunistas

como los inventores de la lucha de clases. A ese respecto Marx escribió: «No me jacto de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas». «Mucho antes que yo, agregó, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha, la anatomía económica de las clases. Mi aportación ha sido demostrar: 1) que la *existencia de las clases* sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la *dictadura del proletariado*; 3) que esta misma dictadura no es más que el tránsito hacia la *abolición de todas las clases*, hacia una sociedad sin clases»[5].

El régimen paraguayo utiliza la «prohibición de la lucha de clases» para justificar la represión terrorista que ha desatado contra los opositores. Invocando la supuesta «legalidad» de las leyes represivas, sobre todo, la Ley 209 de «Defensa de la paz pública y libertad de las personas» y la 294 de «Defensa de la democracia», la camarilla gobernante, bajo pretexto de la defensa de la «paz» interna amenazada por la «sublevación» comunista, persigue a demócratas y patriotas de todas las clases sociales y partidos políticos, incluso los del Partido Colorado oficialista. Por último, el fascismo paraguayo demuestra un agresivo patrioterismo (chovinismo) para tratar de ocultar la traición y entrega de las riquezas naturales, de la economía y de la soberanía del país a los monopolios imperialistas y al capital financiero internacional.

Tales son algunas de las peculiaridades de la dictadura fascista en Paraguay que levanta, cada vez más, la indignación y la resistencia de todos los sectores de la sociedad paraguaya.

País sumido en la dominación imperialista

Paraguay es un país de enormes riquezas naturales: petróleo, uranio, energía hidroeléctrica, tierras fértiles, que no pertenecen al pueblo, ya que, con la dictadura, pasaron a manos de seis grandes transnacionales. El país es expoliado impunemente por el consorcio petrolero norteameri-

cano REPSA y otros muchos monopolios extranjeros. El gran contrabando oficializado arruina a la industria nacional. Los préstamos de la banca imperialista prohíben comerciar con los países socialistas.

Más de las tres cuartas partes de tierras fértiles son propiedad del propio tirano, sus allegados y extranjeros. El pueblo trabajador vive sumido en la miseria y las privaciones. Uno de cada tres paraguayos se vio obligado a emigrar huyendo del hambre y las persecuciones.

Tras un período de crecimiento económico —la década de 1970–1980–, principalmente del aumento de la producción de algodón, soja y algunos otros rubros, la recesión económica en nuestro país ha entrado en una fase más aguda. Han disminuido radicalmente las inversiones en la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú. La desocupación llegó a más de 300 mil personas, o sea, el 30 % de la población económicamente activa. El régimen cumple obedientemente los dictados del Fondo Monetario Internacional de congelación de salarios a nivel de hambre, un tercio del mínimo vital. La deuda externa sigue trepando y consume más del 50 % del valor de las exportaciones (150 millones de dólares anuales). El gobierno y sus voceros tratan de engañar al pueblo diciéndole que la recesión económica se debe a la «crisis mundial». Sin embargo, como viene señalando nuestro Partido, la causa principal de la crisis en nuestro país radica no sólo en factores externos sino en la estructura económico-social atrasada, dependiente del imperialismo, sobre todo de los monopolios de Estados Unidos. Esta situación, la agravada explotación de las masas trabajadoras y el sufrimiento de la población laboriosa, no tiene posibilidades de solución favorable dentro de la estructura económico-social vigente. Requiere cambios radicales. Las condiciones objetivas están maduras para la revolución democrática, agraria y antimperialista.

No sólo las riquezas naturales de Paraguay atraen a EE.UU., sino también su ubicación estratégica, en el centro de América del Sur. Por ello, los círculos dominantes en Estados Unidos se proponen mantener a Paraguay como un país agrícola-ganadero proveedor de materias primas, algo así como una gran estancia y, al mismo tiempo, convertirlo en una gran base militar y plaza de armas para la intervención contra otros pueblos latinoamericanos. La dictadura contribuye por todos los medios a la materialización de dichos planes. Basta recordar que, en 1965, soldados paraguayos participaron, junto a marines norteamericanos, en la invasión a Santo Domingo.

Los planes agresivos de Washington adquieren un carácter particularmente siniestro en el momento actual, en que vientos de libertad y democracia soplan, con creciente fuerza, en Argentina, Bolivia y otros países del Cono Sur del continente. Paraguay se encuentra situado cerca de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Según los cálculos de los estrategas estadounidenses, desde el territorio paraguayo, las fuerzas de rápido movimiento podrían actuar con fines punitivos y desestabilizadores, bajo pretexto de «defender los intereses vitales de Estados Unidos» contra los pueblos de los mencionados países. Nuestro Partido ha denunciado, una vez más; sobre ese plan intervencionista del gobierno de Reagan y ha llamado a todas las fuerzas patrióticas a oponerse enérgicamente a su ejecución.

Crece la resistencia

El movimiento democrático paraguayo sigue en aumento. Lo demuestra la formación de la Comisión Intersindical de Solidaridad que agrupa a los principales sindicatos de obreros y empleados. Este agrupamiento independiente exige el aumento de salarios y se opone abiertamente a la intervención del gobierno en los sindicatos y a la imposición de la camarilla patronal-oficialista en la dirección de la central obrera, la Confederación Paraguaya de Trabajadores. Lo evidencia asimismo el paro de los trabajadores de la empresa transnacional Coca-Cola que defendieron no sólo a sus dirígentes despedidos, sino también plantearon claras consignas antimperialistas. Cabe mencionar, además, el paro de los médicos del Hospital de Clínicas en Asunción que movilizó a más de 600 profesionales en demanda de la libertad de sus colegas detenidos; la huelga de centenares de trabajadores de la construc-

ción de la ruta VI; paros y protestas masivas de los trabajadores del transporte de pasajeros de la capital en defensa de la jornada de 8 horas y otros derechos democráticos; las protestas de 43 sindicatos por el incumplimiento del pago de aguinaldo y otros beneficios sociales. Mencionaremos asimismo las enérgicas acciones masivas de los campesinos pobres de Alto Paraná, Yhú, Capitán Bado, Potrerillo, Cordillera, Ka'aguasú y otros lugares, por la tierra y contra los desalojos.

También los estudiantes de los movimientos universitarios independientes se incorporaron a la lucha, protestando contra el encarcelamiento arbitrario de sus compañeros y demandando la libertad de expresión y la derogación de las leyes represivas reaccionarias. Tuvo lugar la combativa huelga de hambre de decenas de jóvenes en demanda de su libertad y por la democratización del país. Los familiares de presos políticos realizaron una concentración pública exigiendo la liberación de sus parientes detenidos, así como el levantamiento del estado de sitio. A la vez, ha ido cobrando fuerza el movimiento de solidaridad nacional e internacional para salvar la vida y liberar a muchos centenares de patriotas que se consumen en las mazmorras del régimen.

Los periodistas no sometidos al régimen luchan por sus derechos de organización, por la libertad de prensa y de expresión. La Iglesia Católica realiza misas por la libertad de los presos, se pronuncia por la derogación de las leyes represivas, contra la corrupción, las mentiras descaradas de la propaganda oficial y por el retorno de los miles de exiliados a su país.

El pronunciamiento de los partidos de la oposición, de dirigentes sindicales, personalidades públicas e intelectuales por la democratización del país muestra que sigue creciendo la resistencia popular contra la política de opresión, vasallaje y miseria de la dictadura pro-norteamericana de Stroessner.

La manipulación de las informaciones por parte del régimen no permite que en el extranjero se conozca esta realidad del país. También son sometidos a la censura los comentarios que la prensa paraguaya hace sobre los acontecimientos continentales. Pero Paraguay es parte integrante del acontecer latinoamericano y mundial. El proceso democrático abierto en unos países del continente, el auge del movimiento de masas contra la dictadura, el desarrollo del movimiento de liberación nacional en otros países, indudablemente, ejercen una influencia positiva en la resistencia paraguaya. Dichos procesos alientan a las fuerzas progresistas y les señalan que, así como cayeron Batista en Cuba y Somoza en Nicaragua, también serán derrotados Stroessner, Pinochet y otros lacayos del imperialismo y la reacción, a condición del fortalecimiento de la acción unida y organizada del pueblo.

La tendencia que está en desarrollo en el continente, es la corriente democrática, patriótica, antimperialista, por la paz, la soberanía nacional y el progreso social. El factor determinante que alienta impetuosamente ese proceso de cambios renovadores son los grandes éxitos de alcance histórico-universal del sistema socialista mundial, con la poderosa Unión Soviética al frente; los avances del movimiento obrero internacional y el auge del movimiento de liberación nacional.

La unidad, garantía de la victoria

Hoy en día, la tarea más importante de todos los patriotas paraguayos es el derrocamiento de la dictadura fascista de Stroessner. Para ello, nuestro Partido plantea que es necesario el despliegue de la lucha unida y organizada de las masas. Intensificar la preparación política e ideológica, así como la coordinación de la lucha de todos los demócratas y patriotas —civiles y militares— empleando diversas formas de luchas que sean necesarias de acuerdo a las condiciones concretas con miras al derrocamiento de la dictadura y su reemplazo por un gobierno provisorio civil-militar de unidad democrática y patriótica, primer paso hacia las transformaciones más profundas con vistas al socialismo.

Las corrientes unitarias, antidictatoriales siguen ganando terreno. Pero la principal debilidad del movimiento revolucionario y democrático de Paraguay sigue siendo la insuficiente unidad y organización de todas las fuerzas

progresistas. La formación del frente nacional antidictatorial, sin exclusiones, es una necesidad objetiva, como instrumento seguro de la victoria. Para concretarlo en la práctica, sin sectarismo excluyente ni conciliación con el régimen, debemos movilizar y canalizar todas las voluntades y energías opositoras al continuismo fascista hacia un solo y poderoso torrente capaz de ahogar al viejo y corrompido régimen.

Lamentablemente –como expresa el Manifiesto de la Comisión Política de nuestro Partido–, ciertos dirigentes de la oposición bajo presión de la dictadura y el imperialismo y su prédica anticomunista, no han recogido las aspiraciones populares de movilización de masas y de unidad amplia. Algunos dirigentes del Acuerdo Nacional[6], en vez de ampliar sus filas con la presencia de representantes de la clase obrera, de los campesinos, estudiantes y otros sectores, a fin de sumar fuerzas contra la dictadura, se oponen a la participación de los comunistas. Prefieren la muerte por inanición de dicho nucleamiento por temor a la amplia unidad de las masas, sin discriminaciones. En razón de su propia naturaleza de *clase*, estos *líderes* sostienen una actitud conciliadora, no desean una verdadera democratización del país. Con todo, seguiremos proponiendo al Acuerdo Nacional nuestra cooperación, aunque sea en una sola cuestión concreta.

Más de 30 años de dictadura, de clandestinidad rigurosa, de persecuciones y torturas, de desapariciones y asesinatos de muchos de nuestros mejores dirigentes y militantes, no han doblegado el patriotismo ni la posición internacionalista consecuente de los comunistas paraguayos. A pesar de los duros golpes recibidos, del matonismo policíaco y sus asesores de la CIA, nuestro Partido viene desenmascarando a los verdugos de nuestro pueblo, alentando la creciente resistencia contra los traidores a la patria, la camarilla fascista de Stroessner. Nuestra línea de unidad amplia, sin exclusiones, de formación de un verdadero frente nacional antidictatorial, penetra cada vez más entre los patriotas paraguayos. ¡Cuántas veces Stroessner y sus testaferros han dado por destruido al Partido Comunista Paraguayo! Inclusive líderes de la oposición le han dado por liquidado por haber sido asesinados o desaparecidos sus principales dirigentes. Pero el Partido, cual fabulosa ave Fenix, renace de sus cenizas, adquiere creciente vitalidad, aumenta su autoridad y prestigio. Los comunistas dan mayor participación a todos los cuadros y militantes en la labor colectiva, empleando con mayor profundidad el probado estilo leninista de la crítica y la autocrítica y observando más estrictamente los principios y las normas de la seguridad y vigilancia revolucionaria.

En la lucha abnegada por llevar a la práctica su orientación política, nuestro Partido ha tenido importantes éxitos y también fracasos. Entre las experiencias más negativas cabe señalar: primero, la subestimación de la labor ideológica y, segundo, la infiltración enemiga que ha causado daños enormes no sólo a los comunistas sino también al movimiento revolucionario paraguayo. La dirección de nuestro Partido ha adoptado las medidas tendientes a producir un viraje radical en el trabajo de educación político-ideológica, a fin de que cada cuadro y militante del Partido eleve su nivel de conciencia marxista-leninista, comprenda mejor la línea partidaria y cómo debe llevarla a la práctica.

Destacados cuadros del Partido cayeron en las garras del enemigo a raíz de delaciones de elementos infiltrados o debido a la inobservancia de las normas del trabajo clandestino. Entre ellos, los camaradas Miguel Angel Soler, Secretario del CC; Rubén González Acosta, miembro del CC; Derliz Villagra, Secretario de la Federación Juvenil Comunista. Los verdugos lograron apresar a los camaradas Antonio Maidana, Primer Secretario del CC de nuestro Partido, y Emilio Roa, miembro del CC del PCP. El secuestro y la desaparición de Maidana, símbolo de la resistencia contra la dictadura fascista, ha sido una pérdida muy cara y sensible. Maidana concentraba toda su capacidad, energía y experiencia en la tarea de forjar el fuerte partido de la clase obrera, capaz de encabezar la lucha de las masas por el hundimiento del viejo poder reaccionario.

Pero los comunistas paraguayos, educados en la fidelidad insobornable a la causa de la clase obrera, a la invencible doctrina leninista, en el espíritu del internacionalismo proletario, con el camarada Julio Rojas, comunista experimentado y firme, a la cabeza de la dirección del Par-

tido, tenemos la seguridad de que la renovada y fortalecida presencia orgánica de los comunistas en la vida nacional será un factor de gravitación ponderable para la derrota del continuismo fascista y la iniciación de un nuevo período en la historia del país, un período de libertad, paz y progreso social.

La Comisión Política del CC de nuestro Partido acordó, como tarea prioritaria, intensificar la campaña de solidaridad para salvar la vida y liberar a Antonio Maidana y otros camaradas desaparecidos, por la liberación de todos los presos políticos y la amnistía general, sin exclusiones. Es necesario fortalecer las posiciones del Partido, de su organización en los centros fundamentales; aumentar la difusión de su órgano *Adelante*, de las ideas de nuestro programa, tendientes a ganar muchos nuevos afiliados, luchadores firmes y consecuentes. Además, acordó reforzar su trabajo en las Fuerzas Armadas, con miras a buscar puntos de apoyo entre los patriotas –los militares no comprometidos en la represión ni los sucios negociados–, con el objetivo de coordinar la lucha por el derrocamiento del elenco fascista gobernante. La experiencia demuestra que la subestimación de este frente de actividad no ayuda a acelerar el combate por la destrucción del viejo régimen reaccionario.

La fuerza de nuestro Partido radica en su programa revolucionario, en su justa línea estratégica y táctica, en su fidelidad a los principios sustentados por el movimiento comunista internacional, en su orientación a aplicar su línea de masas, en la experiencia acumulada contra la infiltración enemiga y en defensa de la pureza de la invencible doctrina marxista-leninista, en su disposición a aprender de la experiencia de los partidos hermanos, sobre todo del PCUS, con espíritu creador. Por eso, estamos convencidos de que, persistiendo en la aplicación de una justa línea de principios, forjaremos el partido de vanguardia, capaz de llevar a las masas al combate y a la victoria.

En las condiciones explosivas de la actual situación internacional, los comunistas, junto con todas las fuerzas antimperialistas y partidarias de la paz del continente, debemos unir a los trabajadores, a nuestros pueblos en la lucha común contra los provocadores de guerra, contra los delirantes planes belicistas del imperialismo norteamericano y sus socios. Debemos elevar a más alto nivel la conciencia del peligro real de un desastre nuclear, a fin de sumar fuerzas para impedir el peligro de ese cataclismo que pende sobre la humanidad. Todo esto exige una verdadera ofensiva ideológica contra la esencia reaccionaria, militarista y agresiva del imperialismo y sus ayudantes revisionistas, una réplica rápida y convincente a la campaña de mentiras descaradas sobre el supuesto «peligro soviético», y la pretensión de confundir poniendo a un mismo nivel a los agresores y guerreristas con los que luchan por la paz mundial y la solidaridad internacional. Es necesario reforzar la ayuda a los pueblos que luchan por su liberación.

Los trabajadores de Paraguay necesitan hoy de un mayor despliegue de la solidaridad internacional a fin de contribuir a crear las condiciones para el triunfo decisivo: para la destrucción de la dictadura fascista y conquistar la libertad, la democracia, la justicia social, con la perspectiva del socialismo.

Revista Internacional, Nº 6 de 1984

[1] *Bases*, Nº 1 de 1973, p. 19.
[2] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XXIII, p. 384.
[3] Ibíd., t. XXIII, pp. 389, 408, 418.
[4] Jorge Dimitrov. *Obras Escogidas*. Editorial de Literatura Política, Moscú, 1957, t. I, p. 376.
[5] C. Marx y F. Engels. *Obras*, t. 28, pp. 424–427.
[6] Coalición opositora integrada por los partidos Liberal Radical Auténtico, Revolucionario Febrerista, Movimiento Popular Colorado (fracción desprendida del Partido Colorado oficialista) y Democristiano. *–N. de la Red.*

EN EL FRENTE DE LA LUCHA IDEOLOGICA

Unidad de pensamiento y acción

Jorge del PRADO,
Secretario General del CC
del Partido Comunista Peruano (PCP)

Como es sabido, en el desarrollo histórico de cada país operan factores objetivos determinados por su evolución económico-social, influida a su vez, tanto por las condiciones específicas nacionales como por los acontecimientos del mundo que le rodea. Operan también factores subjetivos, generados por la acción consciente de los hombres y, principalmente, por quienes asumen el papel de conductores de las clases y capas sociales creadoras de la riqueza e impulsoras de la revolución nacional y el progreso social. El papel de estos dos tipos de factores es siempre determinante, pero cobra mayor importancia y se hace más notable en circunstancias excepcionales, en aquellos sucesos que marcan avances cualitativos. Se comprenderá que cuando nos referimos a los factores subjetivos y al papel de los dirigentes, no estamos sobreestimando sus cualidades personales; estamos aludiendo, con criterio marxista, a la actuación de esas personalidades como intérpretes de los intereses y anhelos de las clases revolucionarias y de las masas populares, así como de las necesidades históricas del país determinado y del mundo en constante desarrollo. No estamos refiriéndonos a las hazañas individuales, sino a los acontecimientos sociales y políticos más trascendentales.

En 1984 se ha conmemorado el 90 aniversario del nacimiento de José Carlos Mariátegui[1] y el 54 de su muerte. La vida y la obra de este insigne revolucionario repercutieron grandemente en la propagación y el desarrollo de las ideas marxistas-leninistas no sólo en su patria, el Perú, sino en toda América Latina. No obstante el tiempo transcurrido, su pensamiento y acción práctica concitan creciente interés en vastos sectores del movimiento comunista internacional.

La obra de Mariátegui, que saludó con entusiasmo la Gran Revolución Socialista de Octubre, aborda importantes problemas tales como la correlación de lo nacional y lo internacional en el movimiento revolucionario, la dictadura del proletariado, la cuestión de las nacionalidades en el contexto de los países andinos con población indígena mayoritaria o importante, el problema agrario, la interacción de la revolución y la cultura, y otros temas en torno a los cuales se está librando, hoy también, una reñida lucha ideológica. Se da así el caso de un ideólogo y dirigente comunista cuya influencia intelectual no sólo se mantiene viva y dinámica, sino que continúa creciendo después de su muerte.

La historia ratifica...

En el Perú han ocurrido, después del fallecimiento físico de Mariátegui, muchos hechos promotores de importantes modificaciones estructurales y que han ratificado el acierto de sus previsiones; avances que, en determinados casos, han impulsado o tienden a impulsar el proceso revolucionario. Sin entrar aquí en un análisis integral de este desarrollo, destacaremos sólo dos fenómenos que distinguen en apreciable medida nuestro acontecer político del de otros países latinoamericanos. Estamos refiriéndonos, concretamente, al proceso antiimperialista y antioligárquico protagonizado por el gobierno del general Velasco, entre 1968 y 1975, y a la formación de Izquierda Unida (IU) y su exitosa participación en las elecciones municipales de noviembre de 1983.

En lo esencial, el «fenómeno peruano» —expresión con la que se designó fuera de nuestro país al gobierno del general Velasco— fue, en aquellos años, parte del contexto general latinoamericano integrado también por un movimiento parecido en Panamá bajo la dirección del general Torrijos, en Bolivia jefaturado por el general Torres y, en sus rasgos fundamentales, también, por el triunfo de la Unidad Popular en Chile, que llevó al poder al gobierno

de Salvador Allende. Asistíamos entonces a un auge vigoroso del movimiento antiimperialista continental, alentado no sólo por los éxitos, ya tangibles, de Cuba y la construcción del socialismo en ese país hermano, sino también por la contundente derrota del imperialismo norteamericano en Vietnam y el ascenso de las luchas de liberación nacional en todos los países considerados del «Tercer Mundo». En Chile, el factor subjetivo fundamental fue la unidad lograda por los partidos de izquierda y, sobre todo, la unidad socialista-comunista. En el Perú, Panamá y Bolivia, desempeñaron un papel de similar importancia las luchas antiimperialistas enrumbadas principalmente hacia la nacionalización del petróleo en nuestro caso, hacia la recuperación del Canal en el caso panameño y hacia el establecimiento de un gobierno nacionalista-democrático en el de Bolivia. En todos estos casos, se sumó al empuje liberador de los pueblos –factor insuficientemente desarrollado entonces– una corriente nacionalista revolucionaria en determinados sectores de las Fuerzas Armadas, que se encontraban, al mismo tiempo, profesionalmente decepcionados del poderío militar norteamericano y enconados con los gobernantes de esa potencia imperialista por su conducta opresora con nuestros pueblos y prepotente con sus ejércitos.

Esos son los rasgos comunes o muy similares de este nuevo, singular y el más importante ascenso de la lucha liberadora en los cuatro países mencionados. En lo que atañe al Perú, la evolución de los militares patriotas hacia posiciones radicales de carácter antiimperialista y antioligárquico se inspiró también, en gran medida, en el pensamiento de Mariátegui, en el análisis y las tesis contenidas en sus *Siete ensayos*. El general Velasco reconoció expresamente esta influencia en su discurso proclamando la Reforma Agraria y al fundamentar el «Plan Inca»[2]. Y en nuestro país nadie desconoce que el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), formativo del pensamiento político de los oficiales de inspiración patriótica que participaron en el pronunciamiento del 3 de octubre de 1968[3], contó entre sus principales textos referidos a la estructura de la sociedad peruana y su evolución, la obra clásica del Amauta[4].

En cuanto al significado de Izquierda Unida y su razón de ser, corresponde reconocer, en primer término, que se trata de una aplicación concreta de la táctica del frente único, válida y aplicable en cualquier país cuyos pueblos luchan por su liberación. No puede atribuirse, pues, en el caso peruano, sólo a la influencia del pensamiento de Mariátegui. Lo que sí podemos afirmar es que Mariátegui difundió aquí este principio para llevarlo a la práctica en el movimiento obrero.

En la experiencia actual de participación del PCP en Izquierda Unida merece singular atención el alto grado de cohesión política de las fuerzas que la integran. Nosotros la entendemos como una unidad no sólo progresista y democrática, sino antiimperialista y revolucionaria, lograda en el Perú gracias al alto nivel de lucha por la liberación nacional y social. Para nosotros son ejemplos de unidad Cuba, que construye el socialismo; Nicaragua, que derrotó el somocismo y reconstruye el país en forma independiente y democrática, y El Salvador, donde las fuerzas revolucionarias dirigidas por el FMLN–FDR[5] libran frontalmente y con las armas la lucha por el poder popular.

¿A qué se debe esta relativa singularidad de nuestro desarrollo? Por supuesto, no se debe sólo a la creciente radicalización de los trabajadores, determinada por la crisis económica y la política entreguista y antipopular de las clases gobernantes, coligadas con el imperialismo norteamericano. Semejantes factores objetivos operan en todos los países no liberados de América Latina y el Caribe. En el caso peruano operan también en el aspecto subjetivo, además de la actividad de nuestro partido, otros dos factores.

Uno es el apreciable desarrollo de la conciencia social de clase y antiimperialista, y el correspondiente nivel de organización de los trabajadores y las grandes masas populares. Desarrollo fuertemente impulsado durante el gobierno de Velasco, al calor de las conquistas patrióticas, antilatifundistas y laborales logradas entonces.

Otro es la difusión y enraizamiento de las ideas de Mariátegui con la fuerza persuasiva de su análisis, procesado con más intensidad precisamente a partir de esas importantes reformas estructurales. El hecho de haber avanzado

nuestro país un trecho en el camino de esos cambios y el haber comprobado una gran parte de nuestro pueblo que ellos obedecían a una necesidad histórica objetiva, encarándonos a la tarea de defender y completar tales logros –ahora en desmontaje–, ha generado en la intelectualidad avanzada, y especialmente entre los más lúcidos economistas, sociólogos, científicos y técnicos, un creciente interés por profundizar en la investigación de nuestra realidad, tomando como modelo a Mariátegui y a partir de lo que él hizo. De ahí que todos, o casi todos, los partidos integrantes de IU y los intelectuales sin partido que militan en este frente se reclamen mariateguistas. Esto no significa, desde luego, que ellos alcancen la justa orientación marxista-leninista del Amauta ni que los mencionados partidos compartan realmente la concepción partidaria de Mariátegui o que estén en condiciones de reemplazar al partido que él fundara.

Las deformaciones del pensamiento y la imagen de Mariátegui

Lo que acabamos de anotar resulta, a nuestro juicio, altamente valioso para apreciar a cabalidad la orientación marxista-leninista y perdurabilidad del legado de José Carlos Mariátegui. Se trata del autor peruano más leído[6] y el que ha concitado mayor cantidad de libros y ensayos destinados a juzgar su obra. Es interesante y útil examinar el problema desde otro ángulo visual, relacionándolo con el motivo de los tenaces esfuerzos que algunos «teóricos» vienen haciendo por mistificar su mensaje y distorsionar el contenido de su obra. Nuevamente se confirma lo que decía Lenin: «En vida, a los grandes revolucionarios las clases opresoras los hacen víctimas de constantes persecuciones; combaten sus doctrinas con la perfidia más salvaje, con la más desenfrenada campaña de mentiras y calumnias. Después de muertos, se intenta convertirlos en santos inofensivos, canonizarlos, rodear sus nombres de una aureola celestial, con el objeto de «consolar» y engañar a las clases oprimidas, castrando el *contenido* de su doctrina revolucionaria, mellando el *filo* revolucionario de ésta, envileciéndola»[7].

En trabajos de autores no marxistas consagrados al legado del gran revolucionario peruano, que aparecen durante los años 70 y 80, ya no se trata simplemente de una reedición de la vieja polémica, sino de apoyarse en su prestigio deformando sus ideas. En el desarrollo general de la controversia en torno a la herencia ideológica del Amauta, lo correcto es distinguir dos etapas y dos tendencias. La correspondiente, en lo fundamental, a la primera etapa, podrá denominarse simplemente la de los tergiversadores, empeñados, sobre todo, en desprestigiar a Mariátegui como introductor del marxismo-leninismo en el Perú y como fundador del Partido Comunista. La segunda puede ser caracterizada como la de los revisionistas y engloba a todos los que, en los últimos tiempos, no atacan frontalmente los postulados teóricos de Mariátegui, pero sí los inerpretan a su manera, exagerando la importancia de algunos autores citados por él y la de algunos términos y conceptos ajenos al lenguaje marxista-leninista.

Los argumentos con que unos y otros cuestionan la autodefinición marxista de Mariátegui son, muchas veces, coincidentes. Pero, mientras que los primeros tratan de minimizar la trascendencia del legado de Mariátegui, pretendiendo atribuirle una supuesta inconsistencia ideológica, los segundos se empeñan en el ímprobo esfuerzo de descubrir en las obras del Amauta la creación de una doctrina propia, «nacional», o de una versión original del marxismo «peruano», que nada tendría que ver con el leninismo.

No vamos a detenernos en la refutación de la primera tendencia. Hace rato quedó bien claro su carácter antimarxista desembozado. Merece la pena, en cambio, examinar, aunque sea resumidamente, el contenido de la segunda tendencia, que, siendo nociva por sus efectos confusionistas, no obedece en muchos casos a un propósito reaccionario y, en ocasiones, expresa incluso un determinado grado de avance en la evolución ideológica y política de sus portavoces, sin descartar la posibilidad de que esa evolución alcance ulteriormente su completa madurez. Anteriormente, dimos a entender la existencia de esta posibilidad cuando nos referimos a lo beneficiosa que ha sido

la influencia de Mariátegui sobre la mayoría de los partidos de izquierda, al haber generado una actitud mental propicia al encuentro de puntos de vista políticos y programáticos, en base a los cuales se ha forjado Izquierda Unida.

Aquí es preciso señalar que en el desarrollo de esta unidad ha influido también, en notable medida, el contexto surgido después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la formación del sistema socialista mundial y la descomposición del sistema colonial imperialistas. Estos acontecimientos han determinado un crecimiento muy grande de la influencia de las ideas socialistas, las cuales no sólo se arraigan en la mentalidad de la clase obrera y de otras capas de trabajadores, sino que ganan también la simpatía de la intelectualidad progresista, de los científicos y técnicos profesionales y del estudiantado universitario, de ciertos sectores de la pequeña burguesía.

Siendo ello un factor sumamente valioso del avance social, sin embargo, su contraparte dialéctica consiste en que las nuevas capas no proletarias, incorporadas así a la lucha por el socialismo, no pueden superar de un momento a otro, totalmente, sus hábitos individualistas y el subjetivismo que les es inherente. Esto se traduce en la idealización de «valores» burgueses tales como la democracia «representativa» y las libertades y derechos que ella postula en el papel y que vienen siendo pisoteados desde hace tiempo por las clases gobernantes y el imperialismo. En el Perú, en el campo de la izquierda que no milita en el PCP, pero que se encuentra considerablemente influida por el pensamiento de Mariátegui y el ejemplo de su vida, esa «teorización» pequeñoburguesa se expresa, en el mejor de los casos, en una aceptación sólo parcial de los postulados marxistas-leninistas.

De lo dicho se desprende claramente que a los comunistas peruanos se nos plantean hoy dos tareas determinadas por nuestro propósito de fortalecer el frente de lucha común proyectándolo hacia el futuro. La primera consiste en la necesidad histórica de impulsar la actual unidad política de la izquierda, con objetivos inmediatos mayormente electorales, al plano de un mejor entendimiento ideológico, que nos permitiría no sólo conquistar el gobierno y

el poder político, sino también consolidar esas posiciones y construir la nueva sociedad antiimperialistas enrumbada al socialismo. En otras palabras, tenemos que lograr una común identificación con los legados de Mariátegui no sólo en algunos aspectos, sino en lo esencial de su pensamiento, relacionado con la lucha revolucionaria. La segunda preocupación consiste en evitar que nuestras divergencias actuales deriven en la introducción de una cuña divisionista precisamente en el interior de Izquierda Unida.

Lo que se oculta detrás de los argumentos reformistas

Para apreciar en qué consiste y en qué sentido operan los esfuerzos de los reformistas que desvirtúan la obra de Mariátegui, debemos saber, antes que nada, qué ubicación filosófica e ideo-política le dan sus tergiversadores y en qué se basan. Y, al indagar este tema, debemos recordar que no pocas veces él había fundamentado algunos de sus juicios en conceptos de filósofos o escritores idealistas de distintas escuelas. Entre ellos figuraban, en particular, Bergson, representante del intuitivismo; Nietzsche, exponente del voluntarismo; Spengler, portavoz del fatalismo; Gentile y Croce, del neohegelianismo italiano, así como Sorel, el más alto exponente del anarco-sindicalismo neoproudhoniano, empeñado en conciliar dentro de esta corriente el cristianismo y el anarquismo con el marxismo. Debemos reconocer, igualmente, que en determinadas ocasiones había empleado las palabras «religión» y «mística» para referirse al fervor y entrega revolucionaria indispensables en nuestras luchas, y la palabra «raza» para referirse a los conceptos de nación y nacionalidad.

Pues bien, fundándose en tales menciones, los tergiversadores de la primera vertiente si no niegan de plano la autenticidad marxista de Mariátegui, le dan una connotación conciliadora entre el cristianismo y el materialismo dialéctico, o le califican, sin más ni más, de «soreliano». Los segundos, los de la corriente revisionista seudo mariateguista, sin dejar de atribuirle una poderosa influencia

idealista, consideran que postuló un «marxismo abierto» diferente o contrapuesto al marxismo-leninismo, que, para ellos, es sinónimo de un marxismo sectario.

Ahora bien, es sabido que la utilización por Mariátegui de algunos conceptos y expresiones no marxistas corresponde a sus primeros años de juventud, al período formativo en Europa, y que fueron siendo superados paulatinamente por él en el curso de su maduración.

Por otra parte, para dar una adecuada respuesta a los seudo mariateguistas que quieren ver en él a un portavoz del «marxismo abierto», basta con recordarles que el marxismo-leninismo, por su esencia dialéctica, nunca ha pretendido realizar una revolución socialista sobre la nada, prescindiendo totalmente del pasado y de los valores provenientes de otras doctrinas. Por el contrario, la revolución que preconizamos sólo ha de destruir las relaciones de producción y los elementos superestructurales que obstaculizan y frenan el desarrollo social, conservando en cambio como elementos favorables al proceso revolucionario, todos los valores positivos heredados de otras épocas y provenientes de otras corrientes del pensamiento. La posición de Mariátegui a este respecto no fue, pues una innovación del marxismo, ni un «marxismo abierto»; sino sólo una versión correcta del marxismo-leninismo.

Empeñados en negar esto último, los amigos seudo mariateguistas aducen que él nunca mencionó en sus escritos el término «leninismo» y que tampoco mostró de manera expresa una posición favorable a la dictadura del proletariado, principio que, según ellos, no es marxista, sino una invención de Lenin aplicable sólo a las condiciones concretas de la Revolución Rusa de 1917. No vamos a detenernos en refutar esto último. En este sentido, bastaría con una simple lectura, por ejemplo, de la carta de Marx a Weidemeyer con fecha del 5 de marzo de 1852, en la cual, al resumir y puntualizar el contenido de su doctrina, dice textualmente: «...la lucha de clases conduce necesariamente a la *dictadura del proletariado*...» como una etapa de tránsito hacia «la *abolición de todas las clases* y hacia una *sociedad sin clases*»[8]. Que Mariátegui no hizo suya esta tesis tampoco es cierto. Su identificación doctrinaria con la Revolución de Octubre en Rusia y su defensa ardorosa del Estado soviético y del partido que lo dirige se realizó hasta el fin de su vida, precisamente en los años iniciales del primer Estado socialista cuando el asedio de los intervencionistas extranjeros y de la contrarrevolución interna demostraban prácticamente la necesidad ineludible de ese instrumento. Mariátegui expresó con toda claridad que «la dictadura del proletariado, por ende, no es una dictadura de partido sino una dictadura de clase, una dictadura de la clase trabajadora»[9].

No está de más subrayar que, tras los argumentos empleados por los revisionistas en su propósito de eliminar el contenido leninista en las concepciones de Mariátegui y atribuirle una recusación del principio de la dictadura del proletariado, se percibe claramente una inspiración socialdemócrata clásica. Son deformaciones dirigidas a fundamentar su conocida y nada original tesis del «marxismo democrático» o «socialismo democrático», sinónimos de la democracia formal que ideó la burguesía y que es incompatible con la democracia real postulada por Mariátegui y por la que luchan los comunistas y que comienza con la socialización de los medios de producción y las principales conquistas materiales y culturales de la sociedad.

El «socialismo nacional» y el internacionalismo revolucionario

Una segunda tesis elaborada por los amigos revisionistas seudo mariateguistas es la que le atribuye una concepción casi exclusivamente nacional de la revolución, distante del proceso revolucionario mundial y ajena, por tanto, al internacionalismo proletario. Tesis que les induce a inventar un supuesto enfrentamiento del fundador del PCP a la Internacional Comunista, distorsionando en tal sentido los desacuerdos surgidos en la Primera Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina (Buenos Aires, 1929) en torno al nombre del Partido Socialista del Perú[10], que entonces llevaba nuestro partido. Los fundamentos de esta tesis son forzados y deleznables. Se apoyan en frases o conceptos sueltos, separados de su contexto, así como en

posiciones y preocupaciones originales en relación a las de otros dirigentes comunistas latinoamericanos.

En torno a lo que sucedió en la Conferencia de Buenos Aires y, más concretamente, en lo que atañe a la cuestión del nombre del partido, se han escrito no pocos trabajos que desmienten contundentemente a los inventores de la presunta «ruptura» o «alejamiento» de la Internacional Comunista. Singular valor documental tiene, en este sentido, la carta dirigida al Grupo de París[11], al terminar el evento, por el jefe de nuestra delegación, el Dr. Hugo Pesce. En ella explicaba que la discusión durante el Congreso, así como en sesiones del Comité, se había desarrollado dentro de un ambiente de la más franca camaradería y que los puntos de vista de nuestro partido se habían impuesto en las resoluciones, a pesar de algunas resistencias en sentido contrario manifestadas al comienzo.

En un reciente libro mío, testimonio de experiencias de mi amistad con Mariátegui[12], aporto también claras demostraciones de que no sólo es totalmente inexacta la versión del «alejamiento de la IC» por parte de nuestro partido, que encabezaba entonces Mariátegui, sino que después de la Conferencia de Buenos Aires las relaciones entre ellos se estrecharon aún más y culminaron con la adhesión formal a ese organismo internacional creado por Lenin y que desempeñó un importantísimo papel en el movimiento comunista mundial.

Los dos principales pretextos esgrimidos por quienes quieren encontrar en Mariátegui un inspirador de su «socialismo democrático» y del «socialismo nacional» o «marxismo peruano» son aquella conocida y convocatoria frase del Amauta de «Peruanicemos el Perú» y la idea expresada por él de que «...el socialismo de Indoamérica no ha de ser calco ni copia, sino creación heroica... Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, con nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano»[13]. Para adecuarlo a sus propias posiciones, nuestros amigos quieren ver en ese concepto un criterio excluyente, como que el postular una revolución peruana que tome en consideración nuestra propia realidad, con nuestro propio lenguaje, significara preconizar una revolución desvinculada del proceso revolucionario mundial, prescindente de la solidaridad y del

entrelazamiento entre las fuerzas que, en cualquier parte del mundo, luchan contra el imperialismo y por el socialismo.

Sin embargo, aconseja Lenin que «para analizar cualquier problema social, se le encuadre dentro de un marco histórico *determinado*, y después, si se trata de un solo país... que se tengan en cuenta las particularidades concretas que distinguen a este país de los demás dentro del marco de una y la misma época histórica»[14].

Debemos hacer notar, además, que Mariátegui no alude siquiera a la revolución peruana, sino a la Revolución indoamericana o latinoamericana, precisando así su criterio internacionalista. Criterio que adquiere luego su cabal medida en el célebre editorial de *Amauta* número 17, titulado *Aniversario y Balance*, cuando dice: «La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial»[15].

En relación con la formación ideo-política de Mariátegui y con el contenido de los postulados adelantados por él, conviene señalar también tres circunstancias que, en nuestro concepto, han sido subestimadas hasta ahora por los estudiosos de su obra. La primera consiste en que la asimilación del marxismo la hizo en Europa en los primeros años de la década del 20, a la luz y al calor de la Gran Revolución Socialista de Octubre y de las revoluciones –no triunfantes, pero muy aleccionadoras– que se desencadenaron bajo su influencia en otros países europeos. Refiriéndose a ese período, Mariátegui dijo que su mejor aprendizaje lo hizo en Europa, que allí «desposó» sus ideas y que las experiencias adquiridas en el Viejo Continente le permitieron descubrir en esos años al Perú verdadero, capacitándole para comprenderlo mejor.

La segunda circunstancia consiste en que, al estudiar, muy cerca del escenario, el fenómeno de la Revolución Rusa, Mariátegui percibió con extraordinaria claridad y sensibilidad política, que con ella se iniciaba la crisis general del sistema capitalista y la época histórica de transición universal del capitalismo al socialismo. «Capitalismo o socialismo, ese es el problema de nuestra época», decía el ya citado editorial de *Amauta*[16]. Y la primera conferencia dictada a su regreso de Europa, en las Universidades Po-

pulares «González Prada», versó sobre *La Crisis Mundial y el Proletariado Peruano*. En ellas expresó, entre otros conceptos, que «las fuerzas proletarias europeas se hallan divididas en dos grandes bandos: reformistas y revolucionarios... Una parte del socialismo se ha afirmado en su orientación socialdemocrática, colaboracionista; la otra parte ha seguido una orientación anticolaboracionista, revolucionaria. Y esta parte del socialismo es la que, para diferenciarse netamente de la primera, ha adoptado el nombre de comunismo... Yo participo de la opinión de los que creen que la humanidad vive un período revolucionario. Y estoy convencido del próximo ocaso de todas las tesis socialdemocráticas...»[17].

La tercera circunstancia radica en que Mariátegui profundizó con el método marxista, en el estudio del pasado histórico para encontrar las raíces de la estructura y la superestructura actuales del país y precisar el carácter de nuestra revolución. Polemizando con quienes, desde el campo de la reacción, lo tildaban de «europeizante» y trasplantador de «fórmulas foráneas», llegó a la convicción de que, después de las revoluciones burguesas en Europa y Norteamérica, todos los procesos anticolonialistas y antiimperialistas conllevan una fuerte dosis internacionalista, expresada muy claramente en las revoluciones latinoamericanas por la independencia del yugo español. Ese contenido internacionalista se acentúa en la época actual. A ello se refería Mariátegui, cuando escribió: «El socialismo no es, ciertamente, una doctrina indoamericana, pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo. Y el socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es tampoco específica ni particularmente europeo». Y luego, refiriéndose a la época de lucha por la independencia, agregó: «...La interdependencia, la solidaridad de los pueblos y los continentes, eran, sin embargo, en aquel tiempo mucho menores que en éste»[18].

El indigenismo y el problema nacional

Un cuarto tema utilizado tanto por los detractores como por los deformadores del legado de Mariátegui, en defensa de sus respectivas posiciones, es el problema del indio. Se

trata de uno de los elementos específicos más característicos y sentidos de nuestra realidad. Algunos escritores y sociólogos anteriores a Mariátegui o contemporáneos suyos (Manuel Ugarte, Clorinda Matto de Turner, Pedro Sulen y otros) lo abordaron con honda sensibilidad desde distintos ángulos. Pero los trabajos del fundador de nuestro partido, nutridos en cierta medida por estos aportes, tuvieron un carácter global. Eran, tal vez, los primeros trabajos de investigación seria sobre estos problemas, realizados en América Latina. Mariátegui utilizó los instrumentos científicos del marxismo-leninismo en su análisis de la base económica y social del problema. Por primera vez se estableció con tanta certeza el entrelazamiento del problema del indio –como etnia y como tradición e institución comunitaria– con el problema de la tierra, o problema agrario.

Sin embargo, las tesis de Mariátegui incurren en dos errores: uno de formulación y el otro, más serio, de interpretación histórica. El primero, señalado ya más arriba, consiste en la utilización del término «raza» como sinónimo de nación o de nacionalidad. Y el segundo, en una exaltación del régimen social incaico. Partiendo de estos aspectos vulnerables, los detractores y los críticos de derecha sostienen, de una parte, que Mariátegui se equivoca, exagera el problema racial e idealiza el pasado incaico y, de otra parte, que, al abordar ese problema, confirma su pensamiento no marxista e idealista, el de un romántico añorador del incanato.

Creo necesario anotar que el empleo del término «raza» en vez de «nacionalidad» no implicó una mentalidad racista en José Carlos, como tampoco significó «populismo» la especial importancia que confirió a nuestro problema indígena en su entrelazamiento con el problema campesino. En contraposición a semejante sospecha, Mariátegui dijo categóricamente en su tesis para el Congreso de la CSLA: «El problema no es racial sino social y económico»[19], y en el capítulo de los *Siete ensayos* sobre este tema señaló: «El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo completamente como problema social, económico y político»[20]. También insistió reiteradas veces

en que la doctrina socialista es la única que da sentido moderno, constructivo, a la causa indígena y que los anhelos del indio sólo podrán realizarse con la ayuda del proletariado.

Algo parecido cabe apuntar sobre la connotación dada por Mariátegui al carácter de clase del imperio incaico, y a una supuesta estructura socialista o comunista original. El error, en este caso, fue determinado, de un lado, por los elementos positivos que percibió en la subsistencia de los hábitos colectivistas y democráticos de las comunidades campesinas indias y, de otro lado, por el alto valor y variedad de las manifestaciones culturales indígenas. También porque en aquella época no habían llegado al conocimiento de Mariátegui y de los estudiosos peruanos los trabajos de Marx sobre el modo de producción asiático y los de Lenin sobre el problema nacional. Tampoco se había profundizado en la investigación antropológica y etnográfica marxista (y no sólo marxista) de las diversas culturas precolombinas de nuestro país y de las correspondientes formaciones económico-sociales.

No obstante ello, el gran mérito de Mariátegui consistió en haber sido, tal vez, el pionero de este tipo de estudios en América Latina y en que abordó en la práctica, aunque con otro nombre y algunas diferencias, el problema nacional de la población indígena.

•

Es muy difícil que algún revolucionario auténtico deje de reconocer en Mariátegui a uno de los primeros y prominentes ideólogos y dirigentes marxistas-leninistas de América Latina. Y es muy difícil también pasar por alto el hecho de que el polifacético y excelso contenido de su labor fueron resultantes de sólo siete años de actividad ininterrumpida. Una labor que constituye hoy llave maestra para el porvenir de nuestra patria, porque las fuerzas de izquierda, que se han unido bajo su inspiración ideológica y política, ya son una real alternativa de poder político popular en el Perú.

Mariátegui se esforzó por sumar a las experiencias revolucionarias de otros países el descubrimiento de las peculiaridades nacionales y de las nuevas posibilidades que

ellas aportan. Comprendió que, en las condiciones del Perú, además de la organización clasista de la clase obrera y del movimiento sindical, además de la organización clasista del campesinado como aliado de la clase obrera, además de la fuerza solidaria del internacionalismo proletario, había que abordar la solución del problema nacional indígena, el desarrollo de las potencialidades revolucionarias de las mujeres trabajadoras y el empuje vigoroso y consciente de la juventud y de la intelectualidad progresista.

La labor de Mariátegui en el campo de la cultura significó el inicio de la revolución cultural en nuestro país, labor orientada en cuatro direcciones: a) la innovación con espíritu científico y progresista del ambiente cultural peruano; b) la incorporación de los elementos culturales autóctonos o indígenas al bagaje cultural del pueblo peruano, también con sentido innovador y revolucionario, a través del movimiento indigenista en literatura y arte, y del abordamiento del problema indígena en los términos que hemos señalado; c) la vinculación del movimiento intelectual, tanto literario y artístico como profesional y estudiantil, al movimiento obrero-campesino; d) el entrelazamiento e intercambio de experiencias, del movimiento cultural peruano con las corrientes intelectuales y culturales más avanzadas y positivas del campo internacional.

La causa por la que luchó José Carlos Mariátegui y el partido que él fundara, viven y conducen adelante a los comunistas peruanos. Junto a ellos, participan en el combate por un futuro mejor todas las fuerzas auténticamente revolucionarias de nuestra sociedad. Refiriéndose al lugar que en la agitada historia del siglo XX le corresponde a este insigne pensador y revolucionario, su caro e ilustre amigo, el escritor comunista francés Henri Barbusse dijo con profundo acierto: «¿Sabéis quién es Mariátegui? Pues bien, es una nueva luz de América. El prototipo del nuevo hombre americano»[21].

Revista Internacional, Nº 12 de 1984

[1] Nacido en una familia pobre, José Carlos Mariátegui empezó a trabajar a los 14 años como obrero de imprenta. Posteriormente, destacó como periodista y dirigente político. Su corta vida es una brillante encarnación del ideal marxista de unidad de la teoría

y la práctica. Dejó a las futuras generaciones no sólo el Partido Comunista Peruano y el movimiento sindical organizado en la estructura de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), sino también numerosos escritos, entre los cuales sobresale su *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* (1928), que tuvo profunda repercusión entre los marxistas y sectores progresistas latinoamericanos. *–N. de la Red.*

[2] El *Plan Inca,* proclamado por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada dirigido por el general Velasco Alvarado, proponía importantes transformaciones políticas, sociales y económicas (Reforma Agraria, nacionalización de las empresas imperialistas, desarrollo del sector estatal y del sector autogestionario de los trabajadores, ampliación de los derechos laborales, etc.). *–N. de la Red.*

[3] Se refiere al derrocamiento del gobierno pronorteamericano de Belaúnde Terry, llevado a cabo bajo la dirección del general Velasco Alvarado. *–N. de la Red.*

[4] La palabra quechua *amauta* significa «maestro». Así llaman los peruanos al fundador del PCP, J. C. Mariátegui. *–N. de la Red.*

[5] Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario. *–N. de la Red.*

[6] Desde 1928 hasta 1983, se imprimieron 41 ediciones de su libro *Siete ensayos,* con tiraje total de 2.600.000 ejemplares. De sus *Obras Escogidas* (en 20 tomos) desde 1959 se ha publicado un total de más de un millón de ejemplares. *–N. de la Red.*

[7] V. I. Lenin. *Obras Completas,* 1ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XXV, p. 379.

[8] C. Marx y F. Engels. *Correspondencia,* Cartago, Buenos Aires, 1957, p. 47.

[9] J. C. Mariátegui. *Historia de la Crisis Mundial,* Lima, 1971, p. 149.

[10] Esas discrepancias se reducían, esencialmente, a que algunos participantes en la Conferencia cuestionaron el carácter marxista-leninista de este partido y la amplitud que se le imprimía, basándose en el nombre que llevaba entonces. La delegación peruana, tal como lo había recomendado Mariátegui, defendió el mantenimiento del nombre del partido y refutó contundentemente las equivocaciones a que se prestaba. *–N. de la Red.*

[11] Grupo de destacados intelectuales peruanos adheridos al partido, que vivían en la emigración. *–N. de la Red.*

[12] Jorge del Prado. *En los años cumbres de Mariátegui,* Lima, 1983.

[13] J. C. Mariátegui. *Ideología y política,* Lima, 1981, p. 249.

[14] V. I. Lenin. *Obras Completas,* 1ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XX, p. 396.

[15] J. C. Mariátegui. *Ideología y política,* pp. 247–248.

[16] Ibíd., p. 249.

[17] J. C. Mariátegui. *Historia de la Crisis Mundial,* pp. 19, 21, 22.

[18] J. C. Mariátegui. *Ideología y política,* pp. 248–249.

[19] Ibíd., p. 45.

[20] J. C. Mariátegui. *Siete ensayos,* Lima, 1959, pp. 32–33.

[21] Véase J. del Prado. Op. cit., p. 179.

Ambiciones globales del «imperialismo informativo»

Héctor MUJICA,
miembro del Buró Político del CC
del Partido Comunista de Venezuela (PCV)

Cierta vez en que me referí desde mi cátedra universitaria al complejo militar-industrial-cultural y las nuevas formas de dominación imperialista, un alumno me preguntó si, de acuerdo con la exposición que yo estaba haciendo, el capitalismo había cambiado su esencia. Y le dije: «En modo alguno. La esencia de explotación del capitalismo es inmodificable. No hay capitalismo bueno, ni distinto. Sigue siendo el mismo cuyas leyes desentrañó Marx. Lo que ocurre es que el capitalismo, como la zorra, sabe simular. Y hoy por hoy, gracias a la revolución científico-técnica, a la Informática y al uso masivo de los medios de comunicación, los artífices y dirigentes del capitalismo, a escala mundial, utilizan todos estos artilugios en favor de la perduración del sistema».

Respondía así a una inquietud, ya que sostenía entonces, y he venido profundizando en el asunto desde hace lustros, que la televisión es, para el capitalismo de hoy, lo que la máquina a vapor le fue ayer. Y cuando escribo televisión, no sólo me refiero a *mamá televisión*, tal como la bautizara un sociólogo francés, sino también a *papá transistor*, a los *tíos satélites*, a los *hijos informáticos*, en fin a toda la gama de instrumentos científico-técnicos a su servicio.

Cómo se hace un presidente

Claro es que las leyes de la democracia «representativa», con su inherente poder del dinero, no han experimentado cambios sustanciales en estas nuevas condiciones. Lo que

sí ha cambiado son las recetas de popularidad en el mundo capitalista. Hoy los candidatos presidenciales, más que exponer programa y difundir ideas, *venden imágenes*. De la misma manera que las investigaciones motivacionales aplicadas a la publicidad, hay que motivar al elector con imágenes. Recuerdo vivamente como, en 1974, el ex presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, ingresó al palacio presidencial de Miraflores después de una caminata desde el Congreso de la República, donde se había juramentado. Ese mismo año, el presidente francés Valery Giscard d'Estaing hacía lo mismo desde la Asamblea Nacional hasta el Palacio del Eliseo. ¿Quién copió a quién? Ninguno de los dos. Coincidencia de asesores.

Tiene razón Joe McGinniss, quien publicó en Nueva York *Cómo se hace un presidente*[1], cuando sostiene que el elector de Estados Unidos firme en sus creencias sobre un orden sobrenatural se aferra a su religión y defiende, apasionadamente, la ilusión de que los hombres que elige para gobernarle son de un metal más puro que el suyo. Esta propiedad de la sicología del hombre no politizado fue hábilmente utilizada en su tiempo –y no es más que un ejemplo– por el equipo que llevó al poder a Nixon. Conscientes de que su candidato sólo tenía la imagen de padre de familia, todos se pusieron a trabajar para darle una imagen total, capaz de convencer, a través de la TV, que el pueblo de Estados Unidos tenía en el televisor de su hogar a un gigantesco estadista.

Un candidato presidencial no puede darse el lujo de escribir mal, deshilvanadamente, sin coherencia ni ideas propias. En cambio, si ha sido bien acicalado, si sus defectos físicos más prominentes han sido corregidos con la cirugía facial, si sabe sonreír y aparecer como simpático, aunque carezca de ideas, la televisión pone lo demás. Como bien lo dice McGinniss el estilo se transforma en el quid, la sustancia. El medio de comunicación de masas, en este caso la televisión, es el masaje y el masajista que se lleva los votos.

Muchos candidatos presidenciales de los países capitalistas, tanto en América como en Europa; en Asia como en Africa, han aprendido la lección de Estados Unidos. Aún más: expertos de Estados Unidos en Opinión Pública y en

jingles publicitarios para la TV, viajan de uno a otro lugar del planeta para asesorar ya a la Democracia Cristiana, ya a los distintos socialdemócratas. Con razón tuve que decir, en 1978, cuando fui candidato presidencial, que del mismo modo como habían sido nacionalizadas la industria del petróleo y la del hierro, había que *nacionalizar las elecciones presidenciales*, hecho que no ocurrió, pues volvieron los asesores de Estados Unidos en 1983 para reforzar los comandos electorales de los partidos Acción Democrática y COPEI[2].

Se me podría advertir que Venezuela es un país en vías de desarrollo y que ésta es la causa por la cual ocurren estos hechos. Pero también asumen igual conducta partidos de países tan altamente desarrollados como la República Federal de Alemania, Francia y Suecia, entre otros.

El ejemplo más reciente y elocuente de ese poder «cosmético» de la televisión, como instrumento para la venta de falsas imágenes, es la campaña electoral de Reagan en 1984. Sin la televisión y de no ser porque el propio Reagan es un actor profesional, nunca hubiese conseguido la victoria sobre Mondale. Hoy ya está claro, y no sólo para los especialistas en propaganda y publicidad, sino para un gran número de ciudadanos con capacidad de reflexión, que en las condiciones de manipulación imperialista de la opinión pública muchos electores responden más bien a la imagen del candidato que al hombre propiamente dicho. Refiriéndose a las últimas elecciones presidenciales en EE.UU., el camarada Gus Hall, Secretario General del PC de EE.UU., escribe: «Si Reagan hubiese llevado su campaña electoral apoyándose en sus realizaciones o en la plataforma del Partido Republicano, habría sido derrotado... El pueblo no ha votado por el reaganismo ni la reaganomía. Muchos han votado por una imagen barnizada creada por la televisión y popularizada por la televisión comercial, los *clips* cinematográficos y una campaña publicitaria que ha costado 50 millones de dólares... Los norteamericanos han votado por un maestro hollywoodense del arte de la comunicación. La televisión que emerge como un factor de la mayor importancia en las elecciones, ha creado una nueva imagen y un nuevo concepto de la presidencia. Influenciados por la televisión, los electores

han separado al hombre del puesto que ocupa, de su política e incluso de su partido... En cierto sentido en la conciencia de las masas se ha separado el individuo del estadista, de su política, Reagan del reaganismo, y se ha rebajado el cargo de presidente a un status nominal. Fue así como Reagan ganó los votos»[3].

Esta apreciación se ve confirmada desde el campo mismo del imperialismo. J. Lake, dirigente de Relaciones Públicas del Comité por la Elección de Reagan, declaró en una entrevista que ahora «las imágenes son más importantes que las palabras». Un 60 % del público –comentó– recibe información televisiva, y por eso ya no es tan importante lo que dice el orador y apuntan los corresponsales. Más importantes que las palabras son las secuencias de imágenes positivas.

En fin de cuentas, de lo que se trata es de imponer el triunfo de los candidatos a presidente gratos a los sectores imperialistas, preservando así sus posiciones de mando y asegurando la subsistencia y consolidación del capitalismo como sistema, la exportación del *american way of life* como modelo. Y tan planetaria es la cuestión, que muchos especialistas en «cosmética política» ya famosos internacionalmente son los mismos que un año están en Israel en asesoramiento de *public opinion* para contrarrestar los efectos que el genocidio de Sabra y Chatila produjo en el ánima colectiva, como en Manila en favor del presidente F. Marcos, o en Senegal al lado de los seguidores del gran defensor del capitalismo Leopold Senghor, o en Bangkok, Buenos Aires o Caracas.

Del «big stick» a la «aldea global»

La penetración del imperialismo en los dominios de la cultura ha sido el tema de varios trabajos, entre otros de mi ensayo *Libro, quo vadis?*, en el cual demostré cómo la industria militar de EE.UU. ha venido adquiriendo sucesivamente las grandes casas editoriales norteamericanas. Igual fenómeno ocurre en Alemania Federal, España, Francia...

En esta nueva etapa de desarrollo del capitalismo, den-

tro de su esfera de dominación, se produce, virtualmente, una *militarización de la cultura*. Hace más de tres décadas, en un Informe del *Communications Policy Board* (Comité para la política de comunicación de masas) del presidente de Estados Unidos, se decía que uno de los baluartes de una sociedad «libre» es la libertad de las comunicaciones. Su comercio, su educación, su política, su integridad espiritual y su seguridad dependen del intercambio «sin restricción y sin servilismos de información e ideas».

Y aquí entramos en una vieja polémica: la de, por un lado, las demandas de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, expresadas desde la tribuna de la UNESCO, y por otro, la vieja política imperial de Washington en el dominio de la cultura, que es el de los *mass media*, las agencias transnacionales de noticias, los *comics*, el cine, los programas enlatados de televisión y los elaborados para millares de radiodifusoras sonoras en el orbe. Los pueblos rechazan enérgicamente la pretensión imperialista del *free flow information*, libre flujo de la información, que no sólo es doctrina de los grandes consorcios monopólicos de la industria cultural de Estados Unidos, sino del propio Departamento de Estado. Esta «política informativa» es una prolongación, por otros medios, de la política de expansión colonial del capitalismo desarrollado desde fines del siglo pasado. Del mismo modo que los abogados del «modo de vida norteamericano» preconizaron inmediatamente después de la segunda guerra mundial la consigna *Down barriers* («Abajo las barreras»), que llegaron a imponer como credo oficial de la política interior y exterior de EE.UU., los países del llamado Tercer Mundo comenzaron a percatarse de que ya Tarzán no era un simple muñequito o un actor en la pantalla, sino el vehículo de determinadas ideas. Las comiquitas no parecían ya tan asépticas: estaban, y están, cargadas de ideología de injerencia imperial.

Es así como comienza a gestarse un movimiento que crecerá en pocos años como un alud incontenible: el movimiento por un Nuevo Orden Informativo. Los pueblos de los países en desarrollo comprendimos que había que dejar de ser solamente orejas para también decir al mundo lo que somos, lo que sentimos y lo que queremos ser.

El capitalismo no ha cambiado esencialmente en su etapa imperialista. Pero ahora suele utilizar no sólo el *big stick* sino también formas y fórmulas muy sutiles de propaganda, persuación y adhesiones. Mientras se sitúa a los *marines* y barcos de guerra en las narices de Nicaragua y se amenaza y chantajea al gobierno sandinista de liberación nacional, se prepara en los laboratorios imperiales un reportaje contra el poder popular y el FSLN que es transmitido simultáneamente en más de veinte países de América Latina, en la televisión privada más allegada a la CIA, que es un auténtico pêle-mêle, donde se meten, en un trucaje televisual y fotográfico increíble, genocidios de la época de los Somoza como si estuviesen ocurriendo hoy y hechos abracadabrantes de El Salvador como si fuesen nicaragüenses.

Ese bochornoso engaño es obra del complejo militar-industrial, que denunció el propio Dwight Eisenhower en su discurso de despedida del pueblo de Estados Unidos en 1961 y que, según él, influía en todas las decisiones de la vida nacional. Hoy la situación es mucho más dramática aún, pues la Administración republicana no sólo prosigue aceleradamente la carrera armamentista y ha desempolvado el hacha de la guerra fría, sino que agudiza el peligro de catástrofe nuclear. El pulpo militar-industrial ha extendido sus tentáculos a la esfera cultural. Por ello hemos hablado del complejo militar-industrial-cultural.

Los intereses de todos los eslabones de este complejo se entrelazan estrechamente. Sirva de ejemplo el caso de un hombre como Frank Stanton, que, durante muchos años fue, a la vez, presidente de la Columbia Broadcasting System (CBS), la más poderosa red de radio y TV de Estados Unidos; representante de la United States Advisory Commission on Information (Comisión de Información de Estados Unidos), que supervisa las operaciones de la Agencia de Información de EE.UU. (USIA), el ministerio de propaganda del gobierno norteamericano para el extranjero, y presidente de la inefable Rand Corporation, ente investigativo radicado en California, «sin fines de lucro», financiado por la Fuerza Aérea y que realiza estudios tales como la mejor forma de dejar caer la bomba H, cómo operar las guerrillas, formas de contrainsurgencia, etc. Sobre esa

misma base militarista existe una organización llamada Armed Forces Communications and Electronic Association (AFCEA), la Asociación de las Fuerzas Armadas de Comunicaciones y Electrónica, que no es otra cosa que la fusión orgánica de la industria electrónica de Estados Unidos con el establecimiento militar.

La mayor red publicitaria de EE.UU. está en manos del Pentágono y cuenta con unos cuatro mil empleados. Según The Associated Press, las empresas que tienen contratos de Defensa cobran al gobierno federal por sus relaciones públicas. Un cálculo estima que los contribuyentes pagan directamente por lo menos 200 millones de dólares al año por tales servicios de prensa en nombre de las compañías privadas y no parece que nadie pueda dar ni siquiera una aproximación del dinero que gastan los militares en contar sus historias por el mundo adelante[4].

Si a todo esto añadimos el uso y abuso de los satélites artificiales y los sistemas COMSAT e INTELSAT, que efectivamente han convertido la parte no socialista del mundo en una «aldea global» para la propaganda reaccionaria, es obvio que éstas son las nuevas formas de dominación imperialista. Hace más de sesenta años que Lenin dijo su famosa frase acerca del cine, de que éste, de todas las artes, es la más importante para nosotros. Seguro estoy de que hoy se puede completar este aserto agregando «y la *televisión*».

Desde comienzos de la década de los 60, la NASA y la General Electric se dedicaron a fotografiar, día y noche, el suelo y el subsuelo de todos los continentes, práctica que muchos calificaron como un auténtico abuso y demostración de fuerza.

Bajo la cobertura de la consigna «abajo las barreras», Washington no estaría en contra de dedicarse a una verdadera piratería televisiva a nivel mundial. Pero la opinión pública del planeta condenó enérgicamente estos planes. En una declaración especial adoptada en octubre de 1972, la UNESCO, ateniéndose al principio de la libre información, reconoció que era necesario concertar previamente acuerdos intergubernamentales sobre la transmisión televisiva directa vía satélite a otros países. La Asamblea General de la ONU apoyó este punto de vista por 102 votos

contra uno, perteneciente al representante de EE.UU. La política norteamericana fue calificada justamente por la aplastante mayoría de miembros de la UNESCO como defensa de la «piratería informativa». Encontrándose aislado, Estados Unidos abandonó esta organización internacional.

Instrumentos de presión ideológica

El principal instrumento propagandístico del imperialismo norteamericano es la USIA, fundada en 1953. Bajo la presidencia de Reagan se ha llevado a cabo una reestructuración orgánica de la agencia y se ha creado un nuevo departamento encargado de la propaganda televisiva para el exterior, el cual prepara telenoticieros que son difundidos diariamente por el sistema de comunicación vía satélite WORLDNET[5]. Actualmente, la USIA tiene 214 representaciones en 129 países, a través de las cuales no sólo distribuye materiales televisivos, sino que organiza «telepuentes» intercontinentales en directo, entrevistas y ruedas de prensa televisadas. Durante el ejercicio fiscal de 1983/84 el presupuesto de la agencia alcanzó la cifra record de 885,4 millones de dólares.

La USIA tiene también en sus manos el potente brazo radiofónico llamado «La Voz de América», que trasmite más de mil horas en 42 idiomas a la semana. Distribuye diariamente materiales de propaganda que son recibidos por más de 10.000 periódicos y más de 5.000 radioemisoras que trasmiten unas 15.000 horas semanales. La mayoría de estos materiales son presentados como programas de la planta que trasmite, tal como lo hizo Venevisión, de Venezuela, con un reportaje falaz contra Nicaragua.

Sólo para la modernización técnica de «La Voz de América», la USIA ha asignado en los próximos cinco años más de mil millones de dólares. Con este dinero se proyecta construir nuevas radiodifusoras o reequipar las ya existentes en Europa, Asia y América Latina. Así, por ejemplo, hace poco comenzó a funcionar una estación de radio especialmente encargada de realizar transmisiones hostiles contra Cuba, mientras que para el diversionismo ideológico contra la URSS se construyen centros de retransmisión en Marruecos e Israel.

De los tres grandes consorcios de Estados Unidos en radio y TV (ABC, NBC y CBS), es la última, la Columbia Broadcasting System, la más ligada al Pentágono y la más transnacional. Sus programas abarcan más de 100 países, desde la India hasta Grecia; desde Liberia hasta Ghana; desde Buenos Aires hasta Caracas. Tiene inversiones y aporta *software* para compañías productoras en América Latina, tales como PROARTEL en Argentina, PANTEL en el Perú y PROVENTEL en Venezuela. De modo parecido actúan las otras dos corporaciones.

Como conclusión general de lo expuesto podemos decir con pleno fundamento que el imperialismo considera el sistema de comunicaciones vía satélite como uno de los factores decisivos del liderazgo mundial de EE.UU. en la era espacial.

En este complejo mundo de las comunicaciones, tan indisolublemente unido a la cuestión militar, la penetración USA es permanente. Si se toma en cuenta que 24 de los 30 millones de millas del sistema de comunicación nacional de los EE.UU. pertenecen a la Secretaría de Defensa o se arriendan por la misma, se verá entonces claramente el papel que juegan los círculos militares en este sistema.

Diversos datos atestiguan que la dirección del Departamento de Defensa de los EE.UU. pone una gran atención en la preparación de especialistas en el campo de la propaganda. En Fort Harrison (Indiana), el Pentágono tiene una escuela de información militar. Más de 2.000 representantes de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. estudian anualmente en ella. Por otra parte, la Marina de Guerra de EE.UU. se encuentra en constante contacto con 600 estaciones de televisión y 5.000 estaciones de radio del país, así como con cientos de organismos que tienen que ver con la información de masas. Agreguemos que las FF.AA. de Estados Unidos cuentan con 250 estaciones de radio y decenas de centros de televisión diseminados en el mundo. Edita asimismo más de 1.000 periódicos, unas 400 revistas, así como diversos boletines con una tirada global de más de 12 millones de ejemplares. En los últimos 20 años, los gastos de propaganda del Departamento militar de EE.UU. se han multiplicado por 15.

El complejo militar-industrial va mucho más allá del sistemático rearme de las FF.AA. y de su intromisión en el complejo mundo de la telemática. Se inmiscuye también en política, y en la más reaccionaria. Se ha dicho de él que es padrino de la John Birch Society[6], así como ayer amamantó a muchos militaristas furibundos, y estuvo metido hasta los tuétanos en la planificación y el afinamiento de la doctrina de seguridad y defensa diseñada en el Documento de Santa Fe, donde ya se procura el aniquilamiento de la revolución sandinista y una invasión masiva a Centroamérica para acabar con el FSLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y los guerrilleros de Guatemala. El complejo ha ayudado a ascender al poder al presidente Reagan. Recluta entre los cerebros de la Corporación Rand consejeros para la guerra.

Nuevos medios, nuevos problemas

La constante utilización de todas las formas de la propaganda por las clases dominantes en el mundo capitalista; la utilización de la informática y la electrónica en el moldeo de la opinión pública a nivel mundial; la aspiración a convertir el mundo en una «aldea global» por y para el imperialismo con el más sofisticado *hardware* técnico; todo esto, en fin, forma parte del mundo de las comunicaciones modernas. Para que se vea hasta dónde ha llegado Estados Unidos en esta materia, baste decir que invierte anualmente en propaganda para el exterior cerca de 5.000 millones de dólares y más de 350.000 personas trabajan en esta esfera.

Todo este inmenso poderío acumulado, el surgimiento, cada día, de nuevas y sutiles técnicas de «lavado de cerebros», la utilización de todas las formas publicitarias y propagandísticas; el uso, por parte del Pentágono, de todo este gigantesco *hardware* comunicacional; la presencia de asesores norteamericanos de opinión pública y de manejo de la clientela electoral en todas partes del mundo; todas estas nuevas circunstancias, así como la creación de variadas técnicas, por lo demás bastante efectivas, según lo demuestran los hechos, tienen que llamarnos a la reflexión

y a la acción. Ya no se trata de luchar políticamente, frente a tan poderosos enemigos ideológicos llenos de dinero y muy bien financiados por las clases dominantes de cada país capitalista en particular, con los obsoletos medios tradicionales. La comparecencia de un destacamento revolucionario en una elección presidencial, por ejemplo, supone todo un equipo capaz, moderno y estudioso.

Claro que tampoco se trata de usar los mismos procedimientos, los mismos trucos y las mismas excrecencias del sistema capitalista. No. En modo alguno, no. De lo que se trata, a nuestro juicio, es de modernizar y actualizar los rutinarios métodos de trabajo ideo-político. De tener en cuenta las leyes de la Opinión Pública. De evitar confrontaciones inútiles que no tengan que ver con los principios. Y, desde luego, respetar los usos, los estereotipos, los valores nacionales, en fin, todo aquello que constituye el *alma popular*, la especificidad de cada pueblo. Por supuesto que esto no significa que cuando los principios fundamentales del marxismo-leninismo estén cuestionados, se hallen en juego, haya que asumir una actitud pasiva. Por el contrario. Habrá momentos en que, en defensa de los principios, habrá que enfrentar todo el sistema de valores y conceptos acumulados durante siglos. Pero aun en tal caso, hay que saber hacerlo.

En cuanto a lo otro, que es lo fundamental, es decir el estudio de la Informática, el dominio de la electrónica, la adquisición de informaciones y conocimientos telemáticos, el seguimiento al curso de la historia contemporánea en este dominio, hay que insistir hasta la saciedad, pues quien no se sumerja en este mundo se hallará irremisiblemente perdido.

Vivimos en una época de extraordinario desarrollo de la información de masas, en la que predominan la imagen y el sonido. El capitalismo de fines del siglo XX es una civilización esencialmente iconográfica, donde la imagen está sobre la palabra. Quienes fuimos educados en la «galaxia de Gutenberg», en la civilización de la letra impresa, nos sentimos, a veces confundidos. El imperialismo ha logrado, en buena parte, imponer los más estrafalarios ritmos y las más violentas imágenes a través de la TV y del cine, los *magazines* y los *comics*.

Mas cabe preguntar: ¿prevalecerá en los países capitalistas la imagen sobre la idea en la confrontación ideológica entre los sistemas, en la lucha entre los partidos y entre los candidatos a los órganos representativos de poder? Nosotros contestamos rotundamente «no», porque llevamos la ventaja de la verdad, y no es lo mismo vender la imagen de un producto que vender un buen producto. Nuestra verdad es la de las nuevas relaciones sociales que ya han triunfado o están triunfando en muchos países del mundo. Aunque el socialismo es todavía muy reciente, e históricamente hablando apenas está naciendo, ya existe como sistema mundial. El sistema socialista mundial, los movimientos obreros de los países capitalistas altamente desarrollados y los movimientos de liberación nacional están en capacidad de aprehender las nuevas técnicas y las nuevas formas de la propaganda en el mundo contemporáneo y de enfrentar resueltamente la agresión informativa del imperialismo.

Revista Internacional, Nº 9 de 1985

[1] J. McGinniss. *The Selling of the President.* New York, 1969.
[2] Partido Social-Cristiano en Venezuela. –*N. de la Red.*
[3] *Daily World*, November 9, 1984, p. 3.
[4] Véase H. I. Schiller. *Imperialismo USA en la comunicación de masas.* Madrid, 1977, p. 89.
[5] WORLDNET: red mundial de comunicación televisiva creada en 1983–1984 gracias al perfeccionamiento del sistema de comunicaciones cósmicas que atiende a la USIA. –*N. de la Red.*
[6] Organización anticomunista y ultrarreaccionaria de EE.UU., fundada en 1958. –*N. de la Red.*

Los católicos chilenos y la lucha antifascista

Orlando MILLAS,
miembro de la Comisión Política y del Secretariado
del CC del Partido Comunista de Chile (PCCh)

El papa Juan Pablo IIº reemplazó como arzobispo de la capital de Chile al cardenal Raúl Silva Henríquez, prelado que ha sostenido valerosamente una posición antifascista, por monseñor Juan Francisco Fresno, un religioso de criterio tradicional y más bien conservador. Sin embargo, al arreciar la represión fascista, desplegada con cruel bestialidad, los curas católicos de las parroquias asentadas en las grandes poblaciones obreras y populares han continuado solidarizando sin desmayos con las masas agredidas por los esbirros y las comunidades de base de los creyentes han seguido sosteniendo la lucha por la libertad en unidad inquebrantable con todos los demás sectores. De otra parte, no ha habido variaciones en la actitud de aquellos obispos caracterizados por posiciones progresistas. Aunque el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de Santiago haya patrocinado el diálogo de una parte de la oposición con Pinochet y mantenga respecto de éste un trato deferente, él mismo ha debido compartir diversos pronunciamientos en que la Iglesia brega, tal como antes, en defensa de los derechos humanos y en contradicción con rasgos esenciales de la tiranía.

Es evidente que la crisis de conciencia que, en los últimos decenios, ha inducido a la mayoría de los católicos, en Chile y en otros países, y a muy amplios contingentes del clero de base, a objetar la alianza de la Iglesia con la reacción y el imperialismo constituye un trascendental proceso inconcluso y en gran parte irreversible.

La política del Partido Comunista de Chile respecto a los creyentes

Se trata de asuntos más o menos universales, en relación con el desarrollo de la lucha de clases tanto en la escala de cada país como en la regional y en la de todo el mundo. Los grandes acontecimientos de nuestra época, las revoluciones socialistas victoriosas, el derrumbe de los imperios coloniales, la derrota del nazifascismo en la segunda guerra mundial, la crisis general del capitalismo, los éxitos de la construcción del socialismo desarrollado tanto en la Unión Soviética como en otra serie de países, la resistencia popular al imperialismo, la movilización de fuerzas decisivas para salvar a la humanidad de la hecatombe nuclear y salvaguardar la paz, no pueden dejar de reflejarse, aunque sea con naturales deformaciones, en la ideología religiosa. La autonomía relativa de los fenómenos ideológicos y la influencia tan fuerte de las clases dominantes no han logrado evitar que marque su impronta en la conciencia de los creyentes el gran papel histórico general que protagoniza cada vez más la clase obrera.

Atento a estos fenómenos, el Partido Comunista de Chile fue el primero en la Izquierda que rechazó, haciéndolo categóricamente, las invectivas anticlericales que deleitaban a viejos políticos burgueses y pequeñoburgueses y a los anarquistas. Levantó, en cambio, desde hace más de medio siglo, la bandera de la acción conjunta y del entendimiento de las dos grandes tendencias con mayor gravitación en nuestro pueblo, la católica y la comunista.

Hubo una tradición de siglos de maridaje entre la jerarquía de la Iglesia católica chilena y la reacción; pero, a la vez, siempre aparecieron eclesiásticos que siguieron otro camino, yendo contra la corriente de esa institución. Fue el caso, por ejemplo, en el período de la revolución de la Independencia nacional, a comienzos del siglo pasado, de fray Camilo Henríquez[1]. Cuando esto fue dejando de ser excepcional y alcanzó caracteres más amplios, el Partido Comunista de Chile atribuyó mucha importancia al hecho de que determinadas categorías exaltadas por el movimiento obrero y popular pasaran a ser compartidas por las masas de católicos y por sus prelados. Son los casos de la

dignidad humana, la lucha contra la opresión, la solidaridad de clase de los trabajadores, la organización del pueblo, la dialéctica de los combates por la democracia y por el progreso social, la aspiración a la transformación de la sociedad, la definición en favor de la paz, el repudio al fascismo, etcétera.

Federico Engels estudió el cristianismo primitivo y el papel de las ideologías religiosas en diferentes procesos revolucionarios y en grandes movimientos antifeudales. Ante conmociones sociales muchísimo más profundas, como son las actuales, no puede extrañar que ellas repercutan en términos singulares en millones de creyentes. Se trata de una situación nueva, que hay que afrontar como tal. El Partido Comunista de Chile ha estimado que éste es un deber suyo. No vemos en el creyente un ser abstracto, de características dadas para siempre, sino que consideramos al «sentimiento religioso», como decía Marx, un producto social[2]. Y, con nuestra concepción materialista del mundo, concepción científica, seguimos la sabia indicación de Lenin: «No hay libros ni prédicas capaces de ilustrar al proletariado si no le ilustra su propia lucha contra las tenebrosas fuerzas del capitalismo. La unidad de esta verdadera lucha revolucionaria de la clase oprimida por crear el paraíso en la Tierra tiene más importancia que la unidad de criterio de los proletarios acerca del paraíso en el cielo»[3].

Nuestra política respecto de los católicos es de diálogo y de acción conjunta. La aplicación de esta política se traduce en la unidad de creyentes y no creyentes en las filas de la clase obrera y en las luchas democráticas y revolucionarias de nuestro pueblo.

Algunas experiencias

En América Latina ha tenido un profundo eco el Concilio Vaticano IIº (1962–1965), especialmente en su apertura a la colaboración con los no creyentes respecto de lo que Juan XXIIIº denominó «iniciativas de orden económico, social, cultural o político»[4].

La Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín

(Colombia, 1968) proclamó: «Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz. No deja de ver que América Latina se encuentra en muchas partes ante una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada, porque las estructuras actuales violan derechos fundamentales, situación que exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras»[5].

La siguiente Conferencia Episcopal Latinoamericana, la de Puebla (México, 1979), se realizó en momentos de auge reaccionario en gran parte del continente, a pesar de lo cual el propio Juan Pablo IIº no obtuvo que se enmendasen los acuerdos fundamentales de Medellín.

La revolución sandinista contó en Nicaragua con un apoyo y una directa participación de las grandes masas católicas y de personalidades eclesiásticas de la significación de d'Escoto y Cardenal. En numerosos países latinoamericanos la Iglesia ha llegado a asumir, en momentos singulares, posiciones democráticas definidas y en todos ellos gran parte de los creyentes no ven en su fe religiosa un obstáculo, sino un aliciente para luchar por el progreso social. Las experiencias chilenas corroboran este curso.

Desde su nacimiento, el Partido Comunista de Chile ha sido mayoritario en el seno de la clase obrera, de la que es su gran expresión política. El pensamiento comunista, la concepción marxista-leninista, el materialismo histórico tienen una antigua raigambre de masas. Personalidades comunistas de la talla de Luis Emilio Recabarren, Elías Lafertte, Pablo Neruda y muchos otros son figuras nacionales de gran relieve. En tales circunstancias, el diálogo y la acción conjunta de los católicos y los comunistas no aparecen como concesiones sino como formas de atender anhelos colectivos.

Las imágenes propaladas por el imperialismo sobre «la amenaza comunista» chocan con lo que los creyentes pueden apreciar en su contacto cotidiano con los comunistas en sus sitios de trabajo, residencia o estudio y, sobre todo, con lo que los comunistas han hecho en los sindicatos, las Juntas de Vecinos, las Municipalidades, el Parlamento, las Universidades y, especialmente, al participar destacada-

mente en el ejercicio del gobierno del país. La relación de respeto mutuo del gobierno presidido por Salvador Allende en que hubo ministros comunistas y la Iglesia católica contrasta con las actitudes despóticas de los fascistas.

La acción conjunta es impulsada, de nuestra parte, por cada célula comunista que se encuentra en uno a uno de los centros de trabajo y de residencia y en todas partes tiene la tarea de unir y movilizar a los diversos sectores del pueblo, cohesionando a las masas, para lo cual intercambia criterios con las diversas organizaciones partidistas, políticas, sociales, culturales y también religiosas de su radio de labor, vinculándose así con la respectiva parroquia, con otras entidades católicas y especialmente con la comunidad cristiana de base, al igual que con la gente de otras tendencias.

En el diálogo, el Partido plantea con claridad que considera asuntos sociales y no meramente privados nuestra concepción científica, de una parte, y de otra las creencias, la fe, el culto, las ideologías; pero, que para el Estado, a nuestro juicio, la religión debe ser un asunto privado de los ciudadanos y que nos pronunciamos porque se garantice la plena libertad de profesar la religión que se prefiera o ninguna y los derechos de las Iglesias, en cuanto asociaciones completamente independientes, constituidas por personas unidas en relación a su comunidad de creencias.

Un proceso que tiene sus propias contradicciones

El «aggiornamento», como se denomina en los círculos del Vaticano al esfuerzo de la Iglesia católica por colocarse al día frente a las transformaciones sociales de nuestra época, ya era propiciado por importantes sectores en tiempos del Concilio Vaticano I°, o sea a fines de la década de los años 60 del siglo pasado; pero, entonces los obispos que se habían comprometido con dicha tendencia eludieron sostener abiertamente sus posiciones. Dos decenios después de la Comuna de París y al surgir el imperialismo, el Papa León XIII° inició la formulación de la «doctrina

social» de la Iglesia, en lo fundamental procapitalista con ribetes reformistas.

Ha sido un proceso largo, complicado, el de la adaptación de la Iglesia a la nueva toma de conciencia de la masa de los creyentes. Los cambios en la Iglesia católica enfrentan constantes contratiempos, levantan airadas reacciones, avanzan en medio de retrocesos parciales que suelen amenazar al conjunto. Se ejercen presiones contradictorias, de una parte por la base social católica constituida por obreros, campesinos, amas de casa y sobre todo sectores de capas medias además de intelectuales muchas veces lúcidos y, de la otra parte, por las fuerzas de la reacción y del imperialismo que disponen de determinadas poderosas influencias en todos los niveles de las jerarquías eclesiásticas. Incurren en un notorio error los que ven en la Iglesia una homogeneidad que no es posible en ella a pesar de los esfuerzos de sus pontífices y de las invocaciones a designios divinos y sagrados.

En la comunidad de los fieles hay lobos y corderos.

El ala reaccionaria del catolicismo no se ha resignado a perder posiciones. Una parte de ella asume actitudes lindantes con la disidencia. También ha visitado Chile, con el beneplácito de Pinochet, el obispo francés Lefebre, personero de los elementos de rancio tradicionalismo horrorizados por la modernización de la liturgia, que abominan del abandono del latín en determinadas oraciones y ceremonias y que reivindican el «Missale Romanum» de 1570. Pero, no se trata sólo de eso ni es ello lo principal. Los grandes intereses creados se agrupan en la logia Opus Dei, especie de mafia que, en el caso de Chile, ha detentado altos cargos apoyándose en Pinochet y apoyándolo, erigiendo una línea de autoridad religiosa paralela a la jerarquía conocida y que goza de determinadas franquicias provenientes del Vaticano. Y hay los grupos de choque constituidos por los católicos más cerrilmente antidemocráticos a través de la sociedad Fiducia, que enfrenta agresivamente a los sacerdotes progresistas y colabora con los órganos gestapistas en la perpetración de atentados contra recintos religiosos en que se efectúan oficios de carácter solidario.

El imperialismo norteamericano desarrolla una ingente

actividad sediciosa en el seno de la Iglesia, galvanizando a sus corrientes reaccionarias e introduciendo a sus propios agentes. El conocido Informe Rockefeller de 1969 contuvo una admonición contra las posiciones progresistas a que consideraba proclive a la Iglesia en América Latina. La Rand Corporation hizo ese mismo año para el Departamento de Estado un estudio titulado *Latin American Institutional Development: The Changing Catholic Church.* Desde entonces el Departamento de Estado, el Pentágono y especialmente la CIA dedican suma atención a la Iglesia católica. La Administración Reagan ha extremado la nota al respecto. El *Informe de Santa Fe*, que trazó su política contra América Latina, acusó a la comunidad religiosa de estar infiltrada por ideas «que son menos cristianas que comunistas»[6]. En abril de 1981, la CIA constituyó el IRD (Instituto de Estudios sobre la Religión y la Democracia) con recursos multimillonarios, que coordina a la Derecha norteamericana en su lucha contra las posiciones religiosas progresistas y financia a sectas como Orden de El Salvador y Fiducia de Chile y otros países.

Las corrientes más avanzadas

Hace veinte años, la Iglesia católica chilena, así como varias otras de América Latina, fue sacudida por un gran movimiento de reforma de la Universidad Católica, simultáneamente con aparecer las teologías de la secularización, posiciones revolucionaristas pequeñoburguesas, crisis de vocaciones sacerdotales, discrepancias muy acentuadas.

En estas circunstancias, gran cantidad de sacerdotes adoptaron las modalidades de vida de los «curas obreros» de Europa, compartiendo su ministerio con el trabajo en la producción, además de dar testimonio de su solidaridad con el proletariado viviendo como él. Se comenzó a hablar en el país de «Iglesia popular» y de «Iglesia rebelde». En grandes movimientos sociales, especialmente en la ocupación de terrenos por familias sin casa para crear en ellos nuevas poblaciones, se incorporaron notoriamente sacerdotes, monjas y masas de católicos relativamente organizados como tales.

Pero, se trataba de sectores educados por la Iglesia en los prejuicios anticomunistas y la recurrencia de los antiguos conceptos reaccionarios emergía sorprendentemente en ellos en forma de posiciones revolucionaristas cristianas de ultraizquierda. Su característica, especialmente en los años 60 y 70, no era la de asumir con madurez el servicio de los procesos de transformación y de la revolución, sino más bien la de tratar de forzar los acontecimientos para disputar la vanguardia, en un afán de adjudicarse, infantilmente, la conducción de las masas. Hubo también, entonces, una eclosión de intelectuales y políticos cristianos jóvenes que asimilaron precipitadamente algunas formulaciones marxistas-leninistas, pasando en general por los esquemas de Althusser o de Debray y otros autores europeos, para colocarse a la izquierda de los comunistas, con frases anarquistas y haciendo hincapié en recelos antisoviéticos.

El Partido Comunista levantó la bandera del «entendimiento, la colaboración, la acción común entre el proletariado revolucionario y los sectores revolucionarios de la pequeña burguesía», planteando esto como «un asunto cardinal».

No ha transcurrido mucho tiempo; pero, han sido años sumamente ricos en acontecimientos. Las intensas campañas de guerra psicológica desplegadas por el imperialismo no consiguen evitar que crezca más y más el prestigio de la Unión Soviética. En América Latina es muy grande la influencia sobre las multitudes de la revolución cubana. Los éxitos de Cuba socialista exaltan el entusiasmo de toda la gente honesta de Chile, así como del conjunto de América Latina y ayudan a entender muchas cosas. El ejemplo cubano forja revolucionarios por doquier y ensaña a pensar y actuar mejor. Nicaragua es un nuevo punto de referencia luminoso. La tragedia del pueblo chileno ha marcado a fuego lecciones tremendas y las masas han apreciado intensamente el hecho de que aun en los momentos más atroces el Partido Comunista ha permanecido entrañablemente unido a ellas, impulsando la resistencia, la solidaridad, la organización, la unidad, la rebelión.

De los jóvenes políticos cristianos que ayer eran utraizquierdistas, algunos han pasado a posiciones reformistas

burguesas o simplemente de Derecha; pero, es un valioso y considerable contingente el que participa hoy junto a comunistas y socialistas en el Movimiento Democrático Popular, entregando un aporte de calidad. Y lo más importante es que en la base social, en la lucha de masas, en el enfrentamiento contra la tiranía, se ha establecido relaciones de confianza, de amistad y de solidaridad entre los comunistas y los católicos de avanzada.

Actitud de las jerarquías eclesiásticas

En las relaciones con la Iglesia católica, hay que tomar en cuenta no sólo el fenómeno religioso y sus implicancias, sino, además, que se trata de una institución jerárquica que ha desarrollado sus propios intereses, determinadas vinculaciones con los poderes estatales y modalidades orgánicas.

En el caso de Chile, la vieja actitud tradicionalista de las jerarquías estaba conduciendo a la Iglesia a un callejón sin salida. Las posiciones disímiles se iban haciendo inconciliables, a pesar de que el arzobispo Crescente Errázuriz obtuvo una tregua en los años 20 al promover la separación de la Iglesia y el Estado. De un lado campeaban algunos obispos, clérigos y fieles ultrarreaccionarios y, de otro lado, encontró amplio eco en numerosos eclesiásticos la formación de un movimiento de avanzada, denominado Cristianos por el Socialismo.

Pero, las dificultades han ido siendo en gran parte obviadas por la sagacidad con que el Cardenal Silva Henríquez desarrolló una colaboración constructiva con el Gobierno Popular encabezado por el Presidente Allende y combatió los crímenes de los fascistas, solidarizando y asumiendo la defensa de sus víctimas. La jerarquía, a pesar de haber mantenido distancias y expresado disconformidad con «Cristianos por el Socialismo», ha logrado sostener en lo fundamental la cohesión de la Iglesia en el país en la medida en que ha prestado oídos a los sentimientos de la gran masa de los creyentes de base y de los curas y las monjas más vinculados a las masas populares. A esta altura de la vida, es evidente que adoptar líneas recalcitrantes de Derecha e incurrir en «cazas de brujas» conduce a la Iglesia a requebrajamientos, porque las corrientes renovadoras surgen en razón de causas muy profundas. Se desarrollan aspiraciones socio-políticas que implican la reivindicación de valores humanos muy caros a los fieles de nuestro tiempo y entre ellos están la supresión de la explotación del hombre por el hombre, el establecimiento de la igualdad social, la democratización de la sociedad y la supresión del racismo, de la amenaza de guerra nuclear, de la miseria masiva, de los actos de agresión imperialista, del colonialismo y el neocolonialismo. Esto ya no puede detenerse con anatemas en condiciones normales y mucho menos cuando aparecen condiciones de auge revolucionario.

El Partido Comunista de Chile prefiere el entendimiento con toda la Iglesia y aspira a relaciones de respeto mutuo con sus autoridades desarrollando las acciones conjuntas por los intereses vitales de nuestro pueblo, el diálogo y la defensa de los derechos humanos. El asunto estriba en que la Iglesia, a su vez, debe estar, para que ello sea posible, en aptitud de corresponder a la disposición amistosa que se le manifiesta.

Las «Teologías de la liberación»

El reflejo de la lucha social en la ideología religiosa ha llegado a expresarse en las propias corrientes teológicas. En Chile ha tenido mucha resonancia el pensamiento de Jacques Maritain, uno de los humanistas cristianos de comienzos de este siglo, que se caracterizó por proclamar que el cristiano «en el plano terrenal no debe actuar como cristiano, sino al modo cristiano y hacer opciones por su cuenta y riesgo»[7].

El teólogo francés Teilhart de Chardin (1881–1955) ha influido aún más al realizar un generoso esfuerzo por captar la ciencia y la evolución humana y exaltar, como manifestación suprema del cumplimiento de las obligaciones y vocaciones del cristiano, el trabajo del obrero, la investigación del científico, la obra del artista, la acción del revolucionario.

La Iglesia ha iniciado el proceso de beatificación y se piensa que podría ser el primer santo chileno un sacerdote que, aunque escribió cinco libros destacados, es más bien prototipo de hombre de acción, el padre Alberto Hurtado. Ante el dilema que discutían los católicos del país de liberar al hombre en el sentido religioso o liberar las estructuras sociales, dio en su célebre obra *Humanismo Social* una respuesta dialéctica, audaz y avanzada, nueva en los momentos en que la formuló: «Apoyándose en los hombres, hay que transformar por ellos más profundamente los hombres y las estructuras»[8].

En esta veta han trabajado en América Latina los que integran la vasta y multiforme corriente conocida como la «teología de la liberación», que fundamenta en posiciones ontológicas cristianas la lucha por la liberación nacional y social. Incluye una combinación heterogénea de tendencias doctrinales que coinciden en promover un compromiso más activo de la Iglesia con lo que denominan «los pobres». Uno de sus grandes méritos es haber preparado los textos aprobados por los obispos en Medellín. La «teología de la liberación» se contrapone a las odiosas «teología de la guerra», «teología de las misiones» o «teología de la nación», que campearon en otras circunstancias históricas, así como a la idea de la «cristiandad» que confunde a la Iglesia con el conjunto de la sociedad y le atribuye una potestad o jurisdicción suprema en todos los asuntos seculares. El personalismo o humanismo cristiano y más acusadamente la «teología de la liberación» han llegado al reconocimiento de la autonomía de la política, la cultura y la ciencia con relación a la religión y la Iglesia; el respaldo a los ideales de la tolerancia civil; y la aprobación de la cooperación con los no católicos en las distintas esferas de la vida social.

La «teología de la liberación» ha agregado la lucha, más transparente en algunos de sus autores, contra el capitalismo, dando una motivación cristiana al apoyo a las reivindicaciones económicas y políticas de la clase obrera y al socialismo. Entre sus teólogos, hay diversas formulaciones. Algunos de ellos exponen una especie de nuevo socialismo utópico, similar al pre-marxista, que invoca sólo al amor y a la salvación espiritual. Otros, sin pretender confundir

nuestra concepción con la de ellos, incorporan algunos aspectos de la metodología marxista a sus análisis de la sociedad. En el Sínodo de octubre de 1977 en el Vaticano, el arzobispo de Ciudad Ho Chi Minh formuló el planteamiento de que, así como la Iglesia asumió en otro tiempo el aristotelismo como vehículo del mensaje evangélico, debiera ahora asumir el marxismo para la evangelización y la catéquesis[9]. Hay quienes intentan, en cambio, en vez de la reelaboración del pensamiento cristiano, una especie de revisionismo del marxismo, negando el papel de la violencia en la lucha social y otras de sus tesis.

El Partido Comunista de Chile ve en estas búsquedas una tendencia de un sector cristiano a transformar la participación católica en las luchas de liberación en una alternativa política e ideológica. Consideramos que ello debiera inducir, en la medida que fructifique, al encuentro de nuevas formas de diálogo y de colaboración, desarrollando la acción conjunta. De nuestra parte, concebimos científicamente una sola y misma realidad objetiva, una y diversa, en la que encontramos también al creyente.

A las «teologías de la liberación» les sale gente al camino. En la Conferencia de Puebla se desechó la tesis de Vaticano IIº sobre la autonomía de lo temporal y se incurrió en ataques primitivos contra el marxismo. Hay ciertas tendencias de retorno a la «filosofía perenne» tradicionalista, así como a posiciones reaccionarias que, por ejemplo, promueven la ruptura de la unidad sindical y el desarrollo de sindicatos católicos paralelos que induzcan a la colaboración de clases. La «teología modernizante» de López Trujillo[10] se mueve en lo abstracto y la escuela «populista» asume actitudes nacionalistas. En general, se invoca la preservación de la unidad institucional de la Iglesia para limitarse a posiciones que, apoyando reivindicaciones, no vayan más allá del asistencialismo. Es un proceso complejo, que los comunistas apreciamos en su riqueza real de situaciones.

La lucha antifascista

En la historia de la Iglesia católica chilena permanecerá siempre como uno de sus capítulos más importantes, que creemos el más saliente, su enfrentamiento constante, durante la tiranía de Pinochet, contra el fascismo.

Hubo un primer momento en que políticos de inspiración católica y concretamente el Partido Demócratacristiano apoyaron el putsch fascista y de hecho solidarizaron con el asesinato del Presidente Allende, la declaración de guerra contra el pueblo y el baño de sangre a que se sometió al país. Eso no lo recordamos para, a esta altura, echárselos en cara, dado que después fueron recapacitando y hoy en día participan decididamente en la lucha por abatir la tiranía y conquistar un régimen democrático. Pero, con todo, la situación vivida en los meses cruciales desde fines de 1973 exigen valorizar muy altamente la actitud definida que adoptó desde el mismo 11 de septiembre el Cardenal Silva Henríquez y con la cual logró impregnar a la inmensa mayoría de los párrocos a través del país y de las organizaciones religiosas de base.

Cuando parecía que todo se desmoronaba, el 13 de septiembre de 1973 el Comité Permanente del Episcopado Chileno formuló una histórica declaración expresando su dolor por la «sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas» y pidiendo «respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el martes 11 de septiembre fuera el Presidente de la República»[11]. El 14 de septiembre la Iglesia creó el Comité Nacional de Ayuda. El 16 de septiembre, en conferencia de prensa ante los corresponsales extranjeros, el Cardenal clamó contra el odio que se había desencadenado con el golpe de Estado «para evitar que el odio mate el alma de Chile». El 6 de octubre fructificaron las gestiones de la Iglesia católica ante las demás confesiones religiosas y se constituyó el Comité de Paz, de abnegada y magnífica labor solidaria. Cuando éste, en noviembre de 1975, no pudo sostenerse por la presión de la tiranía, tomó a su cargo la continuación de su meritorio quehacer la tan conocida Vicaría de la Solidaridad del arzobispado de Santiago. Eso hasta el día de hoy.

La Iglesia ha tenido el honor de ser perseguida por el fascismo y de que a cada paso se hayan descargado contra ella campañas de intimidación de gran agresividad. Sin embargo, nada de esto ha logrado hacerla cambiar de actitud.

Es cierto que el arzobispo Emilio Tagle, algunos obispos, uno que otro párroco, determinados capellanes de las Fuerzas Armadas y la gente del Opus Dei y de Fiducia han tenido una conducta indigna; pero, ellos no cuentan ante la grandeza de la posición del Cardenal Silva Henríquez y el hecho indiscutible es que la gran mayoría de los obispos, la generalidad de los sacerdotes y de las monjas y la inmensa masa de los creyentes han seguido sus enseñanzas. Uno de los rasgos que le ha ganado mayor prestigio es el de no haber caído en la tentación de hacer un fácil proselitismo. Ha ido al fondo del asunto, condenando el modelo económico fascista. Vicarías como la de Solidaridad, la de la Pastoral Obrera, la Universitaria y otras han atendido y ayudado sin mirar a quien. Ha estado por la unidad y por la organización del pueblo, cooperando a que pueda levantar sus propias instituciones naturales, sus sindicatos unitarios y sus demás organismos de masas, para que su liberación sea obra de él mismo.

En nuestro tiempo, el fascismo no puede ya constituir partidos de masas que lo apoyen. Una de las muchas razones de esta nueva situación es que ahora la Iglesia católica no se presta a sus maniobras y se une a los antifascistas.

En 1976, encontrándose prisionero en el campo de concentración de Tres Alamos, Luis Corvalán escribió subrepticiamente un artículo en que abordó el tema de la posición antifascista de la Iglesia católica chilena. Consiguió hacerlo llegar en forma clandestina a la dirección del Partido y al difundirse tuvo amplia repercusión en el país. En él expresó: «En estas condiciones –y por encima de cualquier diferencia– reiteramos nuestra solidaridad con la Iglesia ante las frecuentes persecuciones fascistas de que es objeto y ante la permanente campaña en su contra de parte de los voceros reaccionarios. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso de luchar más y más por la unidad de todas las fuerzas antifascistas para derrotar a la dictadura

y crear una nueva democracia, una democracia renovada que restablezca el imperio de los derechos humanos, entre ellos la libertad de conciencia»[12].

La gran causa de la paz

Hay una esfera privilegiada, nada menos que la de la paz, la causa superior de toda la humanidad, en que encontramos bases para una más amplia y profunda colaboración de católicos y comunistas con los más diversos sectores de nuestro pueblo. Esto mismo sucede en la vasta dimensión de América Latina.

El gobierno del Presidente Allende se empeñó en mantener relaciones entrañables de amistad en primer término entre los países latinoamericanos y antes que nada con Argentina, Bolivia y el Perú, limítrofes de Chile. Esa es la política muy clara de los partidos Socialista, Comunista, Radical, MAPU, Izquierda Cristiana y API, que lo integraron. Como jefe del Estado, Allende se propuso dar una solución definitiva a las viejas querellas fronterizas. Esa línea de fraternidad choca con la consabida política imperialista de azuzar las diferencias y promover litigios, conflictos y ojalá guerras en cada frontera latinoamericana. Pinochet, como corresponde a un fascista, ha enconado las dificultades, haciendo peligrar la paz con Argentina y Bolivia y también con el Perú. Otro tanto han hecho las dictaduras militares que oprimieron a los pueblos hermanos de Argentina y Bolivia. Un gran mérito de la Iglesia católica —tanto de la chilena como de la argentina, de la boliviana y de la peruana— ha sido la de tomar la iniciativa de oponerse al chovinismo y promover la lucha por la paz entre nuestros países.

Cuando el mundo asiste al desenfreno armamentista agresivo del complejo militar-industrial norteamericano y en especial de la Administración Reagan y sus afanes intervencionistas contra los pueblos de Centro América y del Caribe forman parte de su orientación inhumana a trabajar con sangre en todas partes de la Tierra y hacer cada vez más patente la amenaza de una guerra nuclear que pone en peligro la subsistencia de la vida en el planeta, los comunistas chilenos asignamos una importancia primordial a la acción decidida en favor de la paz y vemos en ella una causa que corresponde a los sentimientos más dilectos de los millones de católicos, así como a los nuestros y del conjunto del pueblo.

Revista Internacional, Nº 9 de 1984

[1] Fray Camilo Henríquez (1769–1825), político y personalidad pública de Chile, combatió por la independencia nacional contra la Corona española. Fue uno de los autores de la primera Constitución chilena. —*N. de la Red.*

[2] C. Marx y F. Engels. *Obras Escogidas* en dos tomos. Editorial Progreso, Moscú, t. 2, pp. 402–403.

[3] V. I. Lenin. *Obras Escogidas* en doce tomos, Editorial Progreso, Moscú, 1976, t. 3, p. 196.

[4] Juan XXIIIº. Encíclica *Pacem in Terris*. París, 1963, p. 203.

[5] *Documento de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano sobre «La Paz»*. Segunda Parte. «Visión Cristiana de la Paz.» Capítulo b) «Problema de la violencia en América Latina».

[6] *Estudios*, 1981, Nº 78, p. 30.

[7] Jacques Maritain. *Humanisme Intégral*. Paris, 1936, p. 314. Maritain se pronunciaba, entre otras cosas, contra la obediencia ciega de los creyentes a los dogmas religiosos. —*N. de la Red.*

[8] P. Alberto Hurtado. *Humanismo Social*, Santiago de Chile, 1947, p. 83 (citado en *Mensaje*, Nº 261, Chile, p. 701).

[9] *Chile-América*. Roma, Nº 39–40, enero, febrero, marzo de 1978.

[10] Obispo colombiano, Secretario General de la CELAM. —*N. de la Red.*

[11] Véase *Partido Comunista de Chile. Boletín del Exterior*, 1981, Nº 47, p. 18.

[12] L. Corvalán. *La Iglesia Católica y las Persecuciones Fascistas*, en *Partido Comunista de Chile. Boletín del Exterior*, 1977, Nº 22, p. 34.

El proceso panameño y los militares

Carlos Francisco CHANGMARIN,
miembro del Buró Político del CC
del Partido del Pueblo de Panamá (PPP)

«La garra imperialista sobre la franja canalera es un resabio infeliz de la política del garrote y de la diplomacia del dólar»,[1] esta frase del general Omar Torrijos Herrera refleja en brillante metáfora y con profundo acierto la esencia de los problemas que enfrenta Panamá a lo largo ya de más de 80 años. Como se sabe, bajo la dirección inmediata de Omar Torrijos (1929–1981) se inició a partir de 1968 un proceso de transformaciones políticas y sociales progresistas, que había de durar 16 años y que ha recibido el nombre de proceso torrijista.

El mes de octubre del año 1984 marca el comienzo de un nuevo momento de la situación interna, que presenta los siguientes elementos característicos. Primero, el Dr. Jorge Illueca, quien daba pase a un nuevo presidente, aparecía como «el último corredor del relevo del gobierno revolucionario». Segundo, tomó posesión en calidad de nuevo jefe de Estado el Dr. Nicolás Ardito Barletta, hombre de confianza de la oligarquía y ex vicepresidente del Banco Mundial. Tercero, los militares manifestaron que se retiraban a los cuarteles.

Aparentemente se cerraba un ciclo del proceso panameño hegemonizado por los militares. No obstante, conviene matizar la aparición del momento. Los militares se proponen seguir desempeñando un papel bastante importante en la vida de la sociedad, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el general Manuel A. Noriega, actual Jefe de las Fuerzas de Defensa de la República, que fue uno de los principales colaboradores de Omar Torrijos. Por eso nosotros consideramos que la transferencia del poder al nuevo gobierno que se ha declarado partidario de

la «nueva democracia» (en realidad, lo que propugna es la tradicional democracia burguesa) tendrá un escalonamiento contradictorio entre la gestión civil y la militar, más o menos largo.

Para entender este paso, vale la pena recoger en esencia cuál es la filosofía de las actuales Fuerzas de Defensa, imbuida del espíritu torrijista[2]. Torrijos decía: la Guardia Nacional «se siente orgullosa de poder trabajar en provecho de quienes liberan y no de quienes explotan». Y agregaba: «¿Dónde está un enemigo, en las fronteras panameñas? Nuestros enemigos son el hambre, las enfermedades, el desempleo, el analfabetismo...»[3].

Hoy el general Noriega expone abiertamente ideas que se inscriben en esa misma línea. Así, en su discurso del 9 de octubre de 1984, fruto del consenso del Estado Mayor y de los mandos medios, expuso la siguiente idea, que ha repetido en otras ocasiones. En manos de los militares, «abogados de los marginados», arranca el motor del desarrollo nacional. La seguridad nacional tiene como sustento esencial el desarrollo socio-económico creciente y sostenido del país, el avance progresivo hacia cambio de nuestra estructura, que la historia impone, en el marco de la identidad nacional.

Todo esto implica que, pese a la descomposición que sufrió el proceso torrijista –al punto de que ya puede hablarse de que, en efecto, tal como reza la Resolución del Buró Político del CC del PPP del 19 de octubre, el gobierno de Ardito Barletta «se inicia al margen de un compromiso de continuación de la política torrijista»–, los elementos del proceso revolucionario que comandó Torrijos, desarrollarán su dinámica en la correlación de fuerzas que produce el nuevo reagrupamiento de fuerzas políticas en la fase post-electoral.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, el Partido del Pueblo ha planteado ante los comunistas dos tareas principales. En primer lugar, lograr la cohesión de todas las fuerzas sociales y políticas que estén dispuestas a seguir luchando por culminar el proceso de liberación nacional iniciado por Torrijos. Segunda, defender enérgicamente las conquistas socio-económicas de los trabajadores frente a los atentados del imperialismo y la reacción.

Cómo maduraron los cambios

Para medir más acertadamente el papel de los militares durante el proceso torrijista de 16 años, vale la pena examinar suscintamente los postulados estratégicos hechos por los comunistas a partir del IX Pleno del Comité Central del PPP en 1962. Refiriéndose al carácter y la forma de la revolución panameña, nuestro partido la definía como popular, antifeudal, democrática y antiimperialista. «Esta revolución —indicaba— tiene que destruir el poder político y económico de la oligarquía, recuperar todas las riquezas que nos usurpa el imperialismo, incluyendo el Canal de Panamá, y lograr la unidad territorial y política de nuestro país, mediante la expulsión del gobierno norteamericano y sus fuerzas militares del Canal»[4]. La realización de esta revolución debía darse en dos fases. Esencialmente, la primera fase consistía en «expulsar del poder político a la oligarquía», ya que, como lo subrayaban los comunistas en aquella época, la oligarquía era fuente de la contradicción principal. La segunda fase sería la «expulsión del imperialismo de nuestro territorio, nacionalización del Canal y crear las bases económicas inmediatas para el socialismo»[5].

Los comunistas concebíamos que tal revolución sería comandada por nuestro Partido en alianza con todas las fuerzas antioligárquicas, incluidos sectores de la burguesía nacional. Sin embargo, el proceso torrijista, que cumple algunas tareas de las dos fases previstas por los comunistas en 1962, viene a ser el fruto del golpe de estado de 1968, y de la hegemonía de los militares.

El proceso torrijista expresa objetivamente el intento de derrocar a la oligarquía y completar la independencia nacional. El proceso de cambios en lo nacional e internacional reflejaba los intereses de las capas medias y de la pequeña burguesía, y elementos nacionalistas de la burguesía panameña, a través del conducto de los militares. Ellos tuvieron como su base principal de apoyo, para esos cambios, particularmente el campesinado pobre, y en menor grado, los obreros, respecto de los cuales se manifestó cierto recelo.

En el caso panameño, a diferencia del peruano, los militares no tenían elaborado un determinado programa revolucionario. En su iniciación coyuntural el golpe reivindicaba frente al gobierno del presidente pro-fascista Arnulfo Arias, la estabilidad del escalafón militar, y en su mayor profundidad, el golpe tenía un carácter preventivo ante la crisis y el movimiento popular. A lo largo del proceso, tampoco hubo, en todo momento y para todos los militares, claridad exacta del papel que jugaban. Por lo contrario, el propio Torrijos y el círculo más estrecho de sus asesores, sí lo comprendían, en la medida que el General en su relación con las masas, con los trabajadores, con las fuerzas de izquierda y el campo internacional, se superaba de las ataduras que en el pasado convertían a los militares en piezas de la oligarquía y del imperialismo.

El problema colonial

Las premisas de la condición objetiva de la sociedad panameña y de la acumulación democrática y revolucionaria que explican el proceso panameño podemos sintetizarlas en la forma siguiente.

Primero. Aunque ya el imperialismo no es el factor determinante a nivel mundial, en nuestro caso EE.UU. tiene en el país su ejército, bajo el Comando Sur. Panamá, a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, todavía cursaba en 1968 por un proceso de completar la configuración del estado nacional, por cuanto existía entonces, debido al Convenio de 1903 entre EE.UU. y Panamá, una verdadera colonia norteamericana, con su gobernador, justamente en la garganta estratégica del País.

EE.UU. se aprovechó de la debilidad panameña en el momento de su separación de Colombia, para mediatizarnos (al igual que hizo en el caso de Cuba, con la Enmienda Platt[6]) y usurpó el principal recurso natural: el tránsito interoceánico. Nuestra lucha, por tanto, no sólo era nacional contra el carácter del imperialismo, sino anticolonial. Ya, con el Tratado Mallarino–Bidlack, entre EE.UU. y Colombia, 1846, EE.UU. podía intervenir en el istmo.

Segundo. EE.UU. temeroso de la recién nacida república,

impuso a ésta la liquidación del ejército. El convenio de 1903, firmado en nombre de nuestro país por el aventuroso francés Felipe Bunau Varilla, permitía la intervención norteamericana en Panamá, lo mismo que la Constitución Nacional de 1904. Aparentemente la República de Panamá era un estado sin el necesario ejército, o «fuerza pública» –según lo caracteriza Engels–, pero esto no era cierto: el ejército intervencionista norteamericano cumplía ese papel. Los gobiernos oligárquicos panameños frente a las luchas sociales y el pueblo, solicitaban la intervención del ejército norteamericano acantonado en la Zona del Canal, incluso para dirimir candidaturas presidenciales locales, en elecciones.

En los días previos a la II Guerra Mundial, con el New Deal del Presidente Roosevelt, y atendiendo a las luchas acumuladas del pueblo panameño contra la cláusula que en el Convenio de 1903 permitía la intervención yanqui, se negocia y se elimina este dispositivo.

A partir de entonces los regímenes oligárquicos tienen que asumir ellos mismos la represión y empiezan a modernizar la pequeña fuerza pública. Esto se hace cuanto más necesario en la medida en que se desarrolla el capitalismo y arrecian las batallas obreras, campesinas y estudiantiles. En la década del 50 y durante la Guerra contra Corea bajo el mando de un gobierno castrense (el de Remón Cantera, 1953) se crea la Guardia Nacional, tomando como modelo la del tirano Somoza. Para entonces la formación de los cuadros militares corre a cuenta del ejército norteamericano. Como no existía academia militar en Panamá, los jóvenes oficiales venían principalmente de EE.UU., Venezuela y otros países latinoamericanos.

Pero la liquidación por parte de EE.UU. del ejército istmeño tuvo un efecto importante: determinó que en Panamá republicana se perdiera el hilo conductor de la tradición militar, la mística, la cultura, la casta. La burguesía criolla no tuvo interés en educar a sus hijos como oficiales, para trabajar en una policía que no tenía ningún rango. En 1968 cuando se da el golpe, solamente había un oficial proveniente de la burguesía, el resto eran de origen popular, salidos de las capas medias pobres y del campesinado.

Tercero. Al iniciarse la década del 60, la Revolución Cubana estimuló la conciencia revolucionaria en América Latina, al romper uno de los eslabones en este continente, influyó poderosamente en los procesos revolucionarios de la región. EE.UU. redobló su gestión contrarrevolucionaria: *golpes* de estado, «Alianza para el Progreso», filtración múltiple a través de la CIA, etc.

En ese contexto, el modelo panameño de sujeción económica y política, con el encajamiento del enclave colonial norteamericano, entraba en crisis. Se agravaba la contradicción entre el imperialismo y la nación. Mientras la plusvalía producida en la industria del transporte interoceánico, engordaba a la marina norteamericana, a su ejército opresor (EE.UU. había obtenido beneficios de 1915 a 1970 del orden de 1.221 millones de dólares) Panamá sólo recibía, por el arrendamiento anual, la ridícula suma de 1.930.000 dólares[7].

Pese al carácter de monopolio estatal del complejo canalero, al cual se supeditaba la economía dependiente de Panamá, el país vivía en el atraso semi-feudal y sólo pudo alcanzar un tímido despunto en las esferas de los servicios y el comercio. La pequeña industria manufacturera impulsada en la II Guerra Mundial, era aplastada por el modelo dependiente, de forma que ya despuntaban también elementos burgueses con intereses propios.

Maduraba, pues, una aguda crisis política y social. El intento de EE.UU. de superar esta crisis mediante nuevos tratados, igualmente antipanameños, colmó la inestabilidad de la oligarquía frente a las elecciones próximas, y la lucha entre bloques oligárquicos dio por resultado la existencia, en un momento dado, de dos presidentes de la República.

En este momento, la Guardia Nacional[8] se erigió en árbitro de la vida nacional. No había en las esferas populares una fuerza política capaz de cohesionar y dirigir al pueblo para la toma del poder, en las condiciones de un país intervenido por el imperialismo, con su ejército agresor a dos metros de la ciudad capital. Eso explica que los militares llenaran, a su modo, el vacío con el golpe de estado de 1968.

La elección del camino

Ya en 1968, la fuerza pública no era la simple policía de los comienzos republicanos. Estaba mejor equipada, dominaba la técnica represiva y de contrainteligencia, enseñada especialmente por la mal llamada Escuela de las Américas. La Guardia Nacional, tenía ya un connotado espíritu de cuerpo y cierto liderazgo.

Asume con el golpe la oficialidad joven, sorprendiendo incluso al Comando Sur, quien tenía «ojos y orejas» en todas partes y el cual pensó que podría encauzar la acción a su favor, habida cuenta del carácter anticomunista de los militares, pero amparando, al mismo tiempo, al derrocado presidente Arias en la Zona del Canal. El golpe no tenía una orientación precisa, y algunos asesores civiles, lo querían enrumbar bajo la consigna de un golpe de «restauración» del orden. Tenía el golpe cierta dosis preventiva frente al «caos» o a una revolución cubana en Panamá, lo que era el caballito de batalla de la propaganda norteamericana en esos días. El imperialismo no fue neutral frente al golpe, usó todas las cartas, hasta las amenazas de intervenir, para colocar a su ficha A. Arias en el poder.

El impulso y la acumulación histórica del problema nacional frente al imperialismo, cuya intervención colonial resultaba un fenómeno concreto para las masas, y no sólo un asunto teórico; la naturaleza y carácter de las fuerzas panameñas, provenientes del pueblo, pese a su formación anticomunista, más las crisis de la oligarquía determinan que los militares panameños se enrumbaran posteriormente por el camino de enfrentamiento con la oligarquía y el imperialismo, en su expresión colonial, principalmente.

Pero hay que anotar, que este camino, conocido posteriormente como el torrijismo, se hubiera obstaculizado mucho más, de no haber sido, fundamentalmente, por la comprensión que tuvieron los comunistas panameños del fenómeno general de la crisis, cuando adoptaron la línea de orientar a los obreros, estudiantes, campesinos e intelectuales, a hallar un puente de entendimiento con los militares golpistas, pese a los efectos represivos del golpe contra el Partido del Pueblo. Como se esperaba despuntaron tempranamente los elementos de contradicción con la oligarquía y el imperialismo. Esta advertencia de los comunistas, expuesta en varios documentos y que tuvo su expresión en directrices concretas hacia el movimiento de masas, contribuyó a que frente a la crisis política del propio golpe, a su falta de orientación, se pudiera tender hacia los militares la posibilidad del diálogo con el movimiento popular. Si los comunistas, en esa hora, y bajo la represión (casi todo el Comité Central encarcelado) en lugar de ver la perspectiva hubieran respondido a la propia falta de visión de los militares que los empujaba a reprimir al movimiento obrero, a los estudiantes, a los campesinos y a la intelectualidad democrática y de izquierda, el golpe (que tenía en su seno a militares de la CIA y a elementos afines al fascismo) hubiera derivado hacia las fuerzas oligárquicas que subían a los cuarteles a ponerse a la orden; o la Embajada norteamericana y el Comando Sur, hubieran logrado apropiárselo para que se convirtiera en un tradicional golpe «gorila» latinoamericano.

La línea seguida en esas condiciones por el Partido del Pueblo, bajo la dirección del camarada Secretario General, Rubén D. Souza, su política perspicaz todavía no han sido suficientemente bien evaluadas por determinadas fuerzas políticas de nuestro país.

Contenido del proceso torrijista

Torrijos solía reconocer que otras generaciones anteriores habían acumulado la bandera que él levantaba; el pueblo había realizado toda clase de sacrificios en defensa de su soberanía, recordaba con devoción y orgullo a sus mártires de enero de 1964[9].

La lucha popular antioligárquica y antiimperialista era fruto de la orientación de los sectores de izquierda; de las ideas marxistas que hicieron posible la fundación, en la década del 30, de los partidos comunista y socialista. La batalla antiimperialista del pueblo panameño caló también en los militares, algunos de los cuales, como Torrijos, provenían de las filas estudiantiles (Torrijos fue en la década del 40 miembro de una organización juvenil antifascista). Otra tanto ocurrió con la pelea antioligárquica, aunque la fuerza pública actuaba como agente represor, sin embargo

en estos enfrentamientos con el pueblo los militares aprendieron «No recuerdo hasta hoy un solo incidente, en los tiempos en que comandaba tropas especializadas en orden público, en que la razón no estuviera de parte del grupo hacia donde apuntaban nuestras bayonetas», dijo Torrijos[10].

En una carta de Torrijos a García Márquez le sintetizaba parte de su programa, que de hecho ya había concretado en la práctica: «La recuperación de la base (militar norteamericana) de Río Hato, la nacionalización de la Fuerza y Luz, la nacionalización de las comunicaciones, la cooperativización del transporte urbano, el establecimiento de la Corporación Bananera del Estado, la Corporación Azucarera Estatal, la Planta Estatal de Cemento, la adopción del nuevo Código del Trabajo, la Reforma Educativa, la multiplicación de escuelas, la Legislación de la vivienda, la electrificación del país, la Reforma Agraria, la organización de asentamientos campesinos[11] y la promoción de entidades sindicales, así como múltiples proyectos en marcha, todo lo cual se armoniza con una política exterior revolucionaria...»[12]. A esto hay que agregar los Tratados Torrijos–Carter; la liquidación jurídica del enclave colonial[13]; la creación de los nuevos órganos del Poder Popular, con una Asamblea Nacional de Representantes de corregimientos de 505 miembros, en su mayoría campesinos y pequeños propietarios; la política no alineada.

Torrijos restableció relaciones con Cuba Socialista: «Fidel es un gran amigo... Si hoy podemos sentarnos a discutir de tú a tú con el Gobierno norteamericano, se lo debemos en gran parte a que existe una Revolución cubana. Después del triunfo cubana, todos los pueblos de este hemisferio somos un poco más libres»[14].

La creación del área estatal de la economía en los campos manufacturero, agroindustrial y marítimo; el establecimiento de controles de precio, mercadeo, y del comercio exterior; la propuesta de que los trabajadores se integraran en niveles de control de la producción, aún en el área privada conllevaban elementos tendentes a limitar el capitalismo y la preponderancia del capital internacional.

Torrijos ligó a los militares al trabajo con la comunidad, introdujo el concepto de «patrullaje doméstico», el contacto con las masas y con el Poder Popular, el cual era fruto de

elecciones (aún sin la existencia de partidos políticos). Introdujo en su Estado Mayor y mandos medios, el criterio de solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación. Su papel en la lucha de los sandinistas contra la tiranía somocista y el apoyo a otros pueblos latinoamericanos, según algunos comentaristas, le valieron que EE.UU. «le pasara la factura», cobrándola en el «accidente» de aviación que le quitó la vida el 31 de julio de 1981.

Es evidente, por tanto, que el contenido del proceso torrijista, a su modo, expresaba los intereses de la revolución democrática de liberación nacional.

Los militares panameños, a diferencia de los peruanos prefirieron utilizar, para los cargos del gobierno a personal civil. El vacío dejado por la burocracia oligárquica fue llenado, en lo fundamental por profesionales de capas medias, fruto de la lucha por la reforma universitaria; elementos de experiencia progresista en la lucha democrática. Por otra parte, tal como señalamos arriba, los militares desempeñan un papel rector, participaban en los más diferentes estadios de la vida social, en donde ocupaban papel protagónico y además aceptaban invitaciones para participar en congresos obreros, campesinos, estudiantiles, de intelectuales y de luchadores por la soberanía y la paz. Realizaban trabajos voluntarios de recogida de cosechas, de alfabetización y giras médicas. Establecieron buenos vínculos con los pueblos indígenas. Torrijos tuvo gran preocupación por la elevación del nivel técnico e intelectual de sus fuerzas armadas. Creó una escuela de capacitación para tales fines. Los cuadros de dirección y los mandos medios estudiaban economía, relaciones con los EE.UU., historia, sociología, política internacional y nacional. Cuando los partidos políticos se reorganizan fueron invitados a dictar conferencias en los cuarteles. Incluso miembros del Buró Político del Partido del Pueblo participaron en estos seminarios.

En sus relaciones con las masas Torrijos imprimió un estilo que le valió el calificativo de «dictadura con cariño», cierto grado de paternalismo y formas populistas.

Los nuevos tratados Torrijos–Carter, que estipulan la salida total de la presencia norteamericana de Panamá el 31 de diciembre de 1999, han obligado a la transformación

de la fuerza pública; ya que en la actualidad, nuestras fuerzas armadas coparticipan con el ejército norteamericano en la defensa del Canal y deben hacerlo a partir del 2000, plenamente. El nuevo Instituto Armado, Fuerzas de Defensa de la República se acerca ya a lo que es un ejército, pero aún en su función de defensa frente a un eventual enemigo externo. Tienen unos 16 mil efectivos, que incluyen elementos de tierra, aire y mar.

Objetivamente, la creación de las Fuerzas de Defensa es parte del programa de completar la conformación del estado nacional, atrofiado en su iniciación por el protectorado yanqui.

Saldo y perspectivas

De Torrijos se ha dicho que fue un bonapartista, un modernizador del capitalismo, un populista. Esta calificación proviene principalmente del seno de capas intelectuales influidas por tendencias ultraizquierdistas. Elementos reaccionarios han dicho incluso que Torrijos fue una ficha del imperialismo. En realidad, los militares cumplieron bajo Torrijos una parte del programa correspondiente al proceso de liberación nacional.

La experiencia panameña comprueba la posibilidad de la participación de fuerzas militares en la lucha revolucionaria de los pueblos.

En la batalla anticolonial, los militares panameños, alcanzaron una alianza de fuerzas muy heterogéneas, desde los obreros hasta sectores de la burguesía nacional. Pero esta misma correlación no se dio entonces para enfrentar las contradicciones entre la oligarquía y el pueblo. En el momento culminante de la confrontación para asegurarse el apoyo de dentro y de fuera, los militares aceptaron hacer concesiones a las fuerzas del atraso, tales como volver a darle vida a los partidos todos, incluidos los de la oligarquía.

Al avanzar en el camino anticolonial, se producía en nuestro proceso la penetración de las fuerzas reaccionarias dentro del mismo y a nivel de gobierno; este factor, más el desgaste de los propios militares, dio por resultado el posterior deterioro y descomposición, que se concreta hoy en

un gobierno de la burguesía neocolonialista, de la lucha iniciada por Torrijos.

Los militares panameños fueron avanzando ideológicamente de posiciones anticomunistas hacia posiciones democráticas, «pluralistas», y de simpatías por los movimientos populares de liberación nacional. Desde luego, también había y hay corrientes distintas, contrarias a estos elementos arriba citados, pero no son las determinantes en las fuerzas armadas.

Sin embargo, el proceso panameño estuvo signado por el carácter dual de las capas medias, la pequeña burguesía, que lo protagonizaron a nivel militar, y del sector de la burguesía que estuvo presente con dichas fuerzas. Los militares, como ya hemos apuntado antes, preferían basarse en el campesinado que en la clase obrera. Si bien estaban dispuestos a fomentar un tipo de modelo económico multisectorial, consideraban darle papel igual a la empresa privada, y además, individualmente se fueron moviendo hacia la participación económica en las empresas comerciales e industriales. El aburguesamiento producido a niveles militares y de los grupos de civiles que les acompañaron en la gestión, fue uno de los elementos que tipificaron este proceso y coadyuvaron al desprestigio del mismo. Si bien Torrijos tenía mucho más claro el panorama y hasta dijo que había que acostumbrarse a vivir con un poco de socialismo, la dinámica del proceso iba dirigida, en esta fase, en el marco de una tercera posición. El bonapartismo o populismo que se le achaca a Torrijos, tiene que ver con la forma de hacer las cosas, pero no con su contenido que era liberador.

No había, bajo Torrijos, una política de cuño anticomunista, pero el anticomunismo actuaba en un proceso de fuerzas heterogéneas en que la participación de los comunistas al lado de los militares, en un país intervenido por el ejército yanqui, era vista como serio peligro para la «democracia» (Torrijos era acusado por el Plan Secreto de Santa Fe, de comandar una «dictadura de extrema izquierda, brutalmente agresiva»[15]). Al empezar la década del 70 hubo un intento de parte del proceso liderizado por Torrijos de transformar el Partido del Pueblo en partido comunista «nacional»; esto produjo el desgajamiento del

seno del Partido de un importante segmento de la juventud. Pese a todo esto los comunistas panameños continuaron, con mayor empeño, apoyando el proceso torrijista. Después de la muerte de Torrijos, cuando algunas de sus fuerzas se han dispersado y otras empiezan a negarlo, en las pasadas elecciones de mayo del 84, el Partido del Pueblo lanzó un programa de continuación y desarrollo del proceso torrijista y acuñó el lema de que «Torrijos es para los panameños lo que Sandino para los nicaragüenses»[16].

En la descomposición del proceso torrijista intervienen como factores, la presión del imperialismo; las debilidades propias de las fuerzas hegemónicas, su dualidad ideológica proclive a las concesiones, para mantener el equilibrio, que en un principio se dijeron tácticas, pero que se fueron haciendo estratégicas. Pero no puede verse esta descomposición tan sólo por elementos propios del seno de los militares y sus elementos más allegados, sino por el resto de fuerzas que le apoyaban. Por la debilidad y fragmentación del movimiento obrero organizado, por no haber podido establecer concretamente la alianza obrero-campesina; por no haber fortalecido en la medida necesaria todas las organizaciones sociales de las masas, y fundamentalmente los partidos llamados a conducirlas. Se cometió el error generalizado de darle más atención al trabajo por arriba, que al trabajo por abajo, con las masas.

Hoy en Panamá no hay un gobierno torrijista. Los militares han manifestado que pasan a la retaguardia. EE.UU. intenta recuperar sus posiciones en Panamá, con un gobierno que desarrolle su modelo, programado por el FMI.

Pero el proceso social histórico contiene fuerzas vivas impregnadas del ideal de Torrijos. La posibilidad de emprender una nueva batalla en el campo del proceso de liberación nacional y de una democracia progresista, existe, a partir de la experiencia torrijista, de la clase obrera y el campesinado organizado; del sector de militares para quienes el torrijismo es un deber, con sectores de la burguesía nacional, que incluso se han manifestado contra los planes del Banco Mundial. Pero, desde luego, se trata de otro momento, y de una nueva reagrupación de fuerzas.

Revista Internacional, Nº 9 de 1985

1 O. Torrijos. *Papeles del General.* Centro de Estudios Torrijistas, 1984, p. 177.

2 Referencia al sistema de ideas de Torrijos, que el autor expone más adelante en este mismo artículo. *–N. de la Red.*

3 O. Torrijos. *Obra citada,* pp. 186, 189.

4 *Documentos históricos.* Partido del Pueblo. Panamá, 1971, p. 67.

5 Ibíd., p. 68.

6 Las obligaciones impuestas a Cuba por el imperialismo norteamericano en 1901, en virtud de la Enmienda Platt cercenaban la soberanía del país y suponían de hecho la implantación de un protectorado norteamericano no oficial. *–N. de la Red.*

7 X. Gorostiaga. *Panamá y la zona del canal.* Buenos Aires, 1975, p. 16. La Zona del Canal ocupa un área de 1.432 kilómetros cuadrados. EE.UU. posee allí varias bases militares, escuelas especializadas de entrenamiento militar, sitios de «investigación científica» para usos militares en la selva, varias ciudades y empresas de diferentes tipos, entre otras, puertos en el Atlántico y el Pacífico. *–N. de la Red.*

8 Véase *Documentos históricos,* p. 221.

9 Referencia al ametrallamiento por las tropas norteamericanas de una manifestación pacífica realizada en la Zona del Canal en defensa de la soberanía. *–N. de la Red.*

10 O. Torrijos. *Obra citada,* p. 185.

11 Una de las formas del movimiento cooperativista. *–N. de la Red.*

12 O. Torrijos. *Obra citada,* p. 160.

13 Torrijos insistía en la necesidad de «darle el uso más colectivo posible» a todo lo que revirtiera del Canal y no reemplazar la colonia por explotadores criollos. «No crean –dijo– que vamos a cambiar por amos nativos los amos yanquis.» (O. Torrijos. *Obra citada,* p. 169). *–N. de la Red.*

14 O. Torrijos. *Obra citada,* p. 198.

15 *Estudios,* 1981, Nº 78, p. 26.

16 *Manifiesto del Partido del Pueblo de Panamá. Documentos,* 1 de marzo de 1984, p. 2.

La Internacional Socialista y el Brasil

Givaldo PEREIRA DE SIQUEIRA,
miembro de la Comisión Ejecutiva del CC
del Partido Comunista Brasileño (PCB)

Desde mediados de los años 70, América Latina imanta la atención de la dirección de la Internacional Socialista. El emblema del puño y la rosa ha tomado carta de naturaleza en la vida política cotidiana de ese continente, donde catorce partidos son ya miembros efectivos de dicha Internacional y otros varios asisten a sus actividades con estatuto de observador. En Venezuela, República Dominicana y Costa Rica, los socialdemócratas están en el poder. Los partidos gobernantes de México, Panamá y el Perú mantienen una orientación próxima a esa corriente ideológica. Así pues, por el número de países con gobierno socialdemócrata o afín, América Latina se sitúa ya muy cerca de Europa Occidental, que tradicionalmente ha sido zona de intereses prioritarios de la IS. En perspectiva, la socialdemocracia se propone reforzar aún más sus posiciones en el continente latinoamericano.

Semejantes cálculos se basan en los cambios socio-políticos que, a lo largo de los últimos dos decenios se han operado en América Latina y crean determinadas premisas para el éxito de la «ofensiva» socialdemócrata. El crecimiento económico intensivo, el acelerado proceso de monopolización de la producción y concentración del capital en algunos de los países más desarrollados (Brasil, Venezuela, Colombia, México), el rápido incremento numérico de la clase obrera y de las «nuevas» capas sociales han complicado las relaciones de clases y creado un terreno apropiado para la maniobra social y una penetración más activa de las ideas socialdemócratas en la conciencia de las masas. Simultáneamente, se ha ampliado el frente de la lucha emancipadora antiimperialista de los pueblos y del movimiento por la democracia, lo cual constituye una lógica reacción a la larga preponderancia de regímenes totalitarios.

Es evidente que en el presente contexto latinoamericano, que se caracteriza por una situación económica y social sumamente explosiva, la IS trata de llevar por un cauce reformista las potentes tendencias de transformación social y los sufridos anhelos democráticos de las masas. Se crea así un contrapeso a la alternativa de desarrollo revolucionario, de izquierda, que, tras el triunfo de la Revolución Cubana, está tomando cuerpo en la realidad continental, ante todo en Nicaragua, en las batallas de los patriotas salvadoreños por la auténtica independencia, en las luchas antidictatoriales de las masas en Chile y Paraguay, así como en la aspiración de los pueblos de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay a ampliar los procesos de transformaciones democráticas.

Además, la penetración en gran escala de la IS en América Latina podría constituir en determinadas circunstancias, y a juicio de ciertos observadores constituye ya, una ventaja para los monopolios europeooccidentales en su batalla por los mercados locales frente a los rivales norteamericanos. Estos últimos años se ha registrado en dichos mercados una presencia cada vez más activa de diferentes consorcios de la RFA, Francia, España, los países escandinavos y Suiza. Como dijera el sociólogo J. Petras, la bandera rosa de la socialdemocracia da «luz verde» al capital germanooccidental.

A su vez, los socios actuales y potenciales de la IS en América Latina ven en esos contactos una vía que les permite aproximarse a influyentes partidos y gobiernos oesteeuropeos. Por una parte, ello contribuye a su «consagración» y les confiere mayor credibilidad. Por otra, los partidos que ya han ascendido o confían ascender en breve al poder consideran que las relaciones con la socialdemocracia osteeuropea les ofrecen mayores posibilidades para resolver los graves problemas financieros y económicos de los países latinoamericanos y atenuar hasta cierto punto la agudeza del conflicto «Norte-Sur», ya que, de acuerdo con

la terminología adoptada en la IS, Europa Occidental constituye una área importante del «Norte industrial».

Por otra parte, algunos partidos, movimientos y estadistas latinoamericanos consideran que el mantenimiento de estrechos vínculos con influyentes fuerzas políticas europeas puede servir para contrarrestar las presiones ejercidas por los círculos belicistas imperialistas de EE.UU. y la reacción local. Partiendo del análisis de esas tendencias, el estudioso latinoamericano M. Löwy llega a la conclusión de que la rivalidad entre el capital norteamericano y oesteeuropeo, así como la aspiración de determinados grupos empresariales y políticos de América Latina a apoyarse en Europa Occidental en su lucha contra la dependencia de EE.UU. favorece la expansión de la influencia europea al Sur del Río Grande.

Por cierto que esta última observación se refiere no sólo a los socialdemócratas, sino también a otras corrientes de signo reformista. Véanse, por ejemplo, los recientes intentos de agrupar a los partidos liberales y radicales de Europa Occidental y América Latina en la llamada Internacional Radical[1].

La activación de los contactos de la IS con un vasto segmento de las fuerzas políticas de América Latina persigue como objetivo inmediato crear una base política real, estable y, en la medida de lo posible, de masas, de la que la socialdemocracia ha carecido hasta ahora en este continente. A diferencia de Europa Occidental, los partidos socialdemócratas latinoamericanos han sido tradicionalmente pequeños y bastante débiles, debido sobre todo a la ausencia, en la mayoría de los países del área, de una extensa «aristocracia obrera» de talante reformista, como base social natural de dichos partidos.

Teniendo en cuenta las características específicas de nuestros países, la IS parece haber optado en su política a largo plazo por una línea que, dejando de lado la creación de nuevas organizaciones, se orienta a aprovechar los partidos, sindicatos, movimientos y organizaciones sociales de masas existentes, aun cuando no «encajen» del todo en el marco ideológico de la socialdemocracia y sólo se aproximen a ella en algún que otro parámetro. Esa actitud le permite colaborar con muchas fuerzas situadas a la izquierda del centro en el espectro político latinoamericano: liberales, radicales y diversos movimientos nacional-reformistas.

Desde este punto de vista, los países del Cono Sur, donde actualmente asistimos a una culminación victoriosa de las luchas de liberación contra las dictaduras reaccionarias, presentan especial interés para la IS. En estos países se ha alcanzado un nivel relativamente alto de desarrollo socioeconómico y madurez de las relaciones capitalistas, existen una clase obrera y capas medias bastante numerosas y se registra un alto grado de combatividad política de las masas. Al propio tiempo, el amplio movimiento democrático se caracteriza por su heterogeneidad social e ideológica con fuerte influencia de los sectores pequeñoburgueses. La IS tiene en cuenta también las comprensibles dificultades con que se enfrentan las fuerzas de izquierda, revolucionarias de estos países como resultado de largos años de represión, clandestinidad y exilio. Influye también la existencia de diversos movimientos populistas nacional-reformistas que se mantienen presentes en el escenario político desde los años 40–60 (como el getulismo[2] en Brasil) y que en las condiciones actuales convergen a menudo con la socialdemocracia. No olvidemos tampoco la experiencia de varios países del Sur de Europa, como España, Portugal y Grecia, donde fueron derrocados regímenes fascistas y dictatoriales. Todos estos países europeos son similares a los países más desarrollados de América Latina en muchos aspectos económicos y sociales.

Tales son los contornos generales de la política latinoamericana de la IS. Las peculiaridades de su enfoque se manifiestan claramente en Brasil, que tiende cada vez más a convertirse en uno de los principales polos de atención de la socialdemocracia internacional en América Latina. Ese creciente interés por el Brasil se explica tanto por las dimensiones físicas de nuestro país y su creciente influencia en el ámbito internacional, como por lo específico de la situación política interna. La IS funda sus cálculos en posibles cambios en el alineamiento de las fuerzas políticas brasileñas en el marco del proceso de transición del régimen militar al gobierno civil, así como en las mutaciones que se han operado en la estructura de clase de la socie-

dad durante el periodo de crecimiento económico acelerado de los años 60 y 70.

En ese interés particular de la socialdemocracia por el Brasil interviene también un factor de carácter extracontinental: en los últimos decenios nuestro país viene desempeñando un papel muy activo en Africa. Brasil mantiene actualmente estrechas relaciones económicas, políticas y culturales con diferentes países africanos y, en primer lugar, con las antiguas colonias portuguesas (Angola, Guinea-Bissau, Mozambique), así como con uno de los mayores países del continente, Nigeria. La IS está muy interesada en aumentar su influencia en esa zona, en particular en el Africa Austral, y no le vendría mal utilizar al Brasil con este fin.

Otra muestra de ese acrecido interés por el Brasil ha sido la reunión ampliada del Buró de la IS celebrada en Río de Janeiro en octubre de 1984, reunión que sus organizadores y participantes han caracterizado como la más representativa de cuantas se han efectuado hasta el presente fuera del continente europeo. La composición de las más de 50 delegaciones y las intervenciones de los participantes, la agenda de la reunión y el contenido de las resoluciones, así como la reacción de los sectores políticos brasileños nos ofrecen una buena base de reflexión acerca de las tendencias contradictorias que se enfrentan en el seno de la IS y las perspectivas de la misma a nivel de Brasil y de toda América Latina.

La reunión de Río de Janeiro puso de manifiesto, una vez más, el deslindamiento que se ha operado en el campo socialdemócrata entre los «tradicionalistas», que constituyen el ala derecha del movimiento, y las llamadas «fuerzas nuevas», integradas por los socialistas de izquierda y los representantes —próximos a la IS— de varios movimientos revolucionarios y de liberación nacional. Se manifestó igualmente una corriente centrista, «liberal», cuyos adeptos trataron de conciliar las actitudes radicales de los movimientos revolucionarios y de liberación nacional que colaboran con la IS, con los esfuerzos de los «tradicionalistas» orientados a modernizar un tanto la fachada del capitalismo moderno sin cambiar nada en su esencia. Esta tendencia estaba representada, en particular, por el ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez y por uno de los promotores de la reunión y exponentes de la política de la IS en Brasil, el gobernador del Estado de Río, Leonel Brizola.

Los resultados de la reunión, si los consideramos en conjunto, confirman que la Internacional Socialista no es «una organización revolucionaria conductora de las batallas de clase a nivel mundial», como siguen afirmando algunos de sus líderes, pero tampoco es una «congregación de renegados», como se apresuran a caracterizarla algunos ultraizquierdistas. Hoy, en el marco del movimiento socialdemócrata internacional encuentran espacio fuerzas reformistas y sectores revolucionarios. Está claro que la IS sigue sometida a la hegemonía de los sectores reformistas de centroderecha y del centro. Pero también es cierto que no puede menos de tener en cuenta las dimensiones de la lucha por la paz, contra la amenaza nuclear dimanante del imperialismo, y las necesidades del movimiento de liberación nacional en las zonas periféricas del mundo capitalista, movimiento al que se incorporan masas populares cada vez más amplias.

De ahí que el enfoque socialdemócrata de los problemas de América Latina, Africa y Asia, presente elementos de tono antiimperialista bastante perceptibles.

Obviamente, no es casual que a la cita de Río de Janeiro acudieran delegaciones no sólo de los partidos socialdemócratas propiamente dichos, sino también de la gobernante Unión Cívica Radical argentina, el partido del presidente Raúl Alfonsín, del Frente Amplio y del Partido Nacional (Blanco) del Uruguay, del Partido Socialista de Chile y de varias otras organizaciones y movimientos que no se autodefinen como socialdemócratas. Por lo que se refiere al Brasil, además del Partido do Trabalhismo Democrático (PTD), liderado por Brizola y miembro oficial de la IS, estuvieron presentes en el encuentro destacados dirigentes del mayor bloque antidictatorial del país, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), así como del Partido de los Trabajadores (PT). En general, desde el punto de vista de la amplitud del espectro de las corrientes políticas que pueden configurar el campo de acción de la IS en nuestro país, los promotores del evento

lograron un éxito. Por otra parte, los documentos del encuentro apenas reflejaron la compleja situación del momento, la confrontación entre las fuerzas de la guerra y de la paz, del imperialismo y de la liberación nacional, del oscurantismo y del progreso social en América Latina, lo cual explica hasta cierto punto el que la prensa brasileña haya dispensado escasa atención a la reunión. Tratándose de un encuentro tan representativo, cabe calificar sus resultados como muy modestos.

¿Qué perspectivas se perfilan en cuanto a la actividad de la IS y a la formación de una base socialdemócrata estable en el propio Brasil?

Hace tiempo ya que se vienen dando pasos en esa dirección y todos ellos han tropezado con importantes escollos. Las causas son evidentes. En el Brasil nunca ha existido una tradición socialdemócrata bien arraigada que pudiera traducirse rápidamente en la fundación del correspondiente partido. Existen corrientes y grupos socialdemócratas en varios partidos, pero ellos no tienden, ni mucho menos, a una unificación inmediata, debido en parte a las ambiciones de protagonismo de sus respectivos líderes. Los esfuerzos emprendidos a comienzos de la década del 80 de cara a la fundación de tal partido mediante una fusión del PTD con el PT, tropezaron con la tajante negativa de este último. Tampoco llegaron a plasmarse los reiterados proyectos de promoción de un Partido Socialista en Río de Janeiro.

En tales circunstancias, la IS se ve obligada a actuar simultáneamente a través de diversos partidos y agrupaciones sindicales existentes. Ayuda al PTD, que ideológicamente es el más próximo a ella, y al mismo tiempo empeña esfuerzos por extender su influencia en el PMDB, amplio bloque de las fuerzas de centroizquierda, y en el PT, que cuenta con el apoyo de influyentes sindicatos y una parte del proletariado industrial de São Paulo. En este sentido es significativo que, durante la reunión de Río de Janeiro, tuviesen lugar conversaciones directas entre Willy Brandt y el líder del PMDB, Ulysses Guimarães. Al diversificar los canales de penetración en Brasil, la IS persigue el mismo objetivo de crear un núcleo real de fuerzas políticas –aunque no llegue a unificarse en el sentido orgánico– para instrumentar la línea política de la socialdemocracia en nuestro país. La IS publicita sus contactos con tres partidos brasileños como una muestra del enfoque pluralista que mantiene ante sus divergencias ideo-políticas. Esto es una prueba más de que la Internacional Socialista no se propone ayudar en un futuro próximo a la formación de un nuevo partido en el Brasil.

Paralelamente a ese trabajo en los círculos políticos, la socialdemocracia internacional, y en primer término de la Alemania Occidental, procura ampliar su presencia en los sindicatos brasileños. Se esfuerza, en particular, por aumentar el prestigio de los sindicatos ligados al PT. El objetivo es evidente: dividir al movimiento sindical brasileño, sustraer una parte de los sindicatos a la influencia comunista y de izquierda.

Un elemento común en las plataformas políticas de la IS y de las mencionadas agrupaciones partidarias y sindicales brasileñas es la renuncia a la búsqueda de vías que conduzcan a transformaciones sociales de carácter radical, la renuncia a soluciones revolucionarias. El camino de reformas que proponen queda circunscrito al marco del régimen capitalista y de la inicua división internacional del trabajo impuesta por el imperialismo. Cierto es que la IS y sus socios brasileños preconizan una alternativa democrática, se pronuncian en defensa de los intereses nacionales, pero sólo hasta cierto punto, sólo en combinación con prejuicios anticomunistas. Esas fuerzas no pueden permitirse el lujo de propugnar el aislamiento de los comunistas, su exclusión del amplio frente de lucha por la democracia que existe hoy en Brasil. Sin embargo, los esfuerzos de la IS y sus partidarios brasileños tienden prácticamente a apartar a las masas populares de la vía revolucionaria de las transformaciones democráticas auténticas.

Esa actitud predetermina en gran medida los fracasos de los sectores socialdemócratas en sus intentos de atraer a su lado a los sindicatos y las masas trabajadoras. Toda la experiencia práctica del proletariado brasileño, la propia lógica de sus luchas refutan los postulados del reformismo «puro». A diferencia de lo que ocurre en Europa Occidental, con su capitalismo «civilizado», que ha asimilado las lecciones de muchas batallas de clases, los pueblos de

América Latina conocen únicamente las facetas más repugnantes del capitalismo: contrastes sociales y regionales, desempleo, saqueo rapaz de los recursos naturales, opresión de los países pequeños y económicamente más débiles por los más fuertes, etc. Por eso en Brasil, por ejemplo, es difícil encontrar un sector más o menos numeroso de trabajadores que esté interesado en una mera reforma del capitalismo, y no en su abolición. A diferencia de Europa Occidental, donde la ideología reformista encuentra «material» y existe desde hace tiempo una amplia base para el movimiento socialdemócrata, en Brasil, lo mismo que en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, no existe tal base o, caso de existir, es muy reducida.

Hay quien dice que los trabajadores de las empresas transnacionales constituyen un caldo de cultivo potencial para la ideología reformista. No cabe duda de que las condiciones de trabajo y los salarios de esta categoría suelen ser mejores que en las empresas nacionales privadas (por cierto que en el sector público brasileño los salarios son más altos aún). Pero esas condiciones sólo resultan mejores en comparación con el nivel general de miseria en que vive la inmensa mayoría de la población brasileña: la propia estadística oficial incluye a más de cuarenta millones de personas en la categoría de los pobres. Si comparamos, por ejemplo, los salarios y las condiciones de vida de los obreros de Volkswagen en Alemania y en Brasil, el contraste adquiere dimensiones escandalosas.

Pero las diferencias no tienen que ver solamente con el nivel de vida. El proletariado brasileño todavía no goza de libertades sindicales completas, no tiene garantías de empleo. Los índices de fluidez de la mano de obra son muy altos. Por otra parte, el propio perfil de la clase obrera de nuestro país, las condiciones históricas que han incidido en su formación, difieren del caso europeo.

Todo ello dificulta objetivamente la formación entre los trabajadores brasileños de una base política amplia y estable para la socialdemocracia. Por ahora nos parece más probable la hipótesis de una movilización política de la población bajo las banderas del populismo, del nacionalreformismo, corrientes que tienen viejas raíces históricas en nuestra región y muchas veces han sabido ganarse el

apoyo de amplios sectores. Al resurgimiento del nacionalreformismo en Brasil puede contribuir también el atraso político de las masas populares, incluido el proletariado, como resultado de veinte años de dictadura militar. Conocedora de esa coyuntura, la socialdemocracia internacional intenta hacerse fuerte en esos movimientos y aprovechar su potencial con fines propios.

Hay que mencionar otro factor que influye en las actividades de la IS en Brasil. Es la actitud de los poderosos sectores militares y burgueses. El fuerte arraigo de prejuicios reaccionarios, retrógradas, en la mentalidad de la clase dominante es una característica de la vida política nacional. El anticomunismo patológico hace que muchos militares e industriales consideren como «demasiado rojos» incluso a los socialdemócratas. El gobernador Brizola, por ejemplo, es considerado por la cúspide militar como un «agitador revolucionario» sumamente peligroso, cosa que, desde luego, tiene muy poco que ver con la realidad. No deja de ser significativo el propio hecho de que la reunión del Buró de la IS en Río de Janeiro provocara ciertas fricciones entre sectores militares y civiles del «sistema» de poder establecido entonces. A nivel del generalato, círculos ultras que todavía conservan una influencia muy apreciable, hicieron todo lo posible por impedir la concesión de visados de entrada a la delegación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Marcadamente provocadora fue también la realización, en las mismas fechas que la reunión de la IS, de un encuentro de veteranos de las agresiones imperialistas –desde Corea hasta Vietnam–, de signo profascista. Es de notar que esas provocaciones acompañaron a una reunión en cuya celebración estaba interesado el propio gobierno brasileño, ya que manifestó su pleno apoyo a la posición sostenida por la diplomacia brasileña en torno a los problemas de América Central y del Sur de Africa, y aprobó de hecho la línea de reformas cautelosas y apertura gradual (la llamada liberalización).

Tal es el contexto político en que se inscribe la mayor acción realizada por la IS en nuestro país y en América Latina en general, durante los últimos años. ¿Qué conclusiones se infieren de sus resultados para nuestro trabajo?

En la cambiante situación política brasileña, después de

la victoria en las elecciones presidenciales del 15 de enero de 1985 de Tancredo Neves y José Sarney[3], candidatos de las fuerzas opuestas al régimen militar, adquiere particular importancia el problema de las relaciones entre las diversas corrientes que, actuando juntas, aseguraron la victoria en el colegio electoral. Entre ellas figuran los comunistas y los diversos grupos socialdemócratas. Los comunistas consideramos como tarea primordial del momento consolidar un régimen político de carácter consecuentemente democrático. La condición más importante para ello es, a nuestro juicio, mantener la unidad del frente democrático que derrotó a los sectores militaristas reaccionarios. Sólo la cohesión de ese frente puede cerrar paso eficazmente a las tentativas reaccionarias de restaurar un régimen autoritario.

Somos conscientes de que en la presente etapa de la lucha política –cuando se deciden el futuro de la democracia en Brasil, las dimensiones y la profundidad de las futuras reformas y transformaciones– la lucha de tendencias en el seno del frente democrático es inevitable. Sin embargo, consideramos posible mantener la unidad del Frente sobre la base del consenso en torno a los principales problemas nacionales. Para cumplir las tareas más urgentes de la democratización, para satisfacer las exigencias más apremiantes de las masas populares y mejorar de manera real sus condiciones de vida, las fuerzas interesadas no debemos acentuar las divergencias y contradicciones, sino los elementos coincidentes de nuestras posiciones.

En el documento *Los comunistas y la transición democrática*, aprobado por el Pleno del CC del PCB (febrero de 1985), se define la línea del partido en la presente etapa del desarrollo político nacional. «La transición democrática –subrayó el Pleno– requiere como elemento decisivo la defensa y el fortalecimiento del frente democrático, ampliamente apoyado por las masas y sus organizaciones. Un amplio y sólido frente democrático es el principal elemento político –desde la óptica de los comunistas–, capaz de conducir al país a la democracia y garantizar su estabilidad y su progreso. En el centro de la política de los comunistas y de la clase obrera se encuentra, por lo tanto, la tarea de luchar por que la transición democrática no conduzca a divisiones en el seno del pueblo y de las fuerzas democráticas, sino que, por el contrario, revigorice su unidad, consolide las posiciones conquistadas y abra las perspectivas de un país soberano, libre y progresista».[4]

Revista Internacional, Nº 6 de 1985

[1] Entre los posibles integrantes se mencionaba a los radicales de izquierda franceses, el Partido Liberal de Gran Bretaña, los republicanos italianos y los partidos radicales de Bélgica, Holanda y Suiza. Este proyecto ha encontrado también cierto apoyo en América Latina. *–N. de la Red.*

[2] Movimiento social de masas de signo nacional-reformista, fundado por el conocido político brasileño Getulio Vargas (1883–1954) y que lleva su nombre. Tras la muerte de Vargas, los getulistas han aprovechado ampliamente la aureola mitológica creada en torno a la personalidad del fundador de este movimiento, para conservar su influencia a nivel de las masas populares del Brasil. *–N. de la Red.*

[3] Víctima de una repentina enfermedad, el presidente electo Tancredo Neves no llegó a tomar posesión de su cargo. De acuerdo con la Constitución, el vicepresidente José Sarney fue proclamado presidente en abril de 1985. *–N. de la Red.*

[4] *Voz da Unidade*, 23 de fevereiro de 1985, p. 5.

FE DE ERRATAS

página	línea	dice	debe decir
6	2	armada	armado
15	9	dual	cual
119	8	al combatividad	la combatividad
174	20	todos	todas
181	6	El preciso	Es preciso

Editorial Internacional
PAZ Y SOCIALISMO